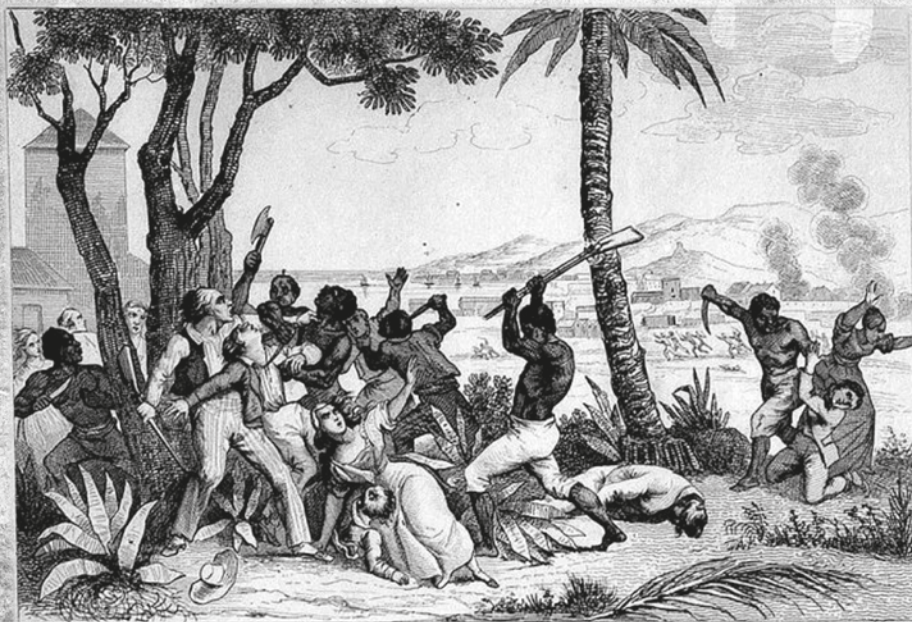


Gérard Pierre-Charles

HAITÍ: PESE A TODO LA UTOPIÍA

Estudio preliminar de **Eduardo Grüner**



 CLÁSICOS
RECUPERADOS
CLACSO

 **CLACSO**

Haití: pese a todo la utopía

Pierre-Charles, Gérard

Haití : pese a todo la utopía / Gérard Pierre-Charles ;
prólogo de Eduardo Gruner. - 1a ed. - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires : CLACSO, 2020.

Libro digital, PDF - (Clásicos recuperados)

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-722-640-9

1. Ensayo Histórico. 2. Análisis Sociológico. I. Gruner,
Eduardo, prolog. II. Título.

CDD 301.097294

Arte de tapa: Ana Uranga

Diseño interior: Eleonora Silva

Haití: pese a todo la utopía

Gérard Pierre-Charles

Estudio preliminar de Eduardo Grüner





CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva

Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial

Equipo Editorial

María Fernanda Pampín - Directora Adjunta de Publicaciones

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

María Leguizamón - Gestión Editorial

Nicolás Sticotti - Fondo Editorial



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

Haití: pese a todo la utopía (Buenos Aires: CLACSO, agosto de 2020).

Primera edición, México: Siglo XXI / UNAM, 1999

ISBN 978-987-722-640-9

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor. La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>

Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional  **Asdi**

Índice

Estudio preliminar	13
Eduardo Grüner	
PRESENTACIÓN.....	29
CAPÍTULO 1. UN RETO DIFÍCIL: LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA	35
1. Algunas líneas del desarrollo histórico	37
2. La dinámica de la opresión y de la resistencia	41
3. Las fuerzas sociales.....	45
4. Las fuerzas políticas: tendencia y perspectiva del movimiento	51
CAPÍTULO 2. LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	59
1. Las conquistas y aspiraciones democráticas	60
2. La crisis del sistema y del Estado.....	63
3. Las fuerzas impulsoras de la democratización.....	68
4. Empate político y proyecto de restauración totalitaria	71
5. El proyecto totalitario y la nueva coyuntura	75
CAPÍTULO 3. FUNDAMENTOS SOCIOLOGICOS DE UNA VICTORIA ELECTORAL.....	77
1. La lucha antitotalitaria.....	77
2. La quiebra del sistema.....	79
3. El fracaso de los partidos políticos.....	81
4. La mutación de las instituciones.....	83
5. Los avances de la conciencia cívica y de la organización.....	85

6. El peso de lo popular cultural	85
7. La no adecuación de los proyectos de las potencias de tutela	86
8. La avalancha electoral	88
9. Un liderazgo carismático	90
10. El contexto internacional	91
CAPÍTULO 4. LA EMPRESA DE RESTAURACIÓN TOTALITARIA	93
1. Casi el golpe perfecto	93
2. El nacimiento de un presidente zombi	95
3. El clamor internacional de repudio.....	97
4. El sistema represivo	98
5. La fachada civil	102
6. La disgregación de la clase política.....	105
7. El vergonzoso papel del Parlamento	107
8. La negociación como fórmula política.....	110
CAPÍTULO 5. CULTURA E IDEOLOGÍA EN LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA.....	115
1. Contenido ideológico de este período	116
2. El hecho nacional-cultural haitiano	119
3. Las adquisiciones culturales y los desafíos de la transición	127
CAPÍTULO 6. LA POS GUERRA FRÍA Y LA PROBLEMÁTICA DEL CAMBIO SOCIAL.....	133
1. Luchas sociales y bipolarización del mundo	134
2. El proceso sociopolítico haitiano	139
3. Contexto internacional.....	140
4. Contenido y formas del proceso	142
5. Esas sorprendentes elecciones.....	145
6. Proyecto político y experiencia del gobierno Lavalas.....	147
7. La dinámica del conflicto y de las negociaciones	149

CAPÍTULO 7. EL DIFÍCIL CAMINO DEL CAMBIO DEMOCRÁTICO	155
1. La crisis sistémica.....	159
2. El proceso de cambio.....	164
3. Las innovaciones constitucionales	166
4. El resquebrajamiento de la institución militar	167
5. La perturbación de las alianzas internacionales de la oligarquía	170
6. La refundación democrática	174
7. Reformas de base al sistema político	175
8. Un Parlamento para la democracia.....	180
9. Un gobierno para el desarrollo económico y social	183
CAPÍTULO 8. EN BUSCA DE UNA VÍA PROPIA.....	185
1. La disidencia como expresión nacional.....	186
2. Asumir nuestra individualidad.....	190
3. La democracia como utopía.....	194
4. Las propuestas del movimiento democrático y popular	196
5. Las aportaciones del carisma	197
6. Cultivar espacios alternativos	200
CAPÍTULO 9. A MANERA DE CONCLUSIÓN: CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA Y REFUNDACIÓN NACIONAL EN HAITÍ.....	207
1. Contenido y forma de la revolución democrática	210
2. Institucionalización y defensa de los principios democráticos	212
3. Las etapas de construcción de la democracia	214
4. La difícil gestión de la disyuntiva entre populismo y democracia.....	217
ANEXO. PROGRAMA DE GOBIERNO: CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA Y PROMOVER EL DESARROLLO ORGANIZACIÓN POLÍTICA LAVALAS (OPL)	221
BIBLIOGRAFÍA.....	267

Sólo hay esperanza para quien asume que ese diluvio no es capaz de inundar todos los sueños y osa navegar, aunque los vientos soplen débiles, en las alas de la solidaridad a los excluidos, de la lucha por la justicia, del cultivo de la ética, de la defensa de los derechos humanos y de la búsqueda incansable de un mundo sin fronteras también entre acomodados y oprimidos. Mas eso es otra historia, que exige mucha fe y cierta dosis de coraje.

Frei Betto, 1996

Estudio preliminar

Haití, un lugar en la historia

Eduardo Grüner

Nos permitiremos comenzar esta presentación aludiendo a algo que señala su autor, Gérard Pierre-Charles, cuando dice que ciertos acontecimientos políticos de la Haití del siglo XX parecerían surgidos de la imaginación febril de un Gabriel García Márquez. Pero el libro que el/la lector/a tiene en sus manos, y que está por comenzar a leer (algo que sinceramente le envidiamos), no es, por supuesto, una novela. Es una crónica de la historia reciente, y un análisis social y político muy agudo, de la situación de Haití en la segunda parte del siglo XX, y en especial de los años transcurridos desde la elección de Aristide en 1990: ese “fenómeno Aristide, que cristaliza las contradicciones, los conflictos y el mismo alcance del proceso”, como dice Pierre-Charles.

No es pues una novela, decíamos. Es una triste, trágica, violenta realidad. Y, sin embargo, la escritura trepidante y el trasfondo dramático que ella encarna permite leer el texto *como si* fuera esa novela, volviendo las páginas una tras otra “para ver qué pasa”, aunque los hechos mismos puedan resultarle conocidos a quien –como el que esto escribe– se haya interesado durante mucho tiempo en aquella tristeza, aquella tragedia, aquella violencia que señalábamos.

Y es que Haití, hay que decirlo, tiene una historia única e inclasificable en el complejo contexto de la(s) historia(s) de América Latina y el Caribe. Esa historia empieza una noche del verano de 1791, en el bosque llamado Boys Câiman, en la isla entonces llamada Saint-Domingue –propiedad colonial del Estado francés–, cuando una gran asamblea de esclavos de origen africano, luego de una intensa ceremonia *vodú*, lanza un movimiento revolucionario que se va politizando cada vez más (y también se va volviendo progresivamente más violento) con el correr de las semanas y los meses, hasta lograr, primero, la abolición de la esclavitud (1794), y luego la independencia de Saint-Domingue (1804) y la fundación de una nueva nación bajo el nombre *taíno* (es decir, del pueblo originario que había sido exterminado por los españoles) de *Hayti*.

Se trata de un acontecimiento literalmente *extra-ordinario*, inédito, en la historia del continente americano, y posiblemente en la de la modernidad en su conjunto. Para empezar, es esa revolución la que fuerza a la Asamblea Nacional Francesa, en 1794 como decíamos, a abolir la esclavitud en las colonias. En efecto, la Declaración de los Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano (ella misma producto de esa gran revolución estallada en Francia en 1789) no había contemplado *en absoluto* la posibilidad de la abolición, por buenas razones de, digamos, *materialismo histórico*: la fuerza de trabajo esclava en Haití aportaba a la economía francesa más de la tercera parte de sus ingresos. La pretendida *universalidad* de ese documento tenía, pues, un límite bien *particular*, hasta el punto de que ese límite tiene color: el color *negro* de los esclavos de origen africano. Y es la rebelión de este “particularismo” la que obliga al Universal a ser consecuente consigo mismo. La Revolución Francesa solo fue lo que fue porque la revolución haitiana la empujó a machetazos.

Como se ve, la historia de la modernidad no siempre va del “centro” a la “periferia”. Ni la historia ni la *filosofía*, por cierto: Susan Buck-Morss (2005) ha demostrado sin vuelta atrás la relación directa entre la revolución haitiana y la famosa “dialéctica del amo y el esclavo”, incluida en la Sección IV de la *Fenomenología del espíritu* de

Hegel (1807/1973), publicada apenas tres años después de la independencia de Haití.

Y la cosa no se detiene allí. El ejemplo que acabamos de dar pone sobre el tapete la enorme cuestión filosófica de las relaciones entre lo universal y lo particular, y lo hace en términos *histórico-concretos*. El célebre artículo 14 de la primera Constitución Revolucionaria de Haití, promulgada en 1805, dispone que, a partir de dicha promulgación, *todos* los ciudadanos haitianos, cualquiera sea el color de su piel, serán denominados *negros* (un artículo posterior aclarará explícitamente que esa disposición es válida también “para los alemanes y los polacos”). Se trata, evidentemente, de un cachetazo sarcástico contra aquel límite particular de la pretendida universalidad (la “falsa totalidad”, hubiera dicho Adorno) de la Declaración revolucionaria francesa. El artículo asume, en efecto, de manera *consciente*, y no como producto de una fetichización ideológica, el recurso a la “universalización” de una *parte*. Al *particularismo universalizante* del pensamiento eurocéntrico opone, pues, el *universalismo particularizante* de los ex esclavos.

Esta *dislocación*, como podríamos llamarla, de los sentidos comunes de la modernidad, producida por la revolución haitiana, tendrá vastísimos alcances. Por sólo nombrar uno, se puede formular la hipótesis de que el artículo 14 de la Constitución revolucionaria haitiana (redactada originariamente por Toussaint Louverture) es en última instancia el origen del concepto de *négritude*, que tanta enconada polémica levantará en el siglo XX a partir de su rescate por el también antillano Aimé Césaire en la década del treinta. Como se recordará, pensadores de la talla de Jean Paul Sartre o Frantz Fanon produjeron textos de enorme contundencia filosófico-política sobre el tema. Y el debate sigue hasta hoy mismo en plumas como las de los también antillanos Édouard Glissant o el recientemente fallecido premio Nobel Derek Walcott. Ya volveremos sobre todo esto, en tanto es el marco histórico-cultural amplio dentro del cual hay que inscribir los procesos solo aparentemente más “puntuales” que analiza Pierre-Charles.

Digamos por ahora: la revolución haitiana es de una singularidad y una radicalidad extremas, inauditas para su época. Pensemos un poco. Para empezar, es la única rebelión de esclavos triunfante en toda la historia de la humanidad, de Espartaco en adelante. Esa es una –y no la menor– de las razones por las cuales su *singularidad* deviene inmediatamente *universal*. Para seguir, es no solamente la primera de las grandes revoluciones independentistas americanas del siglo XIX (y ya eso le da un carácter decididamente *fundacional*) sino que es una revolución *social* y no meramente política. En todas las otras que la siguieron, fueron las nuevas burguesías “criollas” emergentes las que se separan de las clases dominantes metropolitanas a las que antes estaban asociadas. En Saint-Domingue, son las clases explotadas por excelencia, los esclavos, las que toman el poder (después de una lucha de más de una década y de una espantosa violencia) y fundan una nueva nación.

En verdad, la haitiana es la única revolución americana del siglo XIX que cumple con el requisito más riguroso para definir un movimiento como *auténticamente revolucionario*: que el poder político y económico no solo cambie de manos, sino que cambie de *clase*. Para colmo, en este caso no se trata únicamente de otra clase, sino de otra “raza”. Es decir: revolución *política*, revolución *social* y revolución étnico-cultural. Y también, en un sentido, revolución *filosófica*, por las razones que hemos visto antes, y que tienen que ver con el modo en que ella abre una multiplicidad de interrogantes críticos sobre los modos dominantes todavía hoy de pensamiento sobre la historia, la “modernidad”, los fetichismos ideológicos, la dialéctica “universalidad / particularidad”, y así siguiendo. Además, a partir de muchas investigaciones de la última década (notoriamente ese ya pequeño clásico que es el *Hegel y Haití* de Susan Buck-Morss, y que acabamos de mencionar), ya hasta los académicos más “eurocentrados” tienen que admitir el rol decisivo de la revolución haitiana como inspiración de una obra seminal para la filosofía moderna como es la *Fenomenología del espíritu*, que ya citamos.

Desgraciadamente –hay que decirlo con todo el dolor, pero también con toda la honestidad correspondiente– muy poco queda de todo eso, si es que algo. Hay muchísimas y muy complejas razones para esto –que este libro explica en buena medida–, muchas de ellas externas (desde la destrucción secular de la economía haitiana por la monstruosidad de su deuda externa hasta la ocupación norteamericana de 1915, por decir algo), otras tantas internas (desde las divisiones políticas post-revolucionarias y los fracasos económico-sociales hasta la terrible dictadura de los Duvalier, por ejemplo). Sería demasiado largo analizar todo eso aquí, aun cuando tuviéramos la suficiente competencia, que no es el caso. Para eso está el libro que estamos presentando, que lo hace mucho mejor de lo que podríamos hacerlo nosotros, y del cual no pretenderemos hacer aquí una paráfrasis, pues un libro importante como este demanda su lectura directa, sin que ningún comentarista pueda sostener la arrogancia de buscar “explicarlo”. Digamos, sí, un poco metafísicamente si se quiere, que la modernidad se tomó una gigantesca venganza contra ese cuestionamiento radical que implicó la revolución haitiana. Sin embargo, lo que ocurrió, ocurrió. Las revoluciones pueden terminar “fracasando” (y habría que ver qué significa eso exactamente) pero dejan huellas subterráneas que en cualquier momento pueden reactivarse y resurgir del olvido a que han sido sometidas. Y, dicho sea de paso, este “principio esperanza” es un hilo conductor implícito –y a veces bien explícito– del texto de Pierre-Charles, que no se deja abrumar por las dramáticas derrotas que la voluntad popular-democrática de las masas haitianas han sufrido, y observa cómo las huellas originarias de la gran revolución de 1791 / 1804 asoman una y otra vez para poner en cuestión el carácter pretendidamente definitivo de esas derrotas, y demostrar, ante los despotismos del poder, que la historia no ha llegado a su fin.

Pero permítaseme decir algo más. La revolución haitiana –y por su intermedio, implícitamente, el artículo 14–, además de los obvios efectos políticos y los no tan obvios filosóficos, tuvo enormes (aunque nunca del todo reconocidos) efectos literarios, o estético-culturales,

plenamente vigentes hasta el día de hoy, y de allí la pertinencia de la referencia de Pierre-Charles al universo de la *ficción* (García Márquez, etcétera), sobreentendiendo que aquí “ficción” no se opone a “verdad”, sino al contrario, es uno de los *modos* de esa verdad: hay ocasiones, en efecto, en las que –como diría Lacan– *la verdad tiene estructura de ficción*, pues es tan insoportable que solo por esa vía sesgada podemos acceder a ella.

Esos efectos de los que hablábamos los tuvo por supuesto en América Latina (por solo nombrar un caso archiconocido, allí están las novelas de Alejo Carpentier que citábamos y que tematizan explícitamente la revolución haitiana, como *El reino de este mundo* o *El siglo de las luces*, 1962), pero me interesa destacar que los tuvo, y muy profundamente, en la cultura *europea* –especialmente, por razones obvias, en la francesa. A todo lo largo del siglo XIX hay manifestaciones literarias –que sería demasiado largo enumerar y analizar aquí– en autores nada menores, desde Victor Hugo a Rimbaud, pasando por Prosper Merimée o Eugène Sue. Pero –esto también es muy conocido, aunque vale la pena volver a insistir en ello– es en las primeras décadas del siglo XX cuando estalla, en París, y con fuegos artificiales, el debate sobre la llamada *négritude*, a través de la “escandalosa” obra poética y ensayística de Aimé Césaire (si bien la acuñación originaria del significante *négritude* se le debe al escritor y etnólogo haitiano Price-Mars). Césaire es, por supuesto, negro y antillano, de la Martinica (al igual que Fanon): ¿de qué otro lado pudo haber sacado la idea, sino del artículo 14, o por lo menos, con toda seguridad, de la revolución que dio lugar a ese artículo?

No es fácil apreciar, hoy, la magnitud cuestionadora que tuvo esa discusión en la cultura europea. En su momento Césaire, previsiblemente, fue en efecto acusado de abogar por un nuevo “esencialismo”, incluso un “racismo invertido”. Pero aquí nos atreveremos a defender el razonamiento de Césaire con dos argumentos que se nos antojan contundentes: primero, si hay tal esencialismo, es *estratégico*, en el ya canónico sentido que le ha dado a esa expresión Gayatri Spivak: es decir, siendo plenamente consciente de sus límites, se puede

asumir intencionalmente dicho “esencialismo” como una estrategia de lucha *defensiva* ante los embates del racismo eurocéntrico; segundo, aun así, no es del todo seguro que su reivindicación de la *négritude* sea tan “esencialista”: es cierto que parece recuperar con fuerza el mito del retorno a África, que ya era el de los esclavos (no solamente los haitianos) ; pero basta leer con atención cosas como los *Cahiers d’un retour au pays natal* para advertir que la figura alegórica que está allí en juego es la del *triángulo*, en evidente referencia al *triángulo atlántico* (Europa / África / América) del comercio esclavista. Es decir, donde África –continente natal de la humanidad misma, como sabemos hoy– no es tanto el “origen” o el “destino”, sino el *eje* alrededor del cual se articula el “choque de culturas” que supuso la colonización. Hay allí, provocada por el concepto de *négritude* que –es mi hipótesis– ha posibilitado el artículo 14, toda una *otra* filosofía de la historia que, mediante la *triangularidad*, discute radicalmente la *linealidad* de las concepciones dominantes, eurocéntricas, de la historia.

O sea: sin la revolución haitiana, su artículo 14, y todas las consecuencias “subterráneas” que venimos comentando –y que son “subterráneas” no porque no estén a la vista de quien quiera verlas, sino porque han sido sostenidamente *negadas* por la ideología dominante, que ha preferido sepultar ese acontecimiento para ella *impensable*, como lo llama el historiador Michel-Rolph Trouillot–, sin todo eso, decíamos, directamente no se entiende *qué es* la “modernidad”. No se pueden captar a fondo sus contradicciones y complejidades. Como hemos intentado decir, sin ella no se entiende cabalmente ni siquiera *qué fue* la Revolución Francesa, por decir algo. Y no se entiende cabalmente *qué fueron* las otras revoluciones independentistas que también forman parte de la “modernidad”. Y no se entiende cabalmente *qué fueron*, en su singularidad, cosas como la esclavitud, el capitalismo colonial, los conflictos étnico-culturales, el racismo moderno, la “negritud”, los cruces de “identidades” y subjetividades sociales, y así siguiendo. Todas cosas que son *también* la modernidad, aunque el pensamiento eurocéntrico haya querido hacernos creer

que ella es un “producto de exportación” del occidente blanco a su “periferia”.

Pero la desgarrada historia de Haití, de modo privilegiado, muestra bien otra cosa: una *contra-modernidad*, la hemos llamado en otra parte, que es de hecho una *crítica* (etimológicamente, una *puesta en crisis*) de las pretensiones falsamente “totalizadoras” de la modernidad euro / etnocéntrica. Una crítica hecha desde *adentro* de la modernidad misma, pero que pone al desnudo sus contradicciones insalvables, sus conflictos trágicos. Una buena parte de este libro de Pierre-Charles está dedicada a mostrar –a través de los complejÍsimos procesos político-sociales contemporáneos de la realidad haitiana– cómo los intentos occidentalistas-neocolonialistas de “adaptación” de Haití a la modernidad eurocéntrica chocan una y otra vez contra las *particularidades concretas* de la historia, la cultura y la sociedad haitiana. De una sociedad que en modo alguna rechaza formar parte de la modernidad, pero que pugna sostenidamente por hacerlo según *su propio* “acento social” (como hubiera dicho Bakhtin).

Pero retornemos por un momento al mundo de la “ficción”. Tomemos, por ejemplo, un libro como *El reino de este mundo* de Alejo Carpentier (1949/1975). La acción de esta novela cubre el período 1751-1832 en Saint-Domingue / Haití. La novela sin duda simpatiza con la revolución, pero es sumamente crítica de sus resultados. Ahora bien: la novela no pretende verosimilitud histórica alguna. Su modo es más bien mítico, y pasa por ser uno de los textos fundacionales del llamado *realismo mágico* en la literatura latinoamericana (también ese lugar tendrá, pues, la historia cultural haitiana). En todo caso, su estructura se diferencia entre otras cosas por el uso consistente del “choque de temporalidades” que corresponde a aquella complejidad *contra-moderna* que mencionábamos: la muerte del personaje histórico Mackandal, por ejemplo, se relata, en una suerte de “montaje paralelo”, primero desde la perspectiva de los esclavos, luego desde la de las autoridades coloniales. Ambas versiones (un poco a la manera del *Rashomon* de Akutagawa, 1970) se “corrigen” e interpretan

mutuamente de manera conflictiva, sin que pueda obtenerse un “justo medio” o una “síntesis”. Es una lógica narrativa que atenta frontalmente contra la linealidad *tanto* de la trama como de la “historia” (moderna) que la trama supuestamente “representa”. Difícilmente se podría dar un ejemplo más claro de las hipótesis de Paul Ricoeur sobre la posibilidad de relacionar dos problemas que generalmente aparecen como separados: la función narrativa y la experiencia del tiempo. En efecto, la epistemología de la historia y la crítica literaria del relato de ficción presuponen que todo relato se desarrolla en un tiempo que coincide con la representación vulgar, es decir, con una sucesión lineal de instantes. Ambas disciplinas se interesan menos por corregir el pensamiento representativo del tiempo que por subordinar el relato y la historia a modelos explicativos desprovistos de todo tipo de cronología.

Lo que la epistemología y la crítica literaria habitualmente no hacen, pues, lo puede hacer la *ficción*. Carpentier, en esta novela (aunque no únicamente: podríamos citar también el caso de *Los pasos perdidos* (1953/1968); si esta nos interesa especialmente, es por la razón obvia de que su escenario es la revolución haitiana) trabaja con el *desarrollo desigual y combinado* de las temporalidades. Se podría decir que su lógica textual es homóloga e isotópica de la de la propia revolución haitiana, de la cual hemos intentado mostrar que descompone la temporalidad lineal de las interpretaciones “oficiales” de la modernidad. Por otro lado, el punto de vista del esclavo *-negro*, pero no solamente negro sino *esclavo-*, que suprime prácticamente toda referencia a los grandes héroes (Toussaint, Dessalines, Pétion, etc.), implica una perspectiva opuesta al relato de la revolución como triunfo de la Ilustración tal como los historiadores europeos, y no pocos haitianos, quisieron ver. Pero hay que ser cuidadosos con esto, y verlo en toda su complejidad. Hablando de la novela de Carpentier, James Arnold sostiene que “el foco exclusivo puesto sobre los más estrepitosos fracasos de Christophe hace muy poco por presentar a la revolución haitiana como un rayo de luz para los pueblos oprimidos del mundo”.

No podemos estar plenamente de acuerdo con esta afirmación. De lo que se trata en Carpentier, según nuestra propia lectura, es justamente de registrar las tensiones tanto al interior de la propia revolución como entre esta y el *sistema-mundo* en el cual se enmarca (el capitalismo colonial, la Ilustración, la revolución francesa, etcétera). De allí la importancia del punto de vista del esclavo “desilusionado” Ti-Noel: es decir, el de la máxima *singularidad* a la cual no podrían reducirse esos grandes Conceptos, incluido el Concepto “revolución haitiana” pensado desde la lógica ilustrada hegemónica, y con los cuales la singularidad entra en conflicto. No pretendemos con esto negar que, efectivamente, Ti-Noel tiene buenos motivos para su “desilusión”: la revolución haitiana, en muchos sentidos, *fracasó en* el cumplimiento de sus promesas más ambiciosas respecto de las víctimas multiseculares de la esclavitud. Pero el “tema” de *El reino de este mundo* no es tanto ese “fracaso” como el modo en que *a partir* de la perspectiva de los protagonistas de la revolución –incluso si no participan activa y directamente de ella, como Ti-Noel, e incluso quizá más en este caso, que permite una mirada “al sesgo” – se *des-totalizan* las pretensiones de una narrativa lineal, armónica, binaria o simétrica de la temporalidad histórica.

En este sentido semejante “realismo” no tiene nada de “mágico”. No importa dónde haya sido creada, la etiqueta tiene un inconfundible tufillo eurocéntrico: solo desde la perspectiva de una filosofía de la historia lineal y teleológica –como es la europea moderna, como parte central de la colonialidad del saber– se puede concebir que esos choques temporales son “mágicos”, si con ello se quiere aludir a una alteración sobrenatural, o lo que fuere, de la “realidad” histórica. Pero al precio de olvidar, o de *negar*, que para los sectores colonialmente dominados la historia *es*, y lo es *realmente*, ese choque de temporalidades impuesto por la dominación colonial. Al menos este aspecto de la novela de Carpentier –y de tantas otras que han caído bajo la misma etiqueta– es completamente *realista*, solo que no, por supuesto, en el sentido de Balzac o Tolstoi.

De todas maneras, lo importante a retener para nuestros propósitos en este prólogo es, como acabamos de decir, la complejización –tanto estrictamente literaria como crítica– que introducen las huellas, las *trazas* de la revolución haitiana en el imaginario de la modernidad, así como, más en general todavía, en la relación entre lo “Mismo” y lo “Otro”. Paradigma notable de esa complejidad es la extraordinaria obra del santaluciano y ganador del Premio Nobel de Literatura (1992) Derek Walcott –un negro nieto de esclavos, dicho sea de paso. Su *opera magna*, titulada *Omeros* –una trasposición al mundo del Caribe de *La Ilíada* y *La Odisea*–, monumental poema épico de la esclavitud afroamericana, da testimonio ya desde su propio título de una voluntad de *condensación compleja* de significaciones espacio-temporales, histórico-míticas y demás. Como nos enteramos por la explicación que de sí mismo da el propio texto,

Dije “Omeros”,

Y O era la invocación de la caracola, mer era las dos,

la madre y el mar, en nuestro patois antillano;

os un hueso gris y el blanco oleaje cuando rompe con estruendo

y esparce su collar sibilante sobre una playa que parece de encaje.

(Walcott, 1994: 25)

Todo gira, como no podía ser de otra manera, alrededor del mar. Y se nos dice que no África, sino ese mar (*mer*) es la madre (*mére*). Es el *patois* –directamente emparentado con el *créole* haitiano, aunque la lengua “oficial” de Walcott sea el inglés– lo que permite el juego de significantes, ya que en él la pronunciación de esos dos términos no registra siquiera la sutil diferencia que hay en francés. Tendremos, pues, referencias más o menos metafóricas al denominado *middle passage* –la lucha originaria viene del mar, que por metonimia permite la remisión a Homero– e incluso a la revolución haitiana, a la *négritude*, etcétera. La idea de un *viaje*, por supuesto, no puede dejar de evocar el *triángulo*, la “triangularidad”. Y todo el conjunto del largo poema (cerca de 500 páginas) juega permanentemente con la polifonía de tiempos, espacios y voces, incluyendo la invención de

palabras, las *mots-valise* y demás. ¿Todo esto puede ser –sobre todo tomando en cuenta que se trata de una “odisea”– influencia de, digamos, Joyce? ¿O quizá de Pound o Eliot, como sugieren algunos de sus críticos? (Cfr., por ejemplo, Pollard, 2004). Ciertamente. Pero no es *cualquier* influencia, sino la que es simplemente tomada como *pre-texto* para, nuevamente, una *singularidad que* solo podría concebirse en el contexto de la historia y la cultura afroantillana, y desde una perspectiva “tensional” disparada –no nos cansaremos de insistir en ello– por la revolución haitiana y el color *negro*. Ya esa referencia al *patois* (es decir, el *créole*) en el breve fragmento que acabamos de describir, es una pista inequívoca.

Está lejos de ser la única, ni la más evidente. Mucho antes de *Omeros*, a la edad de 18 años, Walcott escribe la obra de teatro *Henri-Christophe*, primera parte de su *Trilogía de Haití* (2002), en la cual dramatiza la lucha sangrienta entre Dessalines y Christophe luego de la muerte de Toussaint. Algo similar habían intentado antes Aimé Césaire (en la *Tragedie du Roi Christophe*, 1963/2016) y el mismísimo famoso autor de *Los Jacobinos Negros*, C. L. R. James (1938/2001), en una obra de título homónimo –y en la cual, como dato curioso, el rol de Toussaint fue actuado en su estreno por el gran tenor negro norteamericano, y perseguido por el macartismo por sus simpatías comunistas, Paul Robeson. Pero la perspectiva de la obra de Walcott se acerca mucho más a la de la obra de Édouard Glissant (1961/1998) *Monsieur Toussaint* (que también juega con la mezcla de temporalidades y espacios heterogéneos). Para ambos, el conflicto central es entre la *apertura* revolucionaria “internacionalista” (representada por Toussaint) y la *cerrazón* defensiva y aislacionista (representada por Christophe y su mítico castillo de Ferrière, en el cual se encierra hasta su colapso). Como puede verse, entonces, ambos captan bien que de lo que se trata –en este caso, desde una estricta perspectiva “política”– de la irresoluble *tensión* entre Parte y Todo, entre el Objeto y el Concepto, ahora trasladada también al *interior* de la revolución.

Es esa tensión encarnada en la *négritude* y puesta en escena por la revolución haitiana y su artículo 14 lo que durante mucho

tiempo solo pudo ser “actuada” por la literatura y el ensayo, tanto europeos como afroantillanos. La historiografía, en general, la había pasado por alto. Pero eso no sería lo más importante: la propia *sociedad* haitiana, aparentemente, la había pasado por alto, probablemente como respuesta inconsciente ante la situación catastrófica en la que se encontró Haití después de la revolución –es decir, después que su épica se ha vuelto una “ruina”–, aunque como dijimos este libro de Pierre-Charles demuestra, entre muchas otras cosas, que esa tensión, en la sociedad haitiana, *siempre* “retorna de lo reprimido”, como diría un psicoanalista. Que en el siglo XX haya habido un debate “literario” tan intenso sobre el concepto no puede sino ser un *síntoma* de que ese debate no se había producido en la “realidad”, o más bien, que había sido “olvidado” tras su espectacular lanzamiento en el artículo 14. Aquí debemos mencionar el libro *Ainsi parla l’Oncle* de Jean Price-Mars, que Pierre-Charles cita en un pasaje, y que en cierto modo lanzó el debate en 1928 (bajo la ocupación norteamericana, conviene recordarlo), aunque no utilizara ese término de *négritude* acuñado por Césaire. El diagnóstico de Price-Mars sobre el problema haitiano fue el de un “*bovarysismo colectivo*”: una búsqueda “patológica” de sentidos que “mira al horizonte” y no hacia el propio lugar; una *alienación* cultural, digamos. En sus propias palabras:

(...) La propensión de una sociedad a verse diferente de cómo es realmente (...) quedándose con un alma prestada (y frente a lo cual) nuestra única posibilidad de ser nosotros mismos es la de no repudiar una parte de nuestra herencia ancestral. Para las ocho décimas de entre nosotros esa herencia es el don de África. (Price-Mars, 1928)

Pero la cuestión no es, ya lo sabemos –o al menos no es únicamente– “África”. Es, otra vez, el *triángulo* África / Europa / América, tal como aparecía en los debates sobre la *négritude*. Es esa *encrucijada catastrófica* que ha marcado toda la historia de América Latina, pero muy en particular la historia (la sociedad, la cultura, la política) del Caribe antillano en el que se inscribe Haití.

Gérard Pierre-Charles, por supuesto, conoce esa historia al dedillo, y toda ella, en su *longue durée* (diría Braudel), es el telón de fondo permanente de su texto, si bien por momentos “pasa al frente”, por así decir: por ejemplo, en un capítulo estupendo (el N° 5) en el que los contradictorios elementos culturales que esa historia ha decantado juegan un rol protagónico en su articulación con los procesos políticos y sociales. Fenómenos como la religión *vodú* (que, de haber sido un arma ideológica emancipatoria en la revolución de los esclavos, pudo luego transformarse en instrumento de opresión bajo la dictadura fascista de Duvalier) o la lengua *créole* (un producto cultural “autóctono” que termina estableciendo una suerte de *cultura dual* entre ella y el francés “oficial”). Pero la debacle de la dictadura duvalieriana abrió una situación nueva, donde otra vez se redefinieron los lugares de esos factores culturales. El *vodú*, en tanto que formación cultural religiosa, había sufrido todas las vicisitudes de una religión oprimida. Igual que el *créole*, había sido sometido a las normas y a los prejuicios del eurocentrismo y de la enajenación cultural neocolonial, que solo reconocía la categoría de lengua y de religión para las formaciones lingüísticas y religiosas nacidas y propagadas a partir del Occidente cristiano. Hoy en día, el *vodú* no solo ha adquirido el derecho de ciudadanía, sino que existe toda una corriente de pensamiento que está tratando de depurarla de sus rasgos fundamentalistas y de extraer de ella, para alimentarla, una suerte de teología de la liberación.

Este es solo un botón de muestra –de los tantos que podíamos haber elegido– para mostrar la rica multiplicidad de las líneas de análisis que se cruzan en el libro de Pierre-Charles. Son cruces que sin duda hablan de una gran *crisis*: como dice el propio autor, “las líneas de contenido de esta crisis apuntan a tópicos recurrentes del combate por la democracia, dentro de una problemática a nivel continental, que adquieren mayor nitidez y claridad en este particular contexto mundial”.

Esta última afirmación es crucial para entender la importancia del libro. Se trata de devolverle a la golpeada sociedad haitiana lo que una y otra vez la ideología neocolonial / eurocéntrica ha

pretendido negarle: el lugar que le corresponde en la lucha continental y mundial por una auténtica y radical democracia. Pierre-Charles nos da todos los elementos para comprender el *proceso de reconstrucción* de ese lugar: desde las articulaciones conflictivas de las fuerzas sociales –con su compleja mezcla de clase, “raza”, género– hasta aquellas redefiniciones de los factores étnico-culturales y religiosos, pasando por la acción de los partidos y movimientos políticos que –con avances y retrocesos, con cambios en su fuerza y en su debilidad– empujan hacia la liberación, extrayendo su potencia de la historia misma de ese pueblo que, repitámoslo, supo en su momento realizar la revolución más profunda del continente. Quién sabe si esa historia no podría repetirse, y ciertamente no como farsa.

Bibliografía

AA. VV. (1805, 15 de julio). *Constitution of Hayti [Constitución de Haití]*. New York Evening Post. Recuperado de <http://faculty.webster.edu/corbetre/haiti/history/earlyhaiti/1805-const.htm>.

Akutagawa, Ryūnosuke. (1970). *Rashomon y otros cuentos*. Buenos Aires: CEAL.

Asamblea Nacional del Pueblo de Francia. (2019). *Declaración de los Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano [de 1789]*. Recuperado de https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2019-02/20190225_derechosdelhombre_1789_0.pdf. [Trad. Conseil constitutionnel].

Buck-Morss, Susan. (2005). *Hegel y Haití. La dialéctica amo-esclavo: una interpretación revolucionaria*. Buenos Aires: Norma. [Trad. Fermín Rodríguez].

Carpentier, Alejo. (1962). *El siglo de las luces*. México: Compañía General de Ediciones.

Carpentier, Alejo. (1968). *Los pasos perdidos*. Montevideo: ARCA.

Carpentier, Alejo. (1975). *El reino de este mundo*. Buenos Aires: ARCA / Calicanto.

Césaire, Aimé. (2016) *Tragedie du Roi Christophe*. París: Champion-Seuil - Col. Entre Les Lignes.

Glissant, Édouard. (1998). *Monsieur Toussaint*. París: Gallimard.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (1973). *Fenomenología del espíritu*. Buenos Aires: FCE. [Trad. Wenceslao Roces].

James, Cyril Lionel Robert. (2001). *The Black Jacobins [Los Jacobinos Negros]*. Londres: Penguin Books.

Pollard, Charles W. (2004). *New World Modernisms: T. S. Eliot, Derek Walcott, and Kamau Brathwaite*. Charlottesville: University of Virginia Press.

Price-Mars, Jean. (1928). *Ainsi parla l'Oncle. Essais d'Ethnographie*. Port-au-Prince / Compiègne: Imprimiere de Compiègne.

Walcott, Derek. (1994). *Omeros*. Barcelona: Anagrama. [Edición bilingüe. Versión José Luis Rivas].

Walcott, Derek. (2002). *The Haitian Trilogy: Henri Christophe, Drums and Colours, and The Haytian Earth [Trilogía de Haití]*. Nueva York: Farrar, Straus & Giroux.

Presentación

Este libro es producto de diversos momentos de reflexión y análisis en torno a la crisis haitiana, que cubre más de un decenio y manifiesta tal complejidad que su solución aún no se vislumbra.

El presente texto pretende recoger las líneas de fuerza de este proceso, su significado histórico y sus diversas etapas, en un esfuerzo de seguimiento y comprensión.

Algunos capítulos fueron escritos durante la gestación de los hechos, a partir de la observación de los actores sociales e individuales involucrados. Otros se desprenden de un periodo más reciente, marcado por el fenómeno Aristide, que cristaliza las contradicciones, los conflictos y el mismo alcance del proceso. Así pues, esta obra abarca la globalidad de una problemática que, por su profundidad, vaivenes y dimensión internacional, se ha manifestado como una de las más candentes de los últimos años en el contexto caribeño, latinoamericano e incluso mundial.

La comprensión cabal de este momento haitiano es difícil debido a sus peculiaridades, su duración y al carácter fragmentario de la abundante información existente sobre este proceso. Sin embargo, excluyendo aquellos proyectos originales de Haití como sociedad (en los que se afirman como rasgos fundamentales los que apuntan a la soberanía nacional), las líneas de contenido de esta crisis apuntan a tópicos recurrentes del combate por la democracia, dentro de una problemática a nivel continental, que adquieren mayor nitidez

y claridad en este particular contexto mundial. Así, se aprecia que las luchas haitianas por la democracia y el conflicto de fuerzas que generó no ha dejado de tener repercusiones en la vecina República Dominicana, en donde el viejo mago Balaguer ha visto afectados sus planes reeleccionistas; así como también la política *vis à vis* con Cuba, ya que Washington, por estar empantanado en Haití, no pudo llevar a cabo los planes que fueron anunciados por el entonces presidente estadounidense George Bush (Houston, marzo de 1990), para imponer la “democracia” en la isla rebelde.

De hecho, Haití vive desde hace una década una “revolución por la democracia” con sus rasgos propios, entre los que destaca su reza-go respecto a las demás sociedades de la región, pero de contenido propiamente latinoamericano. En este tiempo se advierten dos pe-riódos históricos que se superponen: el que corresponde al final de las viejas dictaduras de carácter personal y oligárquico, y otro más reciente, en el que fenecen los regímenes militares fascistas de se-guridad nacional. Por ello, en este enredado proceso, resaltan rasgos similares a los que se dieron en la Revolución mexicana (1910-1919); en la revolución contra Machado en Cuba (1930-1940), o de la re-volución dominicana post-Trujillo (1960-1965), evidentemente, con sus diferencias de tiempo, espacio y contexto cultural. Asimismo apare-cen instituciones, actores sociales y fenómenos de cuño más recien-te, como los resultantes de los procesos de democratización del Cono Sur en los años ochenta.

Los hechos políticos, las demandas y los debates surgidos en la nación desde hace una década han movilizado al pueblo y suscitado luchas sociales, choques de intereses y debates apasionados, que su-fren los avances y retrocesos propios de los momentos de reforma y contrarreforma, de revolución y contrarrevolución. En este proceso se interpenetran las luchas callejeras y los avances institucionales contra el totalitarismo, el militarismo, la impunidad y las prácticas de ineficiencia y corrupción del Estado; al mismo tiempo se aboga por el respeto a la Constitución y a los derechos humanos y sociales, por el sufragio efectivo, la plena participación ciudadana y un mayor

protagonismo de la sociedad civil, en favor de la negociación para la solución de los conflictos, así como de la defensa de la soberanía nacional. También resurgen viejos hábitos y grupos de poder y tentativas de restauración del pasado.

Todo lo descrito produce, en esta coyuntura prolongada de luchas sociales, un saldo impresionante de víctimas, el desgarramiento del tejido social, con el concomitante desgaste de las instituciones y de las infraestructuras.

Tal situación ocurre en un país, en sí sumamente pobre, donde la economía y la población se han aproximado, cada vez más, al desastre: de 1986 a 1992 el PIB ha pasado de 1.802 a 1.474 millones de dólares, y el ingreso per cápita ha pasado en el mismo lapso de 301 a 218 dólares anuales. Se trata, pues, de una caída catastrófica, por lo que la crisis, en relación con sus repercusiones políticas y económico-sociales, ha alimentado, sobre todo a raíz del golpe de Estado de 1991, el flujo de refugiados hacia Estados Unidos, contribuyendo a dar a los hechos haitianos una resonancia especial en los medios de comunicación, entre la opinión pública y en el gobierno de aquel país.

En tan insólito panorama, Estados Unidos de América, más poderoso que nunca al término de la Guerra Fría, se siente amenazado por una “cuestión de seguridad nacional” de nuevo tipo, representada por el flujo de *boat people* procedente de un país negro y el más pobre del continente. Asimismo, Estados Unidos está obligado, debido a su apego formal a los valores democráticos y a su condición de única superpotencia, a reconocer la legitimidad de Jean Bertrand Aristide, que fue democráticamente electo, frente a la violencia de unos militares corruptos y una “élite moralmente repugnante”. Tal legitimidad ha de ser reconocida, además, por los mismos compromisos morales e internacionales de los Estados Unidos, aun cuando el perfil individual del mandatario puede no corresponder a los modelos propuestos por el *establishment*.

Los fenómenos de mutación que estremecen a Haití, país con una trayectoria histórica de disidencia y diferencia, se desarrollan en un contexto mundial característico, que hace aún más difícil tanto su

interpretación como la solución de los problemas que se desprenden de ellos. El contexto es el que presenta el derrumbamiento del comunismo como fuerza internacional y proyecto societal, el final de la Guerra Fría y, por lo tanto, el fin de los marcos de referencia de carácter político, ideológico y militar en los que se insertaba cualquier hecho público durante más de medio siglo. Este cambio sustancial ha tornado mucho más compleja la percepción del mundo y de la historia, y se vuelve más difícil entender los hechos nacionales que involucran la supervivencia de pueblos del Sur, hechos que en otros tiempos hubiera sido fácil colorear en blanco, negro o rojo y satanizar.

Esta sorprendente dimensión de la relatividad se impone tanto a los sujetos del imperio como, y sobre todo, a sus *decision-makers*. En este marco inhabitual, los expertos o los computadores de inteligencia no podrán encontrar los enemigos contra los cuales habían sido programados. La lógica de las mayorías y la inteligencia de los pueblos van definiendo campos y armas inéditos, que pueden resultar más eficaces que nunca en el combate en pro de la justicia, de la libertad y de la vida. Estos son los de la legitimidad, el escrutinio efectivo, la sociedad civil, los derechos humanos, la educación cívica y la participación de las mayorías.

La nueva realidad es susceptible de modificar las relaciones de poder en determinadas sociedades, así como la función de las instituciones multinacionales y la misma dinámica de las relaciones internacionales. El “derecho a la injerencia” se eleva como un nuevo dogma, que prolonga las tesis obsoletas del pasado sobre la misión histórica del hombre blanco. Al mismo tiempo, la nueva situación parece ofrecer perspectivas de apertura para los pueblos. Tal vez sea dentro de este contexto como ha sido posible el fin del *apartheid* y el advenimiento de un gobierno democrático y multirracial en Sudáfrica. Es en este itinerario de doble vía donde se coloca la posibilidad de que la lucha del pueblo haitiano, sembrada de tantas dificultades por aquellos mismos que hoy pretenden socorrerlo, sea destrozada por el intervencionismo y un protectorado con objetivos neocolonialistas,

o que, al fin, este largo recorrido emancipador llegue a coincidir con algunos de los nuevos imperativos de la globalización.

En este contorno local e internacional, el retorno a la democracia, después de los tres años del régimen militar, ha venido acompañado de novedosas dificultades. Las mismas se desprenden directamente del proceso de transición hacia un Estado de Derecho, sensible a los imperativos del desarrollo y de la justicia. Responden, en cierta medida, a enfermedades de adolescencia del desarrollo democrático que nacen de los clásicos conflictos institucionales entre el presidencialismo y el nuevo papel constitucional que le toca desempeñar al primer ministro o al Parlamento. Asimismo expresan la complejidad de la gestión de un orden legítimo emergente, en donde el impulso reivindicativo de las mayorías, de los más pobres, queda aún poderoso y cuestionador del sistema. Dificultades, al fin, que se expresan entre dos concepciones de la autoridad, del poder y de la sociedad: una inspirada en el autoritarismo y en una visión totalmente *démodé* y patrimonial del Estado, y, la otra que es portadora de un proyecto democrático, participativo y moderno.

De hecho, esta transición que pone en movimiento tantas fuerzas sociales frente al imperativo histórico del cambio en la sociedad haitiana, sacude muchos intereses, sin lograr aún superar sus contradicciones históricas y políticas para provocar una dinámica socioeconómica de progreso. Por el contrario, con un ingreso per cápita inferior a los niveles de los ochenta, el país experimenta un deterioro notorio y mayor grado de miseria extrema, lo que vuelve aún más problemática su capacidad de alcanzar el desarrollo humano que inspiró a tantas luchas cívicas.

Además, la prolongada cobija de la comunidad internacional refleja, así como afirma, lo endeble del sistema democrático y del mismo Estado nación, poniendo en relieve las relaciones crecientemente desiguales entre Haití, Estados Unidos, Canadá e incluso la vecina República Dominicana.

En medio de esta encrucijada es menester que triunfe en mi tierra martirizada la batalla por la democracia, la justicia y una civilización

de la sencillez, fundada en un novedoso sentido de convivencia. Con ello se cumplirá este bisecular parto haitiano, con sus diseños de sueño y realidad. Las repercusiones de tal suceso, de tanto significado para uno de los pueblos más explotados del orbe, sólo podrán ser evaluadas de cara al futuro, por la importancia de las cuestiones que ha levantado y que no son exclusivas a esa media isla. Cuestiones, algunas de ellas, que proceden del combate universal por una verdadera democracia y las que nacen de las preocupaciones y esperanzas suscitadas por el papel que habrá de asumir en adelante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en las relaciones internacionales: al servicio del humanismo para todos o de los intereses de potencias hegemónicas.

Es preciso preguntarse si la nación haitiana sobrevivirá a esta prueba y cómo lo hará, de qué modo quedará situado el movimiento popular y, si logra su cometido democrático, en qué frontera histórica se colocará el desafío haitiano: en la línea de las últimas revoluciones democráticas logradas o frustradas del siglo XX o en la de las primeras del siglo XXI. A dos siglos de su epopeya emancipadora, el pueblo haitiano sigue empeñado en cumplir con su sueño.

Capítulo 1

Un reto difícil: la construcción de la democracia

La sociología latinoamericana, en los últimos años, ha ayudado a los pueblos a comprenderse mejor y, a través de este proceso de conocimiento, hechos y situaciones que en otros tiempos parecían muy específicos a uno u otro parecen ahora insertarse en la historia común, en la sociología del hecho latinoamericano. Inserción que se da en tiempos y ritmos históricos variados y desiguales, pero que corresponden a una determinada dinámica interna y a una articulación internacional propia de sociedades nacionales marcadas por el sello común del capitalismo, del subdesarrollo, de la dependencia y de un sistema imperial sacudido por una profunda crisis.

Tal ha sido el fenómeno del fascismo o, si se quiere, de los regímenes autoritarios fundados en el terrorismo de Estado, que en sus variantes de tiempo y espacio han atravesado América Latina dejando profundas huellas en las sociedades y en la conciencia.

Como muestra del hecho sociológico latinoamericano destacan los procesos de surgimiento de la democracia que se han dado en los últimos años en el continente. Procesos que no tendrían ningún interés especial si fueran una simple reanudación de otras etapas de democracia, pero que muestran importantes elementos nuevos que conviene destacar:

1. Un reto difícil: la construcción de la democracia

- a. Los logros de la conciencia colectiva, en cuanto al repudio de la tortura, la desaparición del fascismo con sus atributos terroríficos y una revalorización de los derechos humanos.
- b. El planteamiento de un debate nuevo respecto a la democracia, su contenido real *versus* su enunciado formal, su obligado carácter participativo y pluralista y la importancia del ejercicio efectivo de la soberanía popular.
- c. El reconocimiento de la relación íntima entre democracia y soberanía, que lleva a los gobiernos surgidos de estos procesos a tener una actitud no de obediencia sino de desobediencia hacia el centro imperial de poder financiero y político.

Hoy tales cambios son inconcebibles e incomprensibles si no se relacionan los procesos de democracia popular que han venido a quebrar el sistema conceptual y han cuestionado la legitimidad de la democracia representativa formal, con las repercusiones de las experiencias derivadas de la Revolución cubana y la Revolución sandinista.

Estas revoluciones, además de su contenido y significado latinoamericanos, como cristalización de la larga marcha de los pueblos hacia la conquista de la soberanía popular y la soberanía nacional, fueron también reflejo de una nueva relación de fuerzas a nivel internacional que sigue influyendo en el desarrollo político de los países del continente.

A partir de estas consideraciones, frente a la situación surgida en Haití, se plantea un sinnúmero de interrogantes: ¿de dónde arrancó este movimiento popular que hizo añicos una dictadura tan brutal y compacta, que además contaba con el apoyo estadounidense? ¿Cuáles han sido y cuáles son las fuerzas motrices de esta revolución democrática? ¿Cuáles son los objetivos y las posibilidades de logro de un movimiento popular tan amplio, en una nación marcada por la hipoteca de tantos años de opresión y cuya evolución está condicionada

por actores geopolíticos tan obvios, como el cuestionarse el derecho de los pueblos a la autodeterminación?

Para responder a tales preguntas y reseñar al mismo tiempo las perspectivas de este movimiento de profundo alcance social y político, es preciso recordar las líneas históricas del desarrollo de Haití que desembocan en la dictadura de Duvalier y, a través de las tres décadas de su duración, captar la dinámica de la opresión.

1. Algunas líneas del desarrollo histórico

El acto de fundación del Estado nación fue producto de una lucha larga con carácter de epopeya. La de un rebaño de esclavos, transportado desde África debido a la trata de negros, en uno de los episodios de opresión más bárbara de la historia de la humanidad y que a través del proceso productivo del capitalismo colonial se fue transformando en una comunidad con conciencia social y nacional. La independencia haitiana fue también un proceso de fundación republicana y democrática inspirada en las reivindicaciones por la libertad, la igualdad y la justicia, salidas de las entrañas del pueblo.

Estas ideas y otros principios desarrollados por la Revolución francesa, sirvieron de fundamento y orientación al proyecto republicano. Éste quedó plasmado sucesivamente en la Constitución de 1801, redactada por el precursor de la independencia, el genial Toussaint Louverture, y la de 1806, promulgada por Alexandre Pétion, fundador de la República.

De allí en adelante, la adopción de los principios constitucionales llegados de Francia, inspiró la institucionalidad democrática. Sin embargo, en este proceso resultaba evidente la inadecuación o inaplicabilidad de tales lineamientos a la vivencia de la comunidad. La realidad sociocultural de Haití se resistía a la fuerza transformadora del capitalismo mundial y del liberalismo, imponiéndose la pesantez del pasado colonial y esclavista, los remanentes de los modos de organización social y cultural africanos, así como la fuerza

emergente de una poderosa oligarquía terrateniente y militarista negra y mulata, heredera de las propiedades y de las mentalidades de la minoría colonial blanca, cristiana y monárquica.

Durante todo el siglo XIX, la República quedó reducida a una caricatura en que sobresalían los rasgos del presidente –amo y señor– y las señas aún más violentas del general-caudillo-terratendiente. Haití se volvió un escenario en el que se daba la opresión y la marginalización creciente de las mayorías campesinas, mientras que las luchas por el poder entre las fracciones rivales de las élites reducían los espacios de libertad y de legitimidad. El militarismo se impuso, haciendo trizas las formalidades constitucionales. Tal realidad de arcaísmo medieval y luchas civiles desembocó en la crisis social y política de principios del siglo XX. Era una crisis permanente que creó las condiciones favorables para que el expansionismo estadounidense se impusiera a la soberanía de la República.

Así la evolución del país en el siglo XIX, en un mundo dominado por el colonialismo y el racismo, quedó condicionada por dicho entorno y bajo la bandera de un nacionalismo siempre hecho explícito en el proteccionismo económico (prohibición constitucional de acceso a la propiedad territorial a los blancos). Éste se combina con un celo constante por la soberanía nacional y la afirmación del orgullo racial del negro. A nivel popular se da la resistencia muda, el cimarronaje, la disimulación o los estallidos arrasadores.

Los fundamentos del Estado nación se desarrollan con base en una economía propia y compleja en la que coexisten formas tribales y servidumbre, elementos de una primitiva economía de recolección, prácticas agrarias de campesinos y latifundistas, una economía mercantilista de *bord de mer* ligada, sectorialmente, al mercado mundial. La estructura social queda marcada por fuertes diferencias de clases y castas que se concretan en dos sociedades y culturas superpuestas. Se implantará un tipo singular de “colonialismo interno”, con exclusión y segregación, generador de permanentes antagonismos y conflictos, que vuelve sumamente problemática una evolución

convergente de carácter nacional entre los sectores de poder y los desposeídos.

Esa construcción estatal se servirá de un ordenamiento formal, inspirado en los modelos jurídicos de la antigua metrópoli y de la herencia de la sociedad colonial y esclavista. Hubo que invocar elementos culturales heredados de Francia, pero debió asumir, de modo fundamental, el bagaje de la organización social y cultural africana. También la “creolidad”, en su dimensión étnica, religiosa y lingüística, se fue sedimentando como un patrimonio propio, fundado en el mestizaje, el sincretismo y la invención. En estos terrenos de formación de un espacio autónomo, una original visión del mundo y una sociabilidad muy particular se afirmará la personalidad de este pueblo rebelde, un pueblo no asimilado por los moldes occidentales que, pese a los renovados mecanismos de opresión y discriminación, sigue creyendo firmemente en la igualdad y la justicia social.

En la configuración de la estatalidad, los mecanismos de poder y la posibilidad de un orden estable se verán sometidos al campo de las contradicciones de un mundo fundado en la organización oligárquica de la sociedad. Los continuos conflictos inter e intraoligárquicos debilitan la dinámica reproductora de la sociedad hacia el desarrollo democrático y modernizador, ya que ninguna fuerza hegemónica logra imponerse en esas contiendas entre caciques regionales, jefes militares, latifundistas y comerciantes, oligarquía negra y mulata, conservadores y liberales.

Los intereses del “neocolonialismo” francés y del expansionismo norteamericano encuentran, en esta dinámica, un espacio para intrigar, propiciando con sus acciones la pérdida de capacidad para construir una identidad haitiana nacional-estatal y nacional-popular cohesionada internamente. Dos décadas después de la independencia, Francia le impone a su antigua colonia una indemnización de ciento cincuenta millones de francos oro, que el país, durante todo el siglo XIX, nunca llegó a saldar y que pasará a manos de los Estados Unidos, junto a la soberanía nacional a partir de 1915.

Al finalizar el siglo XIX, Haití comienza a mostrar síntomas de agotamiento de su economía latifundista, constituida por un sector agroexportador de café y las microexplotaciones de subsistencia. Con esta estructura arcaica y un Estado agobiado por la “deuda externa” no puede dar el salto hacia el desarrollo capitalista. Pero tampoco bajo los efectos del expansionismo norteamericano exportador de capitales, promotor de la plantación de azúcar o frutas, generador de moldes organizativos del capitalismo y de impulsos renovadores en las estructuras e instituciones. A diferencia de lo que ocurre en Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, Panamá, América Central en este período, en Haití –donde la ocupación militar de los Estados Unidos duró 19 años– no se da la mutación hacia el capitalismo y la modernización.

La ocupación estadounidense duró de 1915 a 1934, período durante el cual las fuerzas de intervención pretendieron modernizar las instituciones políticas y administrativas. La democracia representativa, como modelo de organización de la vida política afianzó el mismo sistema de exclusión y marginación, propio de la tradicional democracia formal al servicio sólo de la élite.

En este marco las fuerzas de ocupación constituyeron la “Guardia de Haití”, que dejaron a su salida en el papel de “defensora del orden”. Esta institución se transformó en poder supremo de decisión. Empezó a hipertrofiarse y a experimentar toda clase de deformaciones y perversiones hasta colocarse encima de la ley y de la nación y volverse una fuerza de ocupación interna al servicio de la oligarquía y de los intereses extranjeros. Su omnipotencia, ligada al sistema de privilegios de que gozaban sus miembros la fue transformando en un azote para la democracia. Derrocó a los gobiernos de Elie Lescot (1940-1946) y Dumarsais Estime (1946-1950); se puso bajo el mando del general Magloire en 1950, para que éste se hiciera cargo del poder, hasta que fuese desplazado seis años después por sus hermanos de armas, los que colocaron en el poder, en 1957, al doctor François Duvalier, de siniestra memoria.

2. La dinámica de la opresión y de la resistencia

Conviene esbozar lo que ha sido la dinámica de la opresión duvalierista, poco conocida en América Latina porque, entre otras causas, las imágenes más divulgadas de la misma, identificadas con *Papa Doc*, *Baby Doc*, los *tontons macoutes*, etc., parecen más bien folklóricas, siendo a menudo inspiradas por estereotipos racistas, paternalistas y otras motivaciones interesadas sobre todo en desinformar respecto de la situación haitiana.

El régimen de los Duvalier no sólo correspondió a una dictadura de tipo personal como las que prevalecieron en América Latina en el siglo XIX. Aun conservando algunas de esas características que he analizado en el libro *Radiografía de una dictadura* bajo el concepto de “Papadocracia”, ha sido fundamentalmente un régimen de tipo fascista.

Ese régimen surgió en 1957, en un momento de crisis de la sociedad haitiana correspondiente al período posterior a la ocupación estadounidense, que duró de 1915 a 1934 y dejó a sus hombres en el poder, en el marco de un régimen político de “democracia representativa”. Este último entró en crisis en los años 1956-1957 y se evidenció entonces, frente a un creciente deterioro de la situación social y económica, la incapacidad para las minorías dominantes de gobernar según la ley y los principios, así como el empuje de las masas populares descontentas. Desde entonces se manifestaron los rasgos fascistas de un régimen que rompió la legalidad democrática representativa: desaparecieron los poderes legislativo y judicial en sus funciones y atributos, y se hipertrofió el ejecutivo. El terror se convirtió en la principal fuerza de poder y se ejerció, a partir de entonces, la tortura y la desaparición. Haití, junto con Guatemala, es el país de América Latina donde todos estos fenómenos y el exilio masivo, surgieron primero.

Tales métodos ilustran el nuevo carácter de la dominación política: los *tontons macoutes*, que empezaron a funcionar como pequeños

grupos paramilitares similares a los que surgieron posteriormente en el continente (la Mano Blanca en Guatemala, el Escuadrón de la Muerte, la Triple A), pasaron a ser una terrible fuerza represiva con sus comandancias nacionales o locales, su cuartel en cada ciudad o aldea, además de una red de espías, delatores y matones diseminados en todo el territorio, actuando como una fuerza de ocupación extranjera.

El terrorismo de Estado surgió así con rasgos sumamente claros en Haití y fue clasificado como tal por los científicos sociales, mucho antes de que la literatura latinoamericana viniera a difundir los conceptos sobre el fascismo en Chile, Argentina y Uruguay. Además, desde un principio, dicho régimen contó con un aparato de represión moderno directamente conectado con las redes de inteligencia y los sofisticados medios de la Central Intelligence Agency (CIA). De hecho, el duvalierismo constituyó durante 29 años la forma por la que optaron los Estados Unidos en su dominio de Haití.

¿Por qué esa forma tan brutal? Porque, además de sus profundas tradiciones de lucha, Haití es históricamente el país más oprimido de América Latina, y por ser el más oprimido es donde las contradicciones sociales evidencian mayor desnudez. Como parte de la historia moderna de esta opresión está la ocupación estadounidense que duró 19 años, la más larga en estos tiempos del *Big Stick* y también la más sangrienta, la más negativa, ya que ni siquiera dio lugar al desarrollo de relaciones capitalistas de producción como en Cuba, en Puerto Rico o en República Dominicana. El régimen de los Duvalier extremó esta situación de opresión con un saldo de 30 mil muertos, un millón de exiliados políticos y económicos, y el saqueo de la economía del país, transformado hoy en el más pobre del continente.

El duvalierismo tuvo éxito en la implantación de este sistema de terror, que alcanzó su eficacia sobre todo porque Haití, además de las contradicciones extremas, no tenía las estructuras democráticas de Chile, Argentina y Uruguay, que podían constituir elementos de resistencia y repliegue del civilismo para enfrentarse con los aparatos de terror. Siendo en Haití mucho menos compleja la sociedad civil,

el terrorismo de Estado alcanzó los mayores efectos a nivel de cada individuo y la interiorización del terror logró su máxima eficiencia. Por todo ello, cuando murió François Duvalier en 1974 pudo dejar el poder a su hijo.

La aplanadora había pasado, desestructurando la sociedad civil, destruyendo sindicatos, partidos políticos, así como líderes populares e incluso los de la clase política, neutralizando o cooptando al ejército y la Iglesia. Entre 1957 y 1977, el régimen del terror en su máxima expresión logró despolitizar a la población y sentar el poder absoluto de la familia Duvalier.

A partir de 1977 se notaron algunos cambios en el esquema de dominación, los cuales coincidieron con relativo repunte económico. En efecto, desde 1971, Estados Unidos había concebido un plan de promoción de la maquiladora en Haití que tenía en cuenta la paz social existente, condición que, junto con la política de franquicias fiscales, ofreció bastantes ventajas a los inversionistas. Además, la ayuda internacional proveniente de Estados Unidos, Francia y la entonces República Federal Alemana, fluyó hacia el país más subdesarrollado del continente.

En 15 años, Haití recibió 2 mil millones de dólares de ayuda en términos de préstamos, donaciones, etcétera. Así, una tercera parte de los ingresos del presupuesto (480 millones de dólares en 1985) provenían de Estados Unidos y, en menor medida, de Francia. Todo eso configuró una situación en la cual el gobierno tuvo que intentar cambiar su imagen en el exterior para satisfacer a sus protectores extranjeros, lo que dio como resultado un esquema de liberalización de cuatro puntos: a) la represión selectiva; b) la realización de elecciones periódicas por lo menos a nivel legislativo; c) la renuncia al sistema anacrónico de la presidencia vitalicia instaurado por François Duvalier en 1964 y que también heredó Jean Claude Duvalier; y d) el libre funcionamiento de los partidos políticos. Todo ello dentro de un marco definido como “de respeto a los derechos humanos”. Esta “liberalización” merecía publicidad y legitimización internacional. En realidad, las presiones en su favor únicamente pretendían mejorar

la imagen externa del régimen haciéndolo merecedor de la generosa ayuda del Congreso estadounidense.

De hecho, la estructura de violencia fascista continuó. Al régimen le resultaba imposible liberarse por las mismas contradicciones inherentes a su naturaleza. Esta situación llegó a tal punto que cuando las presiones internas empezaron a manifestarse, un plebiscito organizado por Jean Claude Duvalier, el 22 de julio de 1985, en relación con la permanencia de la figura de “Presidente Vitalicio”, dio como resultado una votación del 99.8% por el “sí” y solamente 449 personas por el “no”. Esta farsa plebiscitaria le hizo perder toda legitimidad, al evidenciar la incapacidad del régimen para democratizarse.

Dentro de esas contradicciones surge un momento importante en la dinámica de la resistencia y la lucha. Fue en el curso del año 1985 con la movilización de importantes fuerzas políticas. Conviene recordar que la lucha contra el duvalierismo se da desde 1957 con formas diversas, desde las formas civiles, ciudadanas, hasta las tentativas de lucha armada, todas ellas ahogadas en sangre. El penúltimo capítulo de este combate difícil fue una campaña en favor de los derechos humanos de 1977 a 1980, promovida por periodistas democráticos, frente a la cual el gobierno reaccionó brutalmente, expulsando del país a 19 de ellos, precisamente en noviembre de 1979, mes en que Ronald Reagan ascendió a la presidencia de Estados Unidos.

Frente al cierre de cualquier camino de lucha legal, algunos sectores democráticos y sobre todo los sacerdotes de base, promovieron la lucha en otro nivel: la instancia cultural. A partir de las prédicas religiosas del pueblo y de su labor pastoral promovieron reclamos por la justicia y la igualdad, así como por los derechos humanos. A raíz de esta penetración en el campo cultural lograron acumular las fuerzas que permitieron a la resistencia popular fortalecerse en un período de vida subterránea, sin enfrentarse políticamente al régimen. Desde allí, dotado de la legitimidad moral y material que le dio su carácter popular, el movimiento de resistencia irrumpió en el campo político en 1985, suficientemente fuerte y con una dimensión nacional tal, que el gobierno ya no lo pudo reprimir.

Los hechos que coadyuvaron al desmoronamiento de la dictadura son conocidos, pero es preciso recordarlos: una manifestación popular el 28 de noviembre de 1985 en Gonaïves, la ciudad cuna de la independencia, fue reprimida, tres de las cuatro víctimas eran estudiantes de secundaria. A partir de este momento se encendió el país, con una profundidad y dimensión que nunca se había dado en toda la vida republicana. Incontables aldeas, comunas, ciudades medianas y la misma capital empezaron a manifestar su inconformidad contra el régimen. Las protestas populares fueron multitudinarias. Todo el esquema del terror firmemente mantenido durante años empezó a resquebrajarse. La gente firmaba los manifiestos con su nombre y salía a la calle abiertamente gritando rebelión. Fue un cambio tanto cualitativo como cuantitativo. En diciembre y enero de aquel año, el movimiento estudiantil declaró una huelga a la que se adherieron los comerciantes, los médicos y los transportistas, tomando la forma de una huelga general.

La jerarquía católica apoyó el movimiento, también las iglesias protestantes y la Cámara de Industriales. La amplitud del movimiento popular neutralizó el aparato represivo que no pudo lanzar eficazmente a los miles de *tontons macoutes* contra los cinco millones de haitianos en pie de lucha. También se rompió el esquema del apoyo estadounidense a los Duvalier. Washington, que había respaldado a la dictadura durante 28 años, se vio obligado, a partir de la semana del 28 de enero de 1986, a retirar su apoyo incondicional, dándole la espalda. Jean Claude Duvalier salió del país en un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos. El pueblo tomó las calles y así se abrió una nueva etapa en la historia contemporánea del pueblo haitiano.

3. Las fuerzas sociales

La dictadura de François Duvalier representaba a un sector importante de la oligarquía: terratenientes, notables de las ciudades del interior, comerciantes, parte de la clase política, sectores de la pequeña

burguesía es busca del empleo público y elementos del campesinado y de las capas populares atraídos por los privilegios y la autoridad inherente a la condición de *tonton macoute*.

Tal régimen significaba una tentativa de renovación del orden sociopolítico a través de la promoción de nuevas formas, mecanismos y agentes de dominación que permitieran asegurar la sobrevivencia del sistema. Con esta pretensión buscó ampliar la élite del poder tradicional negro y mulato incorporado elementos de la pequeña burguesía negra, comerciantes y terratenientes e intentando crear una solidaridad de clase económica y política entre esos antiguos sectores dominantes para ampliar las bases sociales del Estado y la burocracia con elementos de las capas históricamente marginadas del lumpen y de la clase media.

Esas características corresponden a la década de los sesenta. Sin embargo, numerosos sectores oligárquicos, que en un primer momento se habían negado a ello, se fueron incorporando al boque de poder con el arribo a la presidencia de Jean Claude Duvalier, sobre todo al anunciar una “revolución económica” con ayuda externa.

De 1971 a 1980, tal ampliación del bloque dominante alcanzó un nivel máximo debido a cuatro factores: 1) la burguesía industrial coincide con el proyecto económico estadounidense tendiente a promover la industria con base en la maquiladora. Numerosos empresarios locales se asociaron con capitales extranjeros para trabajar en empresas destinadas a la exportación, fenómeno que reforzó el apoyo burgués a la dictadura; 2) la ayuda internacional masiva que fue creciendo en esa década permitió la formación de nuevos sectores burgueses sobre la base de la especulación financiera y los contratos públicos; 3) se incorporaron sectores sociales a la clase política que hasta entonces mantenían distancia frente al poder, a medida que la asistencia externa y el auge económico construyeron factores de legitimidad, además de ofrecer nuevas posibilidades de empleo público; y 4) con la anunciada liberalización, sectores de la pequeña burguesía tecnócrata que habían estudiado en el extranjero regresaron

al país buscando, a través de los múltiples programas de ayuda, alguna posibilidad de empleo.

Esta ampliación del bloque oligárquico alrededor de Jean Claude Duvalier se consolidó mediante el matrimonio de éste con una mujer de la burguesía. A ello se añadió la llamada “revolución económica”, las grandes cantidades de ayuda estadounidense no disminuyeron ni en el contenido de la política de los derechos humanos de James Carter. La dictadura adquirió una legitimidad y honorabilidad que nunca había alcanzado. Los “sueños vitalicios” se alimentaron y así surgió un recurrente proceso de liberalización que tiene tres etapas:

La primera etapa, anunciada en 1971, fue sólo un cambio de estilo represivo para disminuir la excesiva presencia de los *tontons macoutes* y del crimen organizado en las esferas oficiales. De hecho, tal maniobra no dejó de ser una simple mercancía de exportación, ya que todas las estructuras represivas quedaban intactas, así como el fenómeno del terror.

La segunda cubrió un período de democratización entre 1976 y 1980, cuando la política de los derechos humanos de Carter obligó a abrir algunos espacios democráticos, los mismos que fueron rápidamente cerrados debido al miedo del gobierno de ser rebasado por la oposición.

La tercera se dio a partir de 1980, pese al respaldo de la administración Reagan, la crisis del neodualismo empezó a manifestarse cada día con mayor claridad.

Entre los actores que estimularon esta crisis destaca la reversión de la tendencia al auge económico que cubrió casi toda la década de los setenta. La promoción alrededor de Jean Claude Duvalier de elementos jóvenes ambiciosos (entre ellos su propia esposa Michèle Bennett), que se disputaban los favores con los “dinosaurios” de la vieja guardia y manifestaban asimismo un apetito desmedido de riqueza, provocaron crecientes fisuras en el bloque dominante. Además, la recesión económica comenzó a afectar a algunas de las medidas tomadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para limitar las importaciones, sobre todo de artículos de lujo. Es preciso

destacar al respecto que el auge en los años setenta se caracterizó por un aumento de las exportaciones de productos de la industria de ensamblaje (electrónica, juguetes, ropa) así como por la disminución de la exportación de café que pasó de representar un 80% de las exportaciones en los años sesenta a un 40% a fines de la década de los setenta.

La expansión del comercio exterior, sin embargo, se da con mayor intensidad en el comercio de importación, ya que la masa de los emigrados transfirieron, desde el extranjero, cuantiosos recursos en divisas a sus familiares en el país (150 millones de dólares anuales). Tales transferencias propiciaron una propensión a la importación excesiva, la cual era aprovechada sobre todo por la burguesía importadora. Así, las medidas adoptadas por el FMI para frenar las importaciones vinieron a crear elementos de fricción en el seno del bloque dominante, lo que se acompañó de algunas quiebras en el sector industrial, mientras que el nuevo e insaciable clan Bennett disfrutaba del poder y los privilegios con exceso de lujo y despilfarro.

En este contexto irrumpió en el país la prédica en favor de los derechos humanos, que logró sensibilizar a amplios sectores de la población. Además el uso del créole –el idioma nacional– en la información y la concientización política, tanto por la izquierda como por la Iglesia, estimuló a la población a aumentar su participación política. Esta participación se expandía a medida que se deterioraban, aún más, las condiciones de existencia. Asimismo, el cierre de algunas empresas, el término de la tendencia expansiva del empleo, además de la crisis agraria sin precedentes que provocó un bestial empobrecimiento de las masas rurales, llevaron a nuevos sectores de la sociedad al cuestionamiento del régimen.

Esta nueva etapa de descontento y concientización pasó por un período de acumulación y sedimentación lo bastante largo como para liberarse de la fuerza de inercia del terror y de la pasividad. Desde los sectores de las pequeñas burguesías, a principios

de la década de los ochenta, empezaron a verse claras muestras de repudio al régimen. Como válvula de escape funcionó “la emigración”, mediante la cual los más resueltos a luchar por la sobrevivencia trataban de resolver el problema del empleo y de mejorar sus miserables condiciones de vida. La clase obrera, totalmente desestructurada en cuanto a organización sindical, protagonizó las primeras manifestaciones de huelgas, sobre todo en los sectores de las industrias de ensamblaje, poblados por obreros jóvenes, y especialmente mujeres.

Las poblaciones afectadas por los bajos precios del café y por los fuertes impuestos también empezaron a expresar su inconformidad con las manifestaciones que estallaron en Gonaives y otras ciudades del interior a partir de mayo de 1984. A estos disturbios se sumó también el campesinado, víctima permanente del duvalierismo, que había perdido sus tierras y su seguridad bajo la presión de los *tontons macoutes*. Los campesinos reaccionaron organizándose en asociaciones de desarrollo de la comunidad, en proyectos de desarrollo rural y en comunidades de base, animados por el clero. Su descontento creció a la par de su mayor concientización.

El deterioro de las condiciones de existencia, constante durante todos estos años, alcanzó nuevos grados que correspondieron ya no solo a la miseria extrema sino a la completa deshumanización. En estas circunstancias, la conciencia del pueblo fue cada día más clara en la comprensión de los vínculos existentes entre su situación y la permanencia en el poder del régimen de los *tontons macoutes*.

En este proceso de concientización resultó decisivo el papel de la juventud, ya influida por las ideas del socialismo y de los sectores cristianos. Por más que la izquierda como fuerza no aparece en el proceso, su influencia resulta imprescindible, como igualmente lo es la presencia histórica de los comunistas, que desde la década de los sesenta mantuvieron una base organizada en el territorio nacional, siendo los únicos que se enfrentaron directamente a la dictadura. De ahí la base de ese proceso de acumulación de conciencia que estimula la Iglesia y que desde el campo de la concientización cristiana,

promovida por la Teología de la Liberación, amplió la acción social orientada hacia la movilización de las mayorías. La labor de la Iglesia ha sido decisiva en esta tarea de evangelización en aras de la liberación, ya que coadyuvó a la constitución del bloque popular contra el duvalierismo y la opresión.

A partir de esos cimientos la movilización popular cobró un carácter masivo y nacional colocándose en un lugar central dentro del escenario político del país. Se trató de una movilización desde la provincia que sacudió las bases del poder, lo cual reviste una importancia histórica ya que desde el tiempo de la ocupación estadounidense la provincia había sido marginada totalmente de la vida política.

Con la participación de las regiones más atrasadas del *arrière pays*¹ se sentaron las bases mismas de la participación popular en el proceso político y en la perspectiva de la construcción democrática futura. Esta acción de la base arrastró a los diversos sectores sociales en el bloque popular, que logró romper el esquema de la dominación y brindó al pueblo por primera vez la conciencia de su fuerza histórica.

Sin embargo, la participación del pueblo no llegó a poseer la fuerza determinante a la que podía optar, notándose también la ausencia de una conducción política que ha limitado el alcance de esa amplia movilización popular. Esta participación activa para el derrocamiento de Duvalier no condujo al acceso al poder político de los sectores populares. El poder cayó en manos del ejército, que hasta el final resultó leal al duvalierismo.

La misma dinámica de las fuerzas sociales, congelada durante tanto tiempo, se volvió a expresar no sólo en términos de resistencia sino en grandes reivindicaciones populares, democráticas y nacionales.

¹ Concepto geográfico y político recurrente en el discurso duvalierista y se refiere a la población de las zonas rurales.

4. Las fuerzas políticas: tendencia y perspectiva del movimiento

El Consejo Nacional de Gobierno (CNG) que asumió el poder dejado por Jean Claude Duvalier fue producto de una negociación en la que participó la embajada estadounidense, expresión del dominio que se ejerce sobre la nación haitiana desde hace 70 años, el ejército, como institución que reclamaba el monopolio de la fuerza pública contra los *tontons macoutes*, y los sectores de oposición, representados por el profesor Gérard Gourgue, presidente de la Liga de los Derechos Humanos. Tal oposición, conformada a partir de la acción de la Iglesia y de otras fuerzas democráticas, oligárquicas y populares es la que mayor autoridad moral y política tuvo en esta alianza.

Una muestra de la fuerza política de esta oposición es el hecho de que el ejército, con sus características despóticas, tuvo que aceptar compartir el poder con representantes civiles de la oposición, lo que constituyó un caso inédito en la historia política haitiana e incluso poco usual en América Latina, ya que cualquier situación de esta índole –caída del gobierno y recesión de poder– suele ser resuelta y quedar en manos exclusivas de las fuerzas armadas.

Durante el duvalierismo, y a partir de 1978, dos eran las agrupaciones formalmente semilegales: el Partido Demócrata Cristiano, presidido por Sylvio Claude, y el Partido Social Cristiano encabezado por Grégoire Eugène. Aun cuando tenían una existencia formal, dichos partidos nunca funcionaron como tales. La dictadura no les dejaba ningún espacio pues no podían siquiera tener un local o un periódico, ni realizar mítines o estructurar una organización partidaria. Por lo tanto, más que cualquier programa o fuerza política real fueron sus líderes, sobre todo Sylvio Claude agigantado por el valor personal que demostró en su lucha, quienes constituyeron las referencias únicas de estos partidos políticos. Además de esas personalidades, figuraron también en estos últimos años Hubert de Ronceray, sociólogo y ex ministro de Duvalier, y Alexandre Le Rouge; ambos

tenían influencia en la pequeña burguesía intelectual o en general, en la opinión pública.

Mientras que en Sylvio Claude se ha podido reconocer un discurso y talante democrático con bastante arraigo popular, que ha buscado sobre todo una fórmula de funcionamiento de una democracia pluralista con cierta participación popular; en Grégoire Eugène se han expresado las vacilaciones y el oportunismo de un sector de la pequeña burguesía, que en su momento luchó por la presidencia de la República sin ningún proyecto político.

Fuera de esas dos agrupaciones, el debate que empezó a darse en los órganos periodísticos reflejó el interés por la realización de elecciones en plazos bastante cortos y el funcionamiento de un sistema de democracia electoral con llamados periódicos a la participación en las urnas. Este debate correspondía a la visión más generalizada de una población que durante 29 años había sido privada del derecho a elegir a sus representantes. Pero más allá de estos pasos formales, en los tiempos más recientes se empezó a plantear la cuestión de la estructuración de los partidos y su definición frente a los temas principales de la vida nacional, y es a partir de ello como se va a resolver la crisis de hegemonía que caracteriza el momento actual.

La Iglesia por su organización a nivel nacional, por su participación en el movimiento de resistencia y por la formación político-ideológica de sus cuadros, desde la Conferencia de Religiosos Haitianos hasta la Conferencia Episcopal, desempeña un papel destacado en cualquier proyecto democrático. Sus principales figuras, monseñor François Gayot, así como el obispo Wilhelm Romelus, expresaron su vocación participativa en la vida social y política del país. La promulgación en 1983 de un importante documento llamado la *Charte de l'Église d'Haïti*, en el cual se plantearon problemas fundamentales sobre los contenidos de la democracia, el desarrollo y la educación popular, mostró que esta institución ha diseñado un proyecto de sociedad que comparte las inquietudes de los sectores más avanzados política y socialmente.

Hasta ese momento, el Vaticano había apoyado la lucha de la Iglesia por los derechos humanos en Haití; sin embargo, en esta nueva fase, se orientó hacia la detección de las tendencias más avanzadas y la promoción de los sectores más conservadores, que han coincidido con los planes de Estados Unidos hacia Haití. De todos, es preciso destacar que la Iglesia católica se volvió una de las fuerzas más positivas, susceptible de coadyuvar a los proyectos de democratización en el sentido del respeto permanente de los derechos humanos, la instauración de un régimen de derecho y la incorporación de los sectores populares en la vida política.

Los sectores de izquierda, en particular el Parti Unifié des Communistes Haïtiens (Partido Unificado de los Comunistas Haitianos, PUCH), que durante décadas tuvo una connotada participación en la resistencia, vieron frenada su labor de educación y el esfuerzo por organizar la acción política y no tuvieron una expresión autónoma en el proceso de crisis del duvalierismo. Dos factores condicionaron esta débil participación de los comunistas en la fase reciente de la lucha: los efectos de la represión limitó por más de una década su capacidad de reproducción de cuadros y de liderazgo; y la virulencia del anticomunismo durante el régimen fascista.

No obstante, por identificarse con las grandes demandas populares en favor de la democracia, el PUCH siempre estuvo presente en el movimiento antiduvalierista. Por lo que sus posibilidades de aumentar su presencia en la escena nacional son reales en la medida en que se vaya dando una mayor estructuración de las fuerzas sociales y populares.

Dentro del espectro político de la izquierda en Haití, se destacó una organización partidaria, la Union des Forces Patriotiques et Démocratiques (Unión de Fuerzas Patrióticas y Democráticas), cuyo perfil se ha identificado con la socialdemocracia y que desde el exterior mantuvo cierta presencia en el país.

Sin embargo, la débil estructuración de las fuerzas sociales y políticas muestra las grandes limitaciones de la democracia en Haití. Si bien las organizaciones de masas han sido el resultado de una

unidad de acción nacida y estructurada desde la base, ninguna fuerza política democrática ha sido capaz de asegurar la conducción del movimiento popular. La fase que se inicia implica mayor politización, mayor capacidad de organización, y la definición paulatina de una nueva hegemonía que pueda ir en el sentido de las reivindicaciones del pueblo.

Dentro de este panorama, es preciso señalar ciertas fuerzas que todavía no han salido a la luz, pero que están ahí, ligadas a las viejas estructuras de poder y sobre todo a las tradicionales conductas de sumisión hacia la embajada estadounidense. Estas fuerzas, a través de diversas figuras, han buscado recomponerse en la batalla por la presidencia de la República. Algunas emergen desde el exilio y otras en el país mismo, han ido definiéndose poco a poco. Como el duvalierismo había destruido el liderazgo, incluso de las clases dominantes tradicionales, su recomposición ha sido una tarea en la que el ejército ha llegado a desempeñar un papel importante, dada su tradición autoritaria.

Todo ello, en un espacio geopolítico en que la acción de Estados Unidos ha estado orientada a reforzar su control sobre Haití y en un contexto marcado además por la vecindad con República Dominicana, nación agitada por grandes contradicciones sociales en que las fuerzas democráticas y revolucionarias tienen una tradición de mayor organicidad y participación política, pero cuya oligarquía y fuerzas armadas siempre han tenido vínculos estrechos con sus homólogos haitianos. Lo anterior hace que gravite sobre el futuro y sobre las perspectivas de la democracia en Haití el peso de la influencia dominicana.

Asimismo, la presencia de una Cuba socialista, a escasos kilómetros de Haití, da a Estados Unidos y a los sectores más atrasados del país un pretexto para una recomposición autoritaria del poder oligárquico.

Tal factor fue utilizado a lo largo de la dictadura y en varias ocasiones por los congresistas estadounidenses para señalar la importancia estratégica de Haití y el peligro que constituye en el Caribe,

la presencia del comunismo internacional. Además la propia actividad desarrollada por los Estados Unidos tiene sus imperativos. Si bien desde el punto de vista de sus inversiones, que suman unos 200 millones de dólares, tiene poco interés; desde el punto de vista político, Haití es un dominio que desean mantener. La misma existencia en Estados Unidos de más de medio millón de migrantes haitianos, crea un tipo nuevo de vinculación subalterna concretada en envíos anuales de unos 150 millones de dólares por transferencias, constituyendo una parte importante de los ingresos en divisas del país.

A partir de ahí se pueden diseñar las perspectivas de la democracia en Haití, que se corresponden fundamentalmente con demandas populares impostergables: la presión de una población que despierta a la vida política y que descubre en la participación democrática un canal que le puede permitir el acceso a satisfacciones vitales.

Un país de fuertes contrastes: el bloque dominante de poder absorbe la mayor parte de los recursos y bienes (3.800 familias son dueñas del 80% de la riqueza nacional), y los niveles de pobreza y hambre alcanzan a más de un 70% de la población, lo que obliga a tomar medidas urgentes que aminoren la desigualdad e injusticia social. Así, se hace necesaria una educación ciudadana continuada capaz de potenciar la construcción de una democracia participativa y pluralista, conceptos que se debaten por primera vez en Haití, y que orientan la acción de sectores jóvenes, deseosos de participación e innovación política.

Tales paradigmas de la democracia implican en sí una verdadera revolución, en comparación de lo que han sido las prácticas y los planteamientos políticos en Haití.

El tema del desarrollo también está presente en el escenario, en función de la dramática necesidad de alimentación y de trabajo de las grandes mayorías. La burguesía local nunca ha tenido un proyecto desarrollista. Incluso en el período 1915-1934, cuando la ocupación estadounidense tenía el poder de organizar la vida de la nación, nunca promovió un esquema exitoso de desarrollo capitalista basado

incluso en una economía de plantación como en otros países del Caribe y de América Central.

El modelo económico correspondió a los lineamientos de asesores estadounidenses y comprometió a todos los sectores desarrollistas y modernizadores de la burguesía local. La situación económica y social tan catastrófica que presenta Haití es señal, no sólo de fracaso del duvalierismo, sino de todo este estilo de desarrollo excluyente y concentrador.

El diseño ineficaz, trazado desde hace más de medio siglo por Estados Unidos, a pesar del impulso pretendido por el Plan Reagan para la Cuenca del Caribe, no logró modificar la tendencia excluyente de un estilo de desarrollo concentrador y represivo y ha agudizado las contradicciones obligando a rediseñar el proceso mismo de desarrollo. En estas circunstancias, ¿cuál puede ser la estrategia alternativa? ¿Cómo resolver los problemas del subdesarrollo extremo, el analfabetismo, la desnutrición y el hambre? Un supuesto básico es que todos esos males acumulados han sido producto de un régimen económico y social, y por lo tanto no pueden desaparecer mientras no desaparezca dicho régimen.

Pero, ¿cómo hacer desaparecer tal régimen económico y social? ¿Cómo promover nuevas fuerzas sociales más interesadas en la problemática del desarrollo? ¿Cómo terminar con la corrupción y la mentalidad de mendigos propias de la gestión gubernamental en las últimas décadas y cuyos resultados son evidentes? Tales preguntas están a la orden del día en este momento en que Haití está buscándose a sí mismo.

También se cuestiona la grave situación de dependencia y se plantean los límites a la soberanía y al derecho de autodeterminación. El punto de partida en este problema ha sido la misma práctica de indignidad impuesta por el duvalierismo a la población, y que repercute en el extranjero en todo tipo de discriminación y humillaciones contra ciudadanos haitianos emigrados a América del Norte y Europa, e incluso al Caribe, además del trato desigual dado, en el interior del país, entre los ciudadanos de las potencias dominantes y

la población nacional. La imagen del país y del haitiano en el mundo resulta totalmente humillante para una nación que ha protagonizado la primera guerra de liberación nacional y ha demostrado la magnitud de su vocación libertaria.

Tales preocupaciones no corresponden a una opción ideológica, sino a una práctica histórico-social, a una necesidad que se afirma cada día como factor de conciencia para toda la nación, acompañando la búsqueda de una nueva sociedad que sea regida por un tipo de relaciones internacionales orientadas hacia la igualdad, el respeto mutuo y el ejercicio auténtico de la soberanía.

Así, las alternativas democráticas, el desarrollo y búsqueda de soberanía, al igual que la conciencia puesta en la necesidad de construir tales alternativas son los pilares del momento histórico en que las masas han irrumpido en el escenario político con una fuerza descomunal. Se trata de un fenómeno social y cultural de una gran riqueza, que reitera la existencia de vías diversas en los procesos democráticos en el continente. En el caso haitiano sobresale la ruptura popular del esquema de democratización desde arriba que se proponían aplicar las fuerzas en el poder, internas e internacionales.

En Haití el proceso de cambio se ha impulsado con un contenido popular y democrático susceptible de ser canalizado hacia una transformación más profunda.

Capítulo 2

La revolución democrática²

Desde las protestas populares que llevaron a la huida de Jean Claude Duvalier, Haití ha sido escenario de importantes confrontaciones sociales y políticas. Por una parte, las fuerzas del *ancien régime*,³ coalescidas con los militares, trataron de conservar el *statu quo*; por otra parte, el pueblo, en casi todos sus componentes, reclamaba la desdualización de la sociedad y el Estado, y la lucha por la democracia.

La contradicción entre un amplísimo movimiento popular por la democracia, que se expresó en mil formas, y los intentos de frenarlo y desviarlo por parte de una pequeña cúpula político-social en la que se mezclaban militares, ex duvalieristas y la presencia –siempre importante en el Caribe– de una gran potencia mundial cercana al escenario de los hechos generó un panorama conflictivo que atravesó todo el espacio haitiano desde el 7 de febrero de 1986.

Poco trascendió de ella, sin embargo, en el plano internacional, hasta que ocurrieron los hechos sangrientos, que acompañaron la celebración de las elecciones cuando en Puerto Príncipe, civiles armados y soldados vestidos de civil ametrallaron las oficinas electorales dejando un saldo de una treintena de muertos y decenas de heridos y la cancelación de los comicios el 29 de noviembre de 1987.

² Aunque este capítulo fue escrito con anterioridad a los “comicios” de enero de 1988, que se dio por triunfador a Leslie Manigat, contiene elementos descriptivos y de reflexión insustituibles si se quiere entender lo que sucede y podría suceder en Haití.

³ Se trata de las fuerzas del régimen de Jean Claude Duvalier.

Así se puso en evidencia el carácter duvalierista, en sus métodos, del proyecto autoritario de los militares, herederos de la dictadura, que se habían comprometido a nivel nacional e internacional a asegurar la transición democrática y llevar al país a elecciones libres.

Para entender dichos sucesos (el divorcio entre las promesas de los gobernantes y su acción *fascistoides*, así como entre el pueblo y el gobierno militar), es preciso situarlos en el marco de la transición, tal como ha venido desarrollándose después de la caída de la dictadura.

1. Las conquistas y aspiraciones democráticas

De hecho, en este lapso posduvalierista, Haití ha caminado por los senderos de la democracia. No la “democracia dirigida” que quiso imponer la Casa Blanca, cuando Larry Speaks anunciara, una semana antes de que ocurriese, la fuga de Jean Claude Duvalier, ni la “democracia restringida” que algunos políticos pretendieron imponer. Se trata de un espacio de libertad conquistada por el pueblo, que ilustra una vez más la riqueza de formas, caminos y contenidos de la emergencia democrática en el continente.

Lo que ha acontecido en Haití ha sido una verdadera revolución democrática, surgida de las conciencias y los corazones, como condición previa al levantamiento de masas contra el régimen de los Duvalier y este proceso ha seguido profundizándose. Nacido en las entrañas del sistema de opresión que ha hecho de este pueblo el más explotado y pobre del continente, el proceso de mutación se refleja en la conciencia más y más generalizada entre las mayorías de que hace falta un cambio de sistema.

Con ese conocimiento intuitivo, que se desprende de la experiencia y de una labor de denuncia llevada a cabo por las fuerzas progresistas durante años, la organización del pueblo emerge desde abajo, con los comités de aldeas, de barrios, asociaciones campesinas, fraternidades religiosas y laicas, clubes políticos, agrupaciones de mujeres y asociaciones de desempleados y trabajadores. Todo el territorio

y la sociedad civil se organizan para hacer política, para denunciar la arbitrariedad y exigir la participación popular. El pueblo clama contra el sistema y busca una alternativa. Por ello, aplaude a quien manifiesta su rechazo al sistema, ya sea el activista del barrio, el estudiante radical, aquellos que proponen la lucha armada para acabar de una vez por todas con la explotación, el cura que predica contra las injusticias, el populista, justicialista o comunista, que simbolizan el cambio.

La crisis del sistema alcanza niveles de podredumbre y de evidencia que no pueden dejar insensible a nadie. La conciencia política y social ha evolucionado. En las tinieblas y el silencio del terror, el pueblo haitiano ha ido reflexionando. Desde febrero de 1986 ha visto aumentado su nivel de politización. Entiende muchas cosas simples o complejas, más de lo que podría sugerir el alto grado de analfabetismo en el país. La lógica de las mayorías va conformándose en la búsqueda vital de solución a los problemas de la comunidad.

Las emisoras de radio han tenido un papel destacado en este proceso, contribuyendo a elevar el nivel de formación, información y orientación democráticas. Acontecer inseparable del hecho de que el créole, lengua materna, ha ganado un espacio preponderante en la vida social y política.

Esta revolución democrática, que hasta ahora se desarrolla en forma curiosamente pacífica –teniendo en cuenta la violencia duvalierista y la tradicional brutalidad de la oligarquía–, pone en movimiento a la conciencia y activa la participación social de las mayorías excluidas durante el duvalierismo. No es por casualidad que la Constitución se ratificara por 1.200.000 personas en lo que constituyó la primera consulta popular, universal y auténtica en la historia de este país, y que este voto haya desatado el entusiasmo y la esperanza del pueblo.

El cuestionamiento del sistema, por los sectores más diversos, se centra en el modelo colonial de las relaciones con Estados Unidos. El nacionalismo crece, nutrido no tanto por la prédica de los marxistas, sino por la misma naturaleza subalterna de las relaciones

con la metrópoli. Ahí están los 29 años de respaldo de Washington a una dictadura sangrienta que promovió la corrupción millonaria, el tráfico de drogas, el crimen oficial, así como la humillante “ayuda” alimentaria, los campos de concentración, el sistemático ostracismo resultante de la atribución irresponsable a los haitianos de la paternidad del SIDA, la omnipotencia de los asesores “técnicos”, de los pastores, promotores de sectas, de los especialistas en ayuda militar y, por fin, perversión de la economía mediante el contrabando.

La aspiración a la dignidad nacional está sustentada por diversas capas sociales, incluyendo la burguesía y la tecnocracia. Por ello, Washington manifestó reserva frente a un proceso de inconformidad, que hubiera querido canalizar hacia una modernizante democracia representativa, capaz de nutrir las ilusiones desarrollistas de las clases dominantes, o bien, un régimen autoritario, que cerrara el espacio de palabra, de protesta y de libertad conquistada. Las mayorías que padecen del sistema, aspiran a remplazarlo por otro que abra paso a una mayor concientización y organización popular.

La estructura primaria, desde la base, ha ido articulándose con los procesos organizativos de los sectores más avanzados, aun cuando falta camino por recorrer para la conformación de una verdadera vanguardia. Se destaca en esta constelación de fuerzas emergentes la parte militante de la iglesia, que lleva todavía el papel hegemónico. Este sector ha estado reunido en torno a algunos sacerdotes con vocación de conductores, siendo el más destacado el padre Jean Bertrand Aristide, de la parroquia de San Juan Bosco, en un populoso barrio de la capital. Este dinámico sector lo conforman importantes núcleos de jóvenes de extracción popular y comités de campesinos laicos, comprometidos y organizados.

Por otra parte, algunas organizaciones de izquierda y centro, han coordinado la acción de la pequeña burguesía patriótica y radical y de los sectores populares. Su discurso, reclamos y proyectos, recogen las reivindicaciones nacionales en torno a la democracia y a mejores condiciones de vida para el pueblo.

La acción de estas fuerzas, junto a la de las emisoras radiales, tuvo mucho que ver con la aplastante mayoría a favor de la nueva Constitución, el 9 de marzo de 1987. Desde entonces, estas fuerzas presionaron para obligar a los militares a respetar sus compromisos democráticos y a realizar elecciones efectivas. De llegar a constituirse en una amplia coalición capaz de cubrir el espacio de centroizquierda, el peso de este sector podría hacer gravitar el poder en el campo democrático en los municipios y las Cámaras Legislativas. Este hito organizativo y de búsqueda de un poder alternativo fue el que dio una nueva orientación a la coyuntura preelectoral, en el sentido de reafirmar la reivindicación popular en favor de la desdualización y la consolidación y ampliación del proceso democrático.

2. La crisis del sistema y del Estado

El proceso de crisis y la mutación en curso se reflejan en el poder del Estado, desgarrado por contradicciones insalvables; asimismo, la crisis está condicionada por el ejército y los remanentes del régimen duvalierista, que se han manifestado como una singular fuerza de reacción y freno ante el cambio democrático. Con el Consejo Nacional de Gobierno (CNG), integrado por los generales Henry Namphy y Regala y una figura civil, con cinco ministros militares, es el ejército el que ha estado en el poder. Sin embargo, estos militares, desplazados durante 29 años por los *tontons macoutes*, no podían administrar ni sus propios cuarteles. Su falta de experiencia y capacidad resultó particularmente evidente.

En Haití hace falta administrar una crisis económica y social pavorosa, producto a la vez del agotamiento del sistema, del desastre duvalierista, de la repercusión de la crisis mundial y de la propia incapacidad de los gobernantes que se sucedieron desde la huida de Jean Claude Duvalier. Tal desafío sometió al CNG y su proyecto continuista a presiones: la de las fuerzas de tutela (FMI, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia), que buscaron racionalizar el modelo, y

la de las masas populares, que reclamaban mejores condiciones de vida.

La crisis del sistema se ha hecho evidente en la ruina de la agricultura, la tremenda pauperización de las mayorías, el desempleo que ha llegado a alcanzar a más del 50% de la PEA (casi un millón y medio de personas), el colapso de la industria debido al contrabando y la contracción de la demanda de las industrias de exportación. Se hizo patente también en la incapacidad de las clases dominantes de promover el desarrollo, aliviar las necesidades de las mayorías y ofrecer un modelo alternativo a aquel caracterizado por la corrupción, la ineptitud, la rutina, la dependencia extrema de la ayuda externa y particularmente de la de Estados Unidos. La situación social es explosiva. Los sectores populares sacan a la luz reivindicaciones postergadas durante décadas y siglos. Es la insubordinación popular generalizada; el cuestionamiento de todo.

Frente a esta situación, la burguesía ha buscado respuesta. Su actitud varía entre la disposición a la negociación, la vacilación y el reclamo de la represión. Los militares conocen la sola respuesta de la fuerza, pero han tenido que frenar sus impulsos represivos, pues carecen de una política capaz de aliviar las tensiones del pueblo, por lo que han ido perdiendo más y más su legitimidad y credibilidad.

Esta situación de debilidad del poder político frente a la movilización política y social de las masas, llevó a Estados Unidos a incrementar su injerencia en Haití, y su asistencia económica masiva de más de 200 millones de dólares en 20 meses, para garantizar la marcha de la administración pública y la gestión de la crisis. Y, en esto, la AID (Agencia Internacional para el Desarrollo) se llegó a transformar en un Estado dentro del Estado haitiano, y su acción se proyectó hasta los niveles más profundos de la vida cotidiana. Asimismo, Washington multiplicó el número de sus “asesores”.

Así, el CNG, con la orientación y respaldo de Estados Unidos, puso en marcha el único mecanismo seguro para suplir la impotencia política: la contención o la represión, que no hicieron sino minar la credibilidad y aumentar la impopularidad de la junta. Por ello, en

octubre de 1986, cuando ésta convocó a elecciones para elegir una Asamblea Constituyente, menos del 5% de la ciudadanía acudió a votar. El CNG instaló una Asamblea Constituyente poco representativa, la cual, sin embargo, bajo presión popular, descartó el anteproyecto oficial e hizo una Constitución que recogía las reivindicaciones del pueblo.

En efecto, dispuso que el gobierno provisional *de facto* pasara, a partir de la fecha de ratificación de la Constitución y hasta el 7 de febrero de 1988 (en que tomó posesión el nuevo gobierno), a ser regido por esta Carta Magna. Cerró el acceso a cualquier función electiva, por un período de diez años a toda persona que señale el clamor público como responsable de crimen, tortura, robo de fondos públicos o de exceso de poder durante la era duvalierista. Dispuso la creación de un Consejo Electoral independiente, integrado por un representante del gobierno y ocho notables, representativos de la sociedad civil, en sus cuerpos de mayor relieve, tales como la Unión de Periodistas, el Consejo Universitario, la Corte Suprema de Justicia, el Cuerpo Consultivo, la Iglesia católica, los cultos protestantes, la Unión de Cooperativas o las Asociaciones de Derechos Humanos. Este organismo iba a tener la responsabilidad integral de las elecciones, desde la elaboración de la ley electoral hasta el recuento de los votos. Tal disposición quita al Ministerio del Interior, al ejército y, por lo tanto, al CNG, la posibilidad legal de intervenir en los mecanismos electorales. Por ello suscitó la mayor reserva de los gobernantes militares y la sorda oposición de los personeros del *ancien régime*, que recurrieron para la revancha y la restauración al fraude, la manipulación de la maquinaria de poder y de los mecanismos electorales, al uso de sus recursos financieros ilimitados.

La Carta Magna y el mismo Consejo Electoral contaban con el apoyo ilimitado de los sectores democráticos y del pueblo en general, que entendió claramente lo que está en juego con la aplicación y la defensa de la legalidad constitucional. Así se dio una marcada dualidad de poder, portadora de conflictos entre el pueblo, que organizó comités de defensa de la Constitución para garantizar unas

elecciones verdaderamente limpias, y el núcleo duro duvalierista-militar, defensor del conservadurismo y portador de un nuevo proyecto totalitario.

En efecto, si bien el derrumbamiento de la dictadura afectó a las instituciones estatales y la lucha popular logró romper la inmensa maquinaria represiva paramilitar que llegó a contar con 40 mil hombres armados (además de una impresionante red de colaboradores en todo el país), las estructuras sociales y políticas del duvalierismo siguen bastante fuertes, después de treinta años se manifiestan en los niveles de poder local, en estrecha vinculación con el ejército en todos los escalones, y con el CNG. Además, los aparatos y agentes de la represión, han estado reactivándose. Los mismos integrantes del gobierno provisional orgánica e ideológicamente unidos al *ancien régime* no se prestaron a satisfacer los reclamos “antimacoutes” y democráticos del pueblo. Por lo contrario, hicieron todo para cerrar el espacio de libertad, buscando de hecho la confrontación represiva.

El ejército, que salió reforzado en lo moral y lo político de la enconada lucha contra la dictadura emprendida por las masas, terminó sin embargo divorciado del pueblo y cuestionado por él. Como se recordará, si bien coparticipó en la represión y en el afianzamiento del duvalierismo, no constituía su fuerza de choque, ya que este papel fue desempeñado por los *tontons macoutes*. Así, en la última etapa de la lucha popular, el ejército supo conservar cierta neutralidad, que lo habilitó para hacerse cargo de la herencia gubernamental.

El presidente del CNG, el general Henry Namphy, tenía una imagen liberal. Todo ello confirió al ejército determinado nivel de legitimidad, aun cuando era obvio que al intervenir en el escenario había frustrado un proceso de cambio más profundo, promovido por los sectores populares.

En estas circunstancias, la representación del Estado se fue reforzando, si no desde el punto de vista político, sí en el terreno técnico-militar. En este campo, el apoyo de Estados Unidos fue decisivo, en la medida en que la envergadura del movimiento popular contra la dictadura señalaba el peligro de posibles repeticiones de una

movilización democrática, con propósitos mucho más peligrosos para el sistema, posibilidad que se debía evitar por todos los medios. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos se empeñó en asesorar al ejército, con miras, entre otras cosas, a aumentar sus efectivos de 7.500 a 25 mil elementos, y convertirlo en una fuerza profesional, susceptible de asegurar el orden en términos de control y ocupación del territorio. Tal propósito se basó, además, en una consideración de orden geopolítico: Haití está situado en el centro del Caribe, a 80 kilómetros de la costa de Cuba, compartiendo kilómetros de frontera con la República Dominicana y cerca de Puerto Rico, lo que le confiere una importancia estratégica notable, siendo el Caribe un punto de encuentro de las contradicciones capitalismo-socialismo, imperialismo-nación oprimida que definieron, hasta hace poco, el mundo contemporáneo.

El ejército en el poder manifestó su incapacidad para responder a los impulsos y reivindicaciones de los movimientos sociales y satisfacer las aspiraciones más apremiantes de la población y de las fuerzas políticas en pro de la democracia. En este contexto, su divorcio con el pueblo se fue afirmando, más aún cuando cada encuentro entre uno y otro se traducían en violencia represiva de la institución castrense.

En este contexto de contradicción y de conflicto, la cúspide de las fuerzas armadas se encontró incapacitada para hallar una salida política a la crisis.

A nivel constitucional se introdujeron disposiciones especiales que convertían a las fuerzas armadas en un Estado dentro del Estado, totalmente autónomo frente al Ejecutivo. Al mismo tiempo, elaboraron un reglamento inspirado en el del ejército israelí, que pretendía modernizar el cuerpo con base en una nueva estructura. Ésta creaba 18 plazas de generales y la función de comandante en jefe y comandante en jefe adjunto. Los generales Namphy y Regala se autonombraron en estos altos puestos, por un período de tres años.

A partir de ello, y en función de su alianza renovada con los dualeristas, la jerarquía estaba en condiciones de imponer su ley a la

ciudadanía, de desconocer la Constitución y frenar las aspiraciones democráticas del pueblo.

3. Las fuerzas impulsoras de la democratización

La compleja crisis económica y social que afecta las bases mismas del sistema haitiano ha constituido el contexto de la emergencia de los movimientos sociopolíticos que sacuden al país, desde antes del 7 de febrero de 1986, y que a partir de esta fecha han cobrado una particular vitalidad.

Tales componentes de la coyuntura se proyectan con fuerza transformadora y vienen alterando todo el funcionamiento del sistema. Esta realidad se refleja en la pujanza de las luchas sociales del campesino por la tierra, de los obreros por la sindicalización y mejores salarios, y de las clases subalternas, en general, contra el hambre. Se expresa, asimismo, en los combates populares en pro de la democracia y los derechos humanos. Este dinamismo modifica el tejido de la sociedad civil e imprime al Estado rasgos nuevos, que han modificado la conducción del mismo –pese a la herencia histórica del autoritarismo y del duvalierismo– debilitando la estructura represiva y abriendo un espacio democrático inusitado. Todo ello, en medio de las contradicciones que sacuden la misma cúspide del Estado burocrático, se ha reflejado en la Constitución. En ella se plasman todos los conflictos o intereses, las reivindicaciones sociopolíticas, y sobre todo, la relación de fuerzas entre las diversas categorías sociales y políticas, los puntos de acuerdo formales y algunas líneas, todavía débiles, de un proyecto de sociedad sustentado en nuevas relaciones Estado-pueblo y de participación popular; en una palabra, de democracia.

Cabe destacar la importancia que cobra en ese escenario y detrás del mismo la dinámica de los movimientos sociales y de las tendencias organizativas y reivindicativas de los diversos sectores mayoritarios.

Las luchas campesinas atraviesan todo el país con demandas y acciones de recuperación de predios que habían sido expropiados a los campesinos por los *tontons macoutes* y también de tierras pertenecientes a los latifundistas y al Estado.

Asimismo, los campesinos se niegan a pagar impuestos, se rebelan contra la miseria y el abandono en favor de mejores condiciones de vida. Rechazan la opresión de tipo semifeudal y la acción de despojo depredador por parte del Estado.

Fuertes movimientos regionalistas sacuden a la provincia, como entidad geográfica y sociológica, contra la excesiva centralización de las funciones económicas y estatales en Puerto Príncipe, contra la poca disponibilidad de recursos fiscales para las poblaciones locales, que demandan escuelas, médicos, hospitales, caminos y exigen participación en los asuntos públicos.

Asimismo se movilizan tanto los trabajadores asalariados del campo, como los obreros urbanos. Estos impulsos para la estructuración sindical y para mejores condiciones de trabajo han introducido a la clase obrera en una dinámica de inconformidad, cuyo límite se percibe cada día más. Asimismo, los trabajadores agrícolas buscan su organización autónoma en alianza con la clase obrera.

También los empleados públicos buscan niveles organizativos que les permitan defender sus intereses, en términos salariales, o aminorar los efectos del alto costo de la vida y defenderse de la sombra autoritaria del Estado.

Sectores de clase media –profesionales independientes, pequeños empresarios– participan en esta dinámica, con miras a mejorar los niveles de vida que han sido erosionados hasta los límites de la pobreza por la escalada de los precios, por el aumento de los alquileres, etcétera. Igualmente, participan en la lucha por los derechos humanos, por la desdualización y por las reivindicaciones populares y sociales, estudiantes universitarios y secundarios.

La integración de las mujeres en el escenario social y político constituye un fenómeno nuevo. Es significativo que la manifestación más concurrida tras la caída de Duvalier fuese la convocada en el

mes de abril de 1986 por las mujeres pertenecientes a diversos núcleos organizados. De ahí en adelante, tanto en los barrios populares como en los sectores progresistas de la clase media, las reivindicaciones corresponden a la tendencia histórica en pro de la democracia que atraviesa el país.

Los sectores católicos han sido particularmente activos en todo el proceso de concientización, organización y participación política. Esta acción, y todo el pensamiento social y político que le acompaña, son los que mayor influencia ejercen sobre el proceso, resultando hegemónicos. Asimismo, participan en esta empresa –en contraposición con las sectas que obedecen a motivaciones extranjeras–, ciertos sectores protestantes y vuduistas, cuya actitud corresponde a la globalidad que caracteriza a los militantes y cristianos comprometidos.

Hace falta recalcar el papel de los medios masivos de comunicación, en particular las emisoras de radio, en esta tarea de concientización, unificación del pueblo en contra de las violaciones de los derechos humanos y en torno a los ideales democráticos. Los periodistas como gremio han desempeñado un papel sumamente importante y las emisoras de radio se han vuelto poderosos medios de comunicación social, de motivación y participación política.

Así, a través de las acciones de estas categorías sociales, así como de los jóvenes, los marginados, los sectores populares y las capas medias más desfavorecidas, se expresa el movimiento general de la sociedad. Estas mayorías, cuestionadoras del sistema, carecen de una visión clara de lo que quieren en cuanto a proyecto de Estado y sociedad, pero son conscientes de que la satisfacción de sus demandas fundamentales resulta imposible en el marco del sistema. Por lo tanto, a medio plazo, promueven la estructuración de la sociedad civil creando comités de barrios, organizaciones campesinas, cooperativas, sindicatos, asociaciones profesionales, etc., lo que les permite plantear los problemas más apremiantes de la comunidad, cuestionar al Estado, limitar el espacio de totalitarismo e ir diseñando un proyecto de sociedad alternativa a corto plazo. El combate de estos

sectores va en el sentido de la consolidación y robustecimiento de las conquistas de febrero de 1986.

4. Empate político y proyecto de restauración totalitaria

La etapa de transición que se abrió con el acceso del pueblo a las libertades públicas ha resultado de una riqueza extraordinaria.

En el plano sociopolítico, se ha delineado una contradicción fundamental: la que opone a los principales componentes de la nación, las mayorías que aspiran a la democracia, con las fuerzas duvaliero-militares, que lograron recomponerse bajo la dirección del CNG. La contradicción democracia-totalitarismo, que ha atravesado el espacio y el tiempo haitiano desde fines de 1985, se patentizó con particular transparencia en el proceso:

a) Desde febrero de 1986, el pueblo ha reclamado la desdualización de las altas esferas de la administración y del ejército. El gobierno respondió haciendo más discretos la presencia y el control de los personeros del *ancien régime* en el aparato de Estado.

b) En noviembre de 1986, los duvalieristas, con la tolerancia del CNG, quisieron organizarse en partido político, pero el pueblo salió en la manifestación más concurrida (300 mil personas) en la capital, para decir “no” a los duvalieristas.

c) El CNG, teniendo que integrar una Asamblea Constituyente, procuró imponer a los miembros de la misma el proyecto de Constitución así como una propuesta autoritaria que el pueblo combate, lo que llevó a los constituyentes a desechar el anteproyecto oficial y redactar una constitución liberal.

d) El gobierno militar, en su afán de intervenir de manera decisiva en el proceso electoral, promulgó en junio de 1987 un decreto anticonstitucional que limitaba las funciones del Consejo Electoral Independiente. El pueblo, en una respuesta unánime de todos los sectores sociales y políticos, repudió dicha disposición. Se constituyó entonces una coalición de 57 organizaciones representativas del

sector democrático y popular, que se movilizó en huelgas generales y manifestaciones en todo el país demandando no sólo el retiro del decreto gubernamental sino también la renuncia del CNG.

La fuerza política de este movimiento puso en evidencia la debilidad del gobierno, que quedó totalmente aislado y tuvo que recurrir a la represión y al terror. En esta coyuntura se mostró la alianza del sector militar con el sector más conservador y se desató una escalada de violencia para frenar los impulsos democráticos de la población. Se dio en todo el período un verdadero empate político: los sectores democráticos no pudieron *deshacer* la alianza CNG-duvalieristas y ésta no pudo destruir ni neutralizar el movimiento democrático.

Mientras tanto, corrían los plazos fijados por el calendario electoral para la celebración de las elecciones a fines de noviembre del año 1987. Los sectores democráticos resolvieron participar en las elecciones, pese a las amenazas de posibles injerencias del CNG, en un clima general de intimidación. En este ambiente, el pueblo, poco a poco, se fue interesando y se movilizó por los comicios porque entendió, o mejor dicho tuvo la ilusión, de que mediante el voto podía resolver el empate político; podía derrotar al duro núcleo militar-duvalierista.

El panorama político quedó definido, en el terreno electoral, en términos que favorecían a los proyectos antiduvalieristas y democráticos. Por una parte, frente al CNG, que hacía todo lo posible por entorpecer el proceso electoral, la Comisión Electoral Permanente (CEP), que poseía una incontestable legitimidad constitucional, se benefició de todo el apoyo político que el pueblo le brindó en el curso de los acontecimientos de junio-julio de 1987. En el plano internacional, esta legitimidad fue reconocida de manera unánime por las potencias tutelares, en particular por Estados Unidos, que le brindó a través del gobierno una ayuda de 8 millones de dólares, y Canadá, que facilitó elementos de infraestructura. Además, Venezuela dio un apoyo irrestricto en lo material y lo político.

Por otra parte, las principales fuerzas políticas que concurrieron a las frustradas elecciones de noviembre representaban un amplio espectro:

a) La burguesía, representada por Marc Bazin (ex funcionario del Banco Mundial, que contó con el apoyo de Washington); por Louis Déjoie II, con cierto aval popular en algunas regiones del Sur y del Centro; y por el industrial Thomas Désulmé.

b) La pequeña burguesía, encabezada por Gérard Gourgue, que fue postulado por el Frente Nacional de Coalición, una amplia alianza de fuerzas democráticas y populares, constituida alrededor del CONACOM, con apoyo de la iglesia de base y vínculos con la socialdemocracia; por Leslie Manigat, postulado por algunos profesionales democráticos y ex funcionarios duvalieristas y la democracia cristiana venezolana, dominicana e internacional; Hubert de Ronceray, con la confianza de ex funcionarios duvalieristas de nivel medio, y que mantiene un escaso nivel de representatividad de poder local; por Gérard Philippe Auguste, proclamado heredero del Movimiento Obrero Campesino de los años cincuenta logrando algún respaldo en las capas populares de la pequeña burguesía. Y, por último, con Sylvio Claude, con el apoyo masivo de la población en la región metropolitana (marginales, obreros) y de algunas regiones del centro.

De esos candidatos, con algún grado de representatividad popular, y de algunas figuras colocadas por el CNG en el escenario para su propio juego, surgirán barones del duvalierismo repudiados por el pueblo, pero enquistados en las estructuras de poder local (ex prefectos, ex alcaldes, ex jueces) y con los remanentes de la inmensa red de los *tontons macoutes*. Los más influyentes de ellos, Clovis Désinor, ministro de François Duvalier durante 14 años; el general Claude Raymond, ex jefe de Estado Mayor, incondicional de los Duvalier, y Alphonse Lahens, artesano desde 1958-1959 de la formación de los *tontons macoutes*. Todos estos barones caían bajo la disposición restrictiva del artículo 291 de la Constitución.

De esta amalgama arrancaría la gran confrontación entre este núcleo duro implicado con el ejército y el CNG, y el conjunto de las fuerzas democráticas, cuyas principales figuras, Gérard Gourgue y Sylvio Claude, se perfilaban como posibles ganadores, aunque no contaran con la aceptación de los militares.

Estados Unidos, por su parte, venía apoyando el proceso electoral en el plano político y económico. Sin embargo, resulta evidente que el candidato de su preferencia, Marc Bazin, no tenía la menor posibilidad de imponerse en las elecciones. De hecho, Washington no disponía en el escenario ni de un Joaquín Balaguer ni de una Corazón Aquino, que sirvieran de pieza de repuesto para la transición posdictatorial. En este marco, hay indicios de que el Pentágono tuvo reservas y cierta inhibición frente a las elecciones. Dos semanas antes de celebrarse el escrutinio, el general Regala viajaba a Santo Domingo para reunirse en secreto con el nuevo jefe del Comando Sur, el general Frederick F. Worner.

A fines de noviembre de 1987, se registraron inusitados movimientos secretos de altos jefes militares estadounidenses y haitianos. A estas alturas, el CNG, que seguía implacable en su determinación de impedir el proceso electoral, actúa de árbitro en lo que se presentaba como un enfrentamiento entre los neodualieristas y las fuerzas democráticas. Así, el 29 de noviembre, mientras que dichas fuerzas y el pueblo en general pensaban en una histórica victoria mediante el voto, el ejército, al servicio de su propio proyecto totalitario, hizo inclinar la balanza poniendo en la misma el peso de sus armas.

Con este hecho de violencia extrema, las fuerzas democráticas y el pueblo, en su impulso consciente a favor del cambio, tuvieron que replegarse: no les quedó más remedio que pasar a la defensiva, sacar las lecciones de esa etapa y prepararse para las próximas elecciones. La revolución democrática siguió en marcha en Haití, en una trayectoria difícil y los acontecimientos posteriores así lo han confirmado.

5. El proyecto totalitario y la nueva coyuntura

La anulación, en medio de un baño de sangre, de las elecciones del 29 de noviembre de 1987, se dio en el marco de un plan que pretendía el silenciamiento de las emisoras de radio y de las principales figuras políticas, a través incluso de acciones judiciales y terroristas.

Se trataba de un verdadero golpe de Estado, que no pudo alcanzar toda su dimensión represiva, ya que la opinión pública internacional comenzó a manifestarse a pocas horas de una masacre, que afectó no sólo a cientos de ciudadanos haitianos, sino también a miembros de la prensa internacional, como el periodista dominicano Carlos Grullón que fue víctima de alevoso crimen.

En esta coyuntura, se inició la institucionalización del golpe, con la formación de un nuevo Consejo Electoral, a espaldas de la Constitución, promulgando una nueva ley electoral que desconocía el voto secreto y facilitó las condiciones del fraude, imponiéndose la realización de una farsa electoral.

Frente a la violencia del golpe de Estado, los sectores democráticos demostraron desconcierto y quedaron desarticulados, afectando, fundamentalmente, a las emisoras de radio, que venían desarrollando el papel de organizadoras y difusoras de consignas políticas democráticas. Así, en los primeros días del golpe de Estado, la resistencia no pudo manifestarse, como pudo constatarse en la convocatoria de huelga general decretada a principios de diciembre de 1987, cuyo éxito fue sólo parcial. El pueblo, por su parte, entendió cabalmente que se había ingresado en otra etapa y que los métodos que venía utilizando (huelgas, manifestaciones) se volvían inoperantes frente a la brutalidad de los militares y que hacía falta adecuarse a esta nueva situación.

Los cuatro principales representantes de las fuerzas electorales, Louis Déjoie, Marc Bazin, Gérard Gourgue y Sylvio Claude, constituidos en coalición unitaria, expresaron su negativa a participar en cualquier elección organizada por el CNG y pidieron su renuncia.

Unas 50 organizaciones civiles profesionales, sindicales, religiosas, estudiantiles, comunales y diversos movimientos sociales, realizaron un llamamiento a la población para luchar contra el gobierno exigiendo su renuncia y boicotear las elecciones fijadas para el 17 de febrero de 1988, donde habría de “triunfar” Leslie Manigat.

Mientras tanto, las organizaciones populares y revolucionarias, algunas desde la clandestinidad, llamaron al pueblo a prepararse para el combate decisivo contra el régimen.

Estos llamamientos y denuncias coincidieron con el repudio generalizado del pueblo al régimen militar-duvalierista, y expresaron, al mismo tiempo, la limitación de medios con los que contaría el pueblo, frente a un régimen que demostró su decisión de ahogar en sangre las legítimas reivindicaciones democráticas y populares.

Por otra parte, Estados Unidos, Canadá y Francia, países que habían apoyado de manera irrestricta al CNG y favorecido el proceso electoral, al condenar el golpe de fuerza se comprometieron con los esfuerzos del pueblo para convocar y realizar un auténtico proceso electoral. El cese de la ayuda económico-militar, por parte de Washington, y la condena del CNG por numerosos legisladores y altos funcionarios estadounidenses, estuvieron acompañados de fuertes presiones y tendieron a mostrar al pueblo haitiano que Estados Unidos coincidía con sus reivindicaciones a favor de la celebración de elecciones libres y democráticas. Mientras tanto, el CNG avanzó en su proyecto de restauración totalitaria, preparando una farsa electoral para imponer a un civil a que encubriese el continuismo de la cúspide militar, permitiendo a las fuerzas del duvalierismo y del *status quo* recuperar posiciones y llevar a cabo, hasta sus últimas consecuencias, la política represiva.

Frente a esta situación, el pueblo, que durante dos años había creído en la legalidad, jugando a fondo el juego legal, procuró adecuarse a las nuevas circunstancias, llevando a cabo su lucha por la democracia en condiciones difíciles.

Capítulo 3

Fundamentos sociológicos de una victoria electoral

La victoria del padre Jean Bertrand Aristide en las elecciones del 16 de diciembre de 1990 sorprendió a numerosos actores de la escena política haitiana y, con mayor razón, a muchos observadores extranjeros. Sin embargo, un análisis de lo acontecido, dentro de su contexto, muestra que su triunfo constituyó la culminación lógica de los procesos sociales y políticos vividos por el país desde la caída y posterior salida de Jean Claude Duvalier. Su correcta apreciación, contenidos y forma específica, ayudan a comprender claramente la relación existente entre el triunfo electoral y los movimientos profundos que han sacudido a la sociedad haitiana durante la última década.

1. La lucha antitotalitaria

Esta lucha fue el motor principal para sensibilizar y consolidar la movilización del pueblo haitiano durante el período 1986-1990, dando a la participación política un carácter amplio y sostenido. Mientras tanto la violencia política y la opresión golpeó a todos los sectores sociales durante las tres décadas que duró el duvalierismo, el sentimiento y el combate antitotalitario cubrieron el territorio nacional arrastrando a todos los sectores sociales: la burguesía,

el campesinado, las clases medias, la población de los arrabales, etcétera.

La sobrevivencia y la renovación –después de la caída de los Duvalier– de los aparatos y prácticas represivas por parte del ejército, alimentaron este combate que cobró un carácter de rechazo total al sistema encarnado por los *tontons macoutes*. Rechazo que incluye también el de algunos líderes “centristas”, Serge Gilles o Leslie Manigat, cuya negativa para enfrentarse directamente con el orden duvalierista los llevó a pensar en un compromiso con el poder, siendo vistos con recelo por la ciudadanía. Así, se estableció una relación de exclusión recíproca entre los sectores identificados con y como duvalieristas y la mayoría del pueblo comprometido políticamente en la búsqueda de espacios democráticos y de libertad.

La sensibilización y la conciencia democrática de las masas urbanas y rurales aumentaron a la par que la lucha contra la dictadura, sobre todo entre los años 1983-1986. Al desaparecer los instrumentos y símbolos más significativos del duvalierismo, el pueblo se sumergió en el extraordinario espacio de libertad conquistado. La libertad de expresión, la exaltación y la defensa apasionada de los derechos del hombre y del pueblo, la acción educadora de las radioemisoras, así como de las organizaciones sociopolíticas, permitirán reforzar los lazos en la sociedad civil. Todas las clases, desde la burguesía liberal hasta los marginados de Cité Soleil, se unieron al combate democrático.

Bajo la denominación “sectores democráticos” se encontrarán unidas las más diversas tendencias luchando contra las tentativas del ejército y los sucesivos gobiernos provisionales para frustrar la realización de elecciones “libres, honestas y democráticas”. Un ejemplo particularmente significativo de esta coincidencia fue el levantamiento cívico contra el general Prosper Avril, en marzo de 1990, que movilizó a todos los sectores políticos.

El dinamismo de los movimientos sociopolíticos y las reivindicaciones sociales han constituido la instancia más profunda de las

mutaciones en curso, en una sociedad que había permanecido condicionada por el terror, la resignación o la resistencia muda. Todos los sectores guardan su pliego de demandas generando los más diversos movimientos reivindicativos de carácter local, regional o nacional. Tales luchas económicas, sociales y culturales han acercado a las diferentes clases de la sociedad a un punto en común. En ello tuvo una destacada influencia el trabajo de concientización realizado en las ciudades y campos por “la iglesia popular”, inspirada en la teología de la liberación, así como por demócratas de diversas tendencias progresistas.

Estas reivindicaciones expresan, en su diversidad, el impulso hacia “el cambio”, concepto que aparece reiteradamente en el lenguaje político de la transición, con un contenido impreciso y variado: cambio del Estado, cambio de estructuras, cambio del arcaísmo al modernismo, de la miseria al bienestar, de la injusticia a la justicia, cambio en términos de participación de la mayorías, de descentralización administrativa, cambio de discurso, del lenguaje e incluso de lengua, por lo que el créole se volverá la lengua franca en la acción política.

Estos impulsos al cambio hacen volcar el movimiento general de la sociedad hacia un proyecto de desarrollo y democracia participativa, enclavado en las necesidades reales y la elaboración de ideas que consolidan una dinámica tendiente a buscar el bienestar social y común, aspiración profunda hacia la recuperación de la dignidad humana y afirmación nacional del pueblo haitiano.

2. La quiebra del sistema

Durante tres décadas el poder omnímodo del duvalierismo fue construido sobre la base de la opresión política más despiadada, la degradación de la producción y las principales variables socioeconómicas, la creciente desigualdad, el acentuado empobrecimiento de

las masas, la corrupción y el envilecimiento de los valores morales. Esta ostentación de los vicios del régimen político y social dio lugar a una pérdida completa de legitimidad. El pueblo llegó a cuestionar el sistema en su totalidad: funcionamiento, estructuras, discurso, valores y relaciones internacionales.

Para numerosos sectores democráticos y populares, más allá de la coyuntura, este fracaso institucional, en sus expresiones económicas, sociales y políticas, tenía una dimensión histórica. El régimen duvalierista integró parte del sistema político y social implantado desde la Independencia, que fuera reforzado a partir de 1915, con la ocupación estadounidense.

La crisis de este orden político, había llegado a un punto de inflexión en el cual el sistema se mostró incapaz de asegurar los medios para su propia reproducción. Así, las clases económicamente fuertes, en el marco o a la sombra del poder, no consiguieron formular una alternativa modernizante, ni reformista.

Ya en los tiempos de la “cohesión totalitaria” del régimen de los Duvalier, resultó clara la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades de la sociedad y las aspiraciones ciudadanas. Con el proceso de desmoronamiento de la institución gubernamental tal incapacidad se hizo más patente. El Estado se mostró impotente para ejercer desde sus funciones de poder, de orientación política y de gestión, hasta las mínimas actividades de orden sanitario y público. Su maquinaria administrativa, roída por la corrupción, quedó desprovista de toda legitimidad y autoridad, al punto que tuvo que entregar algunas de sus funciones a organismos internacionales de asistencia o directamente a las potencias extranjeras.

Esta situación de ineficacia y debilidad del Estado contribuyó a crear condiciones para el surgimiento de una solución alternativa a la crisis representada por el Estado posduvalierista.

3. El fracaso de los partidos políticos

Con el aire refrescante del posduvalierismo surgieron una variedad de partidos políticos. Algunos con resabios del pasado, con su membrete desteñido y aún vacío, como el Mouvement pour l'Organisation du Pays (Movimiento Obrero Campesino, MOP), del viejo líder populista Daniel Fignolé; el Parti Agricole et Industriel National (Partido Nacional Agrícola Industrial, PAIN), de Louis Dejoie II, cuyo padre fuera un destacado líder de la burguesía y opositor electoral de Duvalier en 1957; el Parti Démocrate Chrétien (Partido Demócrata Cristiano, PDC) del pastor Sylvio Claude, símbolo reciente de la resistencia a la dictadura; el Parti Unifié des Communistes Haitiens (Partido Unificado de los Comunistas Haitianos, PUCH) con su trayectoria de lucha y la aureola de sus incontables mártires, dirigido por René Théodore, un impostor.

Otros, llegados del exilio con bombos y platillos y con liderazgos a menudo contruidos artificialmente desde el exterior. Entre ellos, la Unión de Fuerzas Patrióticas y Democráticas, dirigido por Serge Gilles y abanderado por el Partido Socialista Francés; el Mouvement pour l'Implantation de la Démocratie (Movimiento por la Implantación de la Democracia, MIDH) cuyo dirigente, Marc Bazin, era un tecnócrata muy apreciado en Washington; el Rassemblement Nationaliste Démocratique et Populaire (RNDP), encabezado por Leslie Manigat, prestigioso universitario que desde París y Caracas venía a reclamar el sillón presidencial a él predestinado. Estas agrupaciones, y muchas más, cuyo nombre resulta difícil recordar, eran señuelos o constituían simples siglas que nunca llegaron a transformarse en partidos, ni desde el punto de vista organizativo ni el de la militancia real. Venían con la intención de ocupar el escenario político tratando de manifestar, mediante notas de prensa, su presencia formal más que asegurar su constitución en verdaderas organizaciones capaces de guiar las luchas y reivindicaciones democráticas del pueblo. Por diversos motivos no pudieron identificarse con el movimiento

histórico, tal y como se había desplegado, con su originalidad y sus características.

Es conveniente preguntarse por qué no pudieron alcanzar sus objetivos, en una coyuntura particularmente rica en términos de movilización cívica. Coyuntura en la cual, miles de ciudadanos no pedían más que pasar a formar parte de dichas organizaciones, cuyos dirigentes tenían por lo general, una imagen favorable y un acceso ilimitado a los medios de comunicación. Sin embargo, no lograron reunir en su seno a la parte sustancial de la población políticamente activa y sensibilizada. Su capacidad de movilización quedó reducida, alimentando la ambición de generales en el poder (Namphy, Avril) e impulsos aventureros de políticos tales como Leslie Manigat o Roger Lafontant en busca de golpes palaciegos o de mascaradas electorales.

Por otra parte, en el juego político tuvieron mucho empuje las “organizaciones populares”, agrupaciones de base, de carácter reivindicativo, que se multiplicaban en el campo y la ciudad bajo la forma de “comités”, reuniendo a menudo a los elementos más avanzados de la sociedad civil y de activistas político-sociales pocos representativos. La mayor parte de esta población, políticamente activa, rechazó a aquellos líderes preocupados por mantener una relación de no enfrentamiento con los duvalieristas, o de quienes buscaban, incluso, el apoyo de militares comprometidos abiertamente con la represión.

Una parte importante del electorado que constituían los sectores democráticos, encontraron respuesta a sus expectativas de orientación y dirección política, entre septiembre y octubre de 1990, con la promoción de la Convergencia Democrática Nacional y de Jean Bertrand Aristide, como su candidato a la presidencia.

Este sector popular, hasta la candidatura de Aristide, no estaba dispuesto a participar en el proceso electoral, ni a votar en favor de los candidatos presentados por los partidos preexistentes, dada su incapacidad y negativa para comprender el contenido de este período de transición y, sobre todo, para captar la naturaleza de las reivindicaciones populares antiduvalieristas.

4. La mutación de las instituciones

La Iglesia católica experimentó un proceso de resquebrajamiento interno, que produjo una notoria alteración en sus roles y funciones tradicionales *vis à vis* del poder político, así como en el conjunto de relaciones entre la jerarquía y sus bases. Todo ello tuvo como consecuencia una merma de su influencia como institución.

A partir de 1983, año en que el papa Juan Pablo II visitó Haití, la Iglesia católica emprendió un proceso de transformación, para ubicarse en la línea del cambio reclamado por el pueblo, del cual el papa se hizo defensor aunque, posteriormente, expresará actitudes moderadas y aun conservadoras frente al movimiento renovador. Al mismo tiempo, la base de la Iglesia, las comunidades eclesíásticas, inspiradas por la Teología de la Liberación, se volvieron cada día más combativas, identificándose con la lucha popular en favor de la democracia.

De 1986 a 1991, tales posiciones antagónicas en el seno de la Iglesia, se hicieron explícitas en todos los niveles (nunciatura, conferencia episcopal, conferencia de los religiosos), dando lugar a un debilitamiento de su papel tradicional como sostén del *statu quo*, posibilitando el auge y supremacía de las posiciones ideológicas y políticas más progresistas, promovidas por la base secular y laica.

Procesos de crisis o de mutación de índole similar se manifestaron durante la transición en diversas instituciones. Distintos en su forma y contenido, aparecieron en el ejército, y el Consejo Electoral, provocando el debilitamiento institucional del *ancien régime* y la lenta emergencia de las condiciones para una nueva institucionalidad.

Las fuerzas duvalieristas lograron consolidarse y mantener un importante campo de maniobras para su utilización, garantizándose la impunidad al mantener el control del cuerpo de jueces. Este siguió siendo un reducto del conservadurismo, almacén de repuesto para un eventual recambio “constitucional” en el poder ejecutivo.

Su actitud conservadora, se puso en evidencia en cada crisis del Ejecutivo provisional. Sus decisiones institucionales eran más acciones de intrigas antidemocráticas donde, la *Cour de Cassation*, se convertía en organismo constitucional habilitado para proporcionar presidente provisional. Ejemplo de estas maniobras lo tenemos con ocasión de la caída del general presidente Prosper Avril, en marzo de 1990, cuando el entonces embajador de Estados Unidos Alvin Adams y los grupos más rancios del duvalierismo empujaron a la recién nombrada juez Ertha Pascal Trouillot como presidenta provisional.

Por su parte, el ejército, desmembrado por sus conflictos internos y cuestionado políticamente, no se constituye en opción propia para llevar a cabo los proyectos de modernización concebidos por Estados Unidos después de la caída de Duvalier. Tras 26 años de subordinación a los *tontons macoutes*, no supo adecuarse a la nueva situación y se afirmó más y más como un cuerpo represivo, transgresor de la Constitución y de la ley. Su imagen, continuamente degradada por su comportamiento arbitrario, coincidió con la lucha y sensibilidad de la población en sus luchas cívicas por la defensa de los derechos humanos, antimilitaristas y contra la restauración duvalierista. Las matanzas realizadas por sus miembros o con su complicidad (como la de Jean Rabel, el 23 de julio de 1987 con 151 campesinos muertos y cientos de heridos), le restaron legitimidad y abrieron un proceso en el cual los componentes del ejército se dedicaron a la abierta delincuencia, dada la impunidad que existía en sus filas. Al mismo tiempo el alto mando fue sacudido por múltiples conflictos de poder, entre sectores fascistas y grupos democráticos, entre militares profesionales y aquellos ligados a la droga y al contrabando.

Esta dinámica de conflictos, de tensiones internas así como de presiones externas provenientes del pueblo o de la presión internacional, amén de las embajadas, tuvo como resultado el resquebrajamiento de la cohesión de las fuerzas armadas, lo cual afectó su capacidad de imponer una solución a la crisis.

5. Los avances de la conciencia cívica y de la organización

El espacio democrático fue ampliado a pesar de los esfuerzos de los sucesivos gobiernos provisionales impuestos por la institución castrense en su propósito de lograr la restauración autoritaria. La actividad de la sociedad civil fue creciendo en contra de la actitud despótica de los jefes de sección rural o de los comandantes de distrito, y a pesar de las matanzas realizadas para atemorizar e impedir la participación de la población.

En la educación democrática del pueblo, el papel de la prensa hablada sería decisivo y, en menor medida, el de los partidos y organizaciones populares. La lucha cotidiana del pueblo hizo de este período una verdadera escuela de educación cívica y de conciencia política.

Junto a ello, nacen organizaciones de carácter primario en las ciudades y sobre todo en el mundo rural. Centenares, miles de pequeñas organizaciones aparecen en todos los rincones del país. Se trata de organizaciones de carácter local, comunitario, cooperativo, cultural, barrial y comités de ciudadanos, que han reforzado la sociedad civil y han ampliado los espacios de participación en la sociedad política.

Lo anterior aumentó considerablemente la capacidad de respuesta de la población frente al arbitrio del poder posduvalierista. Al mismo tiempo, otorgó los medios para establecer una participación alternativa en la vida política. Las elecciones del 16 de diciembre de 1990 lo demostraron. El levantamiento popular generalizado contra el golpe de Estado del 7 de enero de 1991, dirigido por Roger Lafontant, fue una prueba elocuente de esta conciencia y participación popular y masiva.

6. El peso de lo popular cultural

Durante estas últimas décadas han tenido lugar importantes mutaciones de carácter sociológico en Haití. La migración rural hacia las

ciudades, en particular hacia Puerto Príncipe, la capital, ha cambiado considerablemente la composición social de la población urbana. La participación política de la provincia y del mundo rural se hizo ya evidente en las huelgas y manifestaciones que acompañaron la caída de Duvalier. El peso de las poblaciones del campo y de los grupos de migración reciente, que ocupan los barrios pobres y los arrabales de la capital, se hizo sentir con su participación y aporte en la lucha política.

La emergencia en el escenario de estos nuevos actores sociales vino acompañando la promoción, como factor de política, de la cultura popular créole, un idioma y una cosmovisión tradicionalmente oprimida y marginada.

Dicho fenómeno se extiende a la emigración, cuyos miembros manifestaron una creciente identificación con la lucha y causa democrática. Por su composición social, su extracción mayoritariamente campesina o popular, estas poblaciones de Miami, Nueva York, Montreal, Guadalupe, Martinica, Santo Domingo, reproducen los valores y la cultura política de su medio social de origen. Las consecuencias de esta mayor conciencia nacional de los emigrantes, refuerzan el peso y la participación nacional-cultural-popular en la sociedad haitiana. Esto es una cuestión que se añade a la combatividad democrática de las mayorías sociales en favor del cambio. La cultura política tradicional de la élite, o de los que tenían el poder, tuvo que ceder posiciones frente a esta nueva realidad.

7. La no adecuación de los proyectos de las potencias de tutela

La realidad multidimensional del dominio extranjero en el país es tal que se acepta el uso del término “potencias de tutela” para referirse a los países que están presentes en el proceso de toma de decisiones. Países que, también, proveen de ayuda financiera al Estado, de asistencia alimentaria, asesoría militar al ejército, asistencia técnica a la administración y humanitaria a la sociedad

civil. En el marco y a la sombra de esta tutela, las formas que ha adoptado la intromisión política en el proceso en curso en Haití han sido diversas.

En el itinerario sinuoso de esta larga transición, la cuestión de las elecciones constituye el principal campo de asistencia, de solidaridad y, sin duda alguna, de injerencia. Los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Canadá y Alemania, han puesto recursos financieros y técnicos para preparar los procesos electorales. Concebida en el marco de una modernización y renovación del sistema, esta política de injerencia, en todas las etapas de la transición, ha sostenido la necesidad de realizar “elecciones libres, honestas y sinceras”, enfrentándose a distorsiones seudonacionistas y resistencias por parte de las fuerzas oligárquicas, neodualieristas y militares.

La política de las potencias de tutela ha estado marcada por una doble opción: el conflicto potencial con el neodualierismo o el acomodo frente a las fuerzas de poder locales. Estas actitudes se reflejaban en el plano electoral por situaciones incómodas: optar entre los sectores democráticos y particularmente los actores populares excesivamente desconfiados hacia los países tutelares, o bien acercarse a los grupos paramilitares o dualieristas que amenazan la misma realización y credibilidad de las elecciones.

En este contexto se produce, en el curso del año 1990, el llamado a la ONU en favor de una asistencia al proceso electoral. Dicha solicitud, formulada sucesivamente por los gobiernos de Prosper Avril y de Ertha Pascal Trouillot, de común acuerdo con ciertas embajadas, tendía a asegurar la credibilidad de las elecciones que, según todas las previsiones, se iban a realizar con una participación limitada de la población y con la amenaza de los *macoutes*. Ello ofrecerá una salida honorable para un proyecto electoral que ya estaba tardando demasiado tiempo en producirse. Con estos condicionantes, aparece la candidatura de Jean Bertrand Aristide.

8. La avalancha electoral

El antecedente de la campaña y de la probable victoria de Gérard Gourgue en las frustradas elecciones de noviembre de 1987 lleva a la pregunta: ¿fue la personalidad carismática de Aristide la que decidió el resultado de la contienda o fue que aprovechó un momento histórico propio de la coyuntura? La segunda hipótesis parece más certera. Gourgue no era una figura carismática, sin embargo, en tres meses de campaña su victoria parecía tan evidente que suscitó las reacciones más violentas que se recuerdan en las elecciones de 1987.

De todos modos, entre 1987 y 1990 los sectores militar-duvalieristas se debilitan y el Consejo Electoral pudo ejercer plenamente su autonomía; el contexto internacional, con la protección de la ONU, se hizo más favorable, las fuerzas democráticas populares se afianzan en el marco de un movimiento de organización popular, surgiendo así la coalición Lavalas. La movilización por participar electoralmente adquiere una potencia inusitada y se proyecta en un liderazgo político muy particular.

Contrariamente a lo que han pretendido algunos, el movimiento Lavalas contaba con las fuerzas mejor organizadas, agrupando a vastos sectores sociales: la red de microorganizaciones que florecieron en los campos y las ciudades en estos últimos años; el movimiento campesino impulsado principalmente por el Mouvement Paysan Paypaye (Movimiento Campesinos de Papay, MPP) y sus cuadros en todo el país; la iglesia popular católica, que arrastró con su opción popular a la base de la iglesia protestante; las redes de formación promovidas por algunas instituciones como: ITHECA, IDEA, CARITAS, CRESFED; la juventud como categoría sociológica y demográfica; los marginados y, en general, los pobres de las ciudades; los numerosos cuadros socioprofesionales y miembros del sector privado.

La candidatura de Jean Bertrand Aristide y el proyecto electoral que arrastraba permitió la convergencia y la reagrupación a nivel nacional de diversos sectores e instancias sociopolíticas, culturales

y económicas. Constituyó el punto de convergencia de las más variadas corrientes: *antimacoutes*, democráticas, sociorreivindicativas, antisistema, populares, de izquierda y con sentimiento nacional, que agitaban el espacio haitiano con las aspiraciones de un desarrollo democrático. Aunque Lavalas concentró la movilización general en favor de la candidatura de Jean Bertrand Aristide, fue el Frente Nacional por el Cambio y la Democracia (FNCD) la organización que prestó el aval legal para inscribir la postulación presidencial de Aristide.

Esta base histórico-social aseguró el éxito del movimiento, una campaña electoral dinámica, realizada en dos meses, y que movilizó al pueblo entero y al millón de compatriotas emigrados.

Esta avalancha electoral, producto a la vez del movimiento social y de la personalidad carismática de Aristide, se manifestó en los resultados electorales del 16 de diciembre de 1990, que recogen los votos recibidos por los primeros 6 candidatos en la lista de los 11 candidatos 3 esas elecciones:

Cuadro 1
Resultados electorales. Haití, 1990 (en %)

Jean Bertrand Aristide	FNCD	67,48
Marc Bazin	ANDP	14,21
Louis Déjoie	PAIN	4,88
Hubert de Ronceray	MDN	3,34
Sylvio Claude	PDCH	3,00
René Théodore	MNR	1,83

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles.

9. Un liderazgo carismático

A diferencia de otros actores políticos que han ocupado la escena haitiana en estos últimos años, Jean Bertrand Aristide no es “un líder que se escogió a sí mismo”.

No surgió de la clase política tradicional, a diferencia de los otros candidatos que pertenecen a la clase históricamente dueña del poder estatal cuyos abuelos o padres han sido presidentes, ministros, senadores (Déjoie, Manigat, Théodore, Bazin). Aristide surgió del campesinado y emergió en el escenario político por su acción pastoral y social.

En el momento de ser postulado como candidato Aristide contaba con 37 años de edad, por lo que pertenecía a la generación que creció bajo el gobierno de Duvalier. Esta característica favoreció su identificación con la lucha *antimacoute*, lucha que recogió las diversas reivindicaciones sociales de carácter popular-cultural.

Su condición de sacerdote le permitió concentrar la mayor parte del fervor popular suscitado por la Iglesia a partir de 1983, después de la visita del papa Juan Pablo II, momento en que ésta se une a la lucha por el cambio.

Su liderazgo se fundó en el antimacoutismo resuelto y consecuente, en su rechazo histórico del sistema, en su adhesión a las luchas reivindicativas y en su identificación con lo popular-cultural. Dicho liderazgo se vio fortalecido por el contenido radical de su discurso político que entusiasmaba a la juventud y a los pobres desde dos años antes de la caída de la dictadura, cuando era párroco de la iglesia de San Juan Bosco, en el suburbio norte de la capital. Su popularidad se acrecentó después de 1986, por su carisma, su oratoria de gran arraigo popular, su sentido del diálogo con las masas, movilizandole a las multitudes no sólo de la capital sino también de la provincia y del campo.

El liderazgo de Aristide, más que por su trayectoria o su consistencia política e ideológica, adquirió fuerza por el amplio movimiento

social que se desarrolló en torno al rechazo del sistema dictatorial y de sus representantes. Jean Bertrand Aristide supo aprovechar la inmensa ola histórica que traducía la voluntad de cambio y las reivindicaciones de las más diversas capas de la población y del pueblo. Por ello, más allá del espacio electoral, su presencia cobró una dimensión sociológica que garantizó la victoria de 1990.

10. El contexto internacional

Las elecciones en Haití se realizaron en un contexto marcado por una doble circunstancia:

a) El interés manifestado por la comunidad internacional para que la situación haitiana desembocara en elecciones “libres, honestas y sinceras”. Dicho interés fue compartido por Estados Unidos, sobre todo después de los sucesos violentos perpetrados por fuerzas militares y paramilitares en las elecciones de noviembre de 1987. Sin embargo, dicha preocupación fue ampliada por diversas declaraciones oficiales de los entonces presidentes del país norteamericano. Así, George Bush en marzo de 1990 llegó a vincular la problemática de las elecciones en Haití a la necesidad de restablecer la democracia en Cuba o al entonces vicepresidente Dan Quayle se le atribuyó la frase *Don't murder free election* durante una reunión en presencia de la jerarquía castrense durante el verano de 1990.

Preocupaciones similares fueron expresadas en su momento por el presidente francés François Mitterrand y el primer ministro canadiense, Bill Mulroney. Mientras que los gobiernos latinoamericanos y caribeños mostraron la misma inquietud, compartida por representantes de iglesias, partidos políticos, y organismos de derechos humanos. Este concierto de presiones y de diligencias en favor de una salida electoral a la crisis haitiana condujo al voto de la Asamblea General de la ONU del 8 de octubre de 1991, en favor de nombrar una misión de observadores civiles y militares sin armas, para garantizar la seguridad y la credibilidad de la convocatoria a

elecciones. Esta presencia solidaria de la comunidad internacional constituyó un factor decisivo para su celebración pacífica, así como el respeto de parte del ejército y otras fuerzas conservadoras hacia los resultados emanados del escrutinio popular.

b) Pero más allá de la escena haitiana, un factor importante, en favor de la causa democrática y popular encabezada por Bertrand Aristide, lo constituye, en el contexto internacional, el desmoronamiento del bloque del Este y el fin de la Guerra Fría. En este marco, las relaciones Norte-Sur, Estados Unidos-América Latina, Washington-El Caribe, ya no están dominadas por la “vibración anticomunista” con la cual la gran potencia estadounidense veía enemigos por doquier en cualquier tipo de lucha democrática en el tercer mundo. Esta actitud irracional del imperio condujo en 1983 al aplastamiento –bajo un cúmulo de mentiras y desinformación y con el uso de moderna tecnología militar– de la minúscula y frágil isla de Granada.

En estas circunstancias, el fin de la Guerra Fría imprimió una dinámica más compleja a las relaciones Norte-Sur. El “nuevo orden colonial” se impone, y los pueblos en lucha por su liberación ya no cuentan con el apoyo de los países socialistas. Pero al mismo tiempo, sus luchas contra la miseria, por los derechos del hombre y por la democracia –frente al Occidente opulento, “campeón de la democracia”–, imprimen un sello de legitimidad moral desconocido hasta ahora en la historia. Estos factores abren una brecha en el muro reforzado de las relaciones de dominación-dependencia, por donde cruzan las legítimas aspiraciones democráticas y de autodeterminación nacional de los pueblos del tercer mundo.

Esta situación lleva a una nueva pregunta básica: ¿en realidad la Guerra Fría habrá terminado para los pueblos del tercer mundo, para los pequeños países del Caribe y de Centroamérica?

En definitiva, el advenimiento del gobierno de Jean Bertrand Aristide puede ser visto como el resultado de la evolución de la crisis de un sistema de organización interna y de un cambio en las relaciones internacionales. Pero, sobre todo, como producto de la lucha y de la soberana elección del pueblo haitiano.

Capítulo 4

La empresa de restauración totalitaria

El objetivo del neodualismo con el golpe militar del 30 de septiembre de 1991 fue el de la restauración de un régimen totalitario que borrara las conquistas democráticas logradas por el pueblo desde 1986.

Desde este artero acontecimiento, la fuerza de las armas se impuso al derecho. Sin embargo, tanto el pueblo como los golpistas sabían que la batalla no había terminado. A preguntas sobre cuánto tiempo duraría este intermedio sangriento o cuántos sacrificios costaría, se añadían los sufrimientos de todo tipo que atormentan al pueblo. Pero el carácter histórico del combate por la democracia, así como lo obsoleto y corrupto del régimen de facto, mostraban de modo inconfundible, que esa situación no podía perdurar en el tiempo.

1. Casi el golpe perfecto

Aquel golpe de Estado desconcertó por su consumación sorpresiva. El pueblo, a quien nacionales y extranjeros habían educado para practicar el derecho al voto, lo había hecho de manera inteligente. En seis años de una lucha admirable, de carácter pacífico, el pueblo haitiano había logrado abrirse un espacio de libertad. Pretendía una democracia con auténtica participación popular sin los límites

inherentes a la fórmula de “democracia restringida”, aplicada en Sudamérica por las fuerzas de poder locales.

Los jefes militares haitianos, egresados de los conocidos centros de entrenamiento de Estados Unidos, Panamá o Chile, tuvieron que interponerse a esta experiencia renovadora. Lo hicieron ejecutando un golpe casi a la perfección, según lo indicaban los manuales: tomaron las emisoras de radio para que el pueblo no se movilizara; invadieron los barrios populares bombardeando con *rockett*, granadas incendiarias, bombas de fragmentación, o de deflagración, asesinaron a cerca de tres mil personas en pocos días. En fin todo su poder terrorífico se desplegó en una estrategia global cuyo único error fue no haber considerado las condiciones del escenario internacional. Por ello, cuando pudo salir ileso del golpe militar, Jean Bertrand Aristide hizo fracasar la gran conspiración cuidadosamente preparada desde los poderosísimos centros de poder y de dinero.

Hoy se sabe bien que el complot fue financiado por sectores de la gran burguesía local y algunos “capos” de la droga. Ciertos nombres han sido hechos públicos, destacando la participación de conocidas empresas que se habían enriquecido en los regímenes anteriores, como resultado de la situación de monopolio y exención de impuestos y que con el triunfo de Aristide vieron amenazados sus privilegios. También se sabe de la participación de personeros duvalieristas, algunos emigrados en Santo Domingo y ligados con los intereses azucareros. No faltó tampoco la conexión oficial dominicana. El presidente Balaguer, aliado histórico y mentor de la clase dominante cívico-militar de Haití, a partir del mes de junio de 1991 inició la deportación indiscriminada de los refugiados haitianos en Santo Domingo, medida que afectó a más de cuarenta mil personas y que cesó el mismo día del golpe. Esta deportación creó grandes trastornos y problemas al gobierno democrático de Jean Bertrand Aristide.

Ya los observadores habían señalado la ausencia del entonces embajador estadounidense, Alwin P. Adams en la ceremonia de toma de posesión presidencial tras su retorno de una participación en la reunión de la Asamblea General de la ONU. Pero más allá de esto

resultó significativo el silencio de la embajada que pareció no haberse percatado de dicho complot cuando era un rumor que corría por todo el país. La CIA no pudo estar ausente de la conspiración, cuando ya, como se supo a continuación, en octubre de 1993 producía informes respecto a la inestabilidad mental del presidente Jean Bertrand Aristide.

Aristide se salvó de milagro del asesinato proyectado. Se destacó en la protección de su vida el embajador francés, señor Jean Rafael Dufour, quien actuó con valor y decisión. En su coche blindado, en medio de riesgos enormes, llevó al presidente, desde la residencia de éste, en Tabarre (suburbio de la capital), hacia el palacio. Allí Aristide pensaba contar con la lealtad de su guardia; pero también se había sumado al conato rebelde, a pesar de haber sido soldados de esta guarnición quienes exigieron el respeto de la vida del mandatario.

2. El nacimiento de un presidente zombi

La junta militar que debía asumir el poder en la mañana del cuartelazo, estará formada por el general Raoul Cedras, y los coroneles Alix Silva y Robert Marc Charles, este último agregado militar en Washington. Frente al repudio internacional, los militares, sus cómplices del Parlamento y de los partidos políticos espurios, que conspiraban contra el poder del pueblo, vacilaron en ejecutar su proyecto original.

A partir de ese instante, entrarán en escena algunos políticos que acuñan la fórmula del gobierno civil con fachada legalista. Entre los ideólogos de esta operación de camuflaje se destacarán: Jean Claude Roy, típico representante de la clase política, fundador, y quizás miembro único, de una agrupación llamada Unión Constitucionalista; René Théodore, dirigente de lo que fuera el PUCH competidor de Aristide en las elecciones, bajo la bandera de una “alianza amplia”, que recibió 1,83% de los sufragios y quien se convirtió en uno de los más virulentos opositores del presidente; y detrás del telón, Evans François, hermano y consejero político del jefe de la policía,

Rémy Mathieu, conocido ideólogo del duvalierismo. La farsa del gobierno civil no engañó a nadie. Se realizó en condiciones tales que Gabriel García Márquez difícilmente podría imaginarse. Pertenece, sin embargo, a la buena tradición latinoamericana de los regímenes uniformados.

El día 7 de octubre de 1991, la soldadesca invadió el salón del aeropuerto de Puerto Príncipe, para echar del país a la misión conciliadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), integrada por los cancilleres de una decena de países del Continente, llegados en cumplimiento de los acuerdos recientemente adoptados en Washington. Las escenas de brutalidad hacia estos emisarios fueron transmitidas por las televisiones de todo el mundo. Sin embargo, no se darán a conocer y se silenciarán otras imágenes, ciertamente menos vendibles, en las que se “inventaba” un presidente. En efecto, convocado por un llamado “Comité de crisis” del Senado, capitaneado por su presidente, el señor Déjean Bélizaire, diputados y senadores discutían sobre el retorno o no del presidente legítimo, refiriéndose a la validez de los artículos 148 o 149 de la Constitución violada. En ese preciso momento irrumpen en el recinto unos 50 hombres armados que comienzan a disparar. Al mando está el mayor Michel François, cerebro del cuartelazo, quien, en esos días se autodesigna coronel. Los parlamentarios tirados en el suelo, sentirán con más fuerza sobre sus brazos, piernas y espaldas las botas de los militares golpistas. El mayor François dará entonces a los vacilantes congresistas “un plazo de 5 minutos para elegir un nuevo presidente”. (“En ese momento me pusieron un fusil en la oreja”, llegó a decir el diputado Gary Guiteau, desde la embajada argentina, donde buscó asilo.)

Bajo la señal del mayor François, el vicepresidente de la Cámara, el diputado Frantz Robert Mondé, sacó entonces del bolsillo de su chaqueta un documento ya preparado. Los honorables parlamentarios, sin fijarse en si existía o no mayoría de representantes, ni reclamar el voto secreto, levantaron la mano. Esta bochornosa sesión duró 30 minutos. En tales condiciones, la Asamblea, con 32 de sus 108 miembros presentes, y refiriéndose al artículo 149 de la

Constitución tomó acta del vacío del poder presidencial, resultado de la ausencia en el país del señor Jean Bertrand Aristide, revocó el mandato del primer ministro, René Préval, y nombró como presidente provisional a un personaje totalmente desconocido y nombrado para tal efecto juez de la Corte Suprema. Nadie en el país había oído mencionar a Joseph Nerette, fuera de sus pocos clientes atendidos en sus años de abogacía. Pocos de los 6 millones de haitianos, que veían la televisión en este día de pesadumbre, sacudido por detonaciones, oscurecido aún más por los apagones de electricidad, llegaron a ver a este decrepito presidente de facto, quien pasará a la historia como una marioneta en el teatro de la infamia, que desde 1957 se impuso a este pueblo con el reino del duvalierismo.

3. El clamor internacional de repudio

El encuentro en Caracas del mandatario derrocado con el presidente Carlos Andrés Pérez resultará decisivo. Este, en un impulso solidario de corte bolivariano, tributó a Aristide una acogida de jefe de Estado. Ello contribuyó a que la causa haitiana saliera de las oscuras maquinaciones militaristas e imperiales, que presentaban los acontecimientos a la opinión internacional como expresión de un simple cuartelazo, en el marco del folklorismo o del despotismo caribeño. Así, la acción arbitraria ejercida contra un mandatario elegido en elecciones democráticas patrocinadas por la OEA y la ONU se repudiaba un mes más tarde de la firma de los Acuerdos de Santiago condenando los golpes de Estado en el continente. Desde este momento la causa de la democracia en Haití se pudo defender en la OEA, la ONU y en las naciones del mundo como una lucha por la restauración del orden legítimo secuestrado por los militares y el neodualismo.

Las resoluciones adoptadas por la Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores de las 34 naciones americanas, el 4 de octubre, dispusieron, además del retorno del presidente constitucionalmente

elegido, la formación de una fuerza interamericana civil destinada a contribuir a la restauración y al fortalecimiento de la democracia en Haití. Estas resoluciones fueron debidamente avaladas por la ONU, por incontables organizaciones de derechos humanos así como los Parlamentos y gobiernos democráticos de diversas partes del mundo.

De ahí en adelante el presidente Aristide recorrió numerosos países siendo recibido por estadistas, parlamentarios, partidos, congresos políticos y organizaciones no gubernamentales. El presidente François Mitterrand también hizo suya la defensa de la legitimidad constitucional de Jean Bertrand Aristide. Entre los países del CARICOM y de la Unión Europea (UE), el apoyo a la causa de recuperación de la democracia en Haití adquiere un carácter de política regional, desarrollándose una importante corriente de apoyo gubernamental y de solidaridad de los pueblos, en su favor. La causa haitiana, reforzada por los efectos del fenómeno masivo de los *boat people* huyendo del régimen de terror, caló fuerte en diversos sectores de Estados Unidos, del Partido Demócrata, de la población negra y sus representantes en el Congreso, el Black Caucus; así también, diferentes organizaciones de derechos civiles, grupos religiosos, sindicalistas y numerosos segmentos de la sociedad civil estadounidense, mostrarán su simpatía con el pueblo haitiano. De ahí que fuerzas de presión de las más diversas tendencias contribuyeran a neutralizar las posiciones más negativas o las actitudes vacilantes del *establishment* político en Washington, en cuanto al cumplimiento de los compromisos formales en pro del retorno del presidente.

4. El sistema represivo

Los militares no pudieron, como pretendían, eliminar el movimiento popular en sus raíces, haciendo un “Himalaya de cadáveres”, según la fórmula dorada del duvalierismo durante los años sesenta. Sin embargo lograron parte de sus objetivos. La acción de guerra contra el pueblo culmina rápidamente al imponer un eficaz reino de terror en

el país, sobre todo en el campo y en los barrios populares de la capital mediante una represión sistemática a la sociedad civil organizada. Las arbitrariedades de los militares y sus sicarios, así como el clima de persecución en el interior han provocado, según los organismos de derechos humanos, más de 300 mil desplazados. Asimismo, han obligado a decenas de miles de hombres y mujeres a huir del país. Tal política se dio con particular brutalidad en el Plateau Central, región caracterizada por un nivel avanzado de organización campesina, afectando a miles de pobladores, militantes o no del Movimiento Campesino de Papay y simpatizantes del líder popular Chavannes Jean-Baptiste.

Se desata una represión multidimensional institucionalizada, haciendo uso de todos los medios de violencia, intimidación, extorsión y mentiras para desestructurar el movimiento popular según los principios de la “guerra de baja intensidad” y las viejas prácticas de más de treinta años de dictadura. Uno de los logros más eficaces de esta sistemática política represiva es la destrucción de la red de medios de comunicación. La mayoría de las emisoras del país fueron destruidas, calladas o cooptadas. El volumen y la calidad de la información quedaron reducidos con el evidente propósito de desinformar y de despolitizar a la población.

El poder militar actuó con extrema violencia contra el derecho de manifestación, hasta lograr impedir totalmente la movilización y la participación ciudadana en la ciudad y en el campo. Desconoció el derecho de reunión, inició la persecución de los líderes y cuadros locales, destruyó agrupaciones campesinas y barriales, comunidades eclesiales de base y todo movimiento social de reivindicación democrática. Cobra un carácter permanente el uso de la tortura, las desapariciones, los asesinatos públicos en la calle con exposición de los cadáveres de las víctimas, para aterrorizar y amedrentar a la población civil. Todo ello con miras a destruir las organizaciones de base, eliminar a los líderes populares y los militantes más activos, obligándoles al exilio local o exterior.

Particular asedio sufrirán la Universidad y el sector estudiantil. Agresiones físicas, violaciones múltiples a recintos académicos, destituciones de decanos y profesores, expulsión de estudiantes, introducción de *attachés* entre el estudiantado y el personal universitario, alteración de las listas correspondientes a los resultados de concurso de admisión, arrestos y asesinatos de profesores y estudiantes, promulgación de disposiciones represivas para reorganizar el funcionamiento de la Universidad. Estas medidas, integradas en un plan fascista de control de la Universidad y de destrucción de los logros del movimiento estudiantil desde 1986, se hicieron sentir al día siguiente del golpe, llegando a su clímax durante el rectorado de facto de Gérard Bissainthe.

Para llevar a cabo esta tarea de control, el ejército combinó toda la experiencia y la maquinaria represiva de estos largos años de represión. Utiliza a los *chefs de section* de la guardia rural así como a los caciques locales, reactiva las redes de espías, *attachés* e informantes del régimen anterior y recluta más efectivos para ampliar la labor de violencia. Combinan a nivel urbano la delincuencia común y la represión, por medio de grupos armados desprendidos del ejército o integrantes del cuerpo llamado *Anti-gang* transformado en el principal instrumento de la represión política. Utilizan los recursos del Estado, de las grandes familias y los capos de la droga. La institución militar se despoja de toda semblanza de legalidad y se vuelve un ejército de ocupación contra el conjunto de la población, sobre todo contra los sectores populares. Para esta tarea, además de sus 7 mil efectivos, se reclutan un número indeterminado de paramilitares. Todas estas fuerzas se dotaron con las armas más pesadas y sofisticadas, adquiridas en tiempos recientes en los circuitos del contrabando y de la droga, o provenientes de los arsenales generosamente surtidos por Estados Unidos en los tiempos de la Guerra Fría, cuando el duvalierismo era la forma concreta del dominio imperial en este rincón geopolítico del Caribe.

Así, con los recursos de sus 30 años de opresión y de poder absoluto, la maquinaria militar pudo consolidarse bajo el mando efectivo

de una “junta militar informal” comandada por el general Raoul Cedras, el menos visible general Pierre Biamby, y el omnipotente jefe de la policía, mayor Michel François, quien llegó a gozar de un poder efectivo mucho mayor de lo que sugieren su grado o sus funciones. Estos tres personajes tienen bajo su dominio el Estado Mayor cuyos miembros proceden también de la generación de cadetes de 1971 y de la vieja estirpe duvalierista.

El poder del ejército se ejerce mediante un complejo sistema de corrupción, de privilegios y botín compartido, así como de control y terror interno, que ha llegado a romper la cadena jerárquica y ha erosionado seriamente las fuerzas armadas. Éstas se han vuelto un poder incontrollable, arcaico y organizado en diferentes clanes articulados alrededor de intereses personales, sin ninguna cohesión, ética militar o preparación técnico-profesional. Tal como están configuradas y dado su papel represivo contra el pueblo haitiano, no es útil ni a los intereses del Estado, ni de Estados Unidos, país que ha contribuido a formar la mayoría de sus oficiales.

Por todas estas características de las fuerzas armadas, que controlan el poder político, las instituciones civiles y aun la administración pública, la represión no disminuye en intensidad en ningún momento, y sus altos mandos son incapaces de aceptar o de encontrar una salida política a la crisis. Suman miles los casos de violaciones de los derechos humanos registrados y denunciados desde octubre de 1991 por organismos locales e internacionales, en particular los expuestos por la misión civil de la OEA-ONU, Americas Watch, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Tales violaciones, por su salvajismo y su cuantía, corresponden a una excepcional situación de pisoteo de la Constitución y de los acuerdos internacionales de derechos humanos firmados por Haití. La incapacidad de entender el momento histórico en sus dimensiones nacional e internacional, así como sus imperativos, en términos de negociación, pacto y diálogo, llevan a los jefes militares a un callejón sin salida para ellos y sus insensatos planes de restauración del pasado.

5. La fachada civil

La permanencia en el poder del militarismo más reaccionario se asegura con la continuidad del general Raoul Cedras y el coronel Michel François, quienes usurparon el mando en el interior de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, al mismo tiempo, la fachada civil debe cambiar de fisonomía, en la línea de una política tendiente a afianzar en el poder la estructura castrense mediante un sinnúmero de simulacros institucionales y remiendos y enmiendas legalistas sucesivos.

a) El presidente de facto Joseph Nerette, y su primer ministro Jean Jacques Honorat (octubre de 1991-mayo de 1993) hacen lo indecible para destruir la imagen del presidente legítimo, para presentarse como los verdaderos representantes del poder constitucional y democrático. Su gobierno reúne los elementos más retrógrados y corruptos de la clase política (antiguos y neodualieristas, ex candidatos vencidos, parlamentarios sin escrúpulos, aventureros de todo tipo en busca de fortuna rápida o simplemente de empleo). Apoyado por esta cantidad de lumbreras cae bajo el peso de su ineficacia y se aísla internamente, lo que contribuye al bloqueo de recursos derivados de la presión internacional. Su falta de legitimidad termina configurando un gobierno fantoche y con innumerables contradicciones, manifestadas entre sus propios integrantes por el reparto del botín.

b) Un nuevo primer ministro, también de facto, Marc Bazin, trata de imponer en el interior del gobierno sus “buenas relaciones con Washington”, que según él iban a permitir eliminar las sanciones internacionales. En junio de 1993 llegó al puesto por medio del acuerdo llamado de la “Villa d’Accueil”, realizado por la cúpula militar, que impone los ministros más destacados, los dualieristas y los socialistas del PANPRA, Serge Gilles y Dully Brutus. Este acuerdo contará con la anuencia de diversos parlamentarios prófugos del FNCD.

Con el nombramiento de Bazin, tecnócrata, ex funcionario del Banco Mundial, como primer ministro los militares y los

duvalieristas más reaccionarios, que todavía no habían mostrado su parecer, quisieron lograr cierto grado de aceptación en el extranjero. Había que quitar toda duda sobre lo que era un gobierno nacionalista con las vehementes proclamas lanzadas por las autoridades frente a la condena internacional. Tratando, sobre todo, de fingir una apertura en el marco de un supuesto “gobierno de unidad nacional”, donde participarían los socialistas del PANPRA a fondo y sin complejos de ningún tipo.

Bazin, presidente del Movimiento por la Implantación de la Democracia, favorito de las fuerzas tradicionales tanto internas como externas de poder, y que había perdido las elecciones con un 14% de los votos, quiso aprovechar esta posición de privilegio para asegurar su futuro. Como primer ministro, buscó colocar a sus hombres en importantes puestos del Estado, en las instituciones electorales, desde los más bajos escalones hasta el Consejo Electoral Permanente, desde la Cour Supérieure des Comptes (la contraloría) hasta el Senado (en el que, mediante las seudoelecciones del 18 de enero de 1993 para la renovación de un tercio de esa Cámara, quiso imponer a sus hombres). Todo ello contribuye a provocar la ruptura de la Unidad Nacional.

Los militares no muestran la menor intención de compartir el poder, sino más bien quieren prepararse para su total recuperación. Al darse cuenta de que Bazin tiene su propia agenda y que sus “buenas relaciones” no pueden neutralizar un factor inesperado en política internacional: la llegada de William Clinton a la Casa Blanca en Estados Unidos, los militares deciden acabar con Bazin. Así, la escolta militar no llega a buscar al primer ministro a su residencia según el ritual. Cuando Bazin trata, por sus propios medios, de llegar a su despacho los guardias se niegan a permitirle la entrada al Palacio, de tal manera que no tiene más opción que la renuncia de facto.

c) El período que se abre tras la llegada de William Clinton al poder en Estados Unidos el 20 de enero de 1993 marca un punto de inflexión que permite abrigar esperanzas renovadas de retorno democrático en Haití. El apoyo de Clinton –así como el respaldo de las

Naciones Unidas al proceso de retorno—, culmina con el acuerdo de Governor's Island y el nombramiento por Jean Bertrand Aristide del primer ministro Robert Malval en septiembre de 1993, mes en el que fue debidamente ratificado por el Parlamento.

Ya que este intento de normalización constitucional fue saboteado por los militares, lo que ocasionó su imposible realización, el país funcionará, desde el 15 de diciembre de 1993, sin ninguna autoridad civil *reconocida* y en medio de presiones externas crecientemente fuertes. En este contexto, la cúpula militar nombra nuevo presidente provisional a un octogenario juez, nombrado por la Corte Suprema meses antes, y fuera de toda legalidad. El señor Émile Jonassaint, “presidente salido de un sombrero”, según la imagen del canciller francés Alain Juppe, fue llevado al cargo a partir de una burda maniobra de imposición, realizada el 11 de mayo de 1994 por los militares, con la complicidad de políticos y parlamentarios devotos de las fuerzas armadas entre los que destaca Bernard Sansaricq. Esta iniciativa manifiesta la negativa de los militares golpistas a respetar sus compromisos; demuestra su voluntad de permanecer en el poder, pese al rechazo internacional confirmado por la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, el 7 de mayo, de imponer, si los jefes militares no renunciaban a su cargo, un embargo total a Haití.

Esta posición mantenida por los militares puso en evidencia el propósito de los golpistas de promover “nuevas elecciones” para lograr institucionalizar mediante una farsa, su permanencia en el poder. Con tal maniobra los golpistas trataron de consolidar su opción, con el apoyo de los círculos más conservadores del Partido Republicano, del Pentágono y de la CIA. Adoptando medidas administrativas y “legales” procuraron complicar el cuadro político e institucional para alejar aún más la solución pactada a la crisis. En todo este período de gobiernos de facto, los usurpadores y la oligarquía en su conjunto, usando a fondo el discurso nacionalista, presentaron la crítica, el repudio, la condena y las acciones punitivas de la comunidad internacional como producto de una política racista, injusta y criminal de intromisión en los asuntos internos de Haití.

6. La disgregación de la clase política

Los militares desde el primer momento emprenden el trabajo de atraerse a la clase política posduvalierista, ofreciendo garantías de participación y regalías institucionales a cambio de su disposición para legitimar el poder de facto. Así, llaman como primer ministro a Jean Jacques Honorat, duvalierista de la primera hora, posterior director del Centro Haitiano de los Derechos Humanos (CHADEL), que ganará honorabilidad en Estados Unidos denunciando las supuestas violaciones a los derechos humanos del gobierno Aristide. Incluso le fue atribuido, poco antes del golpe, un premio por la American Board Association, por lo que numerosas agrupaciones civiles en Estados Unidos, reclamarán, después del golpe, anular dicho galardón.

Numerosos personajes de la oligarquía y de la clase política se manifestaron en el escenario como protagonistas de primera importancia. En primer lugar surge la cabeza de la poderosa burguesía especuladora, que había financiado el proyecto fascista y que fue la gran beneficiada por el duvalierismo. Esta docena de familias sumamente fuertes toma partido de forma abierta, financiando a los golpistas y proporcionándoles sus redes de filiaciones internacionales. Así aumentan su fortuna y poder valiéndose de su control monopólico y de su acceso ilimitado a licencias de importación de productos básicos (azúcar, cemento, hierro, aceite comestible). A ello se añade el jugoso tráfico de gasolina realizado durante el prolongado embargo y el aumento considerable de los precios de los productos de primera necesidad y otros tantos medios y formas de enriquecimiento ilícito utilizados por esta oligarquía experimentada, con poderosas conexiones internacionales. De ahí que la Cámara de Comercio e Industria, movida por los intereses de los grupos más poderosos, haya apoyado el poder de facto. Coincidiendo con esta actitud, hombres de negocios ligados al sector político-militar aprovecharán el contrabando, o bien el tráfico y blanqueo del dinero de la droga, para acceder al club de los nuevos millonarios.

En este contexto el sector que tempranamente entiende la gravedad de la situación y se decide por demandar el regreso del presidente fue el representado por la industria de exportación reunida en la Asociación de Industriales de Haití (ADIH). Los demás sectores del bloque dominante, poco a poco, pidieron con moderación el retorno a la institucionalidad, frente a lo que percibían como el apocalipsis final. Pero al mismo tiempo, por sus intereses objetivos, su falta de visión, su desprecio al pueblo, su misma mentalidad atrasada, reflejo del régimen de colonialismo interno que los enriquece, se opondrán de manera visceral a la idea de un orden constitucional democrático.

Entre la clase política tradicional se combatió con cinismo, por ser los más claros defensores del golpe militar. Tal fue el caso de Déjean Bélizaire, presidente del Senado, de algunos parlamentarios de provincia, “líderes” de los micropartidos nacidos al escenario político tras las elecciones de 1990. Asimismo, aplauden el golpe, en un primer momento por ambición, revanchismo y ceguera, personajes como el ex candidato Marc Bazin, el dirigente socialista Serge Gilles, el “líder comunista” René Théodore y numerosos otros ex candidatos que se fueron poniendo de rodillas, junto a “politiqueros” oportunistas, frente al altar del poder uniformado, distribuidor de privilegios y de prebendas electorales. Así, los individuos o sectores que podían configurar un centro, en lo político, se comprometen con los militares y la extrema derecha. En el transcurrir de estos años, el centro, expresión política e ideológica, se desvanece lentamente en Haití. Tal trayectoria se ilustra en forma particular con el PANPRA, organización socialdemócrata. Sus parlamentarios, encabezados por el diputado Dully Brutus se ponen al servicio de los militares, mientras sus principales dirigentes, Gilles y Arnold Antonin, no vacilan en participar, como candidatos oficiales, a las esperpénticas elecciones para la renovación de un tercio del Senado del 18 enero de 1993. Elecciones, a las que el pueblo no acudió, y que fueron desconocidas por la comunidad internacional.

Entre estas diversas formaciones, sólo el CONACOM, que en un primer instante apoya el golpe, toma conciencia del peligro que

representa para la democracia la ruptura del orden constitucional, motivo por el cual se distancia, pronunciándose por el retorno del presidente. De hecho, escasos políticos reaccionaron frente a la oposición internacional y los desmanes de los militares a manos de sus escuadrones civiles-*attachés*-zenglentos-FRAPH. Pocos llegaron a reconocer este golpe militar no era un freno, como lo presentaron sus impulsores, a las “intenciones” dictatoriales de Aristide, sino un terrible atentado a la democracia. No sería casualidad. Todos, sintiéndose amenazados por la dinámica del cambio social, la democracia y modernización del sistema, se ven representados o protegidos por “los coroneles de la generación de 1971”, cachorros del duvalierismo, amigos de Jean Claude Duvalier, quienes habían disfrutado de la miel del poder.

7. El vergonzoso papel del Parlamento

La misma dinámica sociopolítica que permite el triunfo de Bertrand Aristide en los comicios electorales pone en evidencia el conflicto potencial entre el poder ejecutivo y legislativo, dadas las diferencias existentes entre un legislativo controlado por los neoduvalieristas y un presidente democrático que busca romper y cambiar las bases del *ancien régime*. (En cierta medida puede recordar el caso de Chile entre el presidente Salvador Allende y el legislativo, que promueve y alienta la sedición y el golpe de Estado entre 1970 y 1973). Así, una profunda brecha histórica apareció entre ambos cuerpos: fuerzas de cambio social democrático y restauradoras del autoritarismo.

Cabe subrayar que la mayoría de los senadores y diputados procedían de la vieja clase política y de las esferas de poder oligárquico y provincial; candidatos desde 1986, notables o representantes de los numerosos candidatos a presidente, muchos de ellos ya ocupaban puestos políticos de orden local hasta la insospechada candidatura y triunfo posterior de Jean Bertrand Aristide. Sólo unos pocos provienen del movimiento reivindicativo, democrático y popular. Además,

el CONACOM, principal formación, procedente de este movimiento reivindicativo, por discrepancia con la postulación de Aristide, da la consigna a sus representantes de no presentar candidatos locales, lo que hizo perder a la coalición Lavalas más de algún escaño en el Senado y el Congreso.

Con estos antecedentes, y por las condiciones específicas de la postulación de esta personalidad carismática, sin pertenencia previa a ninguna organización política, la movilización del pueblo para las elecciones del 16 de diciembre de 1990 se volcó hacia la candidatura presidencial, sin prestar suficiente atención a la composición del Parlamento.

Como requisito legal para registrar la candidatura electoral de Jean Bertrand Aristide se acuerda integrarse a una formación de reciente constitución: el Frente Nacional por el Cambio y la Democracia (FNCD). Fue esta organización la que presta el aval legal para inscribir la postulación de Aristide. Pocos de sus candidatos a diputados o senadores eran militantes, simpatizantes o simples demócratas, la mayor parte la constituían políticos oportunistas que sabrán aprovechar el caudaloso movimiento Lavalas puesto en marcha por Aristide. Así no es de extrañar que entre los candidatos triunfantes dentro del FNCD figuren aventureros de la calaña de Bernard Sansaricq, y de Thomas Eddy Dupiton; llegando incluso a tener una mayoría relativa en el Parlamento.

Así, la representación de las fuerzas sociales y políticas presentes en el Parlamento, al igual que la ideología mayoritaria de sus miembros, eran poco identificables con el proyecto del Ejecutivo. Aristide cometió el error de no emprender ninguna política de diálogo para atraerse a algunos de estos parlamentarios. Éstos fueron cooptados y manipulados fácilmente por la oligarquía y la clase política, manifestando su oposición, desde un principio, a través de sus diputados y senadores elegidos y una vez derrotados en las elecciones presidenciales. Tal situación fue el caldo de cultivo para acrecentar el nivel de conflicto entre ambos poderes, y entre el legislativo y el primer

ministro René Preval, que no supo manejar dicha situación, terminando en un enfrentamiento de posiciones irreconciliables.

El complot anticonstitucional se urde con esta escena de oposición parlamentaria. Los hombres de Michel François, uno de los golpistas, aprovecharán tales contradicciones, acercándose a los parlamentarios uno a uno para intimidarlos, aterrorizarlos y corromper a todos aquellos dispuestos a venderse. De estas transacciones de chantaje, terror y compra-venta, un parlamentario resultó asesinado, numerosos fueron baleados, otros dimitieron o se exiliaron, viviendo de tiempo completo o parcial fuera del país.

El Parlamento se fractura entre constitucionalistas y fascistas, tomando las contradicciones la forma de bloques político-ideológicos antagónicos. El poder legislativo, a pesar de sus características, se convierte en el eje del debate donde se habla de política y democracia, y que tiene acceso a los medios de comunicación. Su legitimidad formal lo sitúa en un lugar de privilegio, donde los actores políticos haitianos acuden para “encontrar una solución constitucional” a la crisis y hacer avanzar las llamadas negociaciones o entorpecerlas. Al mismo tiempo fueron elevados a la mayor dignidad los presidentes del Senado y del Congreso, actores e interlocutores de primera instancia, particularmente importantes y cotizados políticamente.

Conforme se consolida esta división de poderes, los distintos intereses terminan por paralizar las actuaciones propias del Parlamento, impidiéndose la tarea de legislar más allá de los actos “solemnes” a los que se vio sometido por el golpe de Estado. Así, la paradoja es clara: después de ratificar “el golpe de fuerza” de 1991, desconociendo el poder del presidente Aristide, en el marco de las negociaciones patrocinadas por la ONU, fueron estos mismos diputados y senadores los que votarán, formalmente el 15 de junio de 1993, el reconocimiento del mismo como presidente constitucional de la República. Tal paso había de conducir ese día a la investidura del hombre de negocios, Robert Malval, como primer ministro designado por el presidente Aristide, quien nunca pudo asumir efectivamente el poder.

De hecho, la composición del Parlamento, la actitud antidemocrática de muchos de sus integrantes, así como incontables hechos de corrupción, ligados a su participación en la crisis, han contribuido a vaciar la institución de contenido. Desacreditado social y políticamente, puso en evidencia que muchos de sus miembros funcionaban bajo las directrices de los militares. Contados serán los integrantes que hicieron efectiva su condición de demócratas y defensores del orden constitucional a pesar de poner en peligro su vida; tal es el caso de los diputados Patrick Norzeus, de la Organización Política Lavalas (OPL) y Samuel Madistin, independiente.

Los simulacros de elecciones realizados el 18 de enero de 1993 para el Senado, tenían el objetivo de asegurar al gobierno de Bazin una mayoría. Las espurias elecciones realizadas terminan por dividir y arruinar las bases de funcionamiento orgánico del Senado, produciéndose la ruptura entre un ala legítima y otra, reforzada por los elegidos en ese escrutinio, carente de cualquier legalidad. Con ello el Legislativo se hunde, empantanándose, sin salida alguna, después de negarse al compromiso honorable, con amnistía, que ofrecían los Acuerdos de Governor's Island.

Por último, el descalabro del Cuerpo Legislativo se manifiesta radicalmente cuando esta fracción ilegítima del Senado y un puñado de diputados, fuera de todo marco legal, dieron la investidura como presidente provisional a Émile Jonassaint, juez de la Corte Suprema escogido por el general Cedras, con la vana ilusión de institucionalizar el golpe, justo cuando la ONU decide aplicar efectivas sanciones al régimen militar.

8. La negociación como fórmula política

Como parte sustancial de las maniobras de los militares para mantenerse en el poder está su actitud arrogante y dilatoria con la que participaron en las llamadas negociaciones, promovidas por la comunidad internacional. La mala fe de quienes se autodefinen los seres

más inteligentes del mundo, les llevó a buscar los mecanismos más abyectos capaces de engañar a todo interlocutor con quien entraban en comunicación. En estas negociaciones se harán evidentes, al mismo tiempo, los dobles lenguajes y señales provenientes de la política estadounidense. Uno, abogando formalmente por el retorno al orden constitucional, y otro, apoyando de modo encubierto a sus aliados tradicionales de la oligarquía y del ejército. Por lo tanto, desde el otoño de 1991, fecha en que se anuncia el primer corte de los suministros de petróleo, los golpistas, ante esta ambigüedad en el discurso de Estados Unidos, tardarán en tomar en serio las reiteradas declaraciones oficiales sobre las sanciones impuestas, aun después del *Executive Order* del presidente Bush –del 29 de octubre de 1991– aplicando el primer embargo de la OEA.

De hecho, la falta de voluntad de los militares para negociar resulta evidente, como también su negativa a ceder un solo centímetro de terreno en estas llamadas negociaciones. Esta realidad es impuesta desde la primera visita realizada por la delegación de cancilleres de la OEA el 8 de octubre de 1991 y continúa sin modificarse con posterioridad en las misiones del colombiano Pedro Ramírez Ocampo, negociador comisionado por la OEA; de João Baena Soares, secretario general de la OEA; de Dante Caputo, representante especial del secretario general de la ONU, de Laurence Pezzullo, enviado personal del presidente Clinton. Sin contar las gestiones de *real politique* de los cuatro amigos –Francia, Venezuela, Canadá y Estados Unidos– y de altos mandos castrenses que visitan Haití.

Esta situación de doble juego se mantendrá, en función de la evolución en zigzag de la política de Washington y de la ONU hasta el 21 de mayo de 1994, momento en el cual el Consejo de Seguridad de la ONU decide decretar el embargo total contra Haití. Así dan inicio las rondas de conversaciones mantenidas por el presidente Aristide y sus colaboradores en Cartagena, Caracas y Washington, reuniones celebradas bajo la mediación y presiones realizadas por altos funcionarios estadounidenses. Entre ellos podemos destacar: el secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker; Luigi Einaudi, embajador

en la OEA; Bernard Arronson subsecretario de Estado para América Latina. Dichos funcionarios centrarán sus argumentos en la “intransigencia del mandatario”. Intransigencia invocada por la prensa internacional e interna como el rasgo característico de la falta de espíritu conciliador de Bertrand Aristide. Mientras tanto, y durante la administración Bush, en los entretelones de las negociaciones, surgen manos invisibles y voces que orientan las discusiones hacia un debate cuyo propósito final es dilatar en el tiempo la discusión y permitir ganar espacio de acción a los militares golpistas.

Tal política se constata desde noviembre de 1991. Algunas esferas de Washington “sugieren” al presidente Aristide el nombre de René Théodore como primer ministro. Curiosamente “el tapado” ostentaba aún el cargo de secretario general del PUCH, organización espuria que él contribuiría a liquidar. Desde su regreso del exilio en 1986, se lanzó como candidato a la presidencia, haciéndose pasar en los medios comunistas internacionales como el líder más popular del país. Así preparará su papel de “buen comunista”, legítimamente elegido, en las postrimerías de la Guerra Fría y en un contexto de ataque frontal al poder político refrendado en Cuba. Si bien estas maniobras fueron descubiertas por la irrupción de Lavalas en el escenario, René Théodore no dejará de conspirar contra el gobierno de Aristide, convirtiéndose en uno de los más virulentos críticos del presidente. Impuesto como primer ministro en el marco del Protocolo de Washington del 23 de febrero de 1992 suscitó la oposición de los militares, así como la de Marc Bazin, postulante al mismo puesto.

La política de mediación de Estados Unidos, sufrirá una evolución y se tornará más equilibrada una vez que accede a la presidencia de dicho país la administración Clinton. Los acuerdos de Governor's Island, firmados el 3 de julio de 1993, con el patrocinio de la ONU consagran una salida política a la crisis, inspirada, en cierta medida, por el espíritu de la negociación de paz en El Salvador. Los acuerdos dispondrán:

- 1) el nombramiento de un nuevo primer ministro, por el presidente, debiendo ser éste ratificado por el Parlamento; 2) la promulgación

de una ley de amnistía; 3) la separación de la policía del ejército; 4) la llegada a Haití de una misión civil de la ONU para cooperar en la profesionalización del ejército; 5) La dimisión, el 15 de octubre de 1993, del comandante en jefe del ejército, el general Cedras, y el retorno del presidente Aristide el día 30 de octubre de 1993.

La firma de lo pactado, trae aparejada la formación inicial del gobierno de Robert Malval, primer ministro nombrado por Bertrand Aristide para intentar abrir, hacia el sector liberal de la burguesía, el proceso democrático. Se trataba de integrar un gobierno de *concorde nationale*. Con estos pasos se vislumbra una posible salida constitucional a la crisis; claro está, con el riesgo evidente que conlleva el mantenimiento del general Cedras en la jefatura del ejército. Esta circunstancia deja un campo de iniciativas articulado desde las fuerzas armadas, susceptible de ir en contra del cumplimiento de los acuerdos. Y así ocurrió.

En efecto, tan pronto como se dio esta posibilidad, los militares aumentan los niveles de represión e inseguridad, demostrando su escaso talante negociador y evidenciando las escasas condiciones reales para que pudiese funcionar el gobierno del primer ministro Robert Malval. En esta coyuntura, aumentan en el país los hechos de violencia y la represión sistemática contra los sectores populares, culminando el período con el asesinato, el día 11 de septiembre de 1993 de Antoine Izmary, conocido hombre de negocios amigo de Aristide, y de Guy Malary, ministro de justicia del gobierno constitucional.

Desde octubre de 1993 se impone la violencia de las armas. Aparece la fuerza paramilitar conocida como el FRAPH (Front pour l'Avancement et le Progrès d'Haïti), instrumento político del ejército decidido a impedir a toda costa el retorno del presidente y a violar, de modo impune, los acuerdos internacionales firmados por el general Cedras. En esta circunstancia se vuelve a manifestar la complicidad de ciertos sectores de poder norteamericanos con los militares golpistas. Situación que la prensa de ese país subrayó en ocasión del incidente del barco *Harlam County* y del informe de la CIA sobre la pretendida enfermedad mental de Aristide. Los golpistas se valdrán

de este real o pretendido *back up* externo para envalentonarse en su proyecto, utilizando para ello la figura caricaturesca del octogenario Émile Jonassaint.

Con estas características dilatorias y de franco conflicto con la comunidad internacional, se fragua el objetivo de mantenimiento del poder por parte de los militares golpistas. Fuerzas armadas formadas por el duvalierismo, con la asesoría técnica de Estados Unidos y que se han vuelto incontrolables, como los monstruos creados por Frankenstein, nutridos por el poder absoluto, la sangre y la droga, condenados a la autodestrucción o al aniquilamiento.

A pesar de ello por primera vez desde 1804, el pueblo haitiano se sintió protagonista de su historia. El ejercicio del sufragio universal y los deseos de participación popular desembocaron en el posible ejercicio de la soberanía nacional. El proyecto político así diseñado, moderado en sus aspiraciones y posibilidades de reforma social, está orientado hacia una democracia verdaderamente participativa se encuentra inscrito en la búsqueda de los pueblos del Sur por eliminar las condiciones históricas de subdesarrollo, colonialismo interno y dependencia exterior.

Capítulo 5

Cultura e ideología en la lucha por la democracia

Desde hace aproximadamente una década, la sociedad haitiana experimenta batallas políticas por conquistar los derechos sociales y las libertades fundamentales. Luchas que reflejan una irrenunciable voluntad política por emprender un camino que lleve a superar las contradicciones económicas, sociales, políticas, étnicas y de género, inherentes a un sistema de dominio y exclusión de las mayorías sociales del proceso de toma de decisiones. Tal confrontación conlleva el cuestionamiento de ciertos componentes estructurales y funcionales del sistema. Cuestionamiento que se traduce en un clamor en favor del cambio, aunque éste no quede definido dentro de un proyecto social y político donde pudieran converger sus diversos protagonistas y beneficiarios.

Haití vive un período de transición. Su contenido todavía no es explícito, aunque las líneas de fuerza del movimiento histórico y los impulsos populares parecen apuntar a un cambio social donde el objetivo primordial lo constituye la democracia globalmente considerada.

¿De qué democracia se trata? Sin duda alguna de un régimen que supere los límites de la “democracia restringida”; de un modelo que vaya más allá de la “democracia representativa” y que, de todos modos, Haití sólo vivió de manera formal o caricaturizada. Democracia participativa, éste ha sido el sentido de las reivindicaciones generales

de los sectores más politizados de la pequeña burguesía, de los campesinos, de los obreros y los estratos populares de las ciudades.

Los avances en el plano de la conciencia democrática provocan, en algunos sectores de vanguardia, incluso llamados en favor de un proyecto sociopolítico de poder popular. No obstante, tal consigna no corresponde a ninguna estructura organizativa que sea capaz de impulsarla, ni tampoco hace referencia al grado de madurez general en el interior de la conciencia democrática. Sin embargo, es significativo el grado de rechazo que provoca el sistema vigente, a la par que se produce una lenta elaboración alternativa que lo sustituya. Pero hay que recalcar que el poder oligárquico y las fuerzas duvaliero-militares pusieron en marcha, con la complicidad de las “potencias de tutela”, los mecanismos para imponer un régimen autoritario, y así enfrentar el desarrollo de un consenso nacional en torno a la creación de un sistema democrático.

1. Contenido ideológico de este período

La etapa abierta tras la caída del régimen de los Duvalier genera un espacio político sin precedente después de treinta años de terror. Es una etapa marcada por pulsiones y una diversidad en las corrientes de pensamiento que potencian, enriquecen y dan lugar a la esperanza de un cambio histórico en la sociedad haitiana. Es una sociedad marcada por tantas insatisfacciones y proyectos inconclusos que no se perturba ya en su lucha por la conquista de las libertades públicas. De ahí el contenido social y reivindicativo de la lucha por la democracia. En efecto, las aspiraciones económicas y culturales, reprimidas o negadas durante tanto tiempo, hicieron explotar los tubos de escape que el imperio y el poder decadente buscaron crear para disminuir las tensiones sociales y políticas. El contenido económico y social del combate por los derechos del hombre y por la democracia dará una dimensión más amplia y un contenido antisistema a la transición emprendida.

Por otro lado, la influencia de algunos fenómenos que se desprenden de la emigración tendrá un efecto de modernización y ruptura de la insularidad. Primero, las consecuencias desarticuladoras del éxodo de más de un millón de haitianos y los “efectos de retorno” de la emigración, que se hicieron sentir de manera particularmente notoria; sobre todo cuando esta “diáspora” se establece en sociedades mucho más avanzadas en el terreno del consumo, la producción, la tecnología, etc. El conjunto de estas relaciones ha contribuido a una cierta “internacionalización” de Haití, amén del exilio político, de la emigración para estudiar en el extranjero, de los efectos del retorno y sobre todo de la salida en masa de jóvenes pertenecientes a los estratos populares hacia otros países del Caribe, América Latina, América del Norte y Europa. Estos fenómenos contribuirán a suscitar movimientos de transformación democrática que influyen en la conciencia colectiva, tienen una incidencia sobre las mentalidades y favorecen la ruptura de esquemas, valores y moldes preconcebidos. Son los elementos de dinamización, progreso y cambio que hoy atraviesan la sociedad en Haití. Esta corriente modernizadora se enriqueció con el descontento de muchos técnicos e intelectuales, que, por haber vivido en el duvalierismo, se dan cuenta del oscurantismo y el retraso acumulado del país, y la imposibilidad de transformar la situación desde dentro del orden dictatorial.

El *nacionalismo* también es un factor que se exacerbó en esta confrontación desigual con el extranjero. La experiencia de la discriminación racial, de los prejuicios contruidos sobre Haití y los haitianos estimuló una cierta toma de conciencia, incluso en algunos estratos de las “élites”, que se sintieron afectadas por la política de sumisión y degradación nacional. Estos sobresaltos de conciencia nacional o racial enriquecieron “el viejo nacionalismo haitiano” fustigado, además, por la influencia extranjera sentida con tanta fuerza en el país y que contribuye en gran medida a desestructurar la sociedad. La reivindicación de soberanía y dignidad nacional se convierte, así, en uno de los *leitmotiv* de este amplio movimiento popular.

En el interior de este movimiento social de lucha por la democracia y derechos del hombre, cuya fuerza es hoy extraordinaria, aparecen y solventan algunas de las actuales corrientes ideológicas de contenido universal:

- *La influencia de la Iglesia católica*, representante ideológica de la oligarquía y las fuerzas de dominación colonial conocería, en nuestro país, una mutación notable en los años ochenta. La Teología de la Liberación, cuya inspiración renovadora puso a un sector de la Iglesia latinoamericana al servicio de las causas populares, hizo sentir su influencia. Modificó la manera de pensar y de actuar de todo un sector de la institución católica en Haití, en el contexto de la lucha por la democracia. El aporte de las comunidades eclesiales de base a la filosofía de la liberación, la justicia social y en favor de un nuevo orden social constituye, sin duda, el elemento más importante, desde el punto de vista ideológico, del actual proceso político. Esta Iglesia de base fue la portavoz de las reivindicaciones rezagadas de las mayorías que han asumido su mensaje, siguen sus modelos de organización para resistir a la opresión en la lucha cotidiana, y participan de una reflexión global para avanzar hacia una sociedad más humana.
- *La influencia del marxismo*, aunque difusa y sin expresión abierta, forma parte de este proceso de renovación de una filosofía social que fue reprimida durante tantos años de terror. Las semillas de una lucha difícil y heroica llevada a cabo por los comunistas a partir de los años treinta, el aporte de otras corrientes de pensamiento socialista y revolucionario que lograron atravesar los muros de la tiranía, la influencia de las ideas y las prácticas del socialismo cubano y la revolución sandinista, que se construyen a unos cientos de kilómetros de Haití, constituyen los elementos ideológicos que hoy forman parte de la búsqueda de vías y medios que deben conducir a la transformación radical de nuestra sociedad.

- *Las ideas y fórmulas de organización propuestas por la socialdemocracia*, a través de algunos sectores de emigración relacionados con las fuerzas de poder en Francia y Venezuela y algunas iniciativas emanadas de la Internacional Socialista, no han dejado de expresarse en este proceso de constitución política, pudiendo contribuir a la democratización, a pesar de su escasa presencia ideológica organizada en Haití.

Esta abundancia de ideas que se manifiesta a partir de la liberación de la palabra, contribuyó de manera importante a la politización de muchos sectores de la población y también a la realización de debates cívicos. Ha estimulado las condiciones de elaboración de un pensamiento autónomo, modernizador, democrático y revolucionario. Las conciencias social y de clase se van construyendo poco a poco. Se está elaborando toda una cultura política en torno a las ideas-fuerza de libertad, democracia, transformación, participación y cambio del sistema. Surge una divergencia entre las prácticas del poder de las clases dominantes tradicionales y el proyecto que se está formulando desde todos los sectores que se definen como “pertenecientes al pueblo dominado y explotado”.

Sin embargo, resulta notable que los sectores progresistas no han podido, hasta ahora, articular un pensamiento y una acción política capaces de canalizar, a través de organizaciones estructuradas, las aspiraciones y el deseo de participación de amplios segmentos de la población. La transición corresponde, en definitiva, a un momento en que la elaboración de una *praxis* revolucionaria está muy atrasada, aunque, sin lugar a dudas, está pasando por una fase de estimulante desarrollo.

2. El hecho nacional-cultural haitiano

De regreso a Haití, después de veintiséis años de un exilio durante el cual pude adquirir lo que Jean Chesneaux llama “el sentido de la totalidad planetaria”, que coadyuva a la comprensión del mundo en que

vivimos, una de las impresiones más contundentes que me causó el redescubrimiento de mi país fue la proveniente de una nueva lectura del hecho cultural-nacional.

Las condiciones de subdesarrollo económico y social, la precariedad en las condiciones de vida de la población me parecieron dramáticas, iban más allá de mis sospechas. Me parecieron amplificadas por la diferencia entre la miseria material de la mayoría y el lujo de una minoría insaciable e insensible. Sin embargo, nunca antes había tenido la oportunidad de apreciar el contraste entre la degradación material de la nación, producto del sistema sociopolítico y la potencialidad, originalidad, creatividad y riqueza que demuestra la cultura nacional.

Esta potencialidad encuentra su origen en toda una cultura de resistencia, construida históricamente y que prolongándose más allá de las luchas por la independencia, moldeó los valores más intrínsecos de la nacionalidad haitiana. Nuestro ser sociocultural se definió, pues, a partir de la recuperación de ciertas tradiciones y prácticas culturales venidas de África y también de la reproducción y remodelaje de valores heredados de Francia; de este modo, a partir de todo un proceso de imitación, reconstrucción, creatividad e innovación, nuestra nación alcanzó una toma de conciencia consensual que sigue creciendo y que la llevó a asumir plenamente su criollidad, su negritud, su personalidad etnocultural, en una palabra, su “haitianidad”.

De esta manera, el proceso constituyente de este “pueblo nuevo” ha estado fuertemente influido por el proceso de resistencia, del cual surge el difícil y tortuoso camino de consolidación del Estado nación. Resistencia al colonialismo, al Occidente cristiano, al ostracismo del mundo de los blancos, al capital extranjero, a los influjos y tentativas de recolonización, como por ejemplo la ocupación estadounidense, que duró veinte años y que abrió la puerta a esta transnacionalización que en nuestro país se busca imponer de manera tan artificial.

Esta construcción nacional, moldeada en un mundo dominado históricamente por la ideología del colonialismo y del racismo, se

llevó a cabo con mucho esfuerzo, frente a las imposiciones del imperialismo. La consecuencia de esta geohistoria atormentada fue que un gran sector de nuestra población percibió el capitalismo, sus atributos y parte del bagaje cultural que lo acompaña, como un fenómeno de intromisión extranjera amenazante para la formación de una cultura nacional. De este modo pues, el nacionalismo, en tanto que exaltación de valores haitianos, se convierte en un componente importante de la ideología, de la conciencia colectiva. Nuestra identidad cultural nacional, para poder conservar su autenticidad, originalidad y vigor, y mantener una capacidad de creación endógena, se alimenta de dichas contradicciones nacidas de su propia realidad.

Este fenómeno se ve reforzado, considerablemente, durante la ocupación estadounidense (1915-1934). El nacionalismo nutrirá la revuelta militar de los campesinos (1915-1919) dirigida por Charlemagne Péralte, originando un movimiento de resistencia política y cultural generalizado. En el centro de este movimiento se encontrarán el marxista Jacques Roumain y el antropólogo Jean Prince Mars, dirigente de la élite negra, que sintetizó las reivindicaciones de este sector en su libro *Así habló el tío*. Sin embargo, si Prince Mars y toda una fracción creciente de la pequeña burguesía intelectual logran unirse a ciertas reivindicaciones de las masas, al mismo tiempo pretenden desviarlas de su carácter nacional popular. En esta dirección y aprovechando con fines espurios el pensamiento de Prince Mars, la corriente ideológica de la negritud será instrumentalizada, posteriormente, por François Duvalier y todo un sector de intelectuales reaccionarios, con el propósito de asumir la hegemonía de la élite negra sobre la élite mulata tradicional queriendo así asegurar y conservar el sistema de dominación y colonialismo interno.

Al mismo tiempo que mantiene un discurso nacionalista basado en la negritud, en referencia al pueblo y a Dessalines (la primera República negra del mundo), su política tiende a negar la soberanía y dignidad de la nación, creando asimismo las condiciones para que florezca un régimen de privilegios para las minorías dominantes. Con la manipulación, el terror, y la complicidad de las potencias

imperiales, las clases dominantes enajenadas harán lo indecible por neutralizar el peso histórico de un nacionalismo portador, desde la guerra de la independencia, de un proyecto de construcción nacional. Las clases dominantes se desnacionalizan, se europeízan, mostrando un entreguismo absoluto hacia el extranjero, surgiendo así una enorme brecha entre sus posiciones etnocentristas y el proyecto de nación. La disociación entre el Estado, el pueblo y la nación vino a formar parte del sistema político; por ello se vuelve tan intrínsecamente autoritario y violento.

Esta brecha histórica entre el poder del Estado y la sociedad civil se desarrolla paralelamente al proceso de expansión del capitalismo en el mundo. Haití, por los múltiples motivos de carácter exógeno y endógeno que debemos estudiar a fondo, no quiso o no pudo comenzar un desarrollo capitalista. Esto a pesar de dos décadas de ocupación de su territorio y de una tutela posterior por parte de la potencia capitalista más poderosa del mundo. Todo este cuadro afectó el desarrollo de las fuerzas productivas, lo cual se refleja en una incapacidad para adaptarse a los imperativos del capitalismo, renovar las viejas estructuras y adaptarse a los modelos universales del progreso.

Es, pues, en este contexto histórico general donde la herencia cultural nacional, enfrentada a los imperativos de la supervivencia, autorreproducción, y defensa de su propia integridad, debe desarrollarse. Esta herencia trajo consigo toda una capacidad de creación y autorreproducción en el terreno del arte y de la cultura. La pintura y la música, al igual que la artesanía haitiana, son notables en todo el Caribe y han ganado una gran celebridad en todo el mundo. Esta singularidad también se expresa en el campo de la literatura, del poder religioso del vudú, de sus canciones rituales o de inspiración sagrada, del ritmo afrohaitiano o simplemente criollo, caribeño. En una palabra, toda la compleja realidad de nuestra personalidad nacional muestra un vigor y unas potencialidades que desafortunadamente no encuentran las condiciones para su valorización a nivel de la organización social.

Una de las creaciones más importantes de esta cultura nacional es, sin lugar a duda, la lengua, el créole. Cuando todos los países del continente, por la fuerza de las circunstancias, adoptaron la lengua del colonizador, Haití creó su propio idioma. Este vehículo lingüístico, que ligaba a las tribus venidas de África con dialectos diferentes y que les permitía comunicarse con el colono, adquirió una soberanía propia. Si es verdad que este rasgo cultural limitó la capacidad de comunicación del país con el subcontinente y con el resto del mundo, no es menos cierto, sin embargo, que constituye un factor clave de la cultura nacional. Se impuso y se transformó en el idioma nacional de los haitianos, rechazando el francés, que es cada vez más un apéndice del pasado y un elemento de comunicación del espacio colonial.

El vudú, en tanto que formación cultural religiosa, sufrió todas las vicisitudes de una religión oprimida. Igual que el créole, estuvo sometido a las normas y a los prejuicios del eurocentrismo y de toda una enajenación cultural neocolonial, que sólo reconoce la categoría de lengua y de religión en las formaciones lingüísticas y religiosas nacidas y propagadas a partir del Occidente cristiano. Hoy en día, el vudú no sólo ha adquirido el derecho de ciudadanía, sino que existe toda una corriente que pertenece a esta creencia y que está tratando de depurarla de sus rasgos fundamentalistas y de extraer, para alimentarla, una teología de la liberación, a través de la cual el vudú recuperaría la función original que le asignó Boukman en la ceremonia (fundacional) de Bois Caiman.

La capacidad creadora que demostró tener la comunidad nacida de la independencia se expresa en el acondicionamiento de sus viviendas, las características de la familia, la definición del espacio vital y la formación de los recursos destinados a satisfacer la vida material.

Las formas de sociabilidad guardaron su carácter rural, marcado por la cordialidad, por el calor humano, por la alegría de vivir y por la facilidad de expresión y de comunicación oral. Continúa el vigor de lo africano y los aportes históricos de Europa y de América convergen en nuestro país para dar forma y renovar la humanidad

caribeña. Resulta de ello una personalidad nacional en términos afrolatinoamericanos, integrada a esta geohistoria y geopolítica caribeña y latinoamericana que condicionan nuestra situación y nuestro futuro.

A partir de estas bases, la cultura y la personalidad haitianas proyectan un nivel de creación de extraordinaria riqueza. El aporte de nuestro pueblo en el campo pictórico es notable y ha adquirido una celebridad internacional. Desde hace casi medio siglo esta pintura se ha afirmado, en un camino que va de las primeras expresiones del “arte primitivo” hasta una elaboración cada día más compleja y renovadora.

En la literatura, en particular en el campo de la novela, se han producido obras notables y sus creadores han dejado su marca más allá del espacio cultural haitiano o francófono. Si Jacques Roumain, Jacques Stephen Alexis y René Dépestre se han convertido en las figuras más conocidas a nivel internacional, antes que ellos y hoy también, otros escritores han dado a conocer al verdadero haitiano a través de una escritura que sorprende por su calidad, comparada con los niveles de educación en Haití. Detrás de esta creatividad popular, aparece la riqueza de una cultura que nunca se ha beneficiado de un apoyo económico ni de las decisiones institucionales que hubieran podido promoverla plenamente.

El largo período dictatorial trajo consigo innumerables obstáculos para el pleno desarrollo intelectual; el oscurantismo y la represión fueron, a nivel psicosocial y material, los elementos de toda una cultura de opresión que traumatizó profundamente a nuestro pueblo. Se desatiende la educación pública, se degrada el sistema escolar, se impone la censura, se prohíben y se queman libros, se cierran bibliotecas, se oprime, se asesina y se obliga al exilio a múltiples intelectuales y gente que trabaja en el ámbito de la cultura. En definitiva, los valores de la inteligencia serán remplazados por la corrupción y el cinismo.

Al igual que en otros países sometidos a largas dictaduras, en Haití todavía nos queda por hacer un balance de esta cultura de la

opresión y de sus efectos en las mentalidades y en los fenómenos de creación ideológica y artística. Sobre todo en el contexto de extremo subdesarrollo y penetración cultural del imperialismo que actúa a través de la corrupción sin límites, de las sectas religiosas y de otros instrumentos eficaces, como lo es su control sobre los medios masivos de comunicación social.

La dimensión cultural e ideológica del golpe de Estado de 1991 y del régimen de violencia que instituye, puso en evidencia la importancia de estas instancias en la lucha a muerte que vienen librando las fuerzas del pasado y los actores sociales emergentes en su proyecto democrático y participante. Todas las fuerzas del conservadurismo, del oscurantismo y del despotismo se coaligaron en una Santa Alianza contra el pueblo y el gobierno salido de las elecciones del 16 de diciembre de 1990. Entre estas fuerzas destacan, además, el brazo militar del golpe, los representantes económicos, la oligarquía oligopólica compuesta por una decena de familias y sus socios menores del mundo de los negocios, la vieja élite mulata, los sectores privilegiados procedentes de la oligarquía negra, la “clase media duvalierista”, el alto clero católico y protestante, así como partes significativas de la institución religiosa y, desde luego, un sector poderoso del *establishment* perteneciente al ámbito de la política internacional y que tuvo como aliados y socios a los miembros de estos grupos de poder.

Las expresiones ideológicas de esta coalición de fuerzas conservadoras reflejan el atraso histórico de sus integrantes, tanto en el plano económico-tecnológico, como en su visión política y del mundo. Sus objetivos giran en torno a la justificación del golpe de Estado y la violencia del poder de facto para impedir el retorno de Jean Bertrand Aristide, considerado un peligro para el sistema. Así, reflejan su miedo a la democracia nutrido, en parte, por la superexplotación, el autoritarismo y el colonialismo interno ejercitado desde el período esclavista colonial y que no ha dejado de existir en el país. Resulta altamente significativo que la prensa internacional, que no manifestó simpatía hacia el presidente Aristide, haya llegado a través

del comportamiento y de las ideas de estos sectores a caracterizarlos como unas “élites moralmente repugnantes”.

Conviene recoger algunas de las ideas, estereotipos, visión del mundo y propuestas de esta élite que desde el día del golpe invadió y monopolizó el espacio radial, el televisivo y el de la calle para manifestar sus doctrinas ultraconservadoras, a través de conocidos eslóganes e ideas recurrentes. Con el propósito de quitarle la palabra al pueblo, la élite quiso volver a usar el discurso en francés para transmitir sus mensajes. Estos se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

- El pueblo no está preparado para la democracia. No es posible que el voto de un miembro de la élite tenga el mismo valor que el de un ciudadano común de la calle, que además es analfabeto. El sufragio universal no conviene a un país como Haití. Así que el 67% de votos emitidos en beneficio de Jean Bertrand Aristide no tienen significado alguno. La minoría pudiente ha de conservar la exclusividad del poder, marginando al pueblo y en el mejor de los casos manteniéndolo en su tradicional papel de comparsa.
- La Constitución es de papel, las bayonetas de hierro. No se trata de hablar de legitimidad o de legalidad. No hay derecho. Todo se resuelve en términos de relaciones de fuerzas a nivel colectivo o individual. La relación de fuerza se define con las armas y su uso efectivo. Así se detiene el movimiento reivindicativo y popular.
- Hace falta que la élite se mantenga en el poder, ya sea a través del ejército o de la clase política. En ello no interviene para nada la cuestión étnica o de color. No importa que sean mulatos o negros los que aseguren la conservación del orden, hay que garantizar su mantenimiento. Ya no hay duvalieristas o antiduvalieristas: sólo defensores y privilegiados del sistema que se sienten amenazados por la democracia y el pueblo.
- El nacionalismo ha de ser un instrumento contra los influjos democratizadores que vienen del extranjero, ya sea de la

emigración o de la comunidad internacional. La actitud de esta última, reclamar el retorno de la democracia y denunciar las violaciones de los derechos humanos, es expresión del racismo de la comunidad internacional hacia la nación haitiana. No resulta extraño, entonces, que la bandera del nacionalismo fuera izada desde el día posterior al golpe, cuando se evidencia el repudio internacional a dicho acontecimiento. Este falso nacionalismo de gente que siempre ha manifestado un servilismo extremo hacia los poderes extranjeros, ha ido creciendo a medida que las sanciones internacionales se hicieron más efectivas.

3. Las adquisiciones culturales y los desafíos de la transición

En el período histórico posterior a la salida de los Duvalier se abre un espacio político sin precedentes en la historia haitiana. Esta larga transición –¿hacia la “democracia”, o hacia una nueva formulación autoritaria?– resultó ser particularmente rica y compleja. Sorprende por su duración, por su carácter nacional, puesto que va mucho más allá de los centros urbanos, y por su dimensión global que pone en marcha a los más diversos sectores y actores sociales en la batalla por el cambio democrático.

La dimensión cultural de esta situación alcanza a la totalidad de la nación. Su proyección en los terrenos de la educación, de la toma de conciencia y de la movilización popular hace que sea uno de los elementos más significativos de la coyuntura.

El créole gana un espacio de comunicación institucional que lo consagra como la lengua nacional indiscutible. Se apropió de la radio y la televisión, así como del discurso de varias organizaciones de origen burgués y popular y es hablado en algunos espacios oficiales de poder. La política se hace en créole. Las fronteras de la francofonía se achicaron. Con esto, una parte de la clase política tradicional perderá el monopolio de su discurso político, que hacía en francés

con todos los efectos de manipulación, intimidación y enajenación de las masas, que sólo hablan y comprenden el créole.

Esta “revolución cultural” potencial se percibe también en la escritura créole, que expandió considerablemente su campo en la poesía, en el teatro, en la novela, en el periodismo y sobre todo en la radio. En las escuelas e incluso en la universidad se enseña el créole, no solamente porque los profesores lo asumen, sino porque los estudiantes de la nueva generación lo exigen. Los intelectuales escapan a la enajenación lingüística secular que pretendía hacer del francés el vehículo y patrimonio exclusivo de la cultura y de la ciencia en Haití. El créole pasó de su estatuto de lengua subalterna, oprimida, a la plena soberanía popular y nacional. La Constitución de 1987 le conoce el estatuto de idioma oficial, igual que el francés.

Hace un siglo, el héroe de la independencia de Cuba, José Martí, en una de sus visitas a Haití en el contexto de su trabajo infatigable en favor de la libertad, observó: “En Haití, la civilización entrará en créole o no entrará”. Esta observación, hecha por uno de los personajes más avanzados de su tiempo en el continente, muestra cómo supo captar una de las contradicciones más dramáticas de la evolución sociológica haitiana: la existente entre la élite que hablaba francés y el pueblo, creador de su propio idioma, y que nunca habló la lengua del otro. Igualmente, Martí supo trazar una de las líneas del desarrollo cultural en Haití, que consiste en transformar el créole en idioma de comunicación, formación y difusión de la ciencia y tecnología.

La élite haitiana necesitó un siglo más que Martí para comenzar a comprender esta verdad fundamental, que parece imponerse en la vida política, con la irrupción del pueblo en el escenario político en estos últimos años. Gracias a ello, aumentó la participación cívica de las masas y, sobre todo, se mejoró su capacidad de comprensión de los hechos y de los discursos simbólicos. La democratización a nivel lingüístico posibilita reducir las diferencias a nivel de la educación entre los intelectuales y la mayoría del pueblo, contribuyendo a la creación de las fases técnicas para la socialización del saber y los conocimientos técnicos y científicos. Hoy más que nunca es evidente

que el humanismo, la ciencia, la técnica y todos los valores e instrumentos de transformación social podrán penetrar de manera eficaz dentro del pueblo solamente si se utiliza su lengua: el créole.

Los intelectuales haitianos tienen una tarea enorme por delante: poner a disposición del pueblo (del cual el 80% es analfabeto), los tesoros del conocimiento y de la ciencia en su propio idioma; idioma que se refiere, más allá de la dimensión lingüística o semántica, a toda una herencia histórica, cultural y socioeconómica que define la realidad nacional. Pero yendo aún más lejos de lo que representa el lenguaje, es necesario una ruptura en la filosofía y en el enfoque epistemológico en nuestro país. Casi dos siglos de vida nacional nos enseñan que nuestra élite no puede seguir copiando los modelos de pensamiento importados o impuestos, y menos transmitir fórmulas aprendidas de memoria. Este imperativo no solamente es válido para las corrientes objetivamente neocolonialistas o conservadoras, contrarias o diferentes de nuestras verdaderas condiciones y de nuestras necesidades, vale también para las teorías revolucionarias y para los principios científicos cuyo universalismo no puede borrar nuestras particularidades nacionales. Más allá de las fórmulas, debemos estudiar nuestra historia y conocer nuestra sociedad desde el punto de vista marxista y de los otros aportes de la ciencia contemporánea. Debemos comprender y aplicar estos principios científicos en calidad de haitianos, portadores de una geohistoria tan particular. Debemos descolonizar la educación, la cultura y las ciencias sociales de los efectos de una larga opresión. Debemos tener cuidado con la tentativa de enajenación multiforme, a veces sutil, que ha tomado, entre otras modalidades, la de invocar un cierto nacionalismo, de recurrir a la exaltación de los “pobres sublimes” o también invocar el negrismo para camuflar un oportunismo más servil, en el terreno interno o internacional. Ya se han dado los primeros pasos en esta dirección en la coyuntura actual. El hecho de que, durante toda esta etapa, el discurso negrista haya estado muy presente no es casualidad: es el efecto de la falta de receptividad de la mayoría hacia este tipo de discurso.

Pero aún nos queda un largo camino que recorrer. Tenemos interrogantes urgentes que nos exigen una respuesta, unos problemas teóricos y prácticos que debemos resolver en función de las particularidades de nuestra formación social atrasada. Una formación económico-social que ha llegado a un punto extremo de su crisis y en la cual está en juego la supervivencia de cinco millones de personas. Debemos hacer frente a muchos desafíos.

¿Cómo podemos integrar, en la lucha por la liberación nacional y la transformación de esta sociedad, a nuestro pueblo que, aunque sensibilizado políticamente, sufre las consecuencias del sistema y un retraso poco común en el terreno de las mentalidades?

¿Cómo asimilar y utilizar el enfoque científico, materialista e histórico en un contexto social y geopolítico como el de Haití, para poder de esta manera realizar la transformación revolucionaria de nuestra sociedad?

¿Cómo podemos hacer frente a los grandes problemas nacionales, relacionados con el subdesarrollo extremo de las fuerzas productivas y con el nivel de degradación que muestra la base material y los recursos humanos de nuestra sociedad?

¿Cómo intentar recuperar, en la perspectiva de un cambio democrático, el atraso de un siglo que hemos acumulado, incluso si nos comparamos con las naciones hermanas del Caribe y de América Latina?; y sobre todo, ¿cómo aprovechar las nuevas realidades que se presentan en la región y en el mundo, en lo concerniente a las relaciones internacionales de la ciencia y la técnica, para realizar un proyecto revolucionario de la sociedad?

¿Qué lugar debemos dar, dentro de la corriente global de la teología de la liberación o de ciertos sectores protestantes progresistas, a las instituciones y creencias del vudú, relacionadas con nuestras raíces etnoculturales, todas ellas, capaces de adquirir una posición importante en el proceso de movilización de las masas? Pero ¿qué posición? ¿Y cómo separar los aspectos positivos del vudú (sus valores creadores y nacionales), del resto, de lo que tiene de atraso y de factores fundamentalistas?

En Haití se puede decir que hoy el pueblo se ha levantado después de un largo sueño y que ha comenzado a caminar. Los revolucionarios, los intelectuales orgánicos, deben acompañar al pueblo en este difícil camino hacia la independencia nacional, con la cual han soñado generaciones y por cuyo advenimiento hay que seguir trabajando. Recapturar el mito fundador de la nación y transformarlo en realidad, proceso al cual nos invitaron durante las últimas décadas Rosalvo Bobo, Charlemagne Péralte, Jacques Roumain, Jacques Stéphen Alexis, Gérald Brisson y toda la generación de los revolucionarios de los años sesenta, es el único camino para la liberación nacional. Más que nunca, el pleno desarrollo de la cultura haitiana está íntimamente ligado con la supervivencia de la nación. Esta supervivencia es inconcebible sin la revolución nacional y social, que instaure en el país una democracia auténtica, única capaz de liberar al pueblo y al hombre haitianos de tantos sufrimientos y privaciones, para poder dar entonces rienda suelta a sus energías creativas.

Capítulo 6

La pos Guerra Fría y la problemática del cambio social

Para entender mejor el significado del proceso político haitiano, en su especificidad y originalidad, es preciso colocarlo en el marco histórico de la problemática del cambio social en América Latina, así como de la profunda crisis sociopolítica que sacude al país. Crisis provocada por el subdesarrollo de estructuras e instituciones, que insufló a esta sociedad un poderoso impulso hacia la democracia como forma política de vida social permitiéndole seguir el combate para el logro de sus aspiraciones.

Este proceso de cambio social ha suscitado la violenta oposición de la oligarquía local que ha jurado neutralizarlo, y tampoco ha podido ser contrarrestado abiertamente por fuerzas externas, ya que su contenido antimiseria no cuestiona los intereses de ningún país. Paralelamente, el proceso de lucha por la democracia se ha venido dando en un contexto internacional en el que, pese a las remanencias de la Guerra Fría, sobre todo en esa región del Caribe, éste tiende ya a ser superado. Por lo tanto, los reflejos y reacciones hacia procesos de ese tipo, de cuestionamiento a un sistema local determinado, no llegan claramente al rechazo u hostilidad abierta.

Esta realidad refleja, tal vez, los cambios acaecidos en el mundo, pero también muestra toda la complejidad de la crisis sociopolítica y de mutación de la sociedad haitiana. Además algunos de sus

desarrollos más recientes, a partir del golpe militar, parecen remitir a la lógica de Guerra Fría, evidente en este perímetro geopolítico caribeño.

Por ello, situar la crisis en un marco temporal y espacial más amplio nos lleva a recordar los procesos de cambio social y político más significativos, a nivel nacional y continental, ocurridos en América Latina durante el siglo XX. En efecto, todos los procesos después de la Revolución mexicana (1910-1919) han experimentado, bajo diversos grados o formas, la incidencia ideológica, política, económica o militar, de la paulatina división del mundo en dos sistemas globales que empezó a implantarse a partir de la Revolución bolchevique.

Movimientos, por lo general, que han expresado los impulsos históricos hacia la renovación de determinado sistema político o social. Procesos que se darán, según los casos, con el fin de acabar con la tiranía, cambiar las instituciones, renovar estructuras obsoletas, acceder al sufragio efectivo, por la democracia, justicia, participación de las mayorías en la vida política, acceso a beneficios sociales, lograr la reforma agraria, establecer niveles más altos de consumo, mejores condiciones de vida, en definitiva una mayor soberanía nacional.

1. Luchas sociales y bipolarización del mundo

Una visión retrospectiva de América Latina y el Caribe en estas siete últimas décadas permite identificar los diversos escenarios nacionales en que han ocurrido movimientos sociales de carácter reformista y nacionalista, revoluciones políticas, o proyectos gubernamentales de alcance renovador o modernizador. Si bien toman las más variadas expresiones, por lo general, sus contenidos tienen rasgos, fuerzas pulsoras o actores semejantes, que suelen partir, aun con tiempos diferentes, de la matriz histórica del Estado nación, con características parecidas en sus formaciones económico-sociales específicas, así como en su tipo de inserción a la economía o mercado mundial.

Al referirse a los procesos de mayor trascendencia en este período es preciso recordar: El Salvador de Farabundo Martí de 1932; Cuba de la revolución de 1933-1940; el Caribe anglófono de las revueltas obreras y nacionalistas y el Chile de las luchas proletarias y socialistas de los años treinta; Guatemala de la revolución de 1944, prolongada por los regímenes de Arévalo y Arbenz; el fenómeno peronista en Argentina entre 1944 y 1953; Costa Rica y la revolución de 1948; Bolivia y la revolución de 1952; la Guayana Británica con las reformas laboristas y constitucionales de 1957; Venezuela con su revolución democrática de 1957; la Revolución cubana; el levantamiento constitucionalista y popular dominicano de 1965; el gobierno constitucional de Salvador Allende y la Unidad Popular en Chile; Nicaragua y la revolución sandinista; Granada y el movimiento de la Nueva Joya y, nuevamente, El Salvador con la guerra revolucionaria, iniciada en 1981 que desemboca hoy en la nueva batalla pacífica, de aún mayor significado para la democracia.

Cada uno de estos acontecimientos, en la especificidad de su contenido y forma, han expresado el movimiento histórico hacia el cambio que se ha venido dando en sus características nacionales y su marcha por la democracia y el desarrollo. Asimismo, estas aspiraciones han movido a los pueblos, bajo la fuerza motriz de campesinos, clase media, intelectuales, obreros o de la ascendiente burguesía en busca de hegemonía contra la oligarquía.

Estos acontecimientos se situaron en la lucha, ya iniciada hace 500 años, entre dominación y resistencia de los pueblos indios, entre identidad cultural nacional e imposición foránea, poseedores y desposeídos, Estado y sociedad civil, entre los que atentan contra los derechos de la persona y los que pugnan por las libertades. Es decir, en el eje de las luchas aparecen siempre las contradicciones históricas por activar efectivamente la libertad e igualdad social.

Tales paradigmas, valores y motivaciones, propios de la evolución de todos los pueblos, han encontrado en América Latina y el Caribe una resonancia particular, debido a su geohistoria. Sin embargo, esta realidad en la evolución histórica de las naciones será distorsionada

y negada a medida que se perfilan en el mundo opciones contrapuestas y antagónicas de sociedad que conducen, posteriormente, a la bipolaridad del último medio siglo.

Desde entonces pareció que las metrópolis y sus estudiosos más connotados miraran al mundo a través del prisma deformante de sus intereses de gran potencia, involucradas en un combate por la supervivencia de sus privilegios y hegemonía. Por ello, destacados científicos y, con mayor razón, los analistas políticos oficiales, no alcanzaban a captar el sentido de la historia de América Latina y el Caribe, tal como se desprende de una trayectoria de cinco siglos de lucha por preservar su identidad y construcción nacional.

A partir de este enfoque, todo lo que fuera concebido como distorsiones, disfunciones, cuestionamientos o perturbaciones del orden entraban a valorarse como productos de la subversión comunista internacional. Toda la “teoría de los conflictos” se basó en tales presupuestos. En función de ello, y como resultado de la competencia entre ambos sistemas, la incidencia del comunismo, como elemento doctrinal o factor foráneo de poder, no dejó de manifestarse y ser invocado en cualquier circunstancia, con mayor o menor grado de exageración, provocando de manera correlativa, la intervención de Estados Unidos. No está de más recordar, al respecto, que en 1965 el presidente Johnson, para intervenir con 40 mil marines en la República Dominicana, justificó aquella intervención debido a la acción subversiva de “58 conocidos comunistas” supuestamente entrenados en Cuba y la Unión Soviética.

Así se implicó al tercer mundo y en particular a los países de América Latina y el Caribe en los espacios competitivos de la Guerra Fría entre capitalismo y socialismo. Tal imbricación se fundamentará en la derivación de la “lucha de clases a nivel internacional” en influencias ideológicas reales, posibles comunidades de intereses, lazos de solidaridad o efectivas alianzas con el entonces llamado mundo socialista, centro de las contradicciones *vis à vis* con el capitalismo del oeste.

En estas condiciones de desplazamiento del eje del conflicto histórico quedaron alteradas, como visión o como realidad, las dinámicas históricas endógenas, la génesis y la trayectoria real de algunos de los movimientos sociopolíticos democráticos. El reduccionismo histórico actuó desde el ángulo de ciertos actores políticos de estos procesos, a partir de adoptar presupuestos ideológicos que identificaron los mismos con la causa del socialismo, con los lineamientos señalados por el marxismo como condiciones “objetivas” o “subjetivas” para la revolución.

Desde otro ángulo, el reduccionismo hizo, por el contrario, que no se otorgara la importancia debida a estas pulsiones o dimensiones del desarrollo histórico. En general, “la historia oficial” y sobre todo los poderosos *mass media* de la información y comunicación desde los universos de la defensa de la “civilización occidental, cristiana y blanca”, arremetieron contra cualquier intento contrario a los ideales defendidos por los intereses del “mundo libre”. Por lo tanto, aplastarán con extremo rigor estos combates a favor de la libertad, la justicia, la transformación más humanizante de las estructuras y de las instituciones, y los deseos de una democracia que no fuera tan sólo formal y representativa.

Así, el análisis del cambio social democrático, elemento constitutivo de la evolución de las sociedades, fue ahogado por toda una visión seudocientífica, que niega la propia historia y sobre todo el itinerario de los pueblos del Sur como protagonistas de su realidad. Según tal visión cualquier huelga obrera, revuelta campesina, disturbio estudiantil, protesta intelectual o manifestación callejera se percibe y presenta como producto de influencias extrañas y no como expresión de la necesidad concreta y la determinación de una comunidad humana hacia una redefinición más equitativa de la relación entre pueblos y personas.

Con el supuesto fin de la Guerra Fría en su dimensión bipolar y planetaria, América Latina parece poder salir de los horizontes e implicaciones de esta maniquea realidad; aun cuando la existencia de la Cuba socialista sigue expresando la remanencia de los reflejos

de esa confrontación en el Caribe. Pero esa misma permanencia de Cuba en el escenario mundial, pese a la voluntad de Estados Unidos, demuestra la incontenible pulsión histórica de las contradicciones entre el mundo oprimido y las fuerzas de dominación. Cabe recordar que Cuba, por sus características históricas, sus relaciones con Estados Unidos, su precoz desarrollo capitalista y la conciencia nacional y social de su pueblo, sintetizó la magnitud y diversidad de factores y conflictos que mueven su historia; en particular la contradicción entre nación y país dominante, oponiéndose al capitalismo salvaje que engendra el despotismo. Tales influjos transformadores se darán en el marco de una relación con el imperialismo en su etapa más agresiva de expansión económica, intervencionismo militar e injerencia política. Por lo que el rechazo a estas relaciones se cristalizó en un mismo movimiento hacia el cambio dando al combate por la democracia una fuerza poco común, inseparable de la lucha por la conquista de la soberanía nacional y de un modelo de sociedad más equitativo.

Tal fue la matriz histórica y las raíces sociales e ideológicas de la Revolución, vislumbrada por José Martí desde 1895, y que recogiera Fidel Castro y los de su generación en la revolución de carácter popular, humanista y democrática de 1959. Revolución que, enfrentada a la reacción contrarrevolucionaria de Estados Unidos, tuvo que redefinir su proyecto y autoproclamarse en términos antiimperialistas y anticapitalistas. Todo ello en el tiempo más álgido de la Guerra Fría, cuando las influencias de los países socialistas y su apoyo logístico y militar, resultaron indispensables para el mantenimiento de la revolución y la realización de su proyecto de sociedad. Sin embargo, pese a la desaparición de estos aliados, la revolución sigue vigente, descubriéndose así sus profundas raíces endógenas.

¿Podrá esta experiencia regresar a su cauce histórico original, rectificar las deformaciones centralizadoras, autoritarias, burocráticas, que heredó de la influencia de los modelos del Este y de los imperativos de la autodefensa? ¿Podrá sobrevivir en el nuevo marco internacional y resistir a la acción destructora del imperio, dispuesto

a emprender cualquier tipo de acción para acabar con ella? La pregunta queda abierta ya que la historia no se ha terminado de escribir, como vaticinan algunos.

Por lo pronto, se prefigura otro tiempo histórico. Éste crea, para mejor o peor, una nueva dialéctica en las relaciones internacionales que, sin lugar a dudas, facilitará la posibilidad de novedosos posicionamientos de las fuerzas sociopolíticas y las naciones implicadas en la construcción de la democracia, justicia y bienestar.

Así, la tendencia histórica de los pueblos a la transformación social podrá expresarse en toda su endogeneidad, conforme a la dinámica de éstos en busca de un futuro mejor.

2. El proceso sociopolítico haitiano

La lucha por la construcción de la democracia en Haití, desde un principio, rebasa los límites de la intriga de palacios, de los conflictos entre fracciones, presiones y apoyos de las embajadas, las cuales le habían quitado su respaldo a Jean Claude Duvalier. Surge como un ímpetu popular que da lugar a manifestaciones multitudinarias en las ciudades de provincia y en las aldeas, cobrando no sólo un acento de lucha por la libertad sino una dimensión de combate reivindicativo por una vida mejor.

Dicha dinámica de acción social rebasa toda la capacidad de competición electoral de aquellos líderes de los seudo o micropartidos que emergían de las luchas cívicas en el país o en el exilio y que no lograron captar que se trataba de un proceso que iba más allá de buscar un simple cambio de gobierno por la vía electoral.

La sensibilidad de las mayorías para rescatar su problemática y hacer frente a su realidad, se encontró con la liberación de la palabra y el acceso a las libertades públicas, un espacio en donde manifestarse.

Se desataron los movimientos sociales más variados: de carácter lingüístico reclamando el derecho de ciudadanía en favor del idioma

créole; religiosos exigiendo más participación en las decisiones episcopales y políticas para la iglesia de base, mayor lugar para los cultos reformados, consideración y respeto para el vudú, reivindicaciones de carácter regional en favor de la descentralización administrativa; reclamos de la sociedad civil contra el Estado totalitario y corruptor, de los sectores populares contra la “clase política”, de la burguesía industrial y los comerciantes contra los núcleos de poder articulados al contrabando.

La emergencia de nuevos sectores sociales, con voz y legitimidad a escala nacional, fue acompañada de un discurso y formas inéditas de hacer política. Entre estos numerosos actores destacan las comunidades de base, asociaciones de campesinos, comités de barrios, grupos socioprofesionales, agrupaciones patronales, asociaciones de derechos humanos, sindicatos y organizaciones de mujeres y de jóvenes.

Estos componentes imprimen al proceso toda una dinámica de mutación social y de renovación del sistema político, dándole un contenido de mayor densidad histórica.

3. Contexto internacional

Desde sus orígenes, esta transición se situó dentro de un contexto histórico de mutación en las relaciones internacionales, marcada por la *perestroika* de Mijaíl Gorbachov y los subsecuentes cambios llevados a cabo en los países del Este. En este marco, dicha empresa de conquistas de las libertades públicas, defensa de los derechos humanos, combate para la aplicación de la Constitución y celebración de elecciones libres, no podrá de ninguna manera ser interpretada como producto de influencias externas, ni aun, pese a la proximidad geográfica, de “infiltraciones cubanas” como se pretenderá hacer creer. Por esto, contará con un respaldo irrestricto de Estados Unidos, Canadá y las principales potencias europeas.

Este apoyo, con pocas variantes, surgido durante la transición se mantuvo, pese a las vicisitudes de un itinerario marcado por la pesantez del totalitarismo y la militarización política e institucional. El compromiso adquirido con el proceso de transición dio lugar a presiones diplomáticas, condenas y sanciones contra los sectores de poder que mantienen una visión involucionista, obstaculizando el desarrollo de la democracia y las libertades. Esta actitud internacional se evidenció con el cese de la ayuda económica de Estados Unidos, Francia, Canadá y Alemania al gobierno del general Namphy, a raíz de la brutal interrupción por fuerzas paramilitares, del proceso electoral de 1987.

Tal respaldo se volvió a manifestar en favor de la celebración de nuevos comicios frente a las maniobras para boicotarlos, o simplemente controlarlos, por parte de los militares y sectores duvalieristas

Gracias a este apoyo las elecciones se efectuaron en 1990 con la asistencia de la ONU, lo que crea las condiciones institucionales para el pleno ejercicio del sufragio universal, y finalmente contribuyó a que cobrara presencia el proyecto de contenido democrático poco ortodoxo personificado en la figura del padre Jean Bertrand Aristide.

El triunfo electoral de Aristide en un proceso incuestionable por su transparencia dio legitimidad interna a su gobierno y ganó el respeto por parte de la comunidad internacional que lo apoyó.

Tal apoyo fue más explícito en el caso de Francia, su entonces mandatario, François Mitterrand, invitó al presidente electo a visitarlo a París. Por parte de otros países, dicho apoyo no dejó de manifestarse hasta el golpe de Estado militar del 30 de septiembre de 1991, aunque en ese momento hubo vacilaciones e incoherencias observadas en el simulacro posterior de negociaciones, que vinieron a plantear preguntas sobre la participación en el complot de determinados sectores oficiales de Washington y de Santo Domingo.

En todo caso, y más allá de corroborar dicha hipótesis, cabe preguntarse: ¿de dónde surgen las reservas O resistencias? ¿Será que este *leadership* de Aristide, la participación popular y afirmación nacional que personifica hace revivir los viejos demonios de

la Guerra Fría? ¿Será que el proyecto democrático haitiano en su contenido o forma no pertenecen a los lineamientos de la política neoliberal del Nuevo Orden Mundial? ¿Cuál es el contenido de este proyecto? ¿Cómo se define en el marco de este período de luchas sociales, inestabilidad, incesantes contiendas ciudadanas y connotadas conquistas democráticas que desembocan en la actual empresa de restauración totalitaria protagonizada por el ejército, las fuerzas neodualieristas y los actuales representantes del tráfico de drogas y contrabando?

4. Contenido y formas del proceso

El análisis de la forma y el contenido que cobra el proceso de cambio haitiano desde 1985 remite a períodos históricos y niveles de acción inseparables para comprender su desarrollo.

a) El período de luchas políticas y sociales, previo a la aparición del fenómeno Aristide, en el que se suceden cinco gobiernos provisionales dominados por militares:

- El Consejo Nacional de Gobierno (CNG) presidido por el general Henri Namphy (1986-1987).
- El gobierno de Leslie Manigat (febrero-junio de 1988), puesto en el poder por militares a raíz de pseudo elecciones en las que participaron menos del 5% de los electores.
- El segundo gobierno del general Namphy (junio-septiembre de 1988).
- El gobierno del general Avril (septiembre de 1988-marzo de 1990).
- La presidencia de Ertha Pascal Trouillot (marzo de 1990-febrero de 1991) rigurosamente controlada por el ejército y sectores neodualieristas.

Todos fueron gobiernos que pretendieron mantener el *statu quo* valiéndose de elecciones fraudulentas. Por ello, después de la experiencia de noviembre de 1987, en que los militares frustran violentamente la opción electoral en favor del profesor liberal Gérard Gourgue, el pueblo manifestará escaso o poco interés en las elecciones.

b) El segundo período se inicia en octubre de 1990 y está dominado por la emergencia del liderazgo de Jean Bertrand Aristide que llevó al pueblo a votar masivamente. Tal período culmina con el gobierno de siete meses del primer mandatario democráticamente elegido en Haití.

A través de los acontecimientos que configuran los dos períodos se precisan los ejes motores de la transición. En ella destacan la fuerza y la extensión del movimiento social reivindicativo, que refleja la creciente sensibilización, conciencia, participación y organización de las mayorías. Cabe subrayar que estas fuerzas popular-democráticas hacen uso exclusivamente de medios pacíficos: manifestaciones, huelgas generales, políticas, paros parciales, peticiones e intervenciones en la radio. Se expresan en un contexto en que la maquinaria represiva del militarismo y el duvalierismo, aún activa, responde a las demandas del pueblo con una violencia extrema y masacres colectivas contra campesinos (Jean Rabel, Piatre), manifestaciones callejeras o simples electores. Toda esta actividad culmina con el golpe de Estado del 30 de septiembre de 1991 en que el ejército, declarará la guerra al pueblo.

Es de subrayar que frente a esta fuerza terrorista, el pueblo entendió que su batalla debía ser pacífica. En todo este largo periodo no se dio una sola tentativa de acciones violentas de tipo guerrillero, insurreccional o terrorista por parte del movimiento democrático y popular. Este comprendió que sólo por medios políticos podía desarticular la maquinaria represiva en un combate que conlleva múltiples dimensiones:

a) La lucha contra el totalitarismo, personificado por los *ton-tons macoutes* y que constituyen la instancia más universal de la sensibilización y movilización de la nación. Patronos y obreros,

ricos y pobres, partidarios de uno u otro candidato coincidían en ello. El duvalierismo, salvo su saldo de víctimas de todas las clases, poco podía ofrecer a la ciudadanía como balance de sus 29 años en el poder; el antimacoutismo se volvió la línea de demarcación que separa los más variados componentes de la nación de los herederos del poder duvalierista. “*Macout pa ladan*” fue una de las consignas más populares que mantuvo al pueblo unido en una misma voluntad por impedir el retorno a las prácticas de terror.

b) La multidimensional batalla por la democracia que se desprendió de un amplio espacio de conciencia cívica de la población. Este fenómeno de concientización se da conjuntamente con la movilización de la ciudadanía en favor del respeto a los derechos humanos y de una aplicación estricta en el cumplimiento de la Constitución. Junto a la demanda en pro de la participación del pueblo en la vida nacional, así como en la administración del tesoro público, se fue extendiendo a todas las capas sociales y los rincones del país el deseo de una democracia efectiva.

c) El reclamo en favor de la justicia ha sido constante, ya que el duvalierismo y los regímenes militares posteriores se han caracterizado por toda clase de violencias, arbitrariedades y hechos de corrupción, y tanto el ejecutivo como el aparato judicial estarán demasiado ligados al pasado como para tomar cuenta de estos reclamos en contra de la impunidad. De ahí el fervor que suscitó la disposición transitoria de la Constitución de 1987 vetando por un plazo de diez años, ser candidato a una función electiva a toda persona señalada como presunta responsable de crímenes políticos cometidos durante el duvalierismo; así se puede entender, también, la tendencia, manifiesta desde 1986, entre los sectores populares más sufridos, de recurrir a la justicia expeditiva como respuesta a la impunidad.

d) La promoción del “cambio” resultará ser el principal *leitmotiv* de la acción social, del discurso político y los pronunciamientos de los más diversos sectores, desde los cuadros del movimiento

democrático liberal hasta los militantes de la base. Dicho concepto de cambio social, se refiere a la necesaria renovación del sistema político para terminar con el régimen de privilegios, desigualdades, corrupción y mentiras a fin de lograr el cambio de Estado y realizar las transformaciones profundas en la sociedad en el sentido de mejorar las condiciones de vida del pueblo.

5. Esas sorprendentes elecciones

Como resultado de una larga experiencia de elecciones fraudulentas, importantes sectores de la población manifestaron la más severa reserva respecto a los procesos electorales. Tal actitud fue motivada por la naturaleza del liderazgo político, las actitudes oportunistas o la falta de seriedad de los incontables candidatos a la presidencia (un total de 27 en 1987). También resultó efectiva la crítica de los sectores populares a las elecciones anunciadas por los militares y políticos en busca de un apoyo donde declaraban las elecciones “libres, honestas, sinceras y democráticas”.

En tales circunstancias el camino para celebrar auténticas elecciones, que permitieran construir un Estado de Derecho y garantizar la democracia, cobró una importancia vital para la nación, manifestándose a través de tres hechos fundamentales para su efectiva realización en diciembre de 1990, siendo éstas las primeras elecciones libres en la historia del país.

La creación, por disposición de la Constitución, de un Consejo Electoral Provisional auténticamente independiente, formado por nueve representantes designados por distintos sectores de la sociedad civil, dio un carácter inédito de autenticidad a estos comicios. En su desarrollo no pudieron intervenir ni el ejército, ni el Ministerio del Interior, ni ninguna fuerza de poder externa o interna, incluyendo las tradicionales estructuras locales de poder y dinero, especializadas en el fraude y la intimidación.

La decisión de la ONU de mandar una fuerza de observadores de unos 500 hombres para supervisar las elecciones. Tal presencia, solicitada por ciertos sectores democráticos liberales para inmunizar el juego electoral de la violencia de las fracciones ultraduvalieristas, tuvo como efecto quitarle al ejército su papel tradicional de fuerza decisiva y operativa en el proceso electoral. Privó también a las fuerzas de poder local de una parte de su capacidad para ejercitar la manipulación electoral.

La candidatura de Jean Bertrand Aristide dio al movimiento social una representación política electoral de la que antes carecía. Esta decisión suscitó una motivación ciudadana inusual que hizo evidente el carácter carismático de liderazgo de Aristide, llevando a la población a acudir masivamente a las urnas para elegir un hombre identificado con sus aspiraciones. Este fenómeno permitió al movimiento democrático popular, bajo la denominación de Lavalas –Avalancha– convertir las elecciones en un arma para hacer avanzar sus reivindicaciones y el proyecto político que venía sosteniendo en forma aún no explícita.

Así, a las elecciones de 1990 concurrió más del 90% del electorado y Jean Bertrand Aristide obtuvo el 67% del sufragio contra el 12% de su más cercano rival, Marc Bazin, candidato presentado por una coalición de tres agrupaciones políticas.

Fue para el pueblo haitiano una victoria mundialmente celebrada. De hecho rebasó la dimensión local ya que aun a nivel del continente tal ejercicio efectivo del sufragio universal resultaba ser poco usual. Y en Sudamérica, después de las dictaduras militares, los procesos electorales quedaron limitados dentro de una “democracia restringida”, forma que prevaleció en la transición de los regímenes militares a la normalidad civilista. En países estables en lo institucional como México (en 1988) y República Dominicana se darán, poco antes de las elecciones en Haití, gigantescos fraudes electorales mientras que en numerosos países democráticos el abstencionismo merma la realidad del sufragio universal.

6. Proyecto político y experiencia del gobierno Lavalas

Con esta victoria electoral se produce un fenómeno de particular alcance histórico: el acceso al gobierno de un nuevo equipo que, en el plano de su comportamiento político, trascendería el papel de los tradicionales detentores del poder. Se trataba de cuadros jóvenes, la mayoría de ellos competentes y con alto sentido moral. A pesar de su poca experiencia son hombres y mujeres influidos por el impulso de renovación del sistema político, que creen en el necesario apoyo de la población y buscan promover la democracia participativa, para enfrentar los graves problemas del país: el analfabetismo, la desforestación o la falta de higiene.

Este equipo enfrentó serias dificultades derivadas de la profunda crisis económica y financiera, así como de la degradación de las instituciones estatales, resultante de esta larga crisis. Asimismo, tenía que llevar adelante la complicada implantación de la institucionalidad consagrada por la Constitución de 1987. La misma implicaba, entre otros, la creación y el funcionamiento del cargo de primer ministro, figura institucional totalmente desconocida hasta entonces en Haití, así como la difícil colaboración, en el marco de un parlamento pluralista, entre el Ejecutivo y sectores de oposición hostil. También debían desarticular el *modus vivendi* con un ejército penetrado por el macoutismo y la insubordinación. Todo ello, dentro de las reglas del juego definidas por la Constitución y en un marco de poca tradición democrática, donde las fuerzas duvalieristas no renunciaban a retornar al autoritarismo.

Las diferentes trayectorias seguidas por la tradicional “clase política” y el presidente Aristide, no dejarán de reflejarse en los sectores tradicionales de poder. Estos no mantendrán una actitud de reserva, sino que ejercerán una oposición frontal al gobierno. Esta actitud se expresa en la poca disponibilidad del sector privado a colaborar o invertir sus capitales en un contexto político frágil y de profunda recesión económica.

En una coyuntura tan compleja, el proyecto político económico del gobierno resultó ser una empresa pragmática, sin afiliación ni pretensión doctrinal, apegado a los reclamos y propuestas del movimiento democrático popular, expresados desde 1986 y comprendidos con sensibilidad y creatividad por el sacerdote Jean Bertrand Aristide. Siendo un líder representativo de los sectores mayoritarios, dicho proyecto llevó el sello del movimiento reivindicativo popular y de los sectores medios. Poco se expresó en programas, se llevó a cabo por consignas y expresiones simples que plasmaban demandas reales del pueblo tales como:

- “Justicia, transparencia y participación.”
- “Solos somos débiles, juntos somos fuertes, muy juntos somos una avalancha” (Lavalas).

A pesar de su insuficiente expresión teórica, el proyecto Lavalas fue claro en cuanto a su papel histórico; quiso renovar y ampliar la base del sistema político, apartando del poder a lo que quedara del duvalierismo y a los miembros más retrógrados y corruptos de la clase política, incorporando al mismo a nuevos sectores sociales. Buscó sanear el aparato estatal con la racionalización y la moralización de las funciones del Estado; promover la alfabetización y la moralización de las fuentes del Estado; promover la educación y la salud; involucrar la participación de la comunidad en la gestión administrativa y en la solución de los problemas que le atañen; introducir en esta cruel y desigual sociedad haitiana elementos de justicia distributiva y equidad fiscal. Sueño ilustrado por la metáfora tan propia de Aristide que se refiere a “los que están debajo de la mesa y los que están en torno a la mesa” y la necesidad de llevar a todos en torno a la mesa.

Pero ese primer período de gobierno democrático en Haití, quedó frustrado por la hostilidad de la oligarquía que guió al ejército hasta el golpe de Estado del general Raoul Cedras en septiembre de 1991. Esta oligarquía, así como sus socios subalternos, no podían

aceptar el hecho de la incorporación del pueblo, en tanto sujeto, al sistema político y menos asimilar el papel reformador del gobierno de Aristide.

7. La dinámica del conflicto y de las negociaciones

Con la sangrienta interrupción de la primera experiencia democrática abierta en Haití a partir del ejercicio del sufragio universal, la dinámica de conflicto en ese escenario caribeño involucró tanto a poderosos intereses internos como externos, y es así como la situación se empantana y la solución a la misma no se avizora.

El estudioso nicaragüense Xavier Gorostiaga S. J., a raíz de su visita a Haití en ocasión de la investidura presidencial de Aristide, percibió la victoria y la movilización popular que la suscitó como una “revolución de la sociedad civil”. El ex comandante salvadoreño Joaquín Villalobos felicitó al pueblo haitiano por su victoria electoral, comentando que se había logrado por este medio lo que los salvadoreños, en once años de lucha guerrillera, no habían obtenido.

En efecto, el mandato popular expresado en las urnas dio lugar a un régimen constitucional que tenía como misión satisfacer las aspiraciones democráticas de la nación. Con este logro electoral parecía culminar el proceso de revolución democrática por el que venía atravesando Haití desde 1985-1986. Por ello, fue percibido como una amenaza real por el núcleo económico de la oligarquía, por el núcleo militar del Estado totalitario y por los cabecillas políticos que representaban a los seudopartidos que coparon el Parlamento. Estas fuerzas conspiraron contra el régimen constitucional recurriendo, una vez que el ejército realizara el golpe, a ejecutantes civiles para asegurar las funciones institucionales del gobierno ya que el repudio internacional provocado por el cuartelazo frustró, desde un primer momento, la intención del ejército de erigirse como fuerza suprema y visible. Resultó significativa la violencia del cuartelazo que provocó más de 1.500 muertos en sus primeros días, para barrer con las

organizaciones populares y los logros democráticos como la libertad de prensa, de manifestación y de asociación.

De hecho, el golpe, en su trayectoria represiva, correspondió a un caso específico de aplicación de la “guerra de baja intensidad” frente a lo que se considera una problemática de insubordinación civil contra el sistema. Una respuesta de esta índole fue pensada para determinados escenarios del tercer mundo en el marco de la Guerra Fría y de la doctrina de la Seguridad Nacional.

Cierto es que algunas fuerzas externas, aliadas históricas de los sectores conservadores haitianos, reaccionaron con excesivo recelo antipopular frente a lo que percibieron como un elemento perturbador del *statu quo* de sus tradicionales relaciones desiguales con Haití. Entre éstos destacan ciertos sectores dominicanos, que iniciaron una política de desestabilización hacia el gobierno de Aristide a los cuatro meses de asumir el poder. Actitud que se evidenció en la decisión del presidente Balaguer de repatriar a más de 40 mil emigrados haitianos.

Reflejos de esta índole de oposición al cambio democrático no se mostraron abiertamente en la política exterior de Estados Unidos durante la corta duración del primer gobierno de Aristide. Sin embargo, aparece como poco probable que la embajada en Puerto Príncipe no estuviera al tanto de la conspiración y de su alcance. Así lo sugiere la negativa de los *decision-makers*, a nivel internacional, sobre la aplicación de las sanciones adoptadas por la OEA en favor del retorno a la democracia.

A pesar de estas tendencias discordantes, es de subrayar cómo el factor internacional cobra un papel de primera importancia en la dinámica de la neutralización del conflicto y búsqueda de una solución negociada. Es precisamente en este nivel, en la actitud de la comunidad internacional frente al golpe y al gobierno de facto, donde la crisis haitiana puso de relieve los nuevos elementos existentes en las relaciones interamericanas e internacionales, así, igualmente, los límites y contradicciones de estas posturas formales que, en definitiva, contrastan tanto con las prácticas asumidas. Tales políticas,

al ocurrir en las postrimerías de la Guerra Fría, han de ser analizadas cuidadosamente ya que pueden señalar nuevos senderos en la lucha de nuestros pueblos para la realización de la democracia plena.

Las naciones representadas en la OEA, la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad y el Mercado Común del Caribe (CARICOM) repudiaron el golpe, exigiendo el retorno al orden constitucional. Así, dispusieron para hacer cumplir tal acuerdo un conjunto de propuestas de actuación:

a) Condena política por parte de la OEA, de la ONU, del CARICOM, de la CEE, del Parlamento Europeo y del Congreso de Estados Unidos.

b) Sanciones de la OEA y de la CEE y de varios gobiernos, consistentes en la suspensión de la ayuda económica a Haití.

c) El *Executive Order* del presidente estadounidense George Bush tomado en el marco de los acuerdos de la OEA, disponiendo el embargo contra el gobierno de facto, al considerar que la situación generada en Haití por el golpe “atentaba contra la seguridad nacional de Estados Unidos y su política exterior”.

Tal actitud de los actores internacionales contrasta con su comportamiento histórico frente a los golpes de Estado en América Latina. En efecto, aun en el caso del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende en Chile (1973), pocas fueron las sanciones prácticas que adoptaron contra el régimen de Pinochet. Mientras tanto, en estas dos décadas transcurridas, el mundo ha evolucionado y las resoluciones de la OEA, tomadas precisamente en Santiago de Chile, señalan nuevas pautas en la esfera de las relaciones internacionales.

Asimismo esta política contrasta con la función tradicional de las potencias del mundo libre que en nombre de la seguridad nacional, proporcionan las armas más sofisticadas a los ejércitos locales de ocupación, y a los regímenes políticos más brutales, asegurándoles una asistencia tecnológica envuelta en sofisticadas técnicas represivas.

Así, resulta significativo lo hecho por la OEA y la ONU, de condenar el régimen de facto, asumiendo un papel punitivo al tiempo que un papel de mediador formal para una “solución negociada”.

Lamentablemente, las sanciones oficialmente tomadas, incluyendo el embargo parcial, no llegaron a ser eficaces, demostrando los límites de las políticas correspondientes al “Nuevo Orden Internacional”. Políticas que se desdibujan en escenarios tan disímiles como Panamá o Irak, en los que Washington viene utilizando las instituciones internacionales según convenga a sus intereses específicos en política exterior.

En este contexto, conviene tomar en cuenta ciertas variantes observadas, en el marco de la crisis haitiana, entre la política de Estados Unidos y de los gobiernos de Canadá, Francia y Venezuela. Tales variantes, no obstante la influencia decisiva de Washington, señalan potenciales contradicciones o intereses divergentes entre estos diferentes actores, que han de ser calibrados para una correcta evaluación de las posibilidades de una política de mayor soberanía y de desarrollo nacional.

Asimismo, al desaparecer los antagonismos entre capitalismo y socialismo como marco condicionante, y a veces determinante, de las relaciones internacionales, cristalizados en el marco de la Guerra Fría, las nuevas contradicciones pasan a tener que explicar la histórica confrontación entre países dominantes y países dominados, entre el Norte Y el Sur, entre naciones ricas y naciones pobres en todo su significado y desnudez.

Cabe preguntarse cómo enfrentar esta realidad en un período histórico de reflujos o por lo menos de estancamiento de los procesos de cambio social democrático y de justicia social; cómo asumir todo lo que pueden ofrecer las relaciones Norte-Sur en términos de nuevas formas de cooperación para la defensa de los derechos humanos, el uso más racional de los recursos financieros y técnicos, la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible.

El diseño de estrategias orientadas hacia el logro de estas metas ha de proyectarse en el sentido de diversificar la dependencia para lograr disminuirla, de movilizar los recursos nacionales de los países del Sur y potenciar la cooperación Sur-Sur de la manera más eficaz posible. Por último encontrar, dentro de los países del Norte, las

fuerzas con intereses objetivos o impulsos solidarios en favor de un cambio en las relaciones internacionales y cuya lógica sea de apoyo y compromiso con los proyectos democráticos, de respeto al derecho de autodeterminación, y salvaguarda de los intereses de soberanía, propios de identidades nacionales y culturas diferentes.

Capítulo 7

El difícil camino del cambio democrático

Haití vive, desde hace una década, una verdadera revolución democrática. La misma, se proyecta a nivel latinoamericano con rasgos de singularidad susceptibles de trastornar su percepción; sin embargo, tales particularidades no pueden confundirse con respecto a la esencia y significado de este proceso. Se trata de una revolución antioligárquica, de amplia participación popular, en favor del sufragio universal, de la ciudadanía para todos y del ejercicio más amplio posible de la democracia, en el marco de un renovador proyecto nacional de modernización del Estado, de justicia social y de desarrollo económico.

Dicho proceso, en sus variantes de espacio y tiempo –el Caribe en las postrimerías de la Guerra Fría–, combina diversos factores de contenido que le confieren su importancia histórica. Cierto es que este sello singular es inseparable de factores estructurales y culturales propios del nivel de desarrollo del país y de su retraso considerable en comparación con sus vecinos del continente. Sin embargo, esta singularidad no borra lo esencial de este proceso de inconfundible marca latinoamericana que conlleva un fenómeno de mutación histórica conocido en otros espacios y tiempos continentales, caracterizado, entre otros por la variedad de las demandas que expresó, desde un primer momento, el consenso que se suscitó entre la

población contra el totalitarismo-duvalierista y para una democratización efectiva. Tales componentes del proceso así como el hecho de que se diera lugar al cuestionamiento de los líderes tradicionales y de los partidos políticos espurios, aunados al carácter antisistémico del discurso popular en ese período, representaban muchos elementos de forma y de contenido de una emergente revolución democrática. Resultaba imprevisible, sin embargo, vislumbrar los senderos difíciles e inesperados que iban a seguir en la búsqueda perseverante de un mayor logro libertario.

Sin embargo, este secular episodio de la marcha del pueblo hacia la libertad y la justicia, continuando la secular utopía latinoamericana, no se fue por las “grandes alamedas” de la legalidad soñada, ni por los “senderos luminosos” de la lucha armada. Siguió un itinerario pedregoso y zigzagueante, lleno de falsas pistas y de arenas movedizas, poblado con viejos diablos astutos, dotados de las armas más sofisticadas; un terreno minado, con trampas imprevistas tendidas por los que tratan de convencer que con el “fin de la historia” ya no hay camino, y que no hace falta buscar por donde empujar los proyectos de cambio. Un itinerario en que la inventiva popular tuvo que manifestarse; en donde el pueblo con las manos vacías, deshaciendo nudos y tendiendo puentes, tuvo que valerse de toda la inteligencia que hacía falta, para revertir a su favor a las mismas fuerzas que, en el entorno internacional de ayer, se habían puesto al servicio de la opresión.

Hoy, en la senda de la victoria electoral de René Preval, candidato presidencial de la Organización Política Lavalas (OPL), que asegura la continuidad en la legalidad del proyecto democrático-popular, resalta el saldo de una década de lucha, con sus retrocesos, sus derrotos imprevisibles y sus notables avances. Se evidencia la riqueza y profundidad de este movimiento pacífico de cambio social que reproduce muchos rasgos de las revoluciones antioligárquicas, de carácter democrático, nacional, popular –o populista– que se han dado en América Latina, desde principios del siglo hasta los años sesenta, de manera general de modo pacífico, pero violentas en algunos

escenarios como los de México (1910-1917), Costa Rica (1948) y Bolivia (1952).

Al mismo tiempo, al iniciarse en los años ochenta, el proceso haitiano manifiesta numerosos elementos propios de la problemática de la transición, tal como se dio en el período posterior a los regímenes militares totalitarios en Uruguay, Argentina y Chile. Asimismo, refleja marcadas semejanzas con los recientes procesos de América Central, caracterizados por violentos conflictos sociales, que cobraron el carácter de confrontación militar y en los que sobresalió el peso de los actores internacionales (la OEA, la ONU, México, Francia, Canadá, Estados Unidos, España) que contribuyeron a que se recurriera a la negociación como vía de salida a estas crisis.

A todo ello se añaden algunos fenómenos de alta visibilidad en el escenario haitiano en particular: El peso de la participación popular que se ha mantenido vigente durante casi una década de conflictos políticos, en medio de esa profunda crisis sistémica. Tal efervescencia reivindicativa rompió los esquemas dibujados desde fuera o desde adentro en pro de la “democracia restringida”. Dio paso, a partir de elecciones libres, a un régimen de amplia mayoría, encabezado por un líder carismático, el sacerdote Jean Bertrand Aristide, cuyo surgimiento en el escenario no estaba programado y que obtiene 67% de los votos en los comicios presidenciales de diciembre de 1990.

A partir de estas premisas, la instalación de un gobierno legítimo de amplia base y de notable participación popular, rompió los mecanismos de control y de exclusión política saliendo de los conocidos moldes de la “democracia restringida” o de la “democracia tutelada”. Tal proceso de democratización Verdadera y de participación popular desencadenó una violenta empresa de restauración totalitaria por parte del ejército, brazo armado de los sectores más conservadores de la sociedad. El régimen de fuerza resultante de este golpe duró tres años, durante los cuales pareció estancada la dinámica del cambio, sin alterar sin embargo el significado global de esa década de mutación histórica que experimentó la nación.

En efecto, en este período de nuevo orden mundial dicho régimen golpista entró en contradicciones con los requisitos del mismo, en términos de respeto a las decisiones electorales y de observancia de los principios que garantizan los derechos humanos. Tales contradicciones se alimentaron por la legitimidad del gobierno constitucional, por el apoyo de la opinión mundial así como por la resistencia pasiva pero tenaz de todo un pueblo. Cobraron particular y sorprendente efecto por la sistemática irrupción de los *boat people* haitianos en el escenario político estadounidense.

Todos estos factores trastornaron la tradicional relación de apoyo mutuo entre las fuerzas de poder más conservadoras de Estados Unidos y el sector militar-oligárquico haitiano. Éste, contando con nexos tradicionales con el Pentágono, se negó a negociar y a buscar una salida política a la crisis, aun cuando el *establishment* civil –Casa Blanca y Departamento de Estado– presionaba en favor de tales negociaciones que permitiesen conservar lo esencial del sistema y salvar a la institución militar.

En este marco, el retorno a la democracia se realizó mediante una intervención extranjera, la del ejército de Estados Unidos, en cumplimiento de la Resolución 940 del Consejo de Seguridad de la ONU. Dicha operación, en su gestación y desenvolvimiento, así como el marco multinacional en el que se dio, se asemejó a una novedosa empresa de “guerra psicológica”. En efecto, puso en marcha, a mediados de septiembre de 1994, a más de 20 mil hombres, con el armamento más sofisticado, incluyendo cruceros, portaaviones, aviones de combate, helicópteros, que lograron sus objetivos estratégicos y tácticos sin que existieran víctimas o daños materiales en ninguna de las fuerzas beligerantes...

Así esta acción contrastó con las clásicas intervenciones ocurridas en el Continente desde hace un siglo contra los pueblos en lucha por su emancipación, y que tomaron la forma, en el periodo reciente, de injerencia manifiesta, y de operaciones armadas encubiertas frente a la Revolución cubana, pero que se caracterizaron por cruentas acciones militares, en República Dominicana, Granada y Panamá.

Así, la acción internacional validada por la presencia de tropas de diversos países, se situó en un sentido coincidente con el movimiento histórico de la nación haitiana en pro del Estado de Derecho y del cambio social.

Asimismo, esta operación de carácter político-militar no se hizo en contra del pueblo, sino en apoyo a su voluntad expresada por el apoyo renovado a su líder Jean Bertrand Aristide y para el retorno de éste al poder. Por ello, llegó a crear una aceptación popular inusual que se expresó en las calles y muros del país. También creó en el país un ambiente propicio para el surgimiento de condiciones para una “democracia tutelada” encaminada a neutralizar los factores incontrolables de dicho proceso y desvirtuar, en el sentido otorgado por el proyecto mundial neoliberal, la histórica lucha de las mayorías en busca de la plena soberanía popular y nacional.

Es preciso destacar los componentes más relevantes de este proceso para comprender su complejidad y captar toda su riqueza para la sociología y la ciencia política, así como para el estudio de las relaciones internacionales en el Continente, en este período de pos Guerra Fría.

Desde este enfoque histórico-global se puede también entender la trascendencia mundial del caso, mismo que resulta sin proporción por el peso específico de Haití, en términos de valor estratégico, tamaño geográfico, recursos naturales, nivel de desarrollo, e incluso, en función también de la indefinición de los “factores ideológico-políticos” que pueden haber convertido a este país, uno de los más pobres del planeta, en uno de los principales focos de la atención mundial en el período 1991-1994.

1. La crisis sistémica

La crisis haitiana es una crisis total que nace de las mismas condiciones de conformación de la nación y que por su carácter

histórico-estructural y su grado avanzado de maduración escapa a toda tentativa de recomposición del sistema. Es la crisis de la supervivencia más allá del tiempo soportable, del arcaísmo en una sociedad situada en plena cuenca del Caribe; de las deformaciones inherentes al no desarrollo o al desarrollo desigual; al antidesarrollo que llega a reproducir algunos rasgos del capitalismo dependiente en medio de estructuras e instituciones obsoletas, dando lugar a una sociedad híbrida, deformada, desarticulada, con contrastes enormes que se reflejan en el plano político y cultural por desequilibrios crecientes.

En sus múltiples manifestaciones e instancias, esta crisis sistémica aparece como una acumulación y una exasperación de múltiples fracturas de diversas índoles, entre las cuales se destacan:

- Crisis de las estructuras económicas y sociales que han llevado al país al antidesarrollo y propician niveles de miseria extrema así como contrastes excesivos entre una minoría enriquecida y las mayorías carentes de todo.
- Crisis del Estado que se puso en relieve con el derrocamiento de la dictadura duvalierista en 1986, después de tres décadas de terrorismo de Estado, y que fue arrastrando a todo el aparato administrativo y militar.
- Crisis de la autoridad y de la legitimidad de las instituciones provocada por la evidente ineficiencia y degradación de las mismas y la demoleadora crítica del Estado emprendida por la sociedad civil.
- Crisis de los partidos políticos, que por no lograr constituirse en verdaderas organizaciones, ni en instrumentos de renovación democrática o de las reivindicaciones sociopolíticas mayoritarias quedaron como formaciones espurias, identificadas con el ejército y con las peores prácticas politiqueras, represivas, o golpistas repudiadas por el pueblo.

- Crisis de las relaciones internacionales de la oligarquía y de su instrumento político-militar que, al no contar con el apoyo irrestricto de Estados Unidos, como se dio en tiempos de la Guerra Fría, no lograron adecuarse a los requisitos de los tiempos en favor de la democracia, las elecciones libres y el respeto de los derechos humanos.
- Crisis de gobernabilidad, surgida entre otros factores de la ruptura de los mecanismos de opresión y de control del Estado totalitario y de la acción del movimiento reivindicativo y de las organizaciones populares que hacen oír sus voces en todas las decisiones del Estado y a todas las instancias de la sociedad.

Todas estas expresiones de la quiebra del sistema encuentran sus raíces en una crisis histórico-estructural profunda. La misma nace del anacronismo de las estructuras agrarias y del aparato productivo, así como de la inadecuación de la estructura distributiva, de la organización social y de las mentalidades, a los imperativos del desarrollo moderno y de la inserción al capitalismo mundial. A raíz de ello, se da el estancamiento del sistema, así como desequilibrios sociales insalvables que se reflejan en la excesiva concentración de la riqueza, la degradación de las condiciones de vida, la miseria extrema de las mayorías y la catástrofe ecológica.

Dentro de este cuadro, al darse, después de tres décadas, el desmoronamiento del duvalierismo, se abre un espacio de libertad que permite al pueblo, víctima del sistema, lanzarse a la lucha contra el mismo, volviéndose protagonista de la historia.

En esa dinámica, la consigna de “cambiar el sistema” lanzada por los grupos de base se vuelve un elemento unificador de amplios sectores sociales; esta consigna es promovida por los grupos asociativos y la acción reivindicativa de las mayorías que invaden las calles, las escuelas, los medios de comunicación y ganan, con las elecciones de diciembre de 1990, el espacio político-gubernamental y las avenidas del poder.

Mientras tanto, las fuerzas del *statu quo*, en particular los militares, la oligarquía importadora y especuladora, las “doce familias”, la clase política conservadora quedan crecientemente acorralados por la acción reivindicativa de las mayorías. Asimismo, se encuentran desarmados frente al paulatino acceso de esta sociedad a las normas de derecho y, sobre todo, frente a la acción internacional en pro de la democracia y de la observancia de los derechos humanos, misma que limita su capacidad de represión e imposición y les obliga a respetar las nuevas reglas del juego.

En tales condiciones, sin el apoyo de sus aliados históricos y sin poder disponer de los medios habituales de coacción, los de arriba ya no pueden gobernar según la forma tradicional en que lo venían haciendo. Tal realidad añade un elemento más al cuadro de desequilibrio y ruptura.

Por su parte, los de abajo, las mayorías, recurriendo al sufragio universal, se apoderan del derecho de voto así como de los principios democráticos que defienden con determinación. Acceden al gobierno, bajo la conducción de un sacerdote de la Teología de la Liberación. Éste, bastante diestro en la gestión y el aprovechamiento de las contradicciones sociales y políticas, pero dotado de una excepcional capacidad de comunicación, suscita la confianza de las mayorías; mantiene movilizado al pueblo en las ciudades y en el campo e incluso, integra a este mismo proyecto democrático nacional al millón y medio de emigrados en América del Norte, el Caribe y Europa. Así, el movimiento de sociedad, a la vez de esencia popular y de corte populista, hace converger en un mismo impulso patriótico las mayorías pobres, una fracción importante de los sectores medios, de la intelectualidad y de la mediana burguesía.

Tal experimento de gobierno de mayorías se da en un mundo vuelto hacia la derecha en que tales fenómenos resultan poco usuales. Pero su propia legitimidad electoral le asegura cierta aceptabilidad, pero poco apoyo y solidaridad internacional. En el foro interno, se desarrolla en condiciones sumamente precarias, con insuficiente capacidad para organizar en forma eficiente los medios materiales y

humanos indispensables para una empresa de tal envergadura. Esta situación de frágil dominio de las fuerzas populares compromete la capacidad de lograr, a partir de la legitimidad electoral, una hegemonía que garantizará la estabilidad y la eficacia del gobierno legítimo. Se dan así las premisas del golpe de Estado.

En tal contexto, el cuartelazo de septiembre de 1991 del general Cedras y sus esbirros favorecían una santa alianza con las fuerzas más retrógradas y conservadoras de la sociedad. Esta coalición antipueblo unió a la poderosa oligarquía financiera y comercial, los grupos del contrabando y del narcotráfico, los sectores duvalieristas más poderosos, la burguesía tradicional, la pequeña burguesía mulata así como una fracción de la clase media, beneficiaria de los privilegios y favores del *ancien régime*. Esta empresa de restauración totalitaria se valió de la larga experiencia de poder militar-duvalierista, con miras a sacar provecho de los efectos del terror sobre una población recientemente salida del horror de una larga dictadura.

Este proyecto retrógrado garantizaba a la “gente bien” protección en contra de los desmanes del populacho. Desemboca, por la misma ilegitimidad y la miopía histórica de sus protagonistas, en una violencia permanente. Se evidencia con ello la crisis de gobernabilidad del sistema: se vuelve imposible el sostenimiento del régimen militar pese a su permanente despliegue de fuerza, al apoyo irrestricto de la oligarquía, en particular de la docena de ricos del país y de la mayoría de la “clase política” y al respaldo “encubierto” de poderosas fuerzas externas, entre las cuales se destacan el Vaticano, el Partido Republicano de Estados Unidos y el gobierno de Joaquín Balaguer, en República Dominicana.

Con la incapacidad de ejercicio de gobierno por los militares, la crisis se agrava y se prolonga. La resistencia popular cobra las formas más solapadas. Los sectores más diversos de la sociedad civil manifiestan su inconformidad contra la violencia institucionalizada. Desde el Parlamento, tomado como rehén por los militares, algunos parlamentarios del Frente Nacional para el Cambio y la Democracia (FNDC) utilizan su tribuna para fustigar al régimen de

facto y reclamar el retorno de la democracia. Las organizaciones democráticas, desde la clandestinidad y las asociaciones de Derechos Humanos, en particular la Asociación Justicia y Paz, la Plataforma de los Derechos Humanos, denuncian con valentía los crímenes y abusos. Estas denuncias rebotan a nivel universal, mostrando la cara criminal de los militares haitianos. La represión crece y con ella la inconformidad popular, apareciendo los primeros brotes armados, haciendo crecer el espectro de la violencia institucionalizada o de la explosión social. Se crean así las condiciones para el ejercicio del “derecho de injerencia” de las potencias tutelares, lo que proyecta la crisis hacia una nueva dimensión...

2. El proceso de cambio

Como todo proceso histórico de difícil maduración, la transición democrática en Haití se viene realizando desde hace una década con un costo enorme y en medio de renovadas luchas sociales. Este movimiento de renovación gana fuerza a cada paso. Registra avances y retrocesos, perdiendo unas fuerzas y ganando otras. El pueblo va aprendiendo de la experiencia, expresando creatividad y dinamismo. El movimiento se extiende a toda la sociedad bajo la forma de numerosas agrupaciones locales o gremiales, comités de barrios, asociaciones de campesinos o de trabajadores; crece en profundidad en cuanto a los fenómenos de sensibilización y concientización, pero sin alcanzar el grado de organización que le podría garantizar avances más firmes.

Este proceso ha ampliado en forma extraordinaria el espacio de acción social así como la participación política de la ciudadanía. En su difícil derrotero y en medio de las dificultades sin nombre, a través de las duras pruebas de la represión militar, del embargo y de la intervención extranjera, sigue suscitando más esperanzas que frustraciones, más apoyo popular que desilusiones.

Si bien es cierto que la misma marcha del movimiento Lavalas parece a menudo desorientada e incoherente, con falta de cohesión y de programas, suscitando un creciente cuestionamiento en cuanto a la capacidad de su líder para llevar a cabo las promesas y expectativas que ha levantado, dicho movimiento sigue siendo una poderosa palanca hacia el cambio sistémico que involucra a las mayorías. Aun cuando su fuerza puede estar ligada, en determinada medida, a la misma adhesión del presidente Aristide, el líder carismático, que sin haber fundado el movimiento social de este período histórico llegó a simbolizarlo, es mucho más que una expresión de espontaneidad, de impulsos carismáticos o populistas (como algunos de sus críticos lo identifican, de manera muy simplista).

De hecho, desde 1985, antes de la caída de Jean Claude Duvalier, las masas emergían en el escenario en multitudinarias manifestaciones. Su protagonismo creciente fue identificando el contenido de ese período: no se trataba de un simple cambio de gobierno sino más bien de un amplio movimiento social bajo cuya proyección, a medio plazo, se transformaría el sistema político. Este movimiento se estructuró en forma original, a partir de las agrupaciones de base, de carácter reivindicativo, que nacieron desde del derrocamiento de la dictadura, animados por asociaciones eclesíásticas, sindicales, socialistas... Se fundamentó en el rechazo por parte de las mayorías de todo lo que el duvalierismo, durante tres décadas, representó de terror, corrupción, muerte y exilio así como de destrucción de los valores morales, degradación de la sociedad civil, de la condición humana y de la dignidad nacional.

En esa base de rechazo al totalitarismo y en búsqueda de una renovación del sistema se logró el consenso de los más amplios sectores sociales, políticos e ideológicos de vocación democrática. Estas bases de consenso confirieron una renovada capacidad de impulso a este movimiento, que no lograron desvirtuar las fuerzas democrático-neoliberales que abogaban por “la democracia restringida”, de inspiración censataria y propósitos excluyentes.

Este período de transición y de importantes conquistas democráticas quedó marcado por notables logros en los terrenos constitucional, institucional e internacional.

3. Las innovaciones constitucionales

La Constituyente de 1987 recogió este flujo de reivindicaciones que condujeron a la caída de la dictadura y a una efervescencia sociopolítica sin precedente en el país. Introdujo significativas innovaciones en el sistema, en el sentido de una liberalización profunda de las prácticas políticas yendo más allá de la simple democracia representativa. Entre dichas innovaciones se destacan:

- La adopción de un régimen semiparlamentario que tiende a reducir el papel y las posibles distorsiones del presidencialismo, al conferir amplios poderes al Congreso y al primer ministro cuya función de jefe de Gobierno introduce un factor de equilibrio en el seno del Ejecutivo y entre éste y el Legislativo.
- La no reelección del presidente, la prohibición de todo referéndum que modifique la duración del mandato presidencial.
- La fijación de una rigurosa condicionalidad para la puesta en aplicación de cualquier enmienda constitucional, lo que neutraliza cualquier intento de manipulación del Parlamento para modificar la Carta Magna.
- La descentralización administrativa y municipal concebida en una visión global que facilita la modernización de la institución estatal y dispone de la participación de la sociedad civil en la gestión pública así como en el nombramiento de los jueces y en la formación de la Comisión Electoral Permanente.

- La obligación impuesta al Estado de promover la alfabetización, la reforma agraria y la institucionalización del créole como idioma oficial.
- La adopción de una disposición contra la impunidad que limita la elegibilidad, por un plazo de diez años, a los responsables de crímenes y abusos graves durante la dictadura de los Duvalier.

Así, la Constitución de 1987, votada masivamente por la población, se convierte en un instrumento fundamental de la construcción democrática. Se vuelve el marco de legitimidad del combate popular para la plena participación de las mayorías en la vida política y contra los remanentes del totalitarismo, incrustados en el aparato estatal y en las prácticas políticas. A partir de este marco de referencia constitucional, la lucha de las mayorías se orienta a rescatar, en favor de la sociedad civil, los espacios de poder arbitrariamente conquistados por los militares, como herencia del duvalierismo y de los famosos *tontons macoutes*.

4. El resquebrajamiento de la institución militar

El ejército había sido una creación de la ocupación estadounidense de 1915-1934. Como en los demás países del Caribe que sufrieron de las incursiones de los *marines* en los tiempos gloriosos del imperialismo, una guardia nacional fue montada y se convirtió al finalizar la ocupación en guardia pretoriana al servicio de sus tutores.

De ahí en adelante la institución armada se volvió la columna vertical del sistema desempeñando tanto su misión original como otra dictada por la oligarquía; baluarte del *statu quo* su misión consistió en combatir en los terrenos represivo, ideológico y político al movimiento democrático y aplastar las reivindicaciones populares a favor del Estado de Derecho y de las elecciones libres.

Con el derrocamiento de la dictadura de los Duvalier además de asumir en el primer plano su papel de defensor del régimen, este

ejército también se identificó con la misma institución gubernamental que pretendía controlar y asumir. Así, al tomar sucesivamente la jefatura de tres gobiernos de facto, entre 1986 y 1994, los generales Henri Namphy, Prosper Avril y Raoul Cedras involucraron en su obra de dominio a numerosos militares así como a la institución castrense, evidenciando la voluntad de someter a la nación bajo el mando de las metralletas.

Guiados por esta ambición llegaron a fabricar dos gobiernos civiles: el del profesor Leslie Manigat, nombrado presidente en febrero de 1988, mediante unas elecciones caricaturescas, en las que participa sólo el 6% del cuerpo electoral y el gobierno provisional de Ertha Pascal Trouillot, quien fuera nombrada, con anterioridad, juez de la Corte Suprema de Justicia para poder llenar un interinato incierto, en el que el cuerpo armado ya se había desgastado hasta el punto en que no le quedaba alternativa más que buscar un semblante de legalidad.

Durante toda esta confrontación, el pueblo se valió de las armas del combate cívico: petición, denuncia, manifestaciones, huelgas generales, etc. Entendió que el voto ciudadano, en el marco del sufragio universal efectivo, podría constituir un arma efectiva para lograr parte del cambio deseado. Tal convicción se convirtió en decisión política cuando en la primavera de 1990, la ONU determinó asesorar al gobierno para la celebración de las elecciones, respondiendo así a las demandas de ciertas fuerzas democráticas que buscaban garantías frente a los reiterados actos de violencia militar contra el sufragio libre. La presencia del organismo internacional creó las condiciones para la participación masiva de la ciudadanía en el escrutinio del 16 de diciembre de 1990, lo que abrió una alternativa democrática.

En este contexto, el sufragio universal llegó a derrotar a los candidatos de la oligarquía, incluyendo a los que tenían la preferencia de Washington. Así se llegó a elegir como presidente, a Jean Bertrand Aristide, un líder joven que emergía del mismo movimiento social reivindicativo.

Tal victoria no respondía a los intereses de la oligarquía. No resultó del agrado de los militares y de sus aliados locales y extranjeros. Estos conspiraron contra la legalidad republicana, tramando el sangriento golpe de Estado del 30 de septiembre de 1991. El general Cedras impuso un régimen de fuerza, en un intento insensato por restaurar el poder militar y totalitario.

Así, al sumir a la nación en la ilegalidad durante tres años, el militarismo exasperó las contradicciones de la sociedad. Nutrió de modo particularmente sangriento una singular guerra social entre el pueblo y el ejército. El pueblo desarmado se fortaleció apoyado en toda su legitimidad electoral. Recurrió a las formas más diversas e imaginativas de la resistencia cívica para defender sus derechos y cumplir con su voluntad de cambio; contó para ello con el apoyo militante de más de un millón de haitianos emigrados en América del Norte, así como con el respaldo de la opinión internacional que, sensibilizada por la tenacidad del pueblo haitiano, respaldó su lucha para el retorno a la democracia.

Por otra parte, estos militares, con el ejercicio ilimitado de la ilegalidad y la violencia, que lleva al gobierno de facto al aislamiento internacional, exasperaron las contradicciones en la sociedad. Crearon un verdadero ambiente de guerra contra el pueblo con un saldo de unos 5 mil muertos, 40 mil refugiados y 300 mil desplazados internos. Por ello recurrieron a poderosos sectores oligárquicos, a todas las redes de represión y de control, tejidos por el duvalierismo en tres décadas, así como a sus sólidos apoyos internacionales, en los medios más conservadores de Estados Unidos y de la República Dominicana. Se valieron incluso de los recursos del narcotráfico y toda clase de medios técnico-militares remanentes de la Guerra Fría, la doctrina de la Seguridad Nacional y del arsenal de la guerra baja intensidad.

Esta poderosa coalición de las fuerzas del pasado llegó a imponerse durante tres años, pese a las condenas oficiales de la mayoría de los gobiernos del mundo. Pero la resistencia, no dejó de manifestarse. Y frente a ello, la violencia extrema de estos militares tiñó de sangre

a toda la nación. Se profundizó la crisis del Estado y la corrupción se generalizó. Se gangsterizó la institución militar resquebrajándose desde adentro con el desmoronamiento del sistema de disciplina y de mando. Así, se volvió más evidente la total incapacidad de los golpistas para encontrar cualquier salida a la crisis. Tal situación llevó al total descrédito internacional de la institución militar, creando las condiciones para la ruptura de su sistema de alianza internacional y su inevitable ocaso.

5. La perturbación de las alianzas internacionales de la oligarquía

A partir de la realidad de las luchas sociales en Haití y de la creciente coincidencia entre las fuerzas democráticas haitianas y de la comunidad internacional, se fue resquebrajando el sistema de alianzas entre esa cúpula oligárquico-militar y las fuerzas internacionales, incluyendo organismos tales como la Comunidad y Mercado Común del Caribe (CARICOM), la OEA, ONU y la CEE que reaccionaban con creciente rechazo al régimen de facto de Puerto Príncipe.

La prensa estadounidense, en particular, se volvió más y más crítica hacia los militares golpistas refiriéndose a ellos como “*the most repugnant elite*”, exteriorizando su acentuada denuncia hacia las actitudes superconservadoras y las mentalidades anacrónicas de aquéllos.

En este marco, después de muchas tergiversaciones, los centros de decisión internacional imponen el aislamiento diplomático, la interrupción de la ayuda internacional y el bloqueo en el suministro de los productos petroleros. Si bien durante la administración de George Bush esta política punitiva, en general, pareció tener una cara oculta que alimentaba a través del Partido Republicano, del Pentágono y de la CIA, así como del gobierno dominicano las maniobras dilatorias de los golpistas. Tal política manifestó un giro con la llegada a la Casa Blanca del presidente William Clinton. Después de algunos

meses de vacilaciones, y de concesiones a las políticas anteriores de apoyo solapado a los golpistas, el cambio de línea se hizo sentir, en particular después de la violación por los militares haitianos de los acuerdos de la reunión de Governor's Island, organizada por la Casa Blanca entre el presidente Aristide y el general Cedras. Fue cuando Clinton llegó a la decisión clara de ejercer el "derecho de injerencia" en apoyo a la legitimidad republicana en Haití.

Así es que se llegó a una *Executive Order*, fechada el 6 de mayo de 1994, del presidente Clinton decretando el embargo comercial, petrolero y de armas contra el gobierno de Puerto Príncipe. Tal disposición ponía en dificultades al gobierno dominicano de Balaguer para que cesara su *boicot* al embargo y detuviera las entregas de petróleo a su vecino que desde meses antes venían enriqueciendo a importantes sectores dominantes de la República Dominicana. Asimismo, las gestiones de Estados Unidos en las Naciones Unidas llevaron al Consejo de Seguridad, en aplicación de las anteriores condenas al gobierno de facto de Haití a adoptar estrictas medidas punitivas, incluyendo la adhesión al embargo petrolero.

En tal gestión en favor del retorno a la democracia se destacaron además los países amigos de Haití: Canadá, Venezuela y Francia. Frente a la soberbia negativa de los militares haitianos a negociar su salida del poder y respetar las decisiones internacionales en favor del retorno del presidente Aristide, la proposición estadounidense en favor de una intervención militar en Haití, encontró su legitimación.

Los principales gobiernos del mundo apoyaron tal iniciativa que recibió el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, a través de su resolución 940 a finales de julio de 1994. América Latina, en general, se mostró reservada frente a esta decisión que le recordaba toda una práctica histórica. Invocando el principio de la no intervención, o dejando de expresarse en contra, algunos países se mostraron preocupados para que tal antecedente no fuera utilizado en una eventual acción contra Cuba...

En el logro de esta política de aislamiento y de repudio hacia el gobierno de Cedras, las comunidades haitianas del exterior jugaron

un destacado papel. Se movilizaron en multitudinarias manifestaciones en Nueva York, Washington, Montreal o Miami, haciendo una tarea de *lobby* y de denuncias que sensibilizaron a los gobiernos y a la opinión pública.

Frente al rechazo y a las medidas punitivas de la comunidad internacional, los golpistas levantaron la clásica bandera del nacionalismo de ultraderecha. Mediante manifestaciones, discursos delirantes, propaganda en la radio y en la televisión y a través de una red de periodistas de *lobbies* y congresistas republicanos a su servicio, los militares y sus partidarios más retrógrados se vistieron de defensores de la soberanía haitiana y hacían creer que la política internacional en contra de su régimen de fuerza estaba inspirada por motivos de carácter racista.

En ese contexto los golpistas crearon un frente político-paramilitar integrado por militares de civil y ex militares, el Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso de Haití (FRAPH). A la vez portavoz del ultranacionalismo y del fascismo, e instrumento del terror más despiadado, esta agrupación, que ocupaba las calles en manifestaciones llevadas a cabo por hombres armados, fue encabezada por Emmanuel Toto Constant, hijo de un ex general del ejército. Según las informaciones que se hicieron públicas posteriormente, era un agente de la CIA hasta el período anterior a la intervención actual en Haití según el más puro estilo de la Guerra Fría.

Por su parte, el pueblo haitiano, en su mayoría, captó desde el primer momento del golpe, que el apoyo internacional a la causa democrática era la principal garantía de la victoria de su batalla para la recuperación de la democracia; a partir de la cabal comprensión de esta inaudita situación, entendió también que la legitimidad de su causa y su determinación, podían perturbar la tradicional alianza entre las fuerzas internacionales, la oligarquía y su brazo militar. Entendió que la intervención extranjera promovida por Clinton y la ONU se hacía en contra de los enemigos de su libertad, encabezados por este ejército que era identificado, desde tiempo atrás, como una

fuerza de ocupación. Por lo tanto acogió a los contingentes armados de intervención como a unos aliados.

De hecho, la intervención de las fuerzas de las Naciones Unidas, integradas principalmente por militares estadounidenses, que tuvo lugar en Haití el 19 de septiembre de 1994, en su génesis, su forma, su contenido y su contexto temporal se diferencia de las intervenciones anteriores ocurridas en el Continente. En efecto, desde su mismo origen se desprendía del apoyo técnico de la ONU a la realización de elecciones libres en Haití en 1990, de la legitimidad incuestionada del mandato de Aristide así como de los nuevos compromisos asumidos por la OEA, la ONU y la mayor parte de los gobiernos del mundo en contra de los golpes de Estado y de los regímenes totalitarios.

En este sentido es preciso subrayar que la transición posttotalitaria en Haití no correspondía a ninguno de los esquemas aplicados con éxito en América del Sur con las llamadas “democracias restringidas” o “democracias tuteladas”, ni en Europa del Este con la panacea de la “economía de mercado”. El carácter poco ortodoxo, disidente, de esta transición, en particular el protagonismo popular en su conducción, así como su voluntad de ruptura con el *ancien régime*, no entraban en los moldes internacionalmente impuestos en el marco del Nuevo Orden Mundial. Por lo tanto, esta intervención, según el proyecto global del capitalismo mundial, tiende a absorber las “disfunciones” del proceso haitiano para hacer entrar al país en la lógica del sistema.

En cuanto a la forma que asumió esta acción, conviene señalar que consistió en un impresionante despliegue de fuerzas militares, de las más sofisticadas, con los medios publicitarios correspondientes. Resultó, en definitiva, una perfecta operación de guerra psicológica, con el impacto político máximo, planeada y ejecutada para alcanzar los resultados deseados, sin provocar ni un solo muerto, ni destrucción material. Liberó a Haití de los monstruos creados por el propio Frankenstein, quienes escapaban al control de su progenitor. El pueblo aplaudió a sus libertadores del momento. ¡Trago amargo

que abrió una herida en el corazón de esta nación nutrida históricamente por el sentido de su soberanía!

6. La refundación democrática

Este concepto que se sitúa en la dimensión histórica haitiana remite a nuestra experiencia como pueblo y como nación. Traduce un proceso de creación que viene experimentando el pueblo y la nación desde hace una década, caracterizado por fenómenos de ruptura, superación y renovación de importantes estructuras, instituciones y prácticas políticas sociales y culturales, que modifican el paso de la historia como ocurre en los períodos de reformas o de revolución.

Tres décadas duró el régimen de terror, personificado sucesivamente por los vitalicios presidentes François Duvalier y su heredero Jean Claude Duvalier. Destruyó los mismos cimientos del frágil edificio democrático. La Constitución quedó apartada, los sistemas parlamentario y judicial destrozados, la función pública sometida a las reglas del exclusivismo, del favoritismo y de la corrupción, el ejército fue “tontonmacoutizado”, las mismas mentalidades de la población perturbadas por el terror y la resignación. Fueron resucitadas las prácticas y deformaciones más arbitrarias del militarismo y del despotismo haitiano del siglo XIX. También el régimen hizo suyas las novedosas aportaciones del militarismo moderno influido por los principios del anticomunismo, de la doctrina de la Seguridad Nacional y de la guerra de baja intensidad. A todo ello se añadieron los efectos particularmente perversos y eficaces de un superpoder actuando con las armas más sofisticadas, en un país plagado de carencias, aislado entonces del mundo. El reino del terror se impuso hasta en los más mínimos detalles de la vida cotidiana que quedaron subordinados a los caprichos de un dictador enfermizo, el increíble doctor François Duvalier. Resultó de ello un sistema monstruoso, devorador del hombre y del ciudadano.

Al ser derrocado el joven dictador Jean Claude Duvalier, en 1986, por un sector del ejército, se continuó el viejo sistema por medio del mismo ejército cuyos integrantes, en todos los niveles, estaban infestados por los huevos del fascismo igual que lo estaba toda una generación de funcionarios e intelectuales, burgueses y pequeño-burgueses y aun numerosos elementos del sector popular, creados, condicionados y moldeados por el totalitarismo.

De ahí el carácter sumamente difícil de la transición en que intervinieron todos los remanentes civiles y militares del pasado para recuperar, frenar y desvirtuar el proceso. La lucha del pueblo, desahizo a numerosos de estos herederos del duvalierismo y culminó en 1990 con la elección de Jean Bertrand Aristide como presidente. Con ello se pareció llegar a la institucionalización del gobierno legítimo y darse inicio a la construcción del Estado de Derecho.

El golpe de Estado de septiembre de 1991, pretendió regresar al régimen totalitario en provecho de las minorías tradicionales. Una vez más el pueblo fue apartado del escenario y se impuso la ley de la fuerza. Los cuerpos fascistas del FRAPH tomaron el control de la calle, el terror. Hasta que por la acción conjugada del pueblo, en resistencia permanente y de la comunidad internacional se pusiera fin a esta empresa de restauración totalitaria y se regresara al reino de la legitimidad.

7. Reformas de base al sistema político

Al término de este largo proceso de repudio al totalitarismo y de recuperación de la legitimidad republicana, el retorno al orden constitucional, con la llegada el 15 de octubre de 1994 del presidente Aristide, marca una etapa de institucionalización democrática. Se inicia una etapa, de reforzamiento y de ampliación de los logros de esta transición, con connotadas rupturas e innovaciones en el sistema político y en la dinámica social que dan a este período las características de

un proceso de refundación democrática. En efecto, se producen diversos fenómenos de trascendencia tales como:

a) *Conquista de la ciudadanía y participación popular*

La participación cívica es, sin duda alguna, el espacio de conquista más relevante del pueblo actor que se sensibilizó en cuanto a la cuestión política y social. Al salir de la marginación política se organizó en incontables agrupaciones para hacer acta de soberanía, y para ser protagonista de manifestaciones y reivindicaciones a la vez locales y nacionales. Participó en las elecciones para escoger a sus representantes en opciones conscientes, y con una visión de la democracia adaptada a sus demandas concretas. Supo defender su opción electoral, denunciar las arbitrariedades y las injusticias propias del régimen militar y resistir a los impostores hasta el retorno al orden democrático; en esta experiencia se fue ampliando en el país el sentido pleno del papel de la comunidad y de cada ciudadano en la construcción de una sociedad más justa.

b) *La aplicación de la Constitución de 1987*

Esta Carta Magna, redactada por una Constituyente votada por el pueblo en forma entusiasta a los pocos meses del derrocamiento de la dictadura es una expresión del proyecto democrático. Su puesta en ejecución atrasada por la encontrada oposición a la misma de los militares, sólo empezó a darse cabalmente con el gobierno legítimo, en un primer momento durante los siete meses del gobierno Aristide, pero sobre todo con el retorno al poder del presidente en octubre de 1994. Sus implicaciones para la gestión democrática de la vida pública resultan de primera importancia. En particular, la implantación definitiva del Estado de Derecho, la transformación democrática de las fuerzas de seguridad, la descentralización y la autonomía municipal abren perspectivas sin precedente a la participación de la población en la gestión del Estado. Tales disposiciones cobran un particular significado teniendo en cuenta que las recientes elecciones municipales confieren un centenar de los 132 municipios al sector Lavalas, lo que orienta, desde los municipios, a la construcción

de la democracia y la conducción de la política económica desde los municipios.

c) *El desmantelamiento del ejército*

El desmantelamiento del ejército, en el curso del año 1995 constituye, sin duda alguna, una medida esencial para la transformación democrática del Estado. Empezó con la intervención de las fuerzas extranjeras que representó un golpe a la vez militar y psicológico contra las fuerzas armadas. El pueblo, consciente de ello, el mismo día empezó a ocupar y destruir numerosos puestos militares en todo el país, obligando a los militares a rendirse, dispersarse o replegarse algunos en Santo Domingo.

El ejército no pudo ser salvado pese a las proposiciones de ciertos sectores de la comunidad internacional, en particular del Pentágono, que abogaban por una fuerza reducida de unos 3 500 hombres. Al término de tres meses de su retorno, el presidente Aristide mediante decretos y decisiones administrativas de remoción, despidos, transferencias, jubilaciones y otras medidas había mandado a casa a la mayoría de los 7.500 miembros de esa institución, incluyendo a los jefes y cuadros intermedios. Sólo quedó activo un contingente seleccionado de unos 500 ex militares, exentos de cualquier acusación de arbitrariedades en su contra. Los mismos fueron integrados a una policía interina de 1.500 hombres (de los cuales un millar no procedía del ejército), que habrá de ser disuelta tan pronto como termine el entrenamiento de la nueva policía nacional.

Así pasó a la historia este, hasta entonces, omnipotente ejército, nacido de la intervención estadounidense de 1915 como “guardián del orden” a la vez fuerza de ocupación e instrumento de la oligarquía; cómplice y heredero del duvalierismo, llegó a convertirse en factor gobernante, *de jure* o de facto, según los vaivenes de la transición posduvalierista, alineándose tras los generales golpistas, contra el pueblo y contra la historia.

A partir de este desmembramiento, así como de las medidas legales que deberán confirmar su ocaso, privándole de presupuesto y de las demás provisiones para su funcionamiento, una disposición

constitucional deberá ser adoptada para consagrar su desaparición definitiva, haciendo de Haití, después de Costa Rica (1948) y de Panamá (1993) el tercer país del Continente en liberarse de sus fuerzas armadas.

d) *La formación de la nueva policía*

Paralelamente a la desaparición del ejército se fue integrando una Policía Nacional dependiente del Ministerio de la Justicia, medida inspirada en las disposiciones de la Constitución de 1987 en favor de la separación del ejército y de la policía.

Esta disposición se desprendió de la evolución de las fuerzas armadas posterior a 1986, que se convirtió en un inconfundible instrumento político del neodualismo por lo que tal separación se volvió una reivindicación compartida por amplios sectores de la población. Resultó evidente, al ocurrir el golpe de Estado, que debería desaparecer el binomio policía-ejército, confundido en una misma función de opresión y con las peores prácticas de gangsterismo.

La nueva policía tiene una vocación democrática. Sus integrantes empezaron a ser reclutados a principios de 1995 bajo convocatoria del Ministerio de la Justicia, y en el transcurso del año sus efectivos alcanzaron unos 5 mil elementos. Proviene, por lo general, de sectores populares y de los sectores medios más empobrecidos, escogidos según criterios de mérito, con nivel mínimo de bachillerato, que son formados y capacitados por personal proveniente de Estados Unidos, Francia y Canadá.

Por haber crecido en el ambiente de esta larga transición y por estar capacitados en el plano profesional, según criterios democráticos, es de esperar que integren una fuerza moderna al servicio de la democracia. Sin embargo, pese a la confianza que por lo general suscitan los miembros de esa policía entre la población, las condiciones de su formación suscitan fundados temores en cuanto a lo que puede ser su vocación nacional o sus comportamientos heredados del pasado; lo que señala como una de las tareas imprescindibles de la refundación democrática, la sistemática educación patriótica de

los integrantes de esta fuerza policiaca y su conversión a los valores del desarrollo nacional.

e) *La reconstrucción del cuerpo judicial*

Habiendo sido esta institución particularmente corroída en su estructura, su funcionamiento y su misma esencia, durante tres décadas, en ningún momento del proceso de transición pudo responder a sus responsabilidades constitucionales ni a las demandas de las mayorías en favor de la justicia y contra la impunidad y, mucho menos, a las exigencias de la nación en favor del Estado de Derecho.

De ahí el descrédito del aparato judicial y de los mismos abogados que quedaron identificados con la corrupción. Por ello se extendió entre la población la tendencia a recurrir a la justicia popular para castigar a los criminales políticos. Tal regla cobró aún mayor fuerza con el golpe de Estado, dada la impotencia del pueblo en aplicar la justicia contra sus verdugos.

Por lo anterior, se imponía una reforma profunda del sistema judicial, misma que empezó con la formación de una Academia de Magistratura y la aplicación de los dispositivos administrativos para la renovación del personal judicial, incluyendo a los jueces cuyos mecanismos de nombramiento quedaron fijados constitucionalmente. Tal reforma, proyectada hacia el futuro, implica la remoción de la mayor parte de los funcionarios, la modificación de las prácticas judiciales, la reforma de la legislación. Implica en el corto plazo que el sistema sea depurado de los elementos venenosos e incompetentes y que han desacreditado la justicia haitiana.

f) *Autonomía y participación municipal*

Dentro del proceso de refundación democrática le toca a las municipalidades desempeñar un papel de primer orden para hacer efectiva la descentralización y la desconcentración. Así se puede contribuir a la renovación de la provincia y la satisfacción de las demandas de la población, en cuanto a su participación en la gestión del Estado y a la promoción del desarrollo social y económico.

En esta etapa de la transición, significada por las elecciones municipales, el sector democrático y popular reunido bajo la bandera

Lavalas resultó mayoritario. Este acceso del pueblo al poder comunal coadyuvará a romper el viejo molde centralizador, de carácter burocrático y parasitario, en favor de la “República” de Puerto Príncipe, mismo que además de constituir uno de los cimientos del totalitarismo ha favorecido la canalización de la mayor parte de los recursos de la nación en detrimento de la provincia.

La autonomía comunal, como marco de desarrollo participativo, proporciona a la acción comunitaria, cooperativa y asociativa de las regiones un cuadro propicio a la realización de programas de desarrollo económico o bien de carácter social, en los campos de la salud y de la higiene pública, la alfabetización y la educación, la reforestación, la vivienda, la cultura, los deportes, etc. Asimismo ofrece un entorno apropiado para un uso más eficaz y racional de los recursos del país y de los de la cooperación descentralizada y no gubernamental proveniente del extranjero. Proporciona así los pequeños motores locales, en los Consejos de Administración de la Sección Comunal (CASEC) o en las comunas, para la impulsión de la democracia y del desarrollo, sirviendo así de base y asiento a otras iniciativas de carácter regional o nacional, estimuladas por el gobierno central o el capital privado...

8. Un Parlamento para la democracia

El Parlamento renovado en 1995, en unas elecciones realizadas bajo la supervisión y la asistencia técnica de las Naciones Unidas, quedó integrado de modo ampliamente mayoritario por los sectores democrático-populares, integrados en la OPL. Entre estos representantes figuran cuadros políticos jóvenes, con un promedio de edad de menos de 30 años, procedentes de las organizaciones y del movimiento religioso de base, de los animadores sociales, de círculos profesionales que por lo general han surgido a la lucha social en esta última década. Así, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, igual que entre los municipios quedan relegados a una

representación ínfima los sectores tradicionales de la oligarquía terrateniente y comerciante y aquellos identificados con el duvalierismo y el militarismo.

Tal modificación en la composición del Parlamento representa un cambio significativo e histórico en la relación de poder en el seno del gobierno haitiano, en donde desde siempre la oligarquía ha estado dominando, pasándose los notables en las regiones, las diputaciones y las senadurías de padre a hijo en función de su capacidad de clientelismo o de sus vínculos con el gobierno central o el poder militar.

Los demás sectores políticos, no afines a la corriente Lavalas y a la vocación democrática como los partidos socialdemócratas CONACOM y PANPRA, así como el FNCD, fijándose de modo excesivo en las facetas populistas y carismáticas del presidente Aristide no supieron entender la amplitud y profundidad del movimiento popular que, más allá del fenómeno Aristide, trae consigo el movimiento Lavalas. Ni tampoco su nivel de conciencia y capacidad de organización. Al adoptar, de modo variado, entre los tres, actitudes ambiguas frente al golpe de Estado y el gobierno militar, se enajenaron parte de su credibilidad. Además no supieron, como lo hiciera la OPL, montar una estructura organizada en toda la nación. Por lo que abordaron el período electoral, impresionados por la política de coalición de Lavalas, preocupados por lo que percibían como los peligros del oficialismo, vencidos de antemano, sin hacer verdadera campaña, divididos, sin preocuparse en buscar alianzas entre ellos. Más bien, frente a los resultados previsibles, y a los de la primera vuelta, llamaron al *boicot* del proceso electoral, cuando éste pese a las fallas técnicas y las irregularidades que registró, fue validado por más de dos millones de electores (las dos terceras partes del cuerpo electoral) y reconocido como legítimo por la comunidad internacional y la gran mayoría de los observadores que estuvieron presentes en Haití, en esa ocasión.

La presencia mayoritaria de los candidatos de la OPL, en el Parlamento asegura de hecho la continuidad en el gobierno de esta coalición y proyecta tal continuidad hacia el futuro. A esto se añade la victoria en las elecciones presidenciales de René Preval, ex primer

ministro del presidente Aristide, conocido por su proximidad a éste y su identificación al movimiento Lavalas.

La victoria de Preval asegura la prolongación de los próximos cinco años de la experiencia gubernamental empezada en 1990 por el triunfo de Jean Bertrand Aristide, el primer mandatario elegido democráticamente en Haití, ofreciendo una posibilidad más para que se cumpla el proyecto de renovación del Estado y de modernización del sistema que significó su gobierno.

Él mismo, en el balance de sus realizaciones, ofrece como hecho relevante algunas medidas de profundización del proceso democrático, durante los dos períodos de su ejercicio real de gobierno, correspondientes a los siete meses previos al golpe de Estado y los 15 meses sucesivos al retorno de exilio. Y dentro de esta profundización el desmantelamiento del ejército merece un lugar de proyección histórica, mismo que da todo su sentido a la administración de Aristide. Ésta, por lo general, quedó dramáticamente truncada por los 32 meses de interrupción y de desastre que significó el desgobierno de los militares con su cortejo del exilio, represión, embargo y la propia intervención extranjera. Pero el retorno del presidente, en sí, constituyó, en definitiva una victoria de la legitimidad de la causa, de la resistencia del pueblo y de la batalla diplomática llevada a cabo con admirable tesón por el presidente Aristide.

Este retorno, pese a que se realizara en el marco de una intervención extranjera, contribuyó a crear las condiciones para que la resistencia del pueblo se transformara en un nuevo impulso histórico. Este impulso de la acción de las mayorías en favor del cambio robusteció la lucha del pueblo para reconquistar el espacio democrático, resucitar o reestructurar las agrupaciones de la sociedad civil, reforzar la Organización Política Lavalas que se había constituido, en las duras condiciones creadas por el régimen militar, en el principal instrumento organizado de la lucha política en el país.

Estas condiciones y el provecho racional que el pueblo hiciera de ellas garantizaron la participación de las mayorías en las elecciones municipales, legislativas y presidenciales del año 1995. La acción Y

presencia organizativa de la OPL, la acertada unidad en una coalición *Bo Tab La* (alrededor de la mesa) de los diversos ramales del amplio movimiento Lavalas, así como el apoyo del presidente Aristide a los candidatos de esta coalición, aseguraron la victoria de Lavalas. Esta se convirtió en la fuerza mayoritaria del congreso y de las municipalidades. Y en el centro de esta coalición la Organización Política Lavalas que ha emergido como el partido mayoritario del Parlamento.

9. Un gobierno para el desarrollo económico y social

Esta evolución del proceso haitiano y el panorama de las fuerzas políticas en la presente fase del proceso subrayan lo difícil del mismo que ha quedado marcado, pese a su carácter global pacífico, por un balance impresionante de víctimas. En términos económico y social se ha saldado por estragos importantes: las inversiones se han parado, se ha dado la huida de capitales y de recursos humanos especializados, se han ido a la quiebra muchas instituciones, la miseria de las mayorías ha aumentado, al mismo tiempo que el apetito de unos cuantos, se ha reducido al mínimo la capacidad del Estado en intervenir en la economía y la sociedad y se ha acelerado su propia crisis. La obsesión política de la sociedad, en su lucha de una década en favor de la democracia, postergó el interés efectivo por los valores y demandas económicas, acumulando los sueños y reivindicaciones hacia la satisfacción de los mismos hacia el futuro.

De hecho al término de un difícil cambio democrático, la nación demanda cambios y mejoras económicas y sociales concretas. Estas exigencias constituyen el principal desafío del momento, una exigencia histórica sin la satisfacción de la cual todo lo demás puede quedar incierto y amenazado. Comenzar el arranque económico para esta era de cambio es condición *sine qua non* para asegurar la continuidad del proceso de institucionalización y culminar una década de turbulencia marcada por la irrupción de las mayorías en el

escenario político. Pero si la transición política resultó difícil y azarosa, mayores dificultades aún se proyectan en lo que debe ser la transformación económica y social de este país, para hacer pasar siquiera a las mayorías de la miseria abyecta a la pobreza digna. Un desafío que requiere visión, pragmatismo y un gran esfuerzo colectivo.

En la medida en que en los próximos meses se logre asegurar la estabilidad política y la gobernabilidad, promover el repunte económico y lograr la salida del país de la fuerza multinacional de la ONU, se podrá proyectar un futuro mejor para la construcción de la nación, siempre y cuando estos impresionantes avances políticos vayan acompañados de un desarrollo económico sensible, sostenido en la justicia social. Pero desde ahora se vislumbra el significado histórico de ese proceso, de trascendental importancia para la nación haitiana, así como el balance de la experiencia gubernamental de Jean Bertrand Aristide, los que se integran en el histórico combate del pueblo haitiano por la democracia y una vida mejor.

Capítulo 8

En busca de una vía propia

Haití llama la atención en este fin de siglo y milenio por su situación singular de subdesarrollo y opresión que contrasta con un entorno donde el progreso acelerado de la ciencia y la tecnología (los extraordinarios logros en materia de producción, consumo, educación y comunicación), se unen a una suerte de conciencia universal en favor de los derechos humanos. Ambos factores son los fundamentos actuales que contribuyen para que la democracia sea el marco rector de las relaciones entre Estado y sociedad, y de la convivencia internacional.

En efecto, es notoria la brecha existente entre este país y el continente. La debilidad orgánica de sus estructuras e instituciones, expresada por fenómenos múltiples de degradación, ha dado lugar a un cuadro realmente dramático que trasciende las fronteras de la isla. Por ello se viene planteando, entre los analistas, el problema que supone la capacidad de la nación para salir de su *impasse* y adecuarse a los imperativos del mundo contemporáneo, cuestionándose, igualmente, su viabilidad, por ser un país pequeño, subdesarrollado en extremo y con pocos recursos disponibles o conocidos.

Tales dudas llegan incluso a reactivar ciertos estereotipos. De ellos se desprenden los hechos de injerencia directa y aun los planes de tutela, que acompañan el apoyo internacional a la causa de la democracia en Haití. Tales planes invocan intenciones, imperativos o

finalidades de carácter humanitario, sin embargo, parecen más bien inspirados por impulsos imperiales que pretenden hacer entrar a este país, demasiado singular, en el molde uniformador programado dentro del Nuevo Orden Internacional, con todos los componentes económicos, financieros, políticos e ideológicos ya conocidos.

La misma realidad de Haití, y toda la historia de su “encuentro” con el universo colonial-capitalista, señalan que su singularidad es, a la vez, producto y expresión de una personalidad histórico-nacional y antropológico-cultural propia. Dicha nacionalidad ha nacido de las formas particulares de sus relaciones históricas con el mundo occidental, cristiano, blanco, mercantilista, colonialista y racista. Por lo tanto, ha de ser tomada en cuenta para cualquier empresa renovadora de convivencia ciudadana democrática, organización socioeconómica, desarrollo y adecuación de esta nación a las exigencias del tiempo presente.

1. La disidencia como expresión nacional

La presencia de Haití en el mundo alcanza una proyección inusitada a partir de la elección a la Presidencia, en 1990, de Jean Bertrand Aristide.

Esta sorprendente victoria resultó ser una anomalía que alteró los planes elaborados en el plano internacional a favor de un candidato del *establishment*. Expresaba una opción soberana, afirmación de inconformidad y disidencia de un país conocido, más bien, por su infinita pobreza. El triunfo de Aristide adquiere mayor significado porque surge en un momento en que el conservadurismo está consagrado en el mundo con el desmoronamiento del socialismo en Europa del Este y el advenimiento de la hegemonía absoluta, en el terreno militar, de Estados Unidos. Un momento en el que el modelo neoliberal en lo económico y la democracia tutelada se imponen como fórmula de conducción del Estado por las élites tecnocrático-financieras formadas, para tal efecto, en la metrópolis.

A esta proyección internacional por la elección democrática de Aristide hay que sumar, con posterioridad, un nuevo acontecimiento que aumenta el nivel de conocimiento y preocupación por la realidad de Haití: el golpe de Estado contra el presidente constitucionalmente elegido. Este hecho revelará la violencia de la oligarquía, así como lo irreconciliable de la confrontación sociopolítica en el escenario caribeño, donde, a diferencia de Centroamérica, no existirá conflicto armado alguno, ni se darán los componentes tradicionales, en términos conceptuales e ideológicos, de las luchas sociales.

Desde entonces la crisis, en su extrapolación internacional, invadirá el territorio de la política interna norteamericana. La cuestión de los refugiados y la problemática del retorno de Aristide se tornan de interés nacional estadounidense, incidiendo en las campañas electorales de George Bush y William Clinton y en las relaciones entre la Casa Blanca, la CIA y el Pentágono.

Una manifestación más de esta singularidad se da con la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU (7 de mayo de 1994), de imponer el embargo total contra el régimen de facto, favoreciendo el retorno al poder del presidente legítimamente elegido en las urnas. En efecto, jamás la ONU había intervenido de esta forma en pro de la democracia, y mucho menos en un escenario donde no existe conflicto armado. Tampoco se había visto, desde las sanciones contra el *apartheid*, a un régimen integrado por aliados tradicionales de Washington merecer tales condenas oficiales que culminan con medidas punitivas efectivas, susceptibles de aplicación a un golpe militar en el Caribe.

Así, en este cuadro poco común, se perfiló una posible intervención militar de restablecimiento de la democracia, bajo el mando norteamericano o bajo la forma de una acción multilateral. Tal hecho se daría en aplicación del “derecho de injerencia” que reclaman las grandes potencias, resucitando viejas prácticas imperiales. De ser efectiva esta intervención, se pondría en evidencia la incapacidad de la ONU y de Estados Unidos de asegurar, por medios políticos, la solución de viejos problemas derivados de la Guerra Fría y del mismo

apoyo de Occidente a aquellas dictaduras que sostuvo. Esa intervención hundiría la dignidad nacional constituyendo una dramática expresión del fracaso de los sectores dominantes haitianos, reflejando, al mismo tiempo, una incapacidad colectiva de asegurar la gestión de la transición del totalitarismo a la democracia y el éxito de una empresa de participación popular, avalada por un escrutinio democrático en el que amplias categorías sociales invirtieron sacrificios, innovaciones y esperanzas.

En esta nueva coyuntura mundial, Haití, golpeado por una profunda crisis acentuada por la formal tutelarización ejercida bajo el manto del “derecho de injerencia”, se alejará aún más de las demás naciones del continente, en un momento en que se plantean su participación en la mundialización en términos de integración económica y de federalización.

En esta dramática encrucijada, para entender mejor el presente y participar en la construcción del futuro, hace falta volver la mirada a la historia. De hecho, por haber surgido hace dos siglos de un proceso de fundación singular, Haití ha tenido, desde entonces, una trayectoria propia. Su organización social, funcionamiento colectivo, evolución política y configuración cultural-nacional muestran rasgos que aminoran aquellos factores constituyentes que comparte con sus vecinos más próximos en lo geográfico o en el nivel de desarrollo. Aspectos que han intervenido, en grados diferentes, en la conformación global de estas sociedades. Entre ellos destacan:

a) El papel del ejército convertido desde los orígenes del Estado nación en instrumento político-militar de opresión;

b) El lugar histórico de la oligarquía que combina los medios de control estatal y de opresión económica, generando un verdadero colonialismo interno que intenta, lo más posible, prolongar su dominación.

c) El tipo de relación subalterna con el mercado mundial y el sistema capitalista que ha condicionado las estructuras productivas, instituciones jurídico-políticas, así como las mentalidades. Condicionante que cobra en la región del Caribe y Centroamérica, debido

al intervencionismo estadounidense, mayor intensidad, a partir de la economía de moderna implantación, las inversiones de capitales y la imposición de formas organizativas estatales.

Estos elementos comunes han influido en los rasgos de carácter endógeno de los pueblos, grupos sociales, productores, consumidores y ciudadanos. Se han articulado a los poderosos influjos del sistema mundial generando procesos que contribuyen a crear semejanzas en las estructuras productivas y en los mecanismos de organización y vida colectiva. Así, se incorporan estas naciones de modo creciente en el movimiento general del capitalismo, en sus diversas etapas desde hace quinientos años.

Asimismo, en el terreno político-ideológico, los modelos impuestos desde el centro hacia la periferia del sistema han llegado paulatinamente a normar las relaciones entre la sociedad, el Estado y los ciudadanos. Lo mismo ocurre con el proceso de industrialización, intensificación de la agricultura, urbanización, educación y salud pública, sufragio universal y otras normas del liberalismo, la democracia y modernización, traducido en logros existenciales, avances civilizatorios, corrientes de pensamiento y pautas de comportamiento. Estos avances se han institucionalizado, articulándose en la lógica del desarrollo desigual del capitalismo.

Haití, por muchos aspectos de su desarrollo, parece no haber sido motivado para el logro de las metas aquí mencionadas. Muchos de estos objetivos figuran en discursos y proyectos de los grupos de poder, resultando evidente que se han mostrado incapaces de alcanzar los mismos. Lo anterior demuestra el fracaso de un sistema incapaz de ingresar en las corrientes del capitalismo y alcanzar las pautas civilizatorias de mundo contemporáneo, cualquiera que sea el enfoque analítico, conceptual e ideológico que se defienda.

Las distancias son enormes entre Haití y el mundo contemporáneo, las velocidades tan diferentes, el lastre histórico tan fuerte que cualquier proyecto tendente a equiparar este país en los próximos decenios a los de desarrollo medio del continente podría parecernos una utopía. Entre Puerto Príncipe y Miami, Montreal, Santo

Domingo o Pointe à Pitre la distancia no es kilométrica, ni en horas de vuelo. En muchos aspectos es la separación que podría existir entre un planeta y otro, entre un siglo y el anterior. Por todo, para seguir existiendo Haití, país de embrujos y muertos-vivientes, seis millones de hombres y de mujeres buscan la felicidad, pese a todo, cultivando la utopía de la cual han nacido. Utopía que se nutre en su pasado y que seguirá haciéndolo en el futuro.

2. Asumir nuestra individualidad

Los mitos fundadores de la nación son tan complejos, sugerentes y vivos que podrían insertarse en la leyenda, la inventiva o la épica de cualquier pueblo perteneciente a este continente o cualquier lugar del mundo. Sus estampas recorren hechos históricos insoslayables en su carácter mítico: antes existía el paraíso terrenal en la tierra de los taínos, en una península de montañas y llanuras con vegetación exuberante, y luego llegó Colón a la isla y asentó la doctrina de su cruz y su espada: ahí se da el primer establecimiento colonial europeo en el Nuevo Mundo, primera rebelión de indios en Las Américas y la primera tierra de arribo de los africanos, donde la esclavitud alcanza una intensidad inigualada, con casi medio millón de esclavos de plantación, que convierte esta media isla en la primera y más rica colonia de exportación del siglo XVIII. La llamada “Perla de las Antillas” en los tiempos de oro de la monarquía francesa, se convirtió en el receptáculo privilegiado de las ideas libertarias e igualitarias de la Revolución francesa. Ahí encuentran un campo fértil la opresión y la discriminación que alimentarán la primera rebelión generalizada de esclavos, los que venciendo en el plano militar a sus amos, proclamarán la Primera República Negra del mundo y la primera nación independiente de la América Latina.

No faltan en este cuadro, en que mitos, realidades y leyendas se confunden, las fuerzas de redención de tipo mágico espiritual, la

resurrección de la vieja cultura africana del recuerdo (selvas y grandes llanuras de libertad), ni la Teología de la Liberación repudiando los valores de la religión impuesta y guiando la acción profética de los sacerdotes vudús, sembradores de rebelión como Boukman y Makandal. Tampoco desaparecen los jefes militares que vencieron en este escenario de conflictos intercoloniales a las tropas reales de España, a las de Su Majestad Británica, o a las poderosas legiones de Napoleón. Personajes gigantescos como Toussaint Louverture, Jean Jacques Dessalines, Alexandre Petion o Henri Christophe, resultan ser a la vez sorprendentes estrategas, fundadores de nación, estadistas con una justa visión del mundo de su tiempo en los albores del siglo XIX, ideólogos y arquitectos con proyectos de autonomía o revolución libertadora; iniciadores del republicanismo, así como del panamericanismo auténtico que contribuyó a la gesta de Francisco de Miranda y Simón Bolívar.

Tal vez el haitiano haya vivido, a partir de esta geohistoria excepcional, cierta esquizofrenia, que se expresa hoy en día por una referencia excesiva, casi obsesiva, del intelectual o del simple ciudadano a la historia. La omnipresencia de un pasado glorioso parece resolver en su contemplación los fracasos de hoy. Tal vez esta referencia obsesiva a la “victoria sobre los blancos” haya tenido efectos descolonizadores. Puede ser que haya contribuido a la resistencia contra la aculturización que se manifiesta con tanta fuerza en la conciencia colectiva y en los mismos comportamientos de los actores y sujetos sociales. Pero lo más significativo de esta aventura histórica traumatizante es que este pueblo ha tenido que inventar un modelo de sociedad diferente de todo lo que le pretendía imponer y pudiera conocer la generación de los fundadores.

En el proceso de formación de la nación se combinaron un conjunto heterogéneo de elementos disímiles: fragmentos reconstruidos de sociedades africanas, moldes organizativos y espirituales de la economía de plantación colonial-esclavista, una manufactura preindustrial, experiencias del cimarronaje, aportes técnico-culturales de los “jardines de esclavos” (cuna de la economía de

subsistencia) y reminiscencias y valores monárquicos del ordenamiento sociojurídico de carácter feudal de la metrópoli *d'ancien régime*. Innovaciones, mutaciones, ruptura y reordenamiento llegados de la Francia revolucionaria, que repercutieron en la colonia con una fuerza tal que se confunden en una guerra de clases, de razas, de colores, y de conflictos internacionales, una revolución de liberación nacional, con acento no solo anticolonial sino antiblanco y anticapitalista.

Este molde unificador no logra promover el reordenamiento de la sociedad. Afirmándose, *vis à vis* con los países de la región, los rasgos de la singularidad haitiana en lo económico, lo social, lo cultural y lo político en un complejo tejido de particularidades estructurales e institucionales, expresión generadora de resistencia al impacto-atracción que ejerce la dependencia imperial. Si bien dicha resistencia queda registrada desde el polo dominante, en el mismo escenario haitiano no fue percibida ni mucho menos tomada en cuenta, por los grupos de poder subalternos. Frente a los imperativos de la modernidad no llegaron a definir política alguna de índole económica o educativa que, teniendo en cuenta estas realidades, permitiese al país sacar provecho al máximo de estos influjos modernizadores.

Es significativo que fuera sólo en el terreno etnológico, con el marxista Jacques Roumain y el antropólogo Jean Price Mars donde se dio una tentativa de definición de la personalidad nacional cultural haitiana, frente a la intervención estadounidense y sus consecuencias. Sin embargo, es ésta la línea de reflexión que hay en la creación de propuestas susceptibles de coadyuvar a reconocer las especificidades haitianas, en aras de la adecuación de las doctrinas o políticas globales a la realidad concreta de Haití.

La élite negra en busca del poder y fundamento ideológico para su dominación desde 1946, y concretamente con François Duvalier en 1957, fue desviando el nacionalismo cultural hacia absurdas justificaciones ideológicas fundadas en el antimulatismo y la negritud.

Será a partir de aquí, a medida que el poder de esta oligarquía negra se consolida mediante el terror y la corrupción, cuando los conceptos de raza, color, referencias al negrismo, identidad etnocultural y nacionalismo cultural se vuelven parte del instrumental de manipulación política. Tales armas ideológicas fueron utilizadas por estos estratos oligárquicos y de clase media negra para legitimar su monopolio gubernamental cara a cara de los mulatos, haciendo gala, además de un nacionalismo de fachada hacia todos aquellos que cuestionaban la evidente ilegitimidad de este poder y su estrepitoso fracaso.

La misma naturaleza de la dictadura duvalierista nos deja un balance de incapacidad en todos los campos, agravándose los problemas sociales y económicos del país. Se reforzó la dependencia extranjera en materias de presupuesto y de ayuda alimentaria, acentuándose el desarrollo desigual de Haití respecto a sus vecinos. Lo anterior pone en evidencia su singularidad frente a otros regímenes totalitarios latinoamericanos, desde Trujillo en la República Dominicana (1930-1960) hasta Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay en los años setenta y ochenta.

Tales especificidades del desarrollo del subdesarrollo cobran dimensiones trágicas en términos de degradación de la producción agrícola y de los niveles de vida, hundiendo a las mayorías sociales en la miseria extrema. Mientras tanto, ninguna propuesta de carácter desarrollista, saldrá de las esferas tecnocráticas o empresariales con miras a limitar la catástrofe. Sólo los organismos técnicos internacionales, alarmados por esta degradación acelerada han buscado adecuar su terapia clásica a una situación que, a todas luces, se queda fuera del alcance de su recetario y de la misma lógica de la mundialización. Dentro de esta perspectiva la “comunidad internacional” acompañó, a su manera, el proceso democrático haitiano, reconociendo en la democracia y renovación del Estado el marco indispensable para modernizar la sociedad y acelerar su incorporación en la globalización.

3. La democracia como utopía

A partir de 1986, con los espacios de libertad conquistados, se cuestiona multidimensionalmente el sistema. Este cuestionamiento, que implicó una crítica a la acción privada en sus expresiones políticas, técnicas y éticas, fue acompañado de la elaboración de múltiples propuestas alternativas provenientes de la sociedad civil.

Tal elaboración propositiva irá en el sentido de las reivindicaciones de las mayorías en favor de consolidar un Estado de Derecho, punto de partida de cambios institucionales, participación de la sociedad y afirmación de la dignidad nacional. Dichas propuestas, variadas en su alcance, se fueron integrando a la incesante búsqueda de un camino propio, en un espacio de justicia e igualdad social. En esta tarea histórica de inventiva y renovada capacidad de resistencia del pueblo, podemos subrayar las siguientes contribuciones:

Las que se desprenden de la Constitución de 1987, que refleja un conjunto de ideas-fuerza surgidas de la euforia libertaria de 1986, expresando el sueño democrático de los elementos más avanzados de la sociedad y la difícil adecuación entre los principios republicanos y una realidad social dominada por poderosos intereses oligárquicos.

La Carta Magna da fuerza normativa a determinadas demandas que después de tres décadas de despotismo, toman la dirección de la igualdad la participación y la centralización política del poder. En su preámbulo señala el propósito de “eliminar todas las formas de discriminación entre las poblaciones de las ciudades y del campo, aceptar la comunidad de lenguas y de cultura y de instaurar, mediante una descentralización efectiva, un régimen gubernamental fundamentado en la concertación y participación en las decisiones que involucra la vida nacional”. Y más allá de las tradicionales fórmulas que garantizan la vida republicana y las funciones del Estado, introduce algunas medidas institucionales tendentes a asegurar un ordenamiento socialdemocrático. Entre estas innovaciones conviene destacar:

- La creación de la función de primer ministro, responsable del gobierno, que ha de ser escogido por el presidente de la República, con el acuerdo del Parlamento, fortaleciéndolo y evitando así el tradicional poder omnipotencial del presidente.
- La definición que se hace de la República, en su carácter cooperativista, libre, democrático y social, y la importancia que se otorga a los derechos fundamentales: la vida, la salud, la educación.
- El reconocimiento del créole como “lengua común de los haitianos” y su promoción, junto al francés, como lenguas oficiales de la República, lo que constituye una inédita aportación de alcance democrático, participativo e igualitario.
- La institucionalización, a partir de elecciones de los Consejos de Administración de las Secciones Comunales (CASEC) como sustituto de la “sección rural”, núcleo tradicional de la opresión militar-feudal del campesinado.
- Implementar un esquema de descentralización que favorece la participación del mundo rural, mediante asambleas de ciudadanos que han de funcionar desde el CASEC, hasta el nivel de la Comuna y del Departamento.
- El reconocimiento de las libertades individuales, la necesaria protección del ciudadano, la educación, la autonomía universitaria, y la realización de una reforma agraria; todos ellos elementos de fortalecimiento de la sociedad civil y de promoción del desarrollo nacional.
- El paso de la policía a la jurisdicción del Ministerio de Justicia, después de su separación del ejército, cuya profesionalización se plantea sin mayor definición.
- Estrictas disposiciones contra la impunidad y el fraude electoral que niegan, por un plazo de diez años, a los sicarios del duvalierismo el derecho de ser susceptibles de una función electiva y llama a la sociedad civil, a través de sus instituciones, a constituir

el Consejo Electoral Provisional, en cuya cobertura entra la función de garantizar la celebración de las primeras elecciones democráticas del período.

4. Las propuestas del movimiento democrático y popular

La conciencia colectiva y la voluntad de participación de la sociedad civil se traducen en denuncias, peticiones y propuestas de cambio. Dicha voluntad de transformación conlleva una gama de proposiciones de reformas y medidas institucionales que cubre toda la escala de posiciones político-ideológicas. Estas se verán influidas por el humanismo y el idealismo cristiano (tal vez la corriente hegemónica en el proceso), el jacobinismo –efecto del radicalismo excluyente y represivo del sistema–, el socialismo utópico, el populismo o el patriotismo; influidas también por el retraso ideológico y falta de cultura política propias de este movimiento renovador. Corrientes y expresiones propositivas diversas que convergen en el combate por “el cambio”, vocablo recurrente de amplio e indefinido contenido, que inspira este período histórico.

Entre las agrupaciones más fértiles, que se darán a conocer en debates, emisiones radiofónicas y documentos figuran: el Movimiento Campesino de Papay, la Conferencia Haitiana de Religiosos, la Asociación Nacional de Agrónomos, la Confederación Nacional de Educadores y las comunidades eclesiales de base.

Asimismo, las propuestas para mejorar las condiciones de vida y promover cambios en la institución estatal fueron incontables: alfabetizar al pueblo universalizando los servicios de educación; no pagar impuestos para contrarrestar los privilegios fiscales de los poderosos, la corrupción y la extorsión; realizar una reforma agraria y promover la participación de agrupaciones de base en tareas comunitarias de construcción de infraestructuras y servicios, con la asistencia del Estado y tecnologías apropiadas; dar a la reforma

del ejército un contenido democrático mediante su depuración, otorgándole tareas de defensa civil y en pro del desarrollo, dejando a la policía la función de garantizar el orden social.

No faltó la consigna de “poder popular”, y la tendencia a despreciar o banalizar cualquier acercamiento técnico y teórico sobre las formas de organización social y política. El “basismo”, en sus expresiones más inorgánicas, alimentó propuestas originales de solución, así como la búsqueda de respuestas alternativas a problemas concretos del sector popular. También será una fuente de populismo y radicalidad, un freno a la reflexión más serena y propuestas situadas en una perspectiva más amplia, incorporando a los análisis las peculiaridades de la realidad nacional e internacional.

5. Las aportaciones del carisma

Dichas aportaciones tienen su origen en el basismo y en las corrientes más populistas con las que se identificaba Jean Bertrand Aristide, convirtiéndose en una fuerza catalizadora del cambio, a partir de octubre de 1990. Fue en la promoción de su candidatura a la presidencia cuando surge como expresión electoral del amplio movimiento democrático-popular del último quinquenio. Aristide y el movimiento Lavalas pasan a representar una alternativa de poder y son expresión de legitimidad constitucional, adecuando, además, dichas propuestas a una mejor y más amplia visión de la realidad nacional e internacional. La participación y la justicia son los fundamentos de consignas específicas que expresan una visión y práctica del poder.

Aristide, una vez proclamado, luchará por la participación del pueblo, como actor social, en todos los niveles de la vida política y económica. En ello radica el secreto de su victoria electoral: crear en el pueblo y llamarlo a construir su futuro, movilizándose para lograr la realización de sus reivindicaciones, defender sus conquistas, resolver sus problemas locales, en definitiva, participar activamente en la construcción del país. Poseedor de una capacidad de comprensión

del sentido común del pueblo, su discurso lo transforma en líder carismático, pudiendo aglutinar y entender, en octubre de 1990, que este mismo pueblo, partícipe de combates reivindicativos y cuestionadores del Estado, podía también movilizarse en torno a las elecciones y apoderarse de esta arma para potenciar su participación política y promover la democracia. Y así fue: bajo el influjo de su carisma, el pueblo hizo suyas estas elecciones.

Es preciso subrayar que este concepto de participación-movilización no se acompañó de una concepción organizativa capaz de dar mayor cohesión y coherencia a la acción popular. Más bien se divorcia de cualquier visión de la organización, lo que disminuye en parte, al pueblo, como actor social autónomo, su papel movilizador y educador.

Los tópicos de justicia y humanismo, preocupación y propuesta de Aristide, teólogo de la liberación, se expresan en el uso de las parábolas populares, recordando que “todo hombre es un hombre” para fustigar a “las piedras en el agua que ignoran los sufrimientos de las piedras expuestas al sol”, o bien para referirse a los “que están debajo de la mesa y que han de acceder a estar en torno de la mesa”.

Como presidente electo democráticamente, Jean Bertrand Aristide pasó a simbolizar la legitimidad y preeminencia del derecho sobre la fuerza. Serán dichos valores y opción política los que determinen su perseverante lucha diplomática, de dimensión mundial, por deshacer los proyectos de los militares y de la oligarquía haitiana en aras de imponer al mundo *le fait accompli*. Así, logrará sobrevivir en su legitimidad presidencial, pese a la acción de poderosos enemigos externos, como el gobierno de Joaquín Balaguer, el Vaticano e importantes sectores de poder en Estados Unidos, representados en las figuras del ex presidente George Bush, Henry Kissinger, Jean Kirkpatrick y Elliot Abrams.

La defensa que supo promover en amplios sectores internacionales en favor del derecho y la legitimidad, en cierta medida personificados en su figura (poco identificada con el *establishment*), constituye una aportación histórica que, más allá de la causa haitiana, refuerza

la batalla por dar validez incuestionable a los resultados democráticos salidos del ejercicio del sufragio universal. También abogará por la definición de un nuevo papel, por parte de instancias internacionales, de las justas causas de soberanía e independencia nacional. Instancias tradicionalmente al servicio sólo de los intereses de las grandes potencias. La dimensión internacional de Haití crece, así, partiendo de la conciencia universal crítica en su combate por la libertad humana.

Contribuirán a una mayor consistencia del proyecto, *la reflexión y los aportes intelectuales de profesionales y técnicos*, partidarios del cambio, identificados con la nación y, en ciertos casos, sensibilizados por la catástrofe nacional, en sus más humillantes expresiones. Con su participación, se fue constituyendo un *corpus* de propuestas integradas en un programa de reformas e innovaciones en aras de una sociedad más igualitaria y justa, acorde con el desarrollo humano. Se propondrán acercamientos científicos novedosos para algunas reformas y cambios que reclamaban las bases respecto a la alfabetización, la reforma agraria, el empleo, la participación popular, etcétera.

De esta elaboración teórica y programática destacan los documentos *La Chance qui passe, La chance à prendre*, escritos preprogramáticos para la campaña de Aristide, en cuya preparación participa un equipo multidisciplinario de profesionales. Igualmente cobra relevancia el texto de alcance crítico y autocrítico *Pour convertir nos rêves en victoires* de la Organización Política Lavalas,⁴ hecho público a principios de 1992 y la propuesta por un gobierno de concordia nacional *Pour un nouveau départ*, de febrero de 1993.

Estas aportaciones, en cierta medida, dan mayor coherencia técnica y ensanchan los horizontes del proyecto democrático popular, orientando sus programas económico-sociales, adecuándolos a imperativos profesionales. Sin embargo, poca incidencia tendrán en

⁴ En este volumen aparece en forma anexa el Programa de Gobierno 1996 de la Organización Política Lavalas.

las decisiones gubernamentales o en la rectificación de estilos y visiones de poder, propios del liderazgo carismático de Aristide y de importantes sectores del movimiento, los cuales quedaron condicionados por las tendencias a la espontaneidad, al pragmatismo y al mesianismo.

En conclusión, la experiencia demostraría que el conjunto de propuestas emergentes del proceso de transición y el proyecto por la renovación democrática del sistema no llegan a contribuir abiertamente en la realización del proyecto de cambio. Así, el sesgo histórico que pudiera haber disminuido los costos de la transición, asegurando el desarrollo de las metas de transformación social, que guiaron los combates de las mayorías, pudo ser evitado. El sueño democrático quedó truncado.

6. Cultivar espacios alternativos

Haití llega a una encrucijada en que su propia existencia como nación resulta comprometida. A menudo se plantea la cuestión de su viabilidad. La nación quedó marcada por la sangrienta empresa de restauración totalitaria que significó una implacable guerra de la oligarquía civil y militar contra el pueblo. Las relaciones de fuerzas sociales y políticas han cambiado, la sociedad más que nunca está partida en dos. La sociedad civil se ha debilitado. El movimiento democrático ha perdido su ímpetu y el pueblo parte de la confianza que tenía en su acción. Los prolongados efectos de esta crisis, las sanciones internacionales y la economía nacional, junto a la totalidad de la sociedad, resultan afectadas más que nunca por las carencias y el hambre, con lo que la pauperización y miseria extremas alcanzan niveles más degradantes. Los sistemas de alianzas internacionales de la oligarquía han quedado quebrados por las fuertes contradicciones entre ésta y la comunidad internacional, proyectándose el control imperial, de manera más global que nunca, en forma de un protectorado instaurado bajo mandato de las Naciones Unidas. El proyecto

democrático popular resulta limitado tanto en su dimensión participativa y en su accionar como en la búsqueda de una resistencia eficaz frente a las imposiciones neoliberales.

Tales son, a corto plazo, los datos objetivos de la situación. Sus proyecciones a mediano plazo y en el futuro representan un desafío para la nación, el pueblo, y los sectores democráticos que siguen trabajando por el cambio, pese a todo, con la determinación secular de emancipación que abra las alamedas de la democracia.

Los imperativos del entorno internacional y de tutela se hacen sentir con claridad. Se trata de crear condiciones para neutralizar la disidencia haitiana y hacer ingresar al país en el molde de la democracia restringida y la globalización. Para lograrlo, además de los contingentes libertadores o democratizadores de la MINUHA, están sobre el “caso haitiano” incontables especialistas de instituciones políticas de ultramar, consejeros en derechos humanos y expertos en desarrollo provenientes no sólo de Washington, sino también de los escenarios fronterizos o calientes de la Guerra Fría, de África, para no descuidar las raíces negras, de América Latina, particularmente de Argentina y Chile, campos de prueba exitosos de la democracia tutelada, y del Pacífico para transmitir la experiencia de los llamados “tigres asiáticos”.

En lo político, el proyecto pretende reducir y rectificar la desbordante democracia de amplia participación popular en un sistema de democracia restringida. Para ello es preciso reducir el poder de los militares y politiqueros de la “extrema derecha” y crear un “centrismo político” con los líderes y pequeños partidos conservadores que apoyaron a la dictadura militar; pero sobre todo se busca fraccionar el movimiento democrático popular, desestructurándolo para presentarlo como extrema izquierda. A partir de este proyecto, se procedería a reformar el ejército, patrocinar elecciones legislativas bajo control y formar un gobierno moderado de centro con una presencia simbólica del presidente Aristide, hasta llegar a nuevas elecciones presidenciales para resolver esta “disfunción sistémica”.

En materia de gestión económica, la internacionalización se acompaña de los paquetes correspondientes, en cuanto a créditos, macroproyectos, mercados, contratos, modelos de crecimiento, recetas de política económica y financiera acuñados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Todo, combinando la asistencia internacional con los estímulos e inversiones en el sector privado, particularmente en las maquiladoras, que han de volverse más competitivas a raíz de la devaluación. Se trata de un plan de choque, inspirado en los modelos de ajuste estructural. Modelos tendentes a reordenar la economía promoviendo una acumulación salvaje o bien, en el mejor de los casos construir un proyecto dirigido a promover una línea desarrollista de redistribución, susceptible de dinamizar, por medios exógenos, la economía, saneando las finanzas y la moneda e intentando reconstruir la administración pública y rehacer algunas infraestructuras y servicios básicos.

Sin embargo, dadas las particularidades socioeconómicas de este país de menor desarrollo, gravemente desangrado por la crisis, es necesario preguntarse si tal proyecto, saliendo de recetarios ya clásicos, llegaría a introducir a Haití en una dinámica de crecimiento sostenido. Lo más probable es que dé lugar a un fenómeno de modernización de carácter sectorial, que no llegaría a constituirse en locomotora de la economía global. Sería un logro necesario pero no suficiente, que no baste para resolver los espacios preponderantes de su desarrollo, atraso estructural, economía de subsistencia popular informal, contrabando y cimarronaje económico. Menos aún será capaz de evitar la resistencia cultural a la estandarización; los desfases tecnológicos con relación al funcionamiento del mercado y la economía contemporánea y la disidencia y heterodoxia que caracterizan la economía y la sociedad haitiana.

El proyecto de inserción de Haití en la globalización productiva ha de tomar en cuenta esta realidad y trazar sus lineamientos desde el punto de vista haitiano y la lógica de su heterogeneidad, así como de la brecha histórico-tecnológica que la separa del mundo que le

rodea. Este enfoque diferencial o complementario es imprescindible para hacer frente a un desafío recurrente, de carácter estructural, institucional y psicosocial.

Es muy poco probable que Haití llegue a ser, en un período histórico previsible, un país industrial, una potencia agrícola, centro financiero o generador de servicios técnicos especializados. La tarea parece imposible si se plantea tal objetivo en términos de recortar las distancias que lo separan de los países más próximos en términos de ingreso per cápita. Cabe recordar que en 1991 mientras el Producto Interno Bruto (PIB) de Haití (con 6,6 millones de habitantes), era de 1.700 millones de dólares (a precios de 1990); Honduras, con la misma población que Haití, presentó un PIB de 3.400 millones de dólares (mdd); y República Dominicana, con 7,5 millones de habitantes, un PIB de 6.500 mdd. Además, los niveles de ingreso per cápita de estos países eran respectivamente de 260, 679 y 900 dólares, a precios de 1990.⁵ Los datos anteriores muestran que equiparar Haití con Honduras, que ostenta un Producto Nacional Bruto (PNB) dos veces superior y un PIB per cápita casi tres veces superior, implicaría realizar inversiones cuantiosas en la próxima década para garantizar tasas de crecimiento sostenible de la economía haitiana. De forma complementaria habría que aplicar una vigorosa política para cambiar la dinámica del país en cuanto a producción, exportación, capacidad para importar y realizar obras de infraestructuras, y de servicios como educación y urbanización.

Así, visto el proceso desde los ángulos del desarrollo clásico cepalino o neoliberal, este modesto objetivo de equipararse con el vecino más próximo en nivel de subdesarrollo parece sobrepasar las posibilidades de crear, captar o recibir recursos de cualquier fuente de financiamiento local e internacional. Lograr lo anterior sólo es posible si se piensa en bajar los niveles de salarios a un punto extremo, haciendo concordar las concepciones de las ventajas comparativas,

⁵ Datos tomados del *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, edición 1996* (CEPAL, 1997: 192-195).

puestas en la oferta, con los factores de estabilidad política y paz social.

Dentro de un programa de esta índole se puede soñar con hacer de Haití el lugar más competitivo del Caribe, en donde podrían fluir en los próximos años y decenios tal cantidad de capitales que harían de esta media isla un rugiente “tigre asiático”. El sueño de ser un “tigre asiático” se plantea aquí de modo tal que no depende de la sola voluntad de sus programadores, ni de la capacidad de un gobierno democrático, sino que está determinado por la capacidad ya impuesta de una globalización de los agentes y factores económicos que han creado sus moldes estructurales, sus canales de intercambio y sus mecanismos financieros y tecnológicos. Y bien puede ser que en este terreno el desfase sea ya irrecuperable, y que Haití haya perdido el tren y se haya quedado, para bien o mal, fuera de las corrientes de la globalización. Por lo tanto hace falta concebir y enfocar una estrategia de acción socioeconómica desde otro ángulo, el correspondiente a un enfoque de emergencia nacional e internacional.

De hecho es la realidad específica que, en los extramuros de la “economía clásica”, se plantea Haití en el campo de la salud, educación, vivienda, reforestación, seguridad alimentaria y empleo, lo que requiere ser abordado con inteligencia y creatividad. Un enfoque que persigue determinados objetivos de alcance nacional para mejorar, de modo sensible, las condiciones de vida del pueblo, “haciendo pasar a Haití de la miseria abyecta a la pobreza digna”, y evitar la emigración masiva ofreciendo a los jóvenes empleos y expectativas, es base y entorno de un desarrollo fundado en la promoción de la economía para el hombre y en un desarrollo con equidad.

Es necesaria una estrategia que privilegie campos objetivos de consenso, en los que resulte factible combinar cuatro variables ineludibles para el desarrollo de este país: 1) la participación popular; 2) la reforma del Estado por la vía de un gobierno consciente dispuesto a poner los medios para ello; 3) un sector privado incentivado en el plan político y económico, comprendiendo que sus intereses, su supervivencia, dependen de su capacidad de modernizar

este país y de autotransformarse, como por ejemplo lo vienen intentando los blancos de África del Sur; y 4) la acción de la comunidad internacional, aplicando una asistencia técnica y financiera no convencional, adecuada a la realidad heterogénea de Haití, por la vía de aportaciones de las grandes agencias, de las organizaciones no gubernamentales, humanitarias y religiosas, de los gobiernos y cooperación Sur-Sur.

Acompañando esta opción, es preciso concebir y poner en marcha algunas líneas de acción constructiva y medidas prácticas que movilicen recursos de capital de procedencia diversa, así como todos los recursos humanos disponibles no sólo en Haití, sino entre los amigos internacionales. Se trata de dar impulso y valorizar una civilización de la sencillez, afirmando la propia personalidad de nuestro país y su cultura, defensora del medio ambiente, con capacidad para reactivar la vida rural y la microeconomía de subsistencia haciendo revivir la vida aldeana y los “jardines”, promotora de pequeñas instalaciones agroindustriales y fomento de la dignidad humana.

La cooperación internacional debe servir para:

- a. Estimular el desarrollo comunitario y el cooperativismo y dar un encuadre técnico y crediticio a la economía informal, orientando la artesanía y la pequeña industria hacia nuevas pautas de comercialización y de consumo local.
- b. Dar un contenido participativo, práctico y eficaz a la descentralización, favorecer la acción generadora de bienes y servicios de la economía popular, coadyuvar al reordenamiento del territorio y la promoción de la economía regional y provincial.
- c. Dar uso al recurso de la “mano de obra” que posee Haití en forma plétorica, ya que el 60% de la población económicamente activa carece de empleo. Pudiendo enfrenar el reto del cambio democrático y social-económico con el convencimiento de que éste es el recurso más rentable de que dispone el país.

- d. Dar a la economía informal y popular los impulsos más eficaces en materia de crédito, asistencia técnica, cooperativista, y conectar los mercados locales y externos.
- e. Canalizar hacia fines productivos y de desarrollo los ahorros, la inversión productiva, el trabajo, y la competencia del millón y medio de haitianos, trabajadores y profesionales que viven en la emigración y constituyen una inestimable reserva de motivación, capitales y técnica, susceptible de contribuir de modo eficaz en el desarrollo del país.
- f. Aprovechar de modo sistemático algunos campos de actividades en que Haití tiene ventajas comparativas excepcionales, en talento y excelencia profesional. A estos fines, convertir el país en un inmenso taller-escuela de arte popular, pintura, artesanía, música y gastronomía en que las especificidades nacionales podrían ser valorizadas para la conquista de un amplio mercado.
- g. Promover, en medio de esa convivencialidad humana y este espacio tan particular que caracteriza a Haití, un turismo ecológico y naturalista impregnado de cultura caribeña que canalice una categoría de visitantes poco atraídos o hastiados por los grandes centros estereotipados del turismo internacional.
- h. Poner en marcha, con creatividad y audacia, un sistema de educación, capacitación y formación técnica que hace suyas las experiencias más positivas hechas en este campo en escala internacional, que introduzca y adecue a las necesidades del desarrollo los adelantos tecnológicos más apropiados en materia de radiocomunicación, televisión, electrónica, cibernética, energía, agricultura y biotecnología que pueden recortar la distancia al desarrollo para una sociedad tan rezagada.
- i. Cultivar los espacios alternativos que tienen que encontrar o crear, en términos de producción, de exportación y de mercado nuestros empresarios, nuestros artesanos, nuestros agricultores en busca de su lugar en el tiempo presente y el futuro por venir.

Capítulo 9

A manera de conclusión: construcción democrática y refundación nacional en Haití⁶

En cada período histórico y en cada contexto etnosociológico, el combate permanente de la humanidad por la sobrevivencia, la libertad y la justicia, cobra características nuevas y rasgos específicos en su contenido y su forma. Esta verdad tiene su ilustración en la evolución de América Latina y el Caribe, en la riqueza y la sorprendente diversidad de sus escenarios políticos e ideológicos que constituyen el aporte de la región al mundo contemporáneo. Esta variedad, inspirada por las modalidades más diversas de la acción social, está a la medida de la inventiva de los pueblos, de las necesidades de la vida material, y de los fenómenos de conciencia acordes con la vivencia de las comunidades.

La trayectoria singular de Haití como nación caribeña afrolatinoamericana expresa a la vez la unidad de nuestro continente y su diversidad. Haití fue el primer punto de encuentro violento entre el antiguo mundo y el nuevo, y el primer terreno en donde se llevó a cabo la empresa de construcción nacional iniciada hace ya cinco siglos. Como escenario inicial de los fenómenos de

⁶ Esta conclusión fue escrita por el autor en 1997. Traducida del francés por Marcos Cueva Perus.

conquista, colonización y resistencia, simboliza y prefigura a la vez la tragedia de los “pueblos trasplantados” de los cuales habla Darcy Ribeiro, así como la voluntad de crear un espacio de encuentro.

De tal suerte que no se puede dibujar el perfil de América en el mapa de la historia del mundo sin tomar en cuenta esta matriz caribeña que es Haití. La rebelión, la independencia y la disidencia histórica en este país han inspirado el concepto mismo y las primeras prácticas de solidaridad continental en el umbral del siglo XIX, cuando Toussaint Louverture, Dessalines y Petion, al comprender la dimensión internacional de la revolución haitiana, decidieron contribuir a la independencia del Caribe y de la América continental.

Desde esta perspectiva, y a pesar de las vicisitudes de su vida nacional, Haití constituye una referencia obligada, que sólo se parangona, en la evolución del continente, con la Revolución cubana. De algún modo, Haití ha dejado su sello en la inspiración y en la vida de los libertadores Miranda y Bolívar, ha influido en los sueños de la Gran Colombia y de la América española, en aquellos tiempos de fundación nacional. Y quizás también lo haya dejado en la vocación internacionalista de Cuba, que, un siglo y medio más tarde y con su destino solidario, ha retomado la audaz experiencia anticolonialista y antiesclavista de la primera nación negra del mundo, ofreciendo su apoyo a las luchas sociales y emancipadoras de nuestra región.

Este curioso paralelismo de los hechos históricos, rico en enseñanzas, recuerda la naturaleza de los castigos a los cuales se exponen los pioneros de la emancipación social; sin su generosidad, el camino de la humanidad hacia la libertad y el progreso habría sido todavía más intrincado.

Al salir de las servidumbres más degradantes de la dominación imperial y oligárquica, los países de América Latina y el Caribe han llegado, en esta segunda mitad del siglo XX, a una permanente redefinición de su realidad. Han sabido cuestionar las normas

tradicionales y los parámetros de su propia evolución; han empezado a revisar los proyectos de sociedad, las relaciones sociales y los modelos de acumulación que limitaban su evolución, así como los fundamentos de su sistema político y de su inserción internacional.

La democracia ha adquirido una importancia creciente en esta dinámica social, con principios rectores y rasgos particulares en cada uno de nuestros países. Se ha convertido en fórmula, a la vez que en modelo, encrucijada y paradigma de la organización política, en fuente de observancia de los derechos humanos y en marco obligado para la renovación social y el desarrollo económico. En sus diversas formas de concreción, y con mayor o menor consenso, ha comenzado así a volverse portadora de los intereses, las frustraciones, las aspiraciones y las conquistas de los pueblos.

En su famoso libro *La democracia en México* el eminente sociólogo mexicano Pablo González Casanova (1965) ya había subrayado, a principios de los años sesenta, el valor intrínseco y el papel de la democracia como *leitmotiv* potente y condición primera para la conquista de la ciudadanía, así como para la renovación de los sistemas políticos en México y en el conjunto del continente.

Después de los años sesenta y setenta, marcados por la violencia de los regímenes autoritarios y militaristas, y después de los años ochenta en América Central, caracterizados por la dureza de los combates por la democracia, el desarrollo continuo de las luchas sociales y la solidaridad internacional han llevado a amplios sectores a buscar el consenso político para lograr el respeto de los derechos humanos y el establecimiento del Estado de Derecho. Han surgido así formas híbridas de “democracia restringida”, “democracia tutelada” o “democracia negociada” que, bajo empujes reivindicativos de diversa naturaleza, han conquistado espacios de libertad y participación popular cada vez más importantes.

1. Contenido y forma de la revolución democrática

En Haití, dadas las condiciones de conquista de las libertades públicas posteriores al régimen de Duvalier (una dictadura de larga duración y de carácter particularmente retrógrado), la agenda de la construcción de la democracia abierta por la lucha de masas en 1986 abarca una infinidad de tareas, y tiene asimismo alcances inconmensurables, tanto en el plano local como en el continental.

Consiste en una empresa de refundación nacional, identificada de hecho con una verdadera revolución democrática. Saca provecho de los nuevos espacios de negociación y de tolerancia internacionales que se abrieron a raíz del fin de la Guerra Fría, y aprovecha a fondo los ajustes y las contradicciones del nuevo orden mundial.

Luego del golpe de Estado de 1991 contra el gobierno democráticamente electo de Jean Bertrand Aristide, la comunidad internacional fue llevada a hacer causa común con el pueblo en lucha para el regreso del presidente, por “lo que se dio seguimiento a la demanda de este último de una intervención de fuerzas militares internacionales bajo” la bandera de la ONU, con el fin expulsar a los militares del poder y restaurar la democracia.

En este contexto, la total deriva política y la pérdida de legitimidad de los militares hicieron posible la disolución del ejército, al mismo tiempo que eran neutralizados los mecanismos tradicionales de control e intimidación.

Por otra parte, la participación popular en el ejercicio del poder debilitó en forma considerable los medios de acción política de la oligarquía; introdujo nuevos sujetos históricos en la gestión del Parlamento, del Ejecutivo, la administración municipal y el mundo rural; volvió efectivamente soberano el voto popular, al convertir al pueblo en actor y al abrir a las mayorías el acceso a la ciudadanía; y contribuyó así a la edificación y al reforzamiento de las instituciones democráticas. La revolución democrática emprendió la reforma del Estado, con el fin de renovar las instituciones y asegurar su

funcionamiento eficaz. Se trata de hecho de reconstruir el Estado y de reforzar su autoridad, para que cumpla el papel que le corresponde en una sociedad poco estructurada, en la cual tantas tareas y servicios dependen de la gestión pública.

El proceso de cambio implica toda una política de descentralización, la cual constituye uno de los desafíos más audaces de este proyecto. La población de las comunas y de los campos reclama su participación en los beneficios sociales, lo mismo que en la edificación y la gestión de los servicios, a partir de la autonomía comunal y de las nuevas funciones atribuidas a las comunidades territoriales.

En esta perspectiva de acceso de todos a los mismos derechos y a condiciones de existencia mejores, la instauración del créole como lengua oficial y universal en el territorio haitiano, representa un adelanto democrático particularmente significativo. Este hecho cultural, de sentido igualitario y creador, abre en efecto para el conjunto de la población posibilidades de expresión y participación sin precedentes.

En este nuevo marco, las instituciones y las leyes han ido adaptándose a los requerimientos del desarrollo de las fuerzas productivas, de integración de una juventud ávida de saber al mercado de trabajo, y de modernización –prudente– de una sociedad arcaica, con más de un siglo de atraso respecto del tiempo y el espacio de la región.

El proceso de cambio ha ido creando en la población la conciencia de la necesidad de pelear por la promoción del desarrollo humano, con el fin de poner a disposición de los haitianos servicios de salud, educación y vivienda. Ha contribuido a desencadenar un esfuerzo colectivo en el marco de esta obra civilizadora, que busca proporcionar educación fundamental y formación técnica, difundir los valores de la tolerancia y la dignidad humanas, y promover la cultura nacional popular resaltando las riquezas de nuestra comunidad, con demasiada frecuencia desconocidas y marginadas a causa de nuestras miserias materiales.

Se ha ido generalizando la conciencia de la necesidad de poner a disposición de una población de más de siete millones de habitantes

—que viven en su mayoría fuera de las conquistas del siglo XX— condiciones materiales y espirituales que les aseguren una vida digna y que, al asumir su personalidad individual y etnocultural, les permitan insertarse en el marco global de la mundialización en vísperas del tercer milenio.

La etapa histórica que conduce a esta renovación del sistema político y social parte de la voluntad de cambio de una comunidad que aspira al desarrollo económico; corresponde también a la búsqueda del bienestar de los hombres, las mujeres y los niños de esta comunidad, y a la búsqueda de formas de organización social que garanticen la participación popular, la igualdad y la justicia. La agenda de esta empresa de renovación conlleva sin duda el trastrocamiento de las prácticas y las ideas de esta sociedad. La democracia ha despertado tantas esperanzas en la vida de la gente que, en la práctica, sus objetivos tendrán que ser modestos pero palpables, a fin de que la utopía encerrada en este período alcance la altura de los poderosos *leitmotiv* que suscita en torno al desarrollo humano. En su camino, la democracia ha demostrado que puede florecer incluso en condiciones de miseria extrema y de analfabetismo. Se trata de un fenómeno de conciencia, de búsqueda de justicia y de esperanza humana... Sin embargo, para crecer y florecer, debe recibir alimento terrestre.

2. Institucionalización y defensa de los principios democráticos

La libertad conquistada en Haití ha creado ya nuevas reglas y un nivel de consentimiento ilimitado para los derechos cívicos y políticos del conjunto de la población. Ha introducido la noción de ética en la política, favoreciendo la lucha contra la corrupción y la transa. Ha ayudado a crear nuevas instituciones —como la policía—, y a introducir medidas de enderezamiento y reforma en otras. Ha contribuido también a cuestionar de manera constante las insuficiencias

y perversiones del sistema, en particular en lo que concierne a la impunidad.

También se han dado pasos hacia la reforma judicial, exigida por la población. Dichos pasos alcanzan la administración de la justicia y la puesta en marcha de un nuevo ordenamiento jurídico para la construcción democrática.

La consolidación del Estado de Derecho y el proceso de institucionalización en su conjunto han frenado las tendencias populistas y el liderazgo personalista y carismático, propias de nuestro atraso histórico. Ha vuelto efectivo el mandato del Parlamento, consagrado por la Constitución de 1987, de velar por el control del Ejecutivo. Tiende también a garantizar la integridad de la función del primer ministro que, al compartir el Poder Ejecutivo con el presidente, limita el control tradicional y omnipotente del presidencialismo.

Conviene subrayar que, en todo momento, la brecha por cubrir es enorme: después de un régimen de terror de larga duración, fundado en las prácticas más atrasadas y sofisticadas de la dominación, no es fácil llegar a la gestión correcta de un espacio de libertad tan considerable y tan poco común, incluso en ciertos regímenes democráticos tradicionales o consolidados.

Este desafío es todavía más difícil de encarar habida cuenta del desfase entre las posibilidades materiales, la limitación de los recursos disponibles y la conciencia de los ciudadanos que protestan contra las penurias y la injusticia social, y que aspiran a un bienestar generalizado y a un desarrollo autónomo. La apuesta es arriesgada para una transición, que busca aprovechar, y a la vez evitar, los riesgos de las autopistas del neoliberalismo y de la mundialización, y que incursiona sin descanso por los atajos del ingenio y la creatividad popular nacional. Más allá de estas conquistas, sin embargo, se evidencian cada vez más los límites de las *solas* pulsiones transformadoras, en lo que tienen de reivindicativo, humanista y renovador. Si bien tales pulsiones pudieron poner en movimiento a la mayoría de los haitianos, al obligar a ciertos sectores de la élite a modificar su

enfoque sobre los asuntos del poder, difícilmente pueden garantizar la continuidad del cambio. Menos aún pueden asegurar la reforma del Estado, promover la descentralización y reconstituir el tejido social y los vínculos de solidaridad que necesita la sociedad civil para participar en esta empresa de construcción nacional. Dichas pulsiones no bastan para movilizar los recursos de capital y orientar las decisiones técnicas indispensables para la modernización. Tampoco pueden estimular la producción y el desarrollo de una sociedad que vive por debajo del umbral de pobreza y que expresa una necesidad imperativa de bienestar.

Ante estas limitaciones, resulta cada vez más clara la necesidad de un acuerdo nacional con los demás sectores sociales, en particular con las fuerzas del capital, para actuar contra el hambre, contra las grandes penurias y a favor del desarrollo nacional.

Para lograrlo, se han dado pasos en materia de educación cívica y de defensa y difusión de los principios democráticos, así como para hacer comprender que es preciso echar mano de todos los recursos actuales de la técnica y el ingenio popular para educar y formar al pueblo. Todo esto para aliviar la carga del atraso secular y de tres décadas de totalitarismo sobre el sistema de valores, las mentalidades y la cultura política.

3. Las etapas de construcción de la democracia

Hoy más que nunca, las decisiones políticas tienen un peso determinante para hacer frente a los imperativos de continuidad del proceso de consolidación de las instituciones y de mejoramiento de las condiciones de vida de la población. De ahí la importancia que cobran los problemas de organización, de liderazgo, programáticos, de opciones y prioridades, que se le plantean hoy al proceso haitiano en el marco de la construcción democrática y de esta transición de una gran riqueza por su contenido.

En efecto, durante toda una etapa de esta misma transición, la cuestión esencial ha consistido en luchar contra el totalitarismo duvalierista y sus derivaciones militar-macoutistas.

Al mismo tiempo, las expresiones espontáneas del movimiento reivindicativo se fueron organizando en el plano local, sectorial, sindical o campesino, hasta transformarse en un potente movimiento social por el cambio y la democracia.

Luego vino, a partir de 1990, la expresión político-electoral de este movimiento, que tomó el nombre de Lavalas, bajo el liderazgo mesiánico de un sacerdote de la “pequeña Iglesia”.

Así fue cómo, a partir de las primeras elecciones libres de Haití, el gobierno de siete meses de Aristide quiso llevar a cabo, de manera intuitiva y anárquica, algunas de las reivindicaciones del movimiento.

El golpe de Estado del 30 de septiembre de 1991, el gobierno militar de tres años, y la resistencia patriótica que provocaron, reforzaron la unidad popular para lograr el regreso a la democracia, por lo que se abrió una etapa de estructuración del movimiento democrático y popular.

En este contexto, al mismo tiempo que se desplegaban el liderazgo de Aristide y su experiencia gubernamental populista (octubre de 1995/febrero de 1996), comenzaba el proceso de institucionalización, con las elecciones municipales, legislativas y presidenciales de 1995.

Una tendencia estructurada del movimiento, denominada Organización Política Lavalas (OPL), comenzó a afirmarse a partir de la formación del Parlamento y las alcaldías. La OPL, con mayoría en el Parlamento, comenzó a proyectarse como un partido democrático y popular, decidido a llevar a cabo las tareas de la institucionalización y la modernización del sistema político y social.

Desde entonces, ha correspondido al presidente René Preval, en tanto continuador ideológico y político de la obra de Aristide, la misión de asegurar la continuidad de este poder Lavalas, al mismo tiempo que se deslindaba oficialmente de ciertas prácticas y declaraciones, con el objeto de ser más fácilmente aceptado por diversos sectores de oposición o por aquellos que tuvieran posiciones críticas

respecto de su antecesor; y también con el de facilitar las negociaciones con los acreedores. En estas condiciones, el presidente tuvo que plegarse a las nuevas normas democráticas y constitucionales consagradas por un Parlamento autónomo, que tiene la facultad de elegir al primer ministro encargado de dirigir al gobierno. De esta nueva institución se hizo cargo Rosny Smarth, proveniente de la OPL. Para llevar a cabo las reformas que las circunstancias exigían, emprendió una política de equilibrio ante la necesidad de formar un gobierno que reuniera las diversas tendencias de Lavalas.

Sin embargo, la tarea del primer ministro y su colaboración con el presidente se volvieron cada vez más difíciles, en razón de las disyuntivas políticas que, más allá de los discursos y las consignas sobre la unidad, abarcan a las concepciones del poder y de su gestión, los problemas de control del aparato gubernamental los de modernización de las prácticas políticas y las opciones programáticas que inspiran las medidas pragmáticas o improvisadas para el consumo populista.

Tales opciones se vuelven particularmente significativas en un momento en que los constreñimientos de la mundialización y del neoliberalismo conducen a tomar decisiones económicas importantes. La modernización del Estado, inspirada en la necesidad de reformar instituciones arcaicas y corroídas por la corrupción, implica recortes de personal y cambios en la gestión de las empresas estatales en el marco de una política pública financiada por los acreedores internacionales. Por otra parte, se imponen decisiones sobre los servicios sociales, la promoción de la educación y la salud, y formas de redistribución del ingreso que correspondan a las exigencias y las necesidades de la población más pobre, particularmente vulnerable al aumento del costo de la vida y al desempleo. Así pues, las reformas económicas y la modernización, indispensables para asegurar la ayuda internacional para el desarrollo, no dejaron de provocar desconfianza en la población, hasta volver frágiles las conquistas políticas. En estas condiciones, la construcción de la democracia pasa por opciones difíciles entre la rutina, la subordinación ciega,

la demagogia, o la búsqueda valiente de un estilo de desarrollo que corresponda a las necesidades de nuestra sociedad.

4. La difícil gestión de la disyuntiva entre populismo y democracia

La disyuntiva que enfrenta el movimiento Lavalas en su fase actual expresa una verdadera diferenciación en las concepciones políticas, los principios de organización y de gestión pública, y en la actitud respecto del pueblo. Y esta diferenciación atañe a fin de cuentas a los fundamentos mismos de la institucionalización de la democracia y del cambio efectivo.

Estas contradicciones se volvieron claramente perceptibles, tanto para el conjunto de la nación como para los sectores amigos e interesados del extranjero, cuando, el 6 de abril de 1997, se llevaron a cabo elecciones para la designación de un tercio del Senado y de los delegados de las asambleas territoriales. Los actos de violencia y el fraude durante el escrutinio, y el hecho de que tres de los nueve candidatos del sector Aristide al Senado hayan sido antiguos oficiales del ejército vinieron a demostrar que dos opciones cada vez más diferenciadas aspiraban a la dirección y a la orientación futura del movimiento.

Esta realidad es el fruto del desarrollo reciente. En efecto, como suele suceder en la historia de las sociedades, al cabo de una larga transición, marcada por turbulencias y por el cuestionamiento de los sistemas políticos y sociales, se hace sentir la creciente necesidad de reforzar la autoridad del Estado. Este reforzamiento ¿se logrará con base en la legitimidad y la legalidad, o de acuerdo con la lógica de un poder autoritario? Frente a esta interrogante y a las opciones que implica, se ha ido produciendo una bifurcación histórica dentro del movimiento Lavalas, que ocupa hoy la escena política en Haití.

Una de las tendencias en marcha corresponde a un proyecto de carácter autoritario, cuyos rasgos se han vuelto evidentes con la

operación antidemocrática del fraude electoral del 6 de abril. Se trata de un proyecto fundado en el liderazgo de Aristide, que se perfila en las derivaciones de su experiencia gubernamental y en su intención declarada de volver al poder en el 2001; de un proyecto de carácter conservador que incluye los restos del ejército y los aparatos paramilitares, potentes medios financieros provenientes del control del aparato de Estado, así como la manipulación ideológica y propagandística de carácter populista y nacionalista. Bajo la cobertura del pragmatismo, este proyecto aspira a evadir el régimen de derecho, con tal de reconstituir un sistema de poder que garantice al jefe carismático, a la oligarquía más retrógrada y a un círculo restringido de lucRADORES las mejores condiciones para la reproducción de sus privilegios.

Por otro lado, se perfila un proyecto democrático y popular de nuevo cuño que se presenta como una alternativa ante la necesidad de transformar la sociedad y construir un sistema político que corresponDA a los principios democráticos. Este proyecto quiere romper con las viejas prácticas del poder tradicional y oligárquico y fundar su acción en la participación consciente de los ciudadanos, llamados a contribuir a la construcción nacional en el marco de un pacto social. Se trata de un proyecto concebido y puesto en marcha por una formación política con vocación plural y moderna, cuyo programa pretende servir de base para concitar el apoyo de la población. Este proyecto de modernización y desarrollo se adapta a las exigencias de la mundialización, y pretende al mismo tiempo construir un espacio de autonomía que corresponDA a la realidad económica, social y cultural del país.

Ante esta encrucijada, si ninguno de los proyectos surgidos del movimiento histórico de 1986 logra imponerse por su capacidad de convencimiento, ni organizar y garantizar su propia gestión; si ninguna de las dos corrientes logra negociar sobre bases programáticas un acuerdo político que asegure la rectificación de las tendencias más negativas que se están dibujando, podría ocurrir un colapso dramático de este movimiento Lavalas que, en 1990, creara las bases

de una unidad sin precedente del pueblo haitiano, y despertara la ilusión de una oportunidad única, o la de una utopía por construir.

Un fracaso de esta naturaleza pondría en peligro el movimiento popular y democrático y la gobernabilidad del sistema, y podría abrir el camino a intentos de restauración de las fuerzas más retrógradas del pasado. Podría comprometer incluso la sobrevivencia de la nación, ya flagelada en su soberanía, y su capacidad para asegurar el bienestar de la población, llevando al fracaso un proyecto histórico vigente desde hace dos siglos. La democracia en Haití constituye el contexto político de la refundación nacional. En su afán por ser lo más participativa posible, sin exclusividad ni exclusión, dicha democracia busca convocar al mayor número de haitianos para la construcción económica, social y humana que debe hacer de nuestro país una verdadera nación. Constituye una garantía para la consolidación de las instituciones y para el éxito de cualquier programa de desarrollo duradero que quiera asegurar el progreso sostenido del país y el florecimiento de diversos sectores económicos interesados en sustentar la acción y el porvenir de nuestra comunidad y la integración de nuestro país.

Sólo la democracia puede crear las condiciones para que se desarrolle a plenitud el sector público, cuya modernización es garantía de eficacia en la gestión y la promoción de las infraestructuras y los servicios sociales básicos; para que se desarrolle también el sector privado, cuyas iniciativas productivas y comerciales deben contribuir a crear las bases de una economía nacional de servicios y de exportación; y por último, para que se desarrolle la economía popular, campesina, informal y comunitaria, llamada a alcanzar un dinamismo que contribuya a la producción nacional y a la seguridad alimentaria, en el marco de la descentralización y mediante una política sistemática de crédito y apoyo técnico.

El entorno socioeconómico de la construcción de la democracia se convierte, así pues, en una apuesta y una condicionante de primer orden. Resulta imperativo promover un desarrollo sustentable con equidad, a fin de garantizar la seguridad pública y la paz social. Éste

es también un objetivo difícil, que exige recursos de capital, niveles de educación, y capacidades de producción, así como una articulación creciente al mercado mundial. Para montar una estrategia de desarrollo de esta naturaleza, se requiere la acción estimuladora y reguladora del Estado, en el plano de la gestión y para hacer frente a ciertas necesidades que el mercado no puede solventar, habida cuenta de los niveles de subdesarrollo y de pobreza extrema de Haití. Dicha estrategia implica por ende una articulación fecunda y una asociación compleja entre el Estado, la economía popular y el sector privado nacional e internacional; tiene que suministrar a los sectores enumerados las condiciones óptimas para su reproducción y su integración a una economía en expansión, y debe asegurar a la población –que vive en su mayoría por debajo del umbral de pobreza– servicios sociales esenciales, que le permitan salir de la marginalidad e integrarse al mercado.

Éste es el marco que habrá de sentar las bases para un desarrollo equilibrado, para lograr la integración nacional, la justicia social, y una inserción adecuada de nuestro país en el contexto internacional, en vísperas de la celebración del Segundo Centenario de la Independencia nacional.

Anexo

Programa de gobierno Consolidar la democracia y promover el desarrollo⁷

Organización Política Lavalas (OPL)

Organización del pueblo en lucha por un bienestar colectivo

Junio de 1996

Preámbulo

Nuestro pueblo ya no quiere seguir viviendo en condiciones infra-humanas. Ya no quiere que Haití siga siendo una tierra de opresión, de miseria, de donde sus hijos y sus hijas tengan que huir. Nuestro pueblo se ha hecho dueño de su destino. Ha decidido participar como actor en la transformación del país, en el cambio del Estado y sus instituciones, en la construcción de una sociedad de derecho, justicia y bienestar.

Por fin hemos *déchouqué* [en créole en el original] el viejo edificio corroído y estéril de la dictadura oligárquica y militar. Ahora queremos construir juntos una nación para todos, consolidar esta democracia conquistada con muchos sacrificios, y recuperar nuestra soberanía.

⁷ Traducido del francés por Marcos Cueva Perus.

Los espacios de poder que el pueblo, organizado alrededor de la OPL, ganó en el Parlamento, en las colectividades territoriales, en el Ejecutivo, y en las calles de nuestras ciudades y nuestras aldeas, constituyen otras tantas conquistas y alicientes. Debemos consolidarlas y ampliarlas, para lograr la plena participación del pueblo reivindicativo, del pueblo elector, del pueblo ciudadano, del pueblo soberano, del pueblo nación. Lo haremos respetando la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales.

Para lograr cambiar el Estado, transformar la sociedad, mejorar la calidad de vida de los haitianos, debemos movilizar toda la creatividad popular, todos los recursos de nuestro campesinado, toda la energía de nuestros empresarios, de nuestros trabajadores manuales e intelectuales, todo el entusiasmo y la decisión de nuestra juventud, de nuestras organizaciones populares y de nuestros compatriotas emigrados. Debemos realizar un pacto social con todos los que creen en este país, para canalizar la participación de todos en la construcción de un desarrollo real y de un Haití moderno.

Corresponde a la OPL, en tanto que expresión organizada progresista del movimiento Lavalas, contribuir a cabalidad a que se concreten estas tareas históricas.

Cada uno de nosotros, militante o dirigente, tiene como responsabilidad primordial participar en la realización de estos nobles objetivos, en la perspectiva del 2004, año que habrá de marcar los doscientos años de nuestra Independencia, una etapa importante en este largo combate que viene librando nuestro pueblo por la soberanía y la felicidad. Para lograr tal fin, debemos ver claro, captar el sentido preciso de los objetivos y las prioridades, escoger correctamente el camino a seguir, fijar con lucidez las líneas de nuestra acción política, económica, social y cultural, adoptar un comportamiento que nos deslinde con toda nitidez y en todas las circunstancias de los políticos tradicionales.

Alentados por una voluntad política real, construiremos un proyecto nacional que garantice la marcha de nuestra nación hacia el

progreso por el cual se sacrificaron tantos hombres y tantas mujeres en el curso de los treinta últimos años de lucha.

Este programa que la OPL propone a la nación es el resultado de la búsqueda incesante de la vía estratégica más justa para la construcción de un nuevo Haití. Habrá de inspirar el pensamiento y la acción de nuestros militantes en todos los niveles, para que sea aplicado con eficacia en los planos local, sectorial y nacional.

Será la base de cualquier programación técnica que oriente la acción gubernamental en términos de recursos humanos y materiales. Deberá ser un instrumento de trabajo, una guía para la reflexión y la acción con vistas a la transformación del país.

Consolidar la democracia y promover el desarrollo

I. UNA POLÍTICA DE CAMBIO

Al cabo de una década de transformaciones sociales y de luchas políticas, Haití se encuentra en la etapa de institucionalización democrática. Este proceso se lleva a cabo en el marco de la Constitución de 1987, y en el contexto posterior al *desmantelamiento del ejército* y a la puesta bajo control de los sectores ligados al duvalierismo. El segundo presidente democráticamente electo en la historia del país ejerce su poder. La Cámara de Diputados y el Senado funcionan conforme a las normas republicanas y a los principios de independencia de los poderes. Las alcaldías y los Consejos de Administración de las Secciones Comunes (CASEC) organizan el espacio de su poder local en el marco de la descentralización prevista por la Constitución. La nueva policía funciona de acuerdo con principios modernos. El sistema judicial está en vías de reconstituirse, con lo cual terminará de completarse el ciclo de las reformas fundamentales a nivel del aparato de Estado.

En el contexto de una sociedad de derecho, la población anhela ejercer sus prerrogativas ciudadanas de manera efectiva y creciente. Entre sus reivindicaciones figuran los deseos de paz, de justicia y de mejoramiento de sus condiciones de vida.

Del balance económico y social de este período se desprenden la degradación de las estructuras productivas y el deterioro dramático del nivel de vida de la población. El subdesarrollo crónico de Haití se ha agravado bajo el efecto de fenómenos derivados del colapso de las instituciones y de la postración del sector privado, consecuencias directas del golpe de Estado militar de septiembre de 1991 y del régimen represivo subsecuente.

Los quince últimos meses de gestión del presidente Aristide no permitieron contrarrestar los efectos negativos del período anterior. La depreciación de la moneda, el alza del costo de la vida, el aumento del desempleo, las dificultades presupuestales, pusieron de manifiesto la profundidad de la crisis, ilustrada ahora por una difícil recuperación, el descontento social y la incertidumbre de numerosos sectores en cuanto al porvenir. Este marasmo económico vuelve más difícil la transición, tanto más cuanto que ciertos factores de desestabilización siguen perturbando el clima social, por lo que contribuyen a complicar la coyuntura política y a degradar la situación financiera del país.

Así, la nueva administración surgida de la elección presidencial de diciembre de 1995 ha entrado en funciones en condiciones difíciles. Ha heredado de la administración anterior un déficit presupuestal, el colapso de las finanzas públicas, la interrupción de la ayuda internacional y una posición incómoda en la renegociación de los acuerdos financieros con los acreedores, a lo que debe agregarse un sector privado expectante y la espera impaciente y a veces exasperada del pueblo. Estas condiciones han marcado la acción del gobierno, imponiéndole muchas rigideces. No han podido concretarse reformas y medidas que resultaban indispensables en los primeros meses. Todo ello ha vuelto más difícil el arranque de la maquinaria económica y suscitado un escepticismo real en la población.

En este contexto, la OPL, partido del que surgen la mayoría parlamentaria y el primer ministro, pretende deslindarse por completo de las viejas prácticas y de los políticos tradicionales, para hacer de la política algo distinto a lo que ha sido hasta ahora. La OPL está resuelta a obrar para cambiar la sociedad y a aportar mejoras que consoliden las instituciones democráticas y hagan despegar una dinámica de desarrollo continuo.

EJE POLÍTICO

La transformación del país, tal y como propone nuestro programa, conlleva un conjunto de medidas concretas en el plano político, sociocultural y económico. La instancia política a partir de la cual deberá ejercerse la voluntad nacional de cambio, es el marco primordial de esta transformación.

1. Un Estado por reconstruir

Con el eslogan “cambiar el Estado”, desde 1986 el pueblo reivindica la construcción de un Estado democrático. Se han dado pasos importantes en ese sentido. Hoy, conviene llevar al pueblo en general y a cada ciudadano en particular, pasando por la sociedad civil y las demás instituciones de la sociedad, a un esfuerzo sistemático que apunte a consolidar la democracia mediante la eficacia, el orden y la justicia.

Se buscará una colaboración funcional y armoniosa de los poderes del Estado, con escrupuloso respeto al principio de separación de poderes. Se tomarán las siguientes disposiciones legislativas e institucionales:

a) Aplicación de la Constitución de 1987 mediante leyes apropiadas, así como de sus prescripciones y disposiciones sobre la vida pública y la transformación progresista de la sociedad.

b) Inclusión de las demandas más sentidas de la población en pro de la reforma del sistema judicial, la justicia social, la transformación del Estado, el desarrollo económico y la participación de todos en la edificación de una nación para todos.

c) Revisión efectiva de todo el sistema legal, lo que tendrá por efecto la abolición de las prácticas autoritarias y corruptas del poder del Estado y la aplicación de reglas de conducta y de moral pública.

d) Ratificación y aplicación de los tratados, los acuerdos y las convenciones internacionales firmados por Haití.

2. Las reformas públicas fundamentales

Se emprenderán reformas fundamentales en el seno de la Administración Pública, para asegurar el funcionamiento eficiente de la misma. Estas reformas, que integran la racionalización y la modernización del Estado, deberán emprenderse bajo el patrocinio del primer ministro, que las llevará a cabo conforme a las leyes y en colaboración con los ministerios y los organismos involucrados. Antes que nada, las reformas tendrán por objetivo renovar a fondo el sistema judicial arcaico y podrido heredado del duvalierismo, para satisfacer las reivindicaciones del pueblo que reclama justicia. Buscarán también modificar la estructura y el funcionamiento de la administración pública, que desde hace 40 años sufre un proceso continuo de degradación. Estas reformas conllevan:

A. En el ámbito de la justicia:

- Asentar la autoridad del Estado mediante su poder para mantener el orden y hacer respetar la ley, pero también en términos de eficiencia administrativa y de medios financieros que le permitan ejercer sus funciones y garantizar los servicios que debe a la población.
- Reforzar la seguridad pública, mediante la educación cívica, la profesionalización de los miembros de la Policía Nacional

y la formación de éstos en el sentido de los valores patrióticos y nacionales.

- Reformar el sistema judicial, mediante medidas destinadas a reforzar la Escuela de la Magistratura, a formar funcionarios jurídicos en todos los niveles, a crear un Consejo Superior de la Magistratura para organizar la selección de los jueces, emprender reformas en la enseñanza del Derecho y llevar a cabo la reelaboración de los códigos.
- Enderezar las prácticas judiciales en los tribunales, los ministerios públicos, los tribunales de paz, los procedimientos penales de y de investigación criminal, incluyendo el despido de los elementos corruptos e incompetentes en el seno de las instituciones, el reacondicionamiento de los locales, la aplicación rigurosa de las leyes y un funcionamiento moderno de la justicia.
- Reformar la APENA, los centros penitenciarios y, en el contexto de esta reforma, poner en marcha programas de formación de cuadros, en los cuales se prestará especial atención al problema de los menores delincuentes y los niños de la calle.
- Aplicar rigurosamente la ley, luchar contra la impunidad, perseguir rigurosamente a los criminales y a los narcotraficantes.

B. En el plano administrativo:

- Reconstruir las instituciones, revisar sus estatutos, que deben responder a la necesidad de modernización del sistema económico y social, ateniéndose a las prescripciones de la Constitución.
- Consolidar la capacidad de gestión del Estado en la definición de las reglas del juego, en las relaciones con los diversos socios económicos y políticos: sector privado nacional, capital

internacional, prestamistas, organizaciones políticas, sindicales y socioprofesionales.

- Garantizar la estabilidad para los funcionarios y empleados que quieran hacer carrera en la administración pública y que observen las reglas administrativas, las normas de honestidad y responsabilidad.
- Buscar y valorar las competencias mediante un programa sistemático y masivo de formación de cuadros, de reciclaje de los funcionarios y mediante la instauración paralela de exámenes y concursos, para facilitar el acceso a la promoción de los funcionarios públicos.
- Poner en marcha una verdadera campaña de educación cívica con el objeto de que la población contribuya a la lucha contra la corrupción, el nepotismo, las prebendas, el mal uso y el despilfarro de los bienes del Estado.
- Aplicar en el seno de la administración pública reglas de disciplina, austeridad y eficiencia que tiendan a volver competente al personal, a suprimir los puestos inútiles y a adoptar sanciones administrativas o penales contra los empleados y funcionarios culpables de malversación.
- Crear condiciones para que la población esté informada y motivada en lo relacionado con los expedientes del Estado, tales como los mercados públicos y otros acuerdos de interés nacional.
- Reformar la Corte Superior de Cuentas y el Contencioso Administrativo, de tal forma que esté habilitado para llevar a cabo con eficiencia sus funciones de control y sanción.

3. Descentralización y participación

Por sí solos, ni el Estado, ni la comunidad de negocios, ni la cooperación extranjera –ni tampoco los tres juntos– pueden garantizar que se lleven a cabo las difíciles tareas que han de conducir hacia

un verdadero desarrollo nacional. Es preciso que todos los haitianos participen en esta empresa. En este sentido, debe llevarse a cabo todo un esfuerzo de comunicación social y de información que estimule la participación de la población.

La descentralización efectiva ha de inspirarse en un enfoque innovador de la gestión pública, de la organización social y del desarrollo. Puesto que las colectividades territoriales constituyen el marco previsto por la Constitución para la participación cívica, el Estado asegurará su funcionamiento pleno, para que se conviertan en centros dinámicos de desarrollo local y regional, en canales efectivos de comunicación con la población.

Se pondrán medios a la disposición de las colectividades locales (CASEC y alcaldías), para que puedan cumplir con su triple función de organización política, gestión regional y promoción del desarrollo. Se buscará el apoyo de ONG, de agrupaciones asociativas y de otras instancias descentralizadas, para garantizar la autonomía de los poderes locales y volverlos más eficientes. Los CASEC en particular serán dotados de instalaciones apropiadas para los servicios esenciales (Registro Civil, Tribunales de Paz, comunicación) y para las actividades de educación, salud y rehabilitación del medio ambiente.

De conformidad con el espíritu de la Constitución, que aspira a convertir a Haití en una República Cooperativa, se fomentará el cooperativismo y la acción comunitaria. Estas formas de acción social se beneficiarán de apoyos técnicos y de créditos que les permitan dinamizar la economía popular, campesina e informal, y completar las iniciativas del Estado y el sector privado para la producción de ciertos bienes y servicios.

El apoyo al movimiento cooperativo tomará las más diversas formas, de acuerdo con las asociaciones de base y a partir de una nueva definición de las funciones de la Confederación Nacional Cooperativa. Se pondrán créditos a la disposición de las asociaciones cooperativas y comunitarias; se procederá a la formación continua de cuadros, a la racionalización y la divulgación del conocimiento

colectivo e individual para la construcción de obras (caminos, escuelas, canteras), así como para el funcionamiento de centros y servicios comunitarios.

Los partidos políticos están llamados a participar en las tareas cívicas, en la educación del ciudadano, en la consolidación de las instituciones, en la empresa de descentralización, así como en la concepción y la puesta en marcha de medidas de carácter legal, con el fin de garantizar los derechos inalienables de cada haitiano y el respeto de los derechos humanos en Haití. Los partidos políticos habrán de contribuir, en acuerdo con las asociaciones de carácter socioprofesional y otras agrupaciones ciudadanas, a la organización y la representación de la sociedad civil.

El Estado fomentará el libre funcionamiento de los partidos. Les asegurará las condiciones más favorables para el ejercicio de su papel en la comunidad. Garantizará su derecho a la crítica y a la oposición, y estimulará la búsqueda de consultas, debates y consensos entre los socios políticos.

4. El papel promotor del movimiento asociativo

El movimiento asociativo ha desempeñado un papel importante en el proceso de transición democrática. Deberá estructurarse hasta convertirse en un socio cada vez mayor en la construcción de la democracia y la economía. Se ofrecerán incentivos para el funcionamiento de las asociaciones patronales y socioprofesionales, los grupos de productores, de artesanos y de trabajadores informales, y las cooperativas y sus afiliados. Estas asociaciones serán llamadas a brindar su colaboración en el proyecto comunitario, así como su experiencia, bajo la forma de consultas, de contratos o de cooperación técnica.

El campesinado constituye la fuerza más dinámica del movimiento social y el sector mayoritario de la población. Por lo mismo tiene que desempeñar un papel primordial en esta mutación necesaria.

El movimiento campesino se beneficiará de todos los apoyos necesarios para su organización y su participación en la producción, la rehabilitación del medio ambiente y la realización de obras sociales o de trabajos de infraestructura. Se emprenderán acciones concretas para mejorar las condiciones de existencia del campesinado, para su concientización y su movilización constante.

Se apoyará a los sindicatos y las federaciones sindicales en su lucha en favor de sus afiliados y de la clase obrera en general. El Estado apoyará los esfuerzos orientados hacia la formación profesional, el aumento de la productividad del trabajo y las iniciativas para aumentar el salario real, garantizar la vivienda, el recreo y mejores condiciones de vida para los trabajadores.

Una política de promoción del estatuto de la mujer buscará combatir las desigualdades de carácter legal y cultural que mantienen a la mujer en situación de subordinación y la discriminan socialmente. Las reformas tenderán a mejorar la condición de la mujer, a protegerla de los abusos, a favorecer su acceso a una situación de igualdad real en los estudios el trabajo y los salarios.

La mujer estará en el centro de las actividades sociales y de desarrollo. El movimiento organizado de mujeres, en particular de mujeres económicamente activas, se beneficiará de mecanismos de crédito preferenciales, de encuadre técnico y jurídico. Se acordarán también facilidades a las mujeres que participen en el comercio interior y exterior, a las mujeres artesanas, socioprofesionales e industriales, así como a quienes pertenezcan a asociaciones de carácter cultural y artístico.

Habrán disposiciones legales que supervisen la promoción de los intereses específicos de la mujer en el plano social y económico. Habrá iniciativas apropiadas para educar a la población en el respeto a los derechos de la mujer como mujer y ciudadana, a su formación y a su participación en la vida política, en todos los niveles.

El Estado participa con medios técnicos (otorgamiento de créditos, medidas de incentivo fiscal, subsidios presupuestales y otros) en una política efectiva de descentralización, mediante el reforzamiento

de los CASEC y de las alcaldías. Dicha participación estará vinculada a un programa de reordenamiento del territorio, de lucha contra la cesantía y de creación de empleos en el campo; esta política aunada a la instalación de servicios de salud y de educación y a la construcción de vivienda social en las provincias, contribuirá a disminuir la emigración interna y a desconcentrar la población de la capital.

Con medios apropiados, las instituciones públicas y de crédito, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los organismos técnicos inyectarán recursos en el medio rural, en particular a las unidades de producción, mediante el otorgamiento de herramientas, semillas y fertilizantes a bajo precio y el acondicionamiento de las redes de distribución de productos básicos, de servicios escolares y de salud.

Las pequeñas y medianas empresas, las asociaciones comunitarias y las actividades del sector informal, se verán favorecidas por iniciativas que tiendan a otorgar recursos de capital bajo la forma de crédito, de inversiones, de ingresos municipales, de pequeños proyectos de producción y de servicios en diversos ámbitos, incluyendo el deporte y la cultura.

Se integrarán comités de barrio, grupos de jóvenes, cumbites de campesinos para las obras de infraestructura, la construcción de instalaciones de carácter social, los programas de utilización intensiva de mano de obra, de trabajo compensado con alimentos o de beneficencia.

5. Una política exterior al servicio de la nación

Tenemos que repensar nuestra política exterior, para que contribuya a desarrollar el país y a mejorar su imagen en el mundo. Se pondrá en marcha una reforma profunda del servicio exterior, para:

- Racionalizar el funcionamiento del personal diplomático en el extranjero y ponerlo al servicio del desarrollo del país.

- racionalizar los gastos presupuestales de las misiones diplomáticas, para lograr una gestión rigurosa de los ingresos consulares y otros.
- renovar los cuadros y prepararlos para que se conviertan en agentes eficaces del servicio exterior, mediante formas de reclutamiento basadas en concursos, y mediante sesiones de reciclaje.
- Desarrollar un programa masivo de formación de cuadros técnicos, medios y superiores en los ámbitos más decisivos para el desarrollo, mediante becas de estudio y de entrenamiento.
- Ofrecer un servicio lo más eficiente posible a los haitianos en el exterior; apoyar sus iniciativas de tipo profesional, asociativo, de ahorro e inversión; canalizar en forma óptima los recursos financieros, culturales y técnicos que detentan.
- Poner en marcha un programa de formación politécnica, en un marco de intercambios Sur-Sur con América Latina y el Caribe, orientado hacia ramos seleccionados: artesanado, agricultura tropical, gestión de pequeñas empresas, salud, ecología.
- Optimizar las relaciones con los países de la francofonía y multiplicar los intercambios con la Unión Europea, con América del Norte y con los países de Asia y África.
- La cooperación tendrá un papel más eficaz si logra adecuar a la perfección sus opciones y prioridades a las condiciones reales del país. Para ello debe ser parte de una estrategia fundada en enfoques innovadores que se desprendan tanto de la experiencia social, no sólo en Haití, sino también en otros escenarios similares, como de las propuestas de actores de este movimiento innovador que atraviesa a la sociedad desde hace una década.

Así, la participación de la población y la cooperación internacional harán que la acción pública sea más eficaz. Esta asociación se volverá particularmente útil en el ámbito social, cultural, y en las actividades asistenciales (salud, distribución de agua potable,

letrización, educación, reforestación); y será también juiciosa en algunos campos de intervención y producción que constituyen espacios alternativos inexplorados o débilmente explotados por la iniciativa privada, por el Estado e incluso por la economía popular.

II. Por un desarrollo nacional

La renovación democrática del Estado, así como la consolidación de las instituciones, serán posibles en la medida en que el país alcance a superar su situación de degradación y en que entre, en las próximas décadas, en una dinámica de desarrollo acelerado.

Este desbloqueo no puede ser el producto de acciones espontáneas promovidas por las fuerzas del mercado. Debe ser estimulado por la acción de un Estado que sea a la vez promotor del desarrollo económico y de tareas civilizadoras de tal naturaleza que cambien la calidad de vida de los haitianos.

1. Una estrategia de desarrollo

El conjunto de políticas y medidas que reactive a la economía debe basarse en una acción de un Estado a la vez regulador, orientador y responsable, de conformidad con una estrategia de desarrollo que permita cambiar de manera sensible la condición humana de los haitianos en los próximos años.

Así, y sin dejar por ello de adecuarse a las exigencias de la mundialización, el marco que rige a los diversos actores económicos tomará en cuenta los requerimientos del desarrollo nacional, nuestras especificidades histórico-estructurales y culturales, la profundidad de la crisis social y las justas demandas de la población. Al volverse sensible desde las comunas, el mundo rural, la mujer campesina, la empresa de desarrollo podrá dinamizar la base de la economía dentro de un proceso que provenga de abajo y de adentro, de tal modo

que dé vida al tejido social, que promueva polos sectoriales y locales de crecimiento y que estimule una dinámica de acumulación.

Más allá de las estrategias de crecimiento fundadas en las reglas estrictas del mercado, el Estado promoverá una política de desarrollo que desencadene la acumulación de capital en la base; aumentará los ingresos reales de la población abatiendo la carestía y poniendo a disposición de ésta servicios sociales básicos. Su acción buscará disminuir las tensiones sociales, limitar la emigración interna o externa, favorecer la participación de la población en las tareas comunitarias y contribuir al crecimiento productivo y al desarrollo humano.

Se imponen opciones preferenciales en cuanto a la asignación y la movilización de recursos de origen interno y externo, para arribar a:

a) La reforma de las instituciones mediante la descentralización, la promoción de los poderes locales y el funcionamiento de los servicios públicos.

b) La creación de empleos, el aumento de la producción mediante la modernización de las estructuras productivas y la incorporación de tecnología en la agricultura gracias a inversiones en recursos financieros y humanos. Se tomarán medidas específicas para crear empleos en el medio rural y para orientar los programas de utilización intensiva de la mano de obra hacia la creación de una infraestructura básica.

c) El mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población mediante el aumento de los ingresos reales, a partir de la lucha contra la inflación y de iniciativas que tiendan a ofrecer servicios para todos en los ámbitos de la salud, la vivienda, la alfabetización, la educación y la alimentación.

El Estado, con un enfoque innovador de la problemática haitiana y de las soluciones que requiere, incitará al conocimiento práctico y científico, al combate contra el nepotismo y contra los efectos del totalitarismo, el paternalismo y el servilismo en las mentalidades. Tendrá que adoptarse un enfoque que corresponda al pensamiento haitiano, para conciliar la teoría con la práctica de la educación, y se

tendrá también que optar por una pedagogía del cambio que articule la tecnología más apropiada y la asistencia externa mejor adaptada a nuestras realidades, de tal modo que los problemas sean abordados con realismo y eficacia.

Así, con inteligencia, podremos transformar las exigencias de la globalización en elementos positivos para la renovación de nuestras estructuras económicas y de nuestras instituciones sociales, y para la satisfacción de las necesidades básicas de nuestra población.

Sin embargo, a la par de los inevitables ajustes y los necesarios enderezamientos en nuestra gestión estatal, rechazamos la ortodoxia neoliberal que quisiera moldear nuestro país a partir de una política económica prefabricada. En otros contextos, esta política agravó los problemas sociales, sin aportar soluciones reales y duraderas a los problemas económicos. Confrontados como lo estamos a las realidades de la “miseria extrema” del subdesarrollo y a una crisis social sin precedentes, debemos encontrar opciones originales y realistas para nuestra problemática nacional.

Estas opciones abarcan así los ámbitos de intervención fundamentales y espacios de decisión que van desde el poder central hasta los poderes locales. Su ejecución conlleva acciones inmediatas, con base en estrategias combinadas, que respondan a los requerimientos de una política macroeconómica de crecimiento adaptada a nuestras realidades estructurales, así como a la necesidad de un programa social que garantice el desarrollo con equidad. Dichas acciones deben encaminarse, entre otras cosas, a:

- Combatir la inflación, equilibrar el presupuesto, aumentar la capacidad fiscal, estabilizar la *gourde*, luchar contra la corrupción.
- Dar un impulso óptimo a la producción e impulsar un desarrollo sostenido, una fuerte inversión social en sectores clave, tales como la irrigación, la comunicación, la educación, la salud.

- Promover una mejor inserción del país en el mercado internacional, con la producción y la exportación de bienes de alto valor agregado.
- Asegurar la protección selectiva y efectiva de productos básicos que pueden garantizar la alimentación popular a menores costos.

Eje sociocultural

1. Una educación orientada hacia el progreso

Nuestro programa parte de haber escuchado las reivindicaciones de todos los que intervienen en la educación, y del análisis de los problemas inherentes al sistema educativo haitiano. Toma en cuenta los aportes y las propuestas del Plan Nacional de Educación. Se aplicará mediante la concertación constante con los profesores, los estudiantes y los padres de familia interesados en la construcción de un nuevo sistema educativo, que sea capaz de formar ciudadanos en su medio, preocupados por el progreso de Haití y sensibles a la evolución del mundo.

La alfabetización. La puesta en marcha de un programa de alfabetización constituye la condición *sine qua non* para la realización de un proyecto de educación y de desarrollo. Todos los medios técnicos y financieros, así como los recursos humanos disponibles, se movilizarán para llevar a buen puerto esta empresa que constituye la prioridad de las prioridades. Para alcanzar un éxito pleno, la lucha contra el analfabetismo debe acompañarse de una intensa campaña de motivación a escala nacional.

La escolaridad. Debe extenderse a todos los niños en edad escolar. Se trata de un objetivo primordial y de un imperativo para la acción gubernamental, que debe realizarse antes de que termine el quinquenio. Ello exige la multiplicación del número de escuelas primarias y

secundarias, el acondicionamiento de las existentes, la formación acelerada de los maestros, la articulación de los esfuerzos del Estado y de las escuelas privadas.

Descentralización y formación de maestros. La descentralización ayudará a una gestión racional y a un mejor rendimiento de las escuelas en todo el país, mediante el aprovechamiento de las estructuras participativas, regionales y locales.

El proceso de descentralización implica la reorganización y la modernización de la administración central, el apoyo a las direcciones departamentales para su reestructuración, su equipamiento, el acondicionamiento de los distritos escolares y las oficinas zonales.

La formación de maestros ya no se hará mediante seminarios esporádicos en Puerto Príncipe, sin seguimiento alguno. Pasará por la reorganización de las escuelas normales, por programas permanentes, masivos y acelerados de formación y reciclaje de los docentes, mediante la acción concertada de los inspectores, y abarcará todos los distritos escolares y en todas las escuelas.

Reparación y armonización de los currículos

Frente al desorden reinante en los programas y los métodos aplicados en los diferentes niveles de enseñanza, los currículos se adaptarán a las necesidades reales del país; combinarán la enseñanza básica y el aprendizaje de acuerdo con los métodos más avanzados de la pedagogía: televisión, video e informática.

Esta adaptación se hará en todos los niveles: preescolar, fundamental, secundario, técnico, profesional, deportivo y superior. Estos instrumentos de trabajo deberán armonizarse para convertirse en soportes indispensables de una enseñanza eficiente.

Con base en el principio de descentralización, se pondrá también el acento en los medios económicos, sociales y psicológicos que permitan mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y los

profesores, de los alumnos y los estudiantes, de los administradores escolares, de los cuadros, los técnicos y el personal de apoyo.

Locales escolares y equipamiento

Para lograr una enseñanza de calidad, la demanda social de educación requiere de la construcción de centenares de escuelas, la reparación, el agrandamiento de otras tantas, y su equipamiento con mobiliario y material didáctico. Exige también la construcción y el reacondicionamiento de numerosos liceos y escuelas profesionales, así como la instalación de bibliotecas en todo el país.

Nuestro programa prevé, desde su primera etapa, la construcción de por lo menos una escuela primaria pública en cada sección comunal, el funcionamiento de un liceo en cada comuna, el acondicionamiento de secciones técnicas y profesionales en los liceos, la construcción de escuelas técnicas, el agrandamiento de las escuelas normales de maestros existentes y la creación de más unidades. Incluye la reglamentación estricta de las condiciones de funcionamiento de las escuelas privadas, para garantizarles mejores resultados y una participación en el plan rector de la educación nacional.

Formación profesional

Se impulsará la formación profesional y tecnológica con audacia y previsión. Numerosísimos jóvenes reclaman por doquier y sin cesar la apertura de escuelas profesionales. El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFP) se transformará y se reforzará tanto en el nivel central como en el departamental, con el propósito de garantizar un mejor funcionamiento de las escuelas profesionales públicas existentes, y de introducir filiales técnicas y profesionales en los liceos. La Escuela Normal Superior de Tecnología (ENST), fruto de la colaboración del Estado, el sector privado y la cooperación francesa, recibirá todo el apoyo necesario.

Enseñanza superior

Para poner la enseñanza superior a la altura de los requerimientos actuales, se necesita ahora una reforma en la cual deben participar en primer lugar los universitarios. De concierto con los interesados, se establecerá una ley-marco de la enseñanza superior y una ley orgánica de la UEH, y se reglamentarán las Instituciones Privadas de Enseñanza Superior (IPES) y el ejercicio de diversas profesiones.

Se apoyará a la comunidad del UEH en el proceso de reforma administrativa y académica indispensable para crear una enseñanza de calidad y construir una universidad adaptada a nuestras necesidades. En el marco de la descentralización y en asociación con la comunidad universitaria, el Estado multiplicará las iniciativas en el plano interno y externo; fomentará la apertura de filiales de facultades en provincia, dando prioridad a las de ciencias y tecnología, de administración y de pedagogía.

2. Una política de salud al servicio de la sociedad

Tomando en cuenta lo exiguo de los medios financieros, resulta primordial identificar las prioridades de un programa de salud realista y eficaz, y emprender, en estrecha concertación con la población, esfuerzos para mejorar la situación de la salud en general y erradicar las endemias mayores. El presupuesto de salud aumentará con el ánimo de multiplicar la capacidad instalada, descentralizar la distribución de los servicios de salud, buscar la coordinación racional de los diversos componentes del sistema (sector público-ONG y privado), y racionalizar al máximo la cooperación regional e internacional en este ámbito.

Prevención y educación

El eje central de nuestra política de salud debe ubicarse en el nivel de la prevención y de la educación. Se dará especial atención a los jóvenes. Desde luego, debe ponerse el acento en la calidad de los servicios

y en el hecho de que, cualquiera sea la edad, cada persona enferma espera recibir y tiene derecho a servicios básicos de buena calidad.

Una mayor cobertura sanitaria y médica

La mayoría de las localidades carece de instalaciones mínimas de salud. El derecho a la salud exige que se haga un esfuerzo particular para que estén disponibles los servicios básicos. Este esfuerzo debe formar parte de la empresa nacional de descentralización. Es por ello que la segunda prioridad consiste en un programa escalonado y preciso orientado hacia la cobertura nacional de servicios básicos de salud.

La tercera prioridad es la protección de los más vulnerables. La salud no puede ser una realidad en nuestra sociedad, si sus miembros más frágiles (niños, ancianos, inválidos y desamparados) no se benefician de una atención particular, que tome en cuenta su vulnerabilidad y se integre en un concepto moderno de salud.

El acceso a la atención médica: una posibilidad ofrecida a todos

No basta con poner a disposición servicios básicos. Hay que velar por que puedan beneficiarse de ellos todos aquellos cuyos recursos son demasiado limitados. Junto con la regularización rigurosa de la distribución de medicamentos y en acuerdo con las asociaciones de médicos y de farmacéuticos, el Estado pondrá en marcha un plan para el control, la distribución, la producción, la importación y la venta de medicamentos. Tomará todas las medidas que permitan asegurar los servicios de vacunación, odontología y otros cuidados primarios en las escuelas, los barrios populares y el campo. La creación de clínicas móviles, la extensión del servicio social a médicos de reciente titulación, se combinarán con la utilización de estructuras de las alcaldías y de los CASEC, para ampliar los servicios médicos.

Antes de la crisis política de 1991-1994, podía afirmarse a muy grandes rasgos que el Estado gastaba 30% en la atención a la salud, en tanto que la cooperación y las ONG representaban otro 30%. El 40% restante lo desembolsaban las familias. Estas cifras indican que debe aumentarse la parte del Estado para favorecer una franja selectiva particularmente desamparada de la población y garantizar el acceso de todos a los servicios de salud.

El soporte alimentario

En un contexto en el cual el hambre, la desnutrición, cohabitan con un déficit de producción, no cabe duda de que el mejoramiento de la producción agrícola tendrá efectos económicos y sociales. Si puede garantizarse la disponibilidad de alimentos, también deben tomarse medidas para ampliar el acceso a los cuidados de esta categoría social más vulnerable. Tenemos que poner en marcha un programa nacional de ayuda alimenticia para este sector. Es el precio a pagar por la salud.

Salubridad e higiene pública

Otro componente de esta prioridad concierne al acceso al agua potable, el control de los desechos y el saneamiento del ambiente. Las diarreas, la desnutrición, las infecciones de toda índole siguen siendo las principales causas de mortalidad infantil y juvenil.

Si bien hay que tratar a quienes están enfermos respetando las normas básicas de calidad, la inversión en salud debe tomar en cuenta las prioridades. Debe esmerarse en una educación para la higiene pública y la salubridad, partiendo de una visión global que tienda a privilegiar la medicina preventiva. Debe articularse con la asistencia, bajo la forma de encuadre técnico y de contribución financiera a los programas de seguridad social, con miras a la reforma y la coordinación racional de actividades de la ONA, la OFATMA y del

Instituto de Bienestar Social. El Estado se asociará con instituciones, empresarios y aseguradoras para la creación de un sistema efectivo de seguridad social y de servicios de salud primarios que cubra los trabajadores de los sectores privado y público, a los pensionados y a los niños en edad escolar.

Los procedimientos de estructuración, de descentralización y de participación sólo tendrán significado en la medida en que logren la adhesión de todos los ciudadanos y las ciudadanas del país. La población estará llamada a cooperar en la educación sanitaria e higiénica, en los programas de salud pública, de control de la natalidad, de vacunación, de educación sexual y de protección contra las enfermedades infantiles y contra las enfermedades endémicas más extendidas (SIDA, tuberculosis, etcétera). En fin, si bien hasta ahora hemos puesto el acento en la lucha contra la enfermedad, nuestra visión de la salud en Haití –habida cuenta de los seis determinantes de la salud (factores biológicos, hábitos de vida, medio de vida, entorno social y físico, condiciones de vida, atención a los más vulnerables)– apunta a que la mayoría de la población no sólo no esté enferma sino que pueda vivir en forma saludable.

3. Promover el deporte y las actividades juveniles

El deporte y las actividades juveniles se desarrollarán para ofrecer recreo y ocupaciones sanas a la juventud y a toda la población.

Estos objetivos se alcanzarán mediante la generalización del deporte escolar, que es el punto de partida de toda política eficaz en materia deportiva. A esta directiva se agregará el reacondicionamiento de las estructuras deportivas, el acondicionamiento de nuevas áreas de juego en el país, la reactivación de los campeonatos nacionales, la participación en el torneo eliminatorio de la copa mundial de futbol, la reactivación de las disciplinas olímpicas, la preparación de jóvenes en el servicio cívico y la apertura de centros de formación de monitores deportivos y de árbitros.

Está previsto extender en un plazo determinado las actividades deportivas a las provincias y a las regiones rurales, edificar instalaciones deportivas poco costosas, centros de recreo y de reunión en todo el país.

Las instituciones y los grupos asociativos de carácter cultural y artístico tendrán facilidades para la formación de sus cuadros, la promoción de su producción y de sus intercambios de toda índole, la edificación y el equipamiento de talleres de entrenamiento en artes y oficios. Se fomentará el teatro y se lo utilizará en la elaboración de programas culturales para el público de los barrios populares y para la juventud en general.

La organización de jóvenes, pilar de la movilización y de la participación, se hará a partir del Servicio Cívico, previsto por la Constitución. Ayudará a la integración de los jóvenes en las provincias, sobre todo para las tareas comunitarias; se buscará su participación en el marco de la descentralización, en los ámbitos de la alfabetización, la reforestación, la salud comunitaria, la defensa civil, la seguridad pública, el trabajo voluntario o las obras que requieren mano de obra intensiva.

4. Una política de vivienda

Se trata de un ámbito en el cual el Estado, el sector inmobiliario y otros grupos económicos privados jamás han intervenido de manera significativa. Jamás hubo aquí una verdadera política de vivienda, en términos de planificación urbana, de infraestructuras básicas o de crédito para paliar las penurias y satisfacer, aunque sea en forma parcial, las necesidades de la población.

Una política de crédito para las clases medias y los profesionales facilitará la adquisición de viviendas individuales en un entorno sano. En este sentido, un programa para los trabajadores y los sectores pobres urbanos llamará a la participación de los interesados, en el proceso de construcción de viviendas baratas.

En la capital, los poderes públicos pondrán en marcha una estrategia de urbanización, de construcción de vivienda social y de residencia de precio módico mediante una legislación apropiada y el otorgamiento de recursos presupuestales en coordinación con las autoridades centrales y comunales. Para financiar estos programas se buscará la asociación con los recursos crediticios de los bancos de las sociedades aseguradoras y de otras empresas del sector público y privado, y con los capitales extranjeros, en el marco de la cooperación internacional.

5. Hacer de la cultura una palanca de la acción social

Por el peso de la cultura en la definición de nuestra nacionalidad y en la creación de valores que nuestra comunidad puede ofrecer al mundo, la promoción de la cultura, en todos sus componentes, constituye un eminente *leitmotiv* y un elemento fundamental de la política de cambio. Se trata de favorecer la producción de bienes culturales y de ponerlos al servicio del bienestar colectivo. Se trata de valorizar el patrimonio nacional, histórico, cultural y literario y de hacer de él un elemento de nuestra imagen en el mundo y de nuestra política de desarrollo. Se trata de intensificar nuestros vínculos de toda índole con África y las comunidades afroamericanas.

En el centro de esta visión de reforzamiento de nuestra identidad cultural se sitúan la alfabetización y la promoción del créole como vehículo de la cultura universal para todos los haitianos. Su utilización en los programas de alfabetización, de formación técnica y de educación en todos los niveles, contribuirá a la mayor eficacia de estos programas. Se emprenderá un esfuerzo sistemático para estimular los valores de la cultura nacional en materia musical, etnológica y literaria, y la ampliación de los espacios de producción cultural (video, cine, música, periodismo).

La Televisión y la Radio Nacional se convertirán en verdaderos medios de difusión de la cultura y la educación, según el nuevo

concepto de utilización de los *mass media*. Serán la base de una red socioeducativa de información y de comunicación social fundada en la acción conjunta de las ONG, las asociaciones socioprofesionales, el Estado y el sector privado.

[...]

[EJE ECONÓMICO]

Combatir la especulación y la carestía, mediante medidas apropiadas y disposiciones legales contra los monopolios, los importadores exclusivos y los intermediarios abusivos. En este sentido, se elabora una política de crédito a los importadores, para romper los privilegios y los beneficios extraordinarios, y combatir el regateo, lo que tendrá como resultado una disminución de los precios de los productos de primera necesidad.

1. Una instancia técnica de alto nivel deberá asistir al gobierno en la formulación y la ejecución de la política económica. De acuerdo con los ministerios correspondientes, con los representantes del sector privado y con las asociaciones socioprofesionales, dicha instancia se encargará de supervisar los proyectos de desarrollo y los contratos técnicos con sociedades nacionales o extranjeras.

Entre otras medidas, se reforzará la estabilidad de la vida social y política, así como la legitimidad del gobierno. Se crearán condiciones para la participación del sector privado en la recuperación; para que los emigrados traigan sus ahorros al país, bajo la forma de transferencias o de inversiones; para que el capital extranjero pueda invertir, en particular en el turismo, la subcontratación, la minería y ciertas empresas públicas; para que el pueblo trabajador, los campesinos, las clases medias afligidas, los desempleados puedan aspirar a participar plenamente en la construcción del país.

Ante nosotros y nuestra voluntad de sacar al país de su estado de degradación continua se abren grandes desafíos. Por la magnitud del atraso de nuestra economía, no puede lograrse un verdadero

despegue sin un crecimiento a una tasa mínima de 5% anual. Esto requiere de inversiones considerables por parte de los empresarios locales, los capitalistas extranjeros, los hombres de negocios y los ahorradores emigrados. Estas inversiones deberán orientarse no sólo hacia el ámbito productivo, sino también hacia las infraestructuras y los servicios básicos. Este despegue exige también una colaboración sistemática entre el Estado, el sector privado, las asociaciones profesionales y los trabajadores.

Sólo una política gubernamental competente, de verdad transparente y consensuada puede ayudar a coordinar la acción de los diversos actores en la búsqueda de soluciones apropiadas. Ésa será la forma más efectiva de reforzar la autoridad del Estado, de contribuir a satisfacer las justas reivindicaciones de las mayorías en favor del desarrollo humano y de poner a nuestro país a la altura de las exigencias de la modernidad. Será también una forma de reforzar el poder de negociación del país y de reafirmar nuestra soberanía nacional.

Por lo tanto, nuestra opción es evidente y responde ante todo a necesidades de orden económico. Tiene como objetivos prioritarios utilizar los abundantes recursos del país, satisfacer las necesidades esenciales de la población en términos de ingresos, de alimentación, de salud y de educación, y priorizar el aporte en trabajo y la creación de empleos.

2. Dos ejes económicos prioritarios: la agroindustria y los recursos mineros

Este “marco macroeconómico” propiciará las condiciones para la promoción de ciertos sectores productivos (economía de subsistencia, agroindustrias, frutas y legumbres, minas, subcontratación, artesanado, apicultura, acuicultura, pesca, turismo), y permitirá enfrentar el colapso de la producción agrícola tradicional (café, caña de azúcar).

El Estado tomará iniciativas de carácter legal e institucional para impulsar estas actividades productivas. Habrá opciones preferenciales en favor de ciertos sectores en los cuales Haití tiene ventajas comparativas, o para la protección selectiva de ciertos bienes destinados al mercado local o extranjero.

El prerrequisito para nuestro desarrollo a mediano y largo plazos es una política que, desde el punto de vista técnico y científico, tome en cuenta nuestra dotación de recursos.

Por lo mismo, el eje económico prioritario comprende dos grandes líneas: el sistema agroalimentario y las industrias basadas en los minerales no metálicos.

En el plano operativo y en términos de estrategia económica, estas opciones prioritarias habrán de concretarse alrededor de dos productos de base: el arroz y el cemento. Son dos bienes con una gran demanda, cuya importación pesa mucho en la balanza de pagos, y cuya producción puede beneficiarse de condiciones óptimas y de ventajas comparativas.

En el plano agrícola, es posible reanimar el cultivo del arroz en el Artibonite y multiplicar el volumen y la calidad de la producción por medio de una asistencia técnica apropiada, y de una gestión racional de las inversiones locales y extranjeras, para crear entonces las condiciones para la autosuficiencia en este rubro.

En el plano industrial, habrá que privilegiar la producción de cemento, para cuya fabricación el país dispone de condiciones óptimas, ya que el 95% de las materias primas (arcilla, mármol) se encuentran en el país. El acceso al *gipso* dominicano es sencillo. Haití dispone de cierta experiencia en esta materia, de facilidades de transporte y de un mercado en expansión...

Una política de inversión y de opciones tecnológicas adecuadas permitirá promover los circuitos económicos –hacia arriba y hacia abajo– para garantizar el desarrollo de estos dos polos, el agroindustrial y el industrial, que pueden ayudar a regenerar el tejido productivo.

El sistema agroalimentario

Dadas nuestras dotaciones de recursos, el sistema agroalimentario constituye sin duda el principal rubro con capacidad para responder a las exigencias de crecimiento sostenido, de integración nacional y de dinamización del mercado.

La agroindustria

Es importante priorizar las agroindustrias de transformación de materias primas, asegurar sus salidas, sea hacia los mercados locales, sea hacia el exterior, con el fin de definir las filiales de transformación y distribución de estos productos, que constituyen fuentes importantes de empleo y de divisas.

Producción primaria de base para la alimentación de la mayoría de la población. Debido a sus bajos ingresos, dicha producción difícilmente puede integrarse al consumo agroindustrial. Por lo mismo, las estrategias de seguridad alimentaria y nutricional cobran aquí toda su importancia. Una medida primordial consiste en frenar la descapitalización de las explotaciones campesinas, dado que en su mayoría éstas enfrentan una degradación creciente desde el golpe de Estado y el embargo subsecuente, lo que asestó un fuerte golpe a la economía campesina.

Deben hacerse esfuerzos en materia de dotación de pequeños equipos y de herramienta agrícola, de suministro de insumos tales como semillas seleccionadas, fertilizantes, molinos de granos, facilidades de almacenamiento, ganaderas, de hatos, etcétera. Este esfuerzo debe orientarse principalmente hacia los estratos de agricultores que se encuentran estancados. Esto les permitirá pasar a una etapa de acumulación y de participación activa, en el marco de una estrategia de dinamización de la agricultura.

Por otra parte, la creación de redes financieras que den prioridad al sector agrícola buscará quebrar el círculo vicioso de la usura;

también es preciso aumentar los rendimientos de los cultivos de subsistencia mediante el crédito y la asistencia técnica y tomar iniciativas en materia de ganadería, de acuicultura, que puedan contribuir a la seguridad alimentaria, a la reforestación permanente y a la introducción de cambios sistemáticos en el uso del suelo.

Otro eje complementario se orienta principalmente a buscar una mejor inserción de nuestro país en el mercado internacional. Ante todo, este eje constituye una fuente importante de divisas para el desarrollo.

Los ámbitos de exportación

Producción primaria para la exportación

Conviene también desarrollar actividades de exportación con eficiencia competitiva y que sean fuente de divisas, al mismo tiempo que de empleos, etcétera. Una política sistemática de inversión y mejoramiento técnico deberá regenerar la producción de café y orientarla hacia mercados selectivos. Asimismo, si aprovechamos los hábitos alimenticios de la emigración y de las comunidades caribeñas, podremos exportar nuestros productos hacia esas poblaciones.

Producción seleccionada de alto valor agregado

En los países industrializados viene afianzándose una tendencia creciente al consumo de productos de “agricultura biológica”, que no utiliza productos químicos tales como fertilizantes, pesticidas, etcétera. Ello nos ofrece la posibilidad de encontrar “nichos” de producción o de exportación de bienes de alto valor agregado, tales como: mangos franciscos, vetiver, ricino, miel, frutas, legumbres, aceites esenciales, especies y flores, el *djon djon* [en créole en el original], destinados a la exportación o a mercados selectos. Tendrán que buscarse también alternativas, emprender cultivos a partir de la acción de grupos asociativos, de pequeños productores, de capital privado, de ahorro de los emigrados, etcétera.

3. *Desplegar nuestro potencial industrial*

Una política de desarrollo industrial adaptada a nuestras realidades deberá estimular las inversiones de capitales locales y extranjeros, mediante la creación de facilidades fiscales y de infraestructuras para los establecimientos que se instalen en provincia.

El artesanado. La producción artesanal comprende una amplia gama de actividades que van desde el sector informal hasta la producción manufacturera (hierro forjado, muebles), la ganadería o el sector agrícola (cuero y madera). Puede incluso alcanzar un volumen interesante y una mayor diversificación, y convertirse en un factor que dinamice las exportaciones, además de permitir que la población se afine en los lugares de producción, para frenar el éxodo rural.

Un programa nacional de promoción del artesanado, a cargo del gobierno, las alcaldías, los exportadores y las asociaciones de artesanos, tendrá por objetivo:

- Poner en marcha un sistema de crédito flexible para los artesanos y los exportadores de productos artesanales.
- Normalizar, estandarizar y garantizar el acabado de productos.
- Estimular la creación de cooperativas y otras asociaciones de artesanos.
- Favorecer redes de comercialización más baratas, así como suministrar crédito para la adquisición de herramientas, materias primas y para la venta de los productos acabados.
- Contribuir a la formación técnica de los artesanos, para que sean capaces de mejorar su saber hacer e introducirse en nuevas líneas de producción.
- Recurrir a los recursos externos de la cooperación descentralizada.

- Llevar a cabo una campaña de promoción externa de productos del artesanado haitiano.

El turismo puede volver a encontrar condiciones favorables ahora que existe un ambiente de seguridad y salubridad. La difusión excepcional de dimensión mundial de la que se ha beneficiado Haití en los últimos tiempos, puede convertirse en un elemento positivo de publicidad; otro factor es la originalidad, la riqueza y la diversidad del patrimonio cultural, que vuelven a nuestro país muy atractivo para toda clase de turistas.

En un primer momento, se estimularán las inversiones para el turismo barato, de carácter ecológico y cultural; este tipo de turismo será de tal naturaleza que atraiga una clientela escogida que incluya, en primer lugar, a los haitianos de la emigración. Se tomarán todas las iniciativas posibles para facilitar el acceso de cadenas turísticas internacionales a nuestro país.

Una política dinámica del Estado y del sector privado ayudará a aumentar nuestro potencial turístico y a que las redes que cubren la República Dominicana y otras islas del Caribe aprovechen el turismo hacia Haití.

4. Las reformas institucionales indispensables

La política de desarrollo antes esbozada y destinada a dinamizar el conjunto de las relaciones económicas de la sociedad, se acompañará de un programa de reformas institucionales (fiscal, aduanal, bancaria) y de intervenciones básicas en los ámbitos agrario, ecológico y de infraestructura.

La reforma monetaria y financiera

La política monetaria y financiera está concebida para llegar a una remonetarización gradual de la economía, a la estabilidad financiera,

al estímulo al ahorro, a la creación de empleos y a la expansión de la producción.

Pasa por una reestructuración del sistema bancario, a partir de una *legislación bancaria* apropiada, que reglamente las actividades de la banca y el crédito en función de los objetivos del desarrollo. Prevé la reforma de las instituciones bancarias estatales para su modernización, su apertura al capital privado, la utilización óptima del ahorro y la liquidez del sistema, así como la recuperación de los créditos no pagados; la regulación de las actividades de los bancos privados, la protección de los intereses del público, la captación del ahorro y su orientación hacia fines productivos, para ampliar el crédito a todas las categorías, en particular a los pequeños empresarios y a los miembros del sector informal.

Se pondrá especial cuidado en el funcionamiento del mercado cambiario y de divisas, para mantener la estabilidad de la *gourde*. Una Comisión de Regulación Nacional de los Bancos y los Seguros orientará en el plano técnico a las autoridades financieras y bancarias hacia una dinámica de expansión. Se trata de aumentar sensiblemente el dinero y el cuasidinero, de lograr un ahorro presupuestal medio de 5 a 8% del PIB por año, y de alcanzar un nivel de reservas internacionales netas que pueda poner al sistema bancario y monetario al servicio del crecimiento.

La reforma fiscal

Una reforma fiscal escalonada permitirá enfrentar la magnitud de los desequilibrios del presupuesto y aumentar de manera sustancial los recursos para el funcionamiento del Estado, así como para satisfacer las aspiraciones mínimas de la población.

Esta reforma apunta a *reconstruir la administración fiscal, a racionalizar las prácticas fiscales así como a aplicar con rigor la legislación vigente*. Debe conducir, entre otras cosas, al control estricto de las franquicias aduaneras; a combatir la evasión fiscal, ampliar la base

tributaria, aumentar la eficiencia de los medios de cobro, recuperar los impagos impositivos, a identificar más contribuyentes, etcétera.

En su primera fase, la reforma deberá hacer crecer la proporción ingresos/PIB de 1.5 a 2.0% en promedio por año, poner en marcha una política rigurosa de recuperación del CPFEB (Contribución de los Bienes Raíces Edificados), del impuesto sobre el ingreso y de la TCA (Tasa sobre el volumen de ventas) y de reajuste de derecho de audiencia. La tasa unificada de 10% de la TCA se mantendrá sobre todos los bienes y servicios, con excepción de los productos básicos y de los farmacéuticos. Se establecerá una estructura impositiva y de recaudación más eficaz, mediante la formación técnica y cívica del personal y el establecimiento de programas de gestión automatizada.

Conjuntamente y con la asistencia técnica apropiada, se tomarán iniciativas destinadas a la elaboración y la ejecución a mediano plazo de una profunda reforma fiscal, de carácter estructural, con el fin de multiplicar los recursos del Estado y de asegurar su autonomía presupuestaria. Esta reforma, componente decisivo de una estrategia de desarrollo con equidad, se guiará por el afán de hacer que paguen impuestos quienes no están pagando o pagan montos irrisorios, pese a que disponen de ingresos considerables. Gravará los nuevos sujetos impositivos surgidos de las transformaciones recientes de la economía, en particular:

- Ciertas categorías de agentes económicos y sociales surgidos de actividades informales, comerciales, especulativas, socioprofesionales y no gubernamentales.
- Formas de propiedad diversas, improductivas, rurales o urbanas, de uso residencial, y surgidas de transacciones dudosas con tierras del dominio público del Estado, porciones de litoral de las tierras, que generen rentas, ingresos o beneficios.
- Operaciones bancarias, de seguros, de cambio, de lotería, de transferencias de divisas y de propiedad, de agrimensura, de notariado, que generan altos ingresos.

- Bienes y servicios de carácter suntuario o que perjudiquen la salud, la ecología, el urbanismo, la libre circulación de vehículos o la moral pública.
- Productos del comercio informal, o que provengan directamente del contrabando, que deberán ser gravados mediante una política sistemática.

Política aduanera

El objetivo fundamental de la política aduanera consiste en que la gestión de las aduanas se vuelva eficiente, mediante la aplicación de las leyes y las tarifas vigentes, la transformación del sistema y reformas que tiendan a poner fin al robo, al despilfarro y al contrabando institucionalizado; en otros términos, se trata de establecer un verdadero sistema aduanal.

Estos objetivos exigen que se tomen medidas administrativas drásticas, de orden público y de carácter penal. Entre otras medidas, habrá que coordinar la información entre los consulados de Haití en el extranjero y los servicios aduanales, con el fin de lograr un mejor pago de derechos de importación; habrá que implantar también un riguroso sistema de control y de sanción para impedir falsas facturas; garantizar la formación del personal y su constante depuración, y lograr el acondicionamiento de los locales provinciales, fronterizos y capitalinos.

Medidas estrictas de regulación y restricción evitarán la libre importación abusiva de mercancías *pé pé* [en créole en el original], tales como vehículos usados y camiones, que contribuyen a agravar los problemas de transporte y a aumentar la factura petrolera. Estas medidas tenderán también a limitar la introducción de ciertos bienes o productos de consumo innecesario suntuario, cuya importación, por una aplicación excesiva de la liberalización, agrava el déficit de la balanza comercial y provoca perturbaciones en la producción local,

por lo que exaspera las tensiones sociales. El Estado adoptará medidas que estimulen las exportaciones, las diversifiquen y las dinamicen, alentando los productos no tradicionales.

Asimismo, para proteger a los consumidores y volver más eficiente la producción nacional, el Estado pondrá en marcha el Instituto Nacional de Control de Calidad, de normalización y metodología. Velará por la sensibilización de todos los sectores, de tal forma que el criterio de calidad sea un instrumento insoslayable para cualquier sistema de gestión.

5. Reforma de la propiedad de la tierra y rehabilitación del medio ambiente

La reforma de la propiedad de la tierra es una pieza clave de toda política de desarrollo. Constituye una palanca de primer orden para dinamizar la cadena alimenticia, por sus efectos positivos sobre la demanda de bienes de primera necesidad y sobre la oferta de materias primas y de productos alimenticios. Busca solucionar los problemas de inseguridad en la tenencia, que impactan de manera negativa en las inversiones y en la protección del suelo. Está llamada a crear las condiciones para una producción agrícola más rentable, que aumente los ingresos de los agricultores y provoque la transformación modernizadora de la economía agrícola.

En todos los niveles de su concepción y su realización, esta reforma sólo podrá llevarse a cabo con el apoyo del campesinado. Deberá contar también con el apoyo de las organizaciones campesinas locales, los CASEC, los animadores, los agentes agrícolas, los maestros, los sacerdotes, los pastores, los *hungans*, etcétera, para una campaña permanente de motivación y movilización.

La reforma requerirá recursos legales y financieros considerables, así como iniciativas en materia de formación y de acondicionamiento técnico. Por lo mismo, tendrá que ser escalonada y a mediano plazo, y apuntar hacia los objetivos siguientes:

a) *Desposeer al Estado para beneficio de los cultivadores reales de la tierra.* Esta orientación concierne únicamente las tierras de dominio privado del Estado y beneficiará a los campesinos cultivadores con derecho de propiedad definitiva. En este sentido, se procederá a determinar en cada región la superficie máxima de tierras del Estado a repartir, de acuerdo con los criterios de satisfacción de las necesidades esenciales de la familia y la posibilidad de generar un excedente para que sea invertido en el mejoramiento de las condiciones técnicas de la parcela.

b) *Reestructurar las grandes propiedades de uso extensivo,* para crear unidades de explotación de tamaño familiar, que puedan satisfacer las necesidades básicas del núcleo familiar y generar un excedente para la inversión. Para estos fines de redistribución, el Estado ofrecerá facilidades legales y de crédito, para la recompra del excedente de superficie de las propiedades que rebasen la capacidad de administración de los propietarios.

Se pensará en un impuesto de tenencia sobre una superficie determinada, para obligar a los grandes propietarios o bien a vender el excedente de la propiedad, o bien a explotarla con eficiencia.

Por lo demás, el Estado dispondrá de un derecho preferente de compra para todas las tierras cuya superficie rebase los diez cuadros. Las modalidades de recompra y en general de pago de indemnización deberán explicitarse en la ley de reforma agraria.

Todo granjero o cultivador directo de tierras del Estado que disponga de una superficie superior al máximo fijado, se verá obligado a remitir el excedente al Estado mediante indemnización, para que este excedente pueda ser redistribuido.

c) *La solución del problema de indivisión,* por ser ésta una de las formas de inseguridad que más repercusiones negativas tiene sobre la inversión y la explotación racional de los recursos. Para subsanar este problema, el Estado y las alcaldías se harán cargo de los gastos de agrimensura, notariales y de registro de los herederos, de conformidad con las normas legales sobre el derecho de sucesión.

Con todo, para evitar el parcelamiento excesivo de las tierras, algunas medidas legales deberán facilitar compra por parte de uno de los herederos de los derechos de otros derechohabientes; una reestructuración de la ley sobre los derechos de herencia (código civil) contribuirá a garantizar la seguridad de las explotaciones. Se frenará el desmembramiento y se fomentará el remembramiento con medidas adecuadas, y con la formación de cooperativas agrícolas y de establecimientos comunitarios.

Con el fin de evitar cualquier medida de fuerza, y con el objeto de favorecer el remembramiento voluntario y la ampliación de las parcelas, el Estado adoptará medidas de incentivo, que incluirán el crédito y la asunción de los gastos de legalización, y de las operaciones de compraventa de terrenos contiguos al domicilio de los campesinos.

Se multiplicarán las iniciativas de mejora agrotécnica y se pondrán a disposición de los campesinos semillas o especies vegetales de alto rendimiento. Estas medidas y la implantación de un sistema de irrigación podrán contribuir, en plazas relativamente breves, a la alimentación, a la reconstitución del tejido vegetal y a la rehabilitación del entorno. La política de mejora de la tenencia habrá de conducir también a la valorización agrotécnica de las principales planicies y mesetas, así como a un esfuerzo de rehabilitación y valorización de los morros y, en particular, de las cuencas y sus vertientes.

d) Protección y rehabilitación del medio ambiente. Acompañará la reforma un conjunto de medidas tendentes a proteger y rehabilitar el medio ambiente, y a conservar los suelos, con el fin de contrarrestar la catástrofe ecológica.

La construcción de obras de irrigación para el acondicionamiento comunitario de las cuencas y sus vertientes, de los lagos de altura y de los parques naturales, se combinará con el esfuerzo de protección de la fauna y la flora, la constitución masiva de viveros de árboles forestales y frutales. La movilización de los grupos asociativos y ecologistas, de los CASEC, de las alcaldías y de la población, ayudará a la formación de cuadros y al empleo de tecnologías apropiadas para

la solución de los graves problemas de gestión de desechos urbanos, para la promoción de sustitutos del carbón de madera, mediante el uso racional del gas, el carbón y las briquetas importadas.

En la cuestión ecológica, se pondrá especial empeño en lograr el apoyo de naciones vecinas del Caribe y de los organismos especializados por vía diplomática.

6. Modernización de las empresas públicas

El Estado buscará desentenderse de la gestión de las actividades de producción recurriendo a sociedades especializadas. Conservará la propiedad de las empresas y los recursos que tengan un carácter de patrimonio nacional (minas, yacimientos de petróleo) o que suministren servicios esenciales. Establecerá prioridades de desarrollo industrial fijando las estrategias que correspondan a su proyecto nacional mediante una legislación apropiada. Esta visión de conjunto servirá de marco para políticas prioritarias en cuanto a la producción. Guiará las decisiones y las medidas que se tomen respecto de cada empresa pública, y para la elaboración eficaz de las leyes; orientará el contenido del código de inversiones y las prioridades del desarrollo nacional. En esta perspectiva, los poderes públicos deberán:

- a. Abrir las empresas al flujo de capitales privados enmarcándolos en formas de asociación. Las negociaciones, así como el reparto de los ingresos que provengan de estas operaciones, tendrán que llevarse a cabo con toda transparencia.
- b. Proceder a la concesión de algunas de ellas por tiempo definido. En este caso, todas las inversiones consentidas en el período bajo contrato serán parte integrante de la empresa y pertenecerán por ende al Estado.
- c. Lograr contratos de gestión con las sociedades internacionales o locales que tengan un *know how* reconocido, con el fin de

asegurar una gestión eficaz de las empresas que deban seguir formando parte del patrimonio público.

Todo esto implicará la adecuación de las leyes vigentes y se acompañará de una campaña de educación y sensibilización de la población.

Estas diferentes medidas de modernización del aparato productivo favorecerán el aumento del producto nacional, la ampliación del mercado interno, la creación de empleos y el mejoramiento de los niveles de vida.

7. Construir infraestructuras

Para garantizar un crecimiento económico sostenido, habrá que lograr un incremento sustancial de la producción de energía eléctrica; la modernización y ampliación del sistema de telecomunicaciones (por ejemplo, al cuadruplicar el actual número de líneas telefónicas); la reconstrucción y la ampliación significativa del sistema de carreteras, puertos y aeropuertos.

Son varios los ámbitos que requieren de la intervención de los poderes públicos en materia de infraestructuras (energía, transportes y conservación del agua). Dichos poderes tendrán que recurrir a las instituciones de financiamiento, al sector privado y a los grupos asociativos.

Por regla general, la realización de estos trabajos tendrá que responder a una política sistemática y apoyarse en campañas de carácter nacional. Habrá que combinar las tecnologías más adecuadas, la competencia nacional, la asistencia técnica o financiera internacional, la motivación de la población y la participación cívica (suscitar la motivación de todos, desde las colectividades territoriales hasta los comités de barrio).

Para dotar al país de una capacidad de generación de electricidad, prerequisite para cualquier impulso económico, se empezará con una profunda reforma de la EDH. Habrá que convertirla en una empresa moderna, ya sea confiando su gestión a firmas especializadas,

o bien insuflándole capital y tecnicidad en el marco de una sociedad mixta.

Por otra parte, habrá que abrir el sector a firmas privadas para llevar a cabo trabajos de generación de energía, sea con el financiamiento conjunto de instituciones internacionales, sea en el marco de la cooperación con la República Dominicana. Otras obras de importancia, y la búsqueda de fuentes alternas de combustible, pueden resultar de la combinación de esfuerzos que provengan del Estado, del capital privado haitiano y del capital extranjero.

Ante el imperativo de dotar al país de vías de transporte, se pondrá en marcha un programa carretero, cuyas prioridades tendrán que definirse a corto y a mediano plazos, de conformidad con los siguientes criterios:

1. Mantener la infraestructura carretera existente mediante la rehabilitación de los ejes principales y el mantenimiento permanente de la red.
2. Asegurar la integración del territorio mediante el desenclavamiento de ciertas regiones y la construcción sistemática de obras que permitan franquear diferentes ríos.
3. Rehabilitar las rutas departamentales y de penetración, considerando que la falta de vías de comunicación limita el desarrollo de la producción de regiones enclavadas con fuertes potencialidades agrícolas o turísticas y el de algunas zonas ricas en posibilidades de pesca. Para optimizar el impacto de estas obras en las regiones, se deberá recurrir, cada vez que las condiciones técnicas lo permitan, a mano de obra intensiva y a grupos asociativos, y acoplar la rehabilitación o la construcción de carreteras con los trabajos de reforestación y de lucha contra la erosión.

Se fomentará *la instalación de un servicio de cabotaje* extendido al conjunto de las costas del país.

- Para acondicionar las *infraestructuras urbanas de la capital* y contribuir a resolver los problemas de transporte, está previsto un plan de reacondicionamiento urbano. Este plan apuntará a la apertura o la construcción de algunos tramos de rutas transversales entre los principales ejes de comunicación y en diversos barrios residenciales o populares. El “adoquinaje” de calles se llevará a cabo en forma continua en las principales ciudades, con la participación de la población de los barrios. Un plan maestro de transporte definirá el conjunto de las iniciativas a tomar en materia de infraestructuras carreteras, en función de los imperativos y de las prioridades de desarrollo.
- Un plan de construcción de mercados se llevará a cabo de acuerdo con las necesidades de agilizar los intercambios económicos. Este plan se adecuará a los imperativos urbanísticos de acondicionamiento espacial y de higiene pública. Prevé la edificación en Puerto Príncipe de varios mercados modelo, de dimensiones varias, según las exigencias económicas, espaciales y culturales, así como el acondicionamiento de los mercados ya existentes en la capital y en provincia.
- Se realizarán obras hidráulicas para la conservación de agua de las lluvias y de los ríos, para la irrigación de terrenos de cultivo, la captación y la distribución de aguas subterráneas o provenientes de fuentes naturales. También en estos casos las obras se llevarán a cabo mediante la combinación de tecnologías apropiadas y con mano de obra intensiva, favoreciendo así la distribución de ingresos en el medio rural.

Conclusiones

Las orientaciones, disposiciones y reformas incluidas en este programa buscan responder a la complejidad del momento histórico que vivimos y a las exigencias de cambio que se imponen a la nación.

Las dimensiones de la crisis nacional reflejan el proceso de degradación social, económica, política, moral y ecológica por el que atraviesa Haití. De esta realidad surge la necesidad de tomar las decisiones más apropiadas para garantizar el porvenir y la sobrevivencia del país, y lograr que se ejecuten con la participación del mayor número posible de actores.

Las reivindicaciones, las aspiraciones y las motivaciones de las mayorías y, en particular, de los nuevos actores sociales, obligan también a crear un liderazgo coherente, que sea capaz de darle confianza al pueblo y encauzar su acción política en función de las exigencias de renovación estructural del país. Dicho liderazgo debe ser capaz de convocar a la colaboración, la solidaridad y la convergencia de acción de los demás sectores sociopolíticos, para lograr la modernización del Estado, la transformación de la economía, la rehabilitación de la ecología y el mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías.

Estas necesidades y las tareas que se desprenden de las mismas se integran entonces en una concepción y una acción que se guían por el interés nacional. Prosigue así, hacia el futuro, un combate de más de dos siglos, para el acceso a una sociedad de derecho, la consolidación de la democracia, la realización del proyecto nacional y la conquista de una soberanía plena.

Se trata de construir un nuevo Estado democrático, integrador y modernizador, indispensable para el cambio de sistema y para transformar las prácticas políticas en una perspectiva de legitimidad y justicia; se trata de que la sociedad civil cumpla su papel a cabalidad, de renovar las estructuras e instituciones económicas, de reactivar la producción diversificándola y multiplicándola, de poner a disposición de las mayorías una parte más significativa de la riqueza nacional, de promover el desarrollo con equidad y de cambiar la calidad de vida de los haitianos.

Por su proyección programática, su envergadura y su complejidad, estos objetivos no podrán alcanzarse con la bandera o por iniciativa de un solo partido o un solo sector, aunque sea mayoritario y

esté dotado de una maquinaria política o técnica de lo más eficiente. Por sus dimensiones, estas tareas exigen conjugar el esfuerzo colectivo y la participación de los sectores sociales interesados en transformar al país. Sólo podrán concretarse en la medida en que se inscriban en el marco de un Pacto Social para la Construcción Nacional, que habrá de concertarse con los diversos sectores sociales, los principales agentes económicos y los actores políticos.

Este Pacto fijará con claridad las reglas del juego en los grandes asuntos de interés nacional, entre el Gobierno, los campesinos, los trabajadores urbanos, las clases medias, los profesionales, los empresarios, el sector económico en general y la sociedad civil. Definirá las condiciones de aplicación de las principales líneas de este programa, una vez que hayan conseguido la aprobación de los diferentes asociados. Señalará los ajustes necesarios que deban aportarse al programa, en función de los intereses de estos asociados y de políticas concretas ligadas a la evolución de la coyuntura nacional y a las realidades de la economía internacional.

En el marco de la institucionalización democrática, un Acuerdo Político para la Gobernabilidad garantizará el funcionamiento y la articulación de las relaciones y los procedimientos entre la presidencia, el primer ministro y el Parlamento. Así, se podrá asegurar la armonía entre estas instituciones, para poner en marcha las reformas y lograr una mayor eficacia en la acción del Estado.

El Gobierno adoptará decisiones prácticas, y los mecanismos apropiados para la aplicación efectiva de los diversos puntos del Programa estarán a cargo del Ejecutivo, del Parlamento y de los ministerios que correspondan. Se definirán así las líneas de acción sectorial que correspondan a la función respectiva de cada ministerio u organismo especializado, incluyendo los aspectos programáticos, las opciones técnicas y la asignación de recursos.

Estas líneas de acción habrán de escalonarse a corto, mediano y largo plazos, en un período que vaya hasta el año 2004 e incluso más lejos.

Esta perspectiva considera que el despegue, una vez que se haya hecho sentir en el corto plazo, requerirá, para desembocar en un verdadero proceso de transformación, de un esfuerzo concertado para el desarrollo real y sostenido, durante una o dos décadas, en el marco de una estrategia de largo plazo. Este programa ofrece por lo tanto un esbozo de esta visión prospectiva para el proyecto de nuestra Organización, que consiste en construir un país para todos.

La aplicación de este programa abarca los componentes técnicos y políticos de los que deberá encargarse el Gobierno, con el apoyo de los cuadros técnicos y políticos competentes. Se articula alrededor de una concepción y una acción fundamentalmente éticas de nuestra organización, que deberá emprender un esfuerzo sistemático de formación, motivación y participación efectiva de la población en esta empresa patriótica.

Para ello se requiere toda una pedagogía de la construcción nacional, que habrá de basarse en la preparación de cuadros y la información permanente, para alimentar el interés de la población; también deberá contar con un esfuerzo de explicación transparente de los responsables, para mantener la confianza de las mayorías y tomar conciencia de las dificultades de la empresa y de cada una de sus realizaciones.

Así, para la consecución de los objetivos programados deberán combinarse de manera fructífera una concepción y una acción consecuentes con una voluntad política de acción continua y efectiva. Ello conducirá al reforzamiento de la democracia, al desarrollo económico, al progreso social, a la participación efectiva de la población y a la edificación de una sociedad más humana.

Bibliografía

Alcántara Sáes, Manuel. (1995). *Gobernabilidad, crisis y cambio*. México: Fondo de Cultura Económica.

Alexander, Jeffrey C. (1993). Retorno a la democracia: La solidaridad universalista y el mundo. En Centro de Estudios Sociológicos. *Modernización económica, Democracia política y Democracia social*. México: El Colegio de México (pp. 39-62).

Bobbio, Norberto. (1985). *El futuro de la democracia*. Barcelona: Ariel.

Borón, Atilio. (1993). La transición hacia la democracia en América Latina: problemas y perspectivas. En Centro de Estudios Sociológicos. *Modernización económica, democracia política y democracia social*. México: El Colegio de México (pp. 117-158).

Brisson, Gérald. (1968). *Les relations agraires dans l'Haïti contemporaine*. Mimeo.

Castor, Suzy et al. (1991). *Haïti à l'aube du changement*. Port-au-Prince: CRESFED.

Charles, Etzer. (1994). *Le pouvoir politique en Haïti de 1957 à nos jours*. París: Edición ACCT-Karthala.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (1997). *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, edición 1996*. Santiago de Chile: CEPAL (pp. 192-195).

Dahl, Robert. (1993). *La democracia y sus críticos*. Barcelona: Paidós. Segunda edición.

Déjean, Paul. (1993). *Haïti: Alerte, on tue!*. Montreal: CIDIHCA.

Déjean, Paul. (1994). *Haïti, l'Inéluctable retour*. Montreal: Éditions du CIDIHCA.

Delincé, Kern. (1993). *Les forces politiques en Haïti*. París: Editions Karthala.

- Dipalma, Giuseppe. (1990). *Two graft democracies: an essay on democratic transitions*. Berkeley: University of California Press.
- Dowding, Keith M. y Kimber, Richard. (1983). The meaning and use of political stability. *European Journal of Political Research*, 1(11), 229-243.
- Duverger, Maurice. (1992). *Instituciones políticas y derechos constitucionales*. Barcelona: Ariel.
- Étienne, Sauveur Pierre. (1997). *Haïti: L'invasion des ONG*. Port-au-Prince: Les Éditions du CIDIHCA.
- Étienne, Sauveur Pierre. (1998). *La crisis de 1991-1994 y la problemática de la construcción de la democracia en Haití*, (Tesis de Maestría). México: FLACSO.
- Farmer, Paul. (1994). *The uses of Haiti*. Monroe: Common Courage Press.
- González Casanova, Pablo. (1965). *La democracia en México*. México: ERA.
- Habermas, Jürgen. (1992). La soberanía popular como procedimiento. Un concepto normativo de lo público. En María Herrera. (Coord.) *Moralidad, ética y política*. Madrid: Alianza Editorial.
- Hector, Cary y Jadotte, Hérard. (1991). *Haïti et l'après Duvalier; continuités et ruptures. Vols. I y II*. Montreal: CIDIHCA.
- Hector, Michel. (1989). *Syndicalisme et socialisme en Haïti*. Port-au-Prince: Imprimerie Henri Deschamps.
- Huntington, Samuel P. (1994). *La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX*. Barcelona: Paidós.
- Hurbon, Laënc. (1979). *Culture et dictature en Haïti. L'imaginaire sous contrôle*. París: L'Harmattan.
- Hurbon, Laënc. (1987). *Comprendre Haïti. Essai sur l'Etat, la nation et la culture*. París: Editions Karthala.
- Hurbon, Laënc. (1988). *Le barbare imaginaire*. París: Éditions du Cerf.
- Hurbon, Laënc. (Dir.). (1996). *Les transitions démocratiques*. París: Syros.
- Jallot, Nicolas y Lesage, Laurent. (1995). *Haïti: Dix ans d'histoire secrète*. París: Édition du Félin.

- Jean-François, Hérold. (1995). *Le coup de Cédras. Une analyse comparative du système socio-politique haïtien de l'indépendance à nos jours*. Port-au-Prince: Éditions Médiaték.
- Lionet, Christian. (1992). *L'année Aristide*. Paris: L'Harmattan.
- Linz, Juan J. (1990). *La quiebra de las democracias*. México: Alianza Editorial Mexicana.
- Maguire, Robert et al. (1997). *Haïti prise en otage: les réponses internationales à la recherche d'une identité nationale de 1986 à 1996*. Providence: The Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies / Université des Nations Unies, (Occasional Paper N° 23).
- Malval, Robert. (1996). *L'année de toutes les duperies*. Port-au-Prince: Éditions Regain.
- Manigat, Leslie F. (1995). *La crise haïtienne contemporaine*. Port-au-Prince: Éditions des Antilles.
- Moïses, Claude. (1990). *Constitutions et luttes de pouvoir en Haïti. Tomo II*. Montreal: Les Éditions du CIDIHCA.
- Moïses, Claude. (1994). *Une constitution dans la tourmente. Le nouveau régime politique haïtien et la crise nationale (1987-1993)*. Montreal: Les Éditions Images.
- Moïses, Claude y Olliver, Emile. (1992). *Repenser Haïti. Grandeur et misères d'un mouvement démocratique*. Montreal: Les Éditions du CIDIHCA.
- Morlino, Leonardo. (1985). *Cómo cambian los regímenes políticos. Instrumentos de análisis*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- Mouterde, Pierre y Wargny, Christophe. (1996). *Après la fête, les tambours sont lourds. Cinq ans de duplicité américaine en Haïti (1991-1996)*. Paris: Édition Austral.
- Nérestant, Micial M. (1994). *Religions et politique en Haïti*. Paris: Karthala.
- O'Donnell, Guillermo y Schmitter, Philippe C. (1994). *Transiciones desde un gobierno autoritario. Tomo 2*. Barcelona: Paidós.

- Pierre-Charles, Gérard. (s. d.). *El difícil camino del cambio democrático en Haití*. Mimeo.
- Pierre-Charles, Gérard. (1969). *Radiografía de una dictadura*. México: Ediciones Nuestro Tiempo.
- Pierre-Charles, Gérard. (1993). Haití: la crisis ininterrumpida 1930-1975. En Pablo González Casanova. (Coord.). *América Latina: Historia de medio siglo. Tomo II*. México: Siglo XXI / UNAM. Séptima edición, (pp. 174-222).
- Pierre-Charles, Gérard. (1994). *L'économie haïtienne et sa voie de développement*. Port-au-Prince: Éditions Henri Deschamps.
- Pierre-Charles, Gérard. (1997, julio). *Construcción democrática y refundación nacional en Haití*. Mimeo.
- Pierre-Charles, Gérard. (1997). *Haïti et la difficile transition démocratique*. Port-au-Prince: CRESFED.
- Pierre-Charles, Gérard et al. (1987). *Réflexions sur la transition démocratique*. Port-au-Prince: CRESFED.
- Rouzier, Philippe. (1989). *En deux ans comme en deux siècles*. Montreal: CIDIHCA.
- Sartori, Giovanni. (1994). *Teoría de la democracia. Tomo I y II*. Madrid: Alianza Universidad.
- Smarth, Rony et al. (1992). *Los retos de la coyuntura*. Río Piedras: CLACSO.
- Sorensen, Georges. (1993). *Democracy and democratization: Processes and prospects in the changing world*. Boulder: West View Press.
- Stephan, Alfred C. (1993). *Democratizing in Brazil: Problems of transition and consolidation*. Nueva York: Oxford University Press.
- Tomassini, Luciano. (1993). *Estado, gobernabilidad y desarrollo*. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, Serie de Monografías.
- Vilas, Carlos M. (Comp.). (1994). *La democracia fundamental. El populismo en América Latina*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Zemelman, Hugo. (1993). Historia y coyuntura en el análisis social de América Latina. Comentarios acerca de las ponencias de Jeffrey Alexander y Norbert Lechner. En Centro de Estudios Sociológicos. *Modernización económica, Democracia política y Democracia social*. México: El Colegio de México (pp. 107-116).

Sin la revolución haitiana no se entiende qué es la “modernidad”. No se pueden captar a fondo sus contradicciones y complejidades. Pero la desgarrada historia de Haití, de modo privilegiado, muestra bien otra cosa: una contra-modernidad, que es de hecho una crítica (etimológicamente, una puesta en crisis) de las pretensiones falsamente "totalizadoras" de la modernidad euro/etnocéntrica. Una crítica hecha desde adentro de la modernidad misma, pero que pone al desnudo sus contradicciones insalvables, sus conflictos trágicos .

Del Estudio Preliminar de Eduardo Grüner

